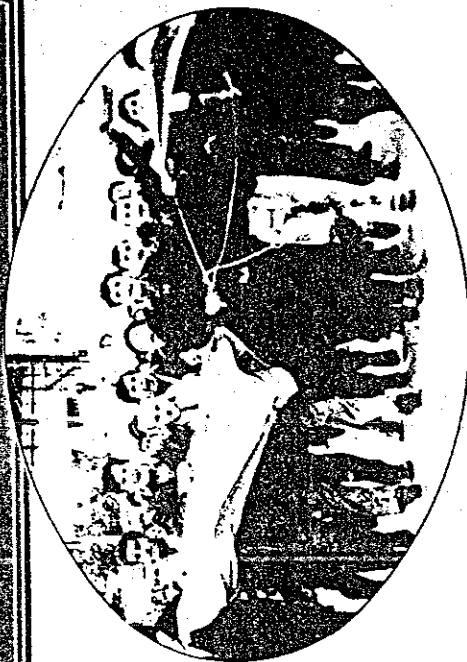


LEO
UBILA

DANIEL JAMES

RESISTENCIA E INTEGRACION

*El peronismo y la clase
trabajadora argentina
1946-1976*



EDITORIAL SUDAMERICANA

~Historia y cultura~

Diseno de tapa: Mario Blanco

PRIMERA EDICION
Octubre de 1990

SEGUNDA EDICION
Abril de 1999

IMPRESO EN LA ARGENTINA

*Queda hecho el depósito
que previene la ley 11.723.*
© 1990, Editorial Sudamericana, S.A.,
Humberto I 531, Buenos Aires.

ISBN 950-07-0636-9

Título del original en inglés:
Resistance and Integration
© 1988, Cambridge University Press

*Para mi madre, Chris Maddison,
y mi padre, Morgan James,
con amor y gratitud.*

*En memoria de Bryn Morgan,
minero galés, 1908-79,
y de Daniel Hopew,
desaparecido en la Argentina
en agosto de 1976.*

Agradecimientos

La investigación en que se basa este libro fue financiada por subsidios de los siguientes organismos: Social Science Research Council (Gran Bretaña), Foreign Area Fellowship Program (Nueva York) y fondo para viajes de becarios de la Universidad de Cambridge. Deseo expresar a esos organismos mi gratitud por el apoyo que me brindaron.

Las deudas intelectuales y personales que supone todo trabajo de este carácter no pueden menos que ser enormes. El profesor John Lynch y Richard Moseley-Williams plantaron las primeras semillas de mi interés por la historia argentina y fueron para mí maestros cuya simpatía me estimuló. Durante más de quince años estudié a la Argentina y su movimiento laboral, y, en el curso de ese tiempo, conversé y discutí con muchas personas sobre la historia y el presente de la clase trabajadora argentina. La originalidad intelectual es a mi juicio un producto sumamente raro y, por mi parte, de muy buena gana doy las gracias a muchos amigos y colegas que intervinieron en la elaboración de este libro. Sólo puedo esperar que no les disguste encontrarse en esta compañía y que reconozcan, al menos en forma paretal, la esencia de las ideas y discusiones que compartimos.

En primerísimo término doy las gracias a mi amigo Alberto Belloni, por su voluntad de consagrar muchas horas y días a discutir la historia gremial y compartir sus propias experiencias con un extranjero ingenuo. A él debo gran parte de la comprensión que yo pueda haber alcanzado de la pasión, la ambigüedad y la tragedia de la historia de la clase obrera argentina. En los varios años que siguieron a nuestro primer encuentro, y aun en las más penosas circunstancias personales, Alberto Belloni siempre se mantuvo dispuesto a transmitirme sus pensamientos, su ira, su compasión y su ilimitada curiosidad intelectual. Otro amigo argentino, Alberto Ferrari, puso a mi disposición su profundo conocimiento de la política y la sociedad

argentinas. Me beneficiaron también muchas discusiones con Juan Carlos Torre, quien persistentemente me provocó y me llevó a cuestionar lugares comunes sobre los trabajadores argentinos y sus sindicatos. Estos y otros amigos argentinos siempre lograron hacer a un lado el instintivo escepticismo que les inspira esa especie que podríamos llamar el "latinoamericanista de academia", al que son inherentes la condescendencia y la inseguridad. Les agradezco su cortesía y su sentido del humor.

Judith Evans, buena amiga y buena consejera, siempre supo transmitirme su pasión por las cosas de la Argentina. Mi colega y amiga Emilia Viotti da Costa constituyó una fuente permanente de aliento y consejo positivo en materia de redacción. Más aún: compartió conmigo su infatigable curiosidad intelectual y me indujo a justificar y repensar muchos supuestos. También graduados de Yale me proporcionaron un ambiente intelectual estimulante: contribuyeron en particular a este trabajo Albert Vourvoulias, Romi Gandolfo y Jeff Gould. Walter Little ofreció generosamente su sólido consejo. Desde luego, corresponde formular la habitual advertencia en el sentido de que ninguno de los nombrados es responsable del producto final que se presenta aquí.

Por último, pero no por ello menos efusivamente, vaya mi gratitud a Lynn Di Pietro, por su paciencia y sobre todo tan sólo por estar aquí.

*Movimiento Sindical, Principal Interlocutor
entre la Sociedad Civil y los Gobiernos Militares*

Foro de la Sociedad Civil

Introducción

Durante los últimos cuarenta años el movimiento sindical peronista ha sido un actor crucial en el drama de la historia de la Argentina moderna. Ha sido el principal canal institucional para la lealtad de la clase trabajadora argentina hacia Perón como persona y hacia el peronismo como movimiento, y su beneficiario. Pilar fundamental del régimen peronista de 1946 a 1955, los sindicatos son los movilizadores esenciales de las masas peronistas, y la élite sindical ha actuado como agente principal de este poder en sus negociaciones con otros sectores de la organización política argentina, por encima de todas las fuerzas armadas. De hecho, el papel del movimiento sindical como principal interlocutor entre las fuerzas armadas y la sociedad civil ha sido un tema dominante de la historia contemporánea argentina: con frecuencia, el destino de la Argentina moderna pareció depender del resultado de un diálogo incómodo pero siempre presente entre generales y jefes sindicales. El poder que devengó esta situación para el movimiento sindical fue enorme; frecuentemente reprimidos, los sindicatos han podido no obstante presentarse, incluso ante los gobiernos militares, más hostiles, como una fuerza social y política irreductible.

La intención de este libro, en su nivel fundamental, es trazar el desarrollo del Peronismo en los sindicatos en el período 1955-73. ¿Cuál era la relación entre los dirigentes sindicales y los miembros? ¿Hasta qué punto es válida la concepción popular respecto del poder sindical que pone de relieve la corrupción, la violencia y el politiquero del poder? ¿Cuáles eran los fundamentos reales del poder sindical, y más especialmente de la dirigencia sindical? Plantearlo y tratando de responder estos interrogantes no por obvios menos importantes esperamos ir más allá de la admisibilidad superficial de las imágenes populares. Este libro también trata el tema más amplio de la relación entre el Peronismo y la clase trabajadora argentina y el significado de esa relación para los trabajadores en general y los gremios

en particular. A menudo, este tema ha sido abordado desde la perspectiva de nociones más generales acerca del populismo. El resultado ha sido una marcada insistencia en el carácter aberrante de la participación de la clase trabajadora en el peronismo. Dicha participación ha sido tratada como una especie de acertijo histórico que exigía una explicación, la mayoría de las veces en términos de nociones tales como manipulación, pasividad, elección digitada, y no pocas veces de irracionalidad. Este trabajo no ofrece una teoría abarcadora del populismo. Efectivamente, desde el punto de vista del historiador, diría que el problema con muchos análisis existentes ha sido en parte el nivel de abstracción en que se manejaron. Los sistemas de ideas macroexplicativos no han sido capaces de resolver los interrogantes concretos y las excepciones que con frecuencia ellos mismos sugerían. La especificidad de una experiencia histórica y de movimientos sociales concretos se escaparon a través de la gran red de dichos sistemas.

Traté, primero y ante todo, de explorar la experiencia histórica de los trabajadores argentinos en las décadas posteriores al derrocamiento de Juan Perón en 1955. Dentro de esta estructura general, me interesaron en particular dos terrenos de análisis: la jerarquía del sindicato peronista y su relación con el resto de sus miembros, y el tema de la ideología peronista y su repercusión en la clase trabajadora. Para realizar esta tarea se puso un énfasis considerable en fundamentar nuestro análisis de estos temas en una comprensión de la experiencia concreta de la masa peronista. Considero que este énfasis es importante por dos razones. Primero, porque una perspectiva popular resulta esencial si queremos analizar los temas de mayor interés para este libro. Una mejor comprensión de las acciones y percepciones de la masa de los gremialistas peronistas resulta esencial para esta empresa.

Además, este aspecto es no obstante crucial porque ha sido generalmente dejado de lado por muchos escritores. Al leer gran parte del material escrito sobre la historia argentina moderna, la sensación que uno tiene es curiosamente ambigua. La clase trabajadora está presente en dichos análisis; la realidad política y la naturaleza del discurso argentino político e intelectual dominante obviamente no permite eludir dicha presencia. Sin embargo, esa presencia tiene algo de irreal. La clase trabajadora aparece generalmente como una cifra, casi como una construcción ideal al servicio de diferentes paradigmas ideológicos. La esencia de estas abstracciones deriva de nociones más amplias referidas a la relación de los trabajadores con el peronismo. Ya en Gino Germani y la sociología de la modernización encontramos las

masas urbanas pasivas y manipuladas que resultan de un proceso de modernización incompleto. El marxismo y el comunismo y socialismo latinoamericanos nos propone proletarios inexpertos incapaces de tomar conciencia de sus verdaderos intereses de clase, dominados por la ideología burguesa y controlados y manipulados por políticos demagógicos y por una burocracia sindical despiadada. Finalmente, la izquierda peronista y muchos sectores juveniles radicales de fines de la década del '60 y comienzos de la del '70 ofrecían una visión de proletarios ejemplares formando un movimiento peculiarmente argentino hacia el socialismo y la liberación nacional. Detrás de estos paradigmas están al accho una serie de antinomias globales que han dominado el debate general sobre el populismo y la clase trabajadora: tradicional/moderno, elección digitada/autonomía, falsa conciencia/conciencia de clase, y especialmente importante para el peronismo en la era posterior a 1955, resistencia e integración. Lo que no logran darnos estas abstracciones es generalmente una noción de la experiencia histórica concreta de los trabajadores y sus respuestas complejas, ambiguas y a menudo contradictorias.

Yo atribuiría esta carencia, en parte al menos, a la persistente incapacidad de la mayor parte de la teoría académica de captar adecuadamente la complejidad de la experiencia de la clase trabajadora. No obstante, también se debe en parte a la extraordinaria relevancia polémica de los modelos históricos pasados y la experiencia en la Argentina contemporánea. La experiencia histórica pasada constituye evidentemente un fundamento crucial del debate ideológico y político contemporáneo en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, en la Argentina, el pasado ha sido vivido como presente de una manera peculiarmente intensa. La percepción de este hecho ha acentuado precisamente gran parte del aura de pesimismo y fatalismo que ha dado forma a las actitudes públicas e intelectuales respecto del "enigma" de la Argentina. Los argentinos parecen haber sido condenados a soportar un presente dominado por símbolos surgidos de experiencias y conflictos pasados. Figuras nacionales y movimientos sociales y políticos del pasado se convirtieron muchas veces en mitologías que sirven como símbolos cuya función es racionalizar, justificar y dar una coherencia emocional a necesidades políticas presentes.

En el caso de la clase trabajadora esta mitologización implicó una simplificación y una idealización de las penosas complejidades de la experiencia de la clase trabajadora. La mayor parte del debate interno del peronismo en los últimos treinta años ha girado, efectivamente, en torno de las idealizaciones y estereotipos conflictivos de la historia y la experiencia de la

clase trabajadora. Asimismo, la comprensión del desarrollo de la izquierda peronista y de los grupos guerrilleros a fines de los años '60 y la década del '70 debe basarse en una comprensión de sus mitologías de la clase trabajadora y de su papel en el Peronismo en general y particularmente durante la década siguiente a la destitución de Perón en 1955. Estas mitologías son perjudiciales para la comprensión histórica y nocivas para la práctica política de grupos que proclamaron simbolizar y representar a esta clase trabajadora. Develar parte de la realidad oculta detrás de estos mitos referidos a la presencia de la clase trabajadora en el peronismo es una de las mayores preocupaciones de este trabajo.

Las fuentes utilizadas para este estudio son de tres tipos. Primero: recurri a documentación de archivos existentes en la Argentina. Incluyo aquí diarios y revistas de ese período y boletines, anuarios y materiales disponibles en organismos estatales, principalmente el Ministerio de Trabajo. Segundo: tuve la suerte de poder acceder a una gran cantidad de diarios peronistas no oficiales, a diarios de afiliados, panfletos y circulares de barrios. Todo esto estaba casi exclusivamente en manos privadas y no está a disposición del público en general. Tercero: me guié fuertemente por entrevistas, conversaciones y discusiones con participantes activos en los gremios durante este período.

El enfoque general adoptado en términos de la organización de este trabajo es analítico narrativo. Los capítulos siguen un orden cronológico. Quiero poner de relieve que, dentro de ese enfoque, se hizo una selección. Este trabajo no es una historia de la Argentina en las décadas que siguieron al derrocamiento de Perón. Muchos temas son tratados indirectamente, o sólo en la medida en que tienen relación con el movimiento trabajador. Así, por ejemplo, las relaciones entre las autoridades civiles y los militares, o las intrigas dentro de las fuerzas armadas, son mencionadas muy brevemente y sólo cuando afectan al contexto general dentro del cual debían moverse los sindicatos peronistas.

El primer capítulo, "El peronismo y la clase trabajadora, 1943-55", brinda una interpretación de la relación entre el peronismo y la clase trabajadora en el período de la formación del movimiento peronista y los gobiernos peronistas. Apunta, sobre todo, a analizar los fundamentos de la identificación de la clase trabajadora con el peronismo para poder entender mejor la reacción de esta misma clase ante la situación creada por el derrocamiento de Perón. La Segunda Parte, "La resistencia peronista", trata de la resistencia de la clase trabajadora y otros sectores del movimiento peronista a los regímenes militares que

gobernaron a la Argentina de 1955 a 1958. La Tercera Parte, "Fronizel y la integración: tentación y desencanto", analiza el período del gobierno de Arturo Frondizel, 1958-62. En la Cuarta Parte, "La era de Vador", estudié el desarrollo del poder del movimiento sindical peronista bajo la influencia dominante de Augusto Vador, dirigente del gremio metalúrgico, en el período comprendido entre el derrocamiento de Frondizel y el golpe militar de junio de 1966. Por último, la Quinta Parte, "Los trabajadores y la Revolución Argentina", ofrece un análisis del período del gobierno militar desde 1966 hasta 1973.

PRIMERA PARTE

Los antecedentes

El peronismo y la clase trabajadora. 1943-55

1

-Hablen tranquilos. ¿Cuál es el problema? Hablá
vos, Tedesco. El coronel lo va a entender mejor.

-Bueno...

-¿Usted es Tedesco? Hijo de Italianos, ¿no?

-Sí, coronel.

-Ya me parecía. ¿Qué pasa, Tedesco?

-Muy sencillo, coronel: mucho laburo y poca
guita.

-Eso está claro. ¿Dónde?

-Trabajamos de noche en... Nos pagan 3 pesos
con treinta cada noche.

-¡Qué barbaridad! Enseguida lo arreglaremos.
Haré llamar a los dueños de la fábrica para que se
haga un convenio de parte con ustedes. ¿Cuánto
quieren ganar?

Nos tiramos a 3 pesos con 33 centavos pero lo
justo sería 3.50 por noche.

-Todo va a andar bien. No puede ser que todavía
se explote así a los trabajadores.

-Gracias, coronel.

-Tedesco, usted quédese. Los demás pueden
irse y tengan confianza.

Mariano Tedesco, fundador de la
Asociación Obrera Textil.

Bueno, mirá, lo digo de una vez. Yo, yo no lo
inventé a Perón. Te lo digo de una vez así termino
con esta patriada de buena voluntad que estoy
llevando a cabo en un afán mío de liberarte de
tanto macaneco. La verdad: yo no lo inventé a Perón
ni a Eva Perón, la millagrosa. Ellos nacieron como

una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Evita Perón ni a su doctrina. Nos trajo, en su defensa, un pueblo a quien vos y los tuyos habíais enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos.

Enrique Santos Discépolo

EL TRABAJO ORGANIZADO Y EL ESTADO PERONISTA

Bajo la guía de sucesivos gobiernos conservadores, la economía argentina respondió a la recesión mundial de la década 1930-40 mediante la producción local de un creciente número de bienes manufacturados que antes se importaban.¹ A la vez que en general mantuvo adecuados niveles de renta para el sector rural y garantizó los privilegiados nexos económicos de la élite tradicional con Gran Bretaña, el Estado argentino estimuló esa sustitución de importaciones mediante una juiciosa política de protección arancelaria, controles cambiarios y provisión de crédito industrial.² Entre 1930-35 y 1945-49 la producción industrial creció hasta más que duplicarse; las importaciones, a las que en 1925-30 correspondía casi una cuarta parte del Producto bruto argentino, se redujeron aproximadamente al 6 por ciento en el quinquenio 1940-44. De importar alrededor del 35 por ciento de su maquinaria y equipo industrial en el primer periodo, la Argentina pasó a importar sólo el 9,9 por ciento en el segundo.³ Además, durante la Segunda Guerra Mundial se asistió a un considerable aumento del crecimiento industrial argentino, encabezado por las exportaciones, a medida que bienes manufacturados en la Argentina penetraron en mercados extranjeros.⁴ Al promediar la década 1940-50 la Argentina tenía una economía cada vez más industrializada; mientras el tradicional sector agrario seguía constituyendo la principal fuente de divisas, el centro dinámico de acumulación de capital se hallaba ahora en la manufactura.

En la estructura social se operaron cambios que reflejaban esa evolución económica. El número de establecimientos industriales aumentó de 38.456 en 1935 a 86.440 en 1946, a la vez que el número de los trabajadores de ese sector pasaba de 435.816 a 1.056.673 en 1946.⁵ También se modificó la composición interna de esa fuerza laboral. Sus nuevos integrantes provenían ahora de las provincias del interior antes que de la inmigración extranjera, sumamente reducida desde 1930. Se

desplazaban atraídos por los centros urbanos, en expansión, de la zona litoral, y en especial por el Gran Buenos Aires, área periférica de la Capital Federal. Hacia 1947, alrededor de 1.368.000 migrantes del interior habían llegado a Buenos Aires atraídos por el rápido crecimiento industrial.⁶ En Avellaneda, centro suburbano esencialmente industrial separado de la Capital por el Riachuelo, sobre 518.312 habitantes que había en 1947 más de 173.000 habían nacido fuera de la Capital o de la provincia de Buenos Aires.⁷

Si bien la economía industrial se expandió rápidamente, la clase trabajadora no fue beneficiada por ese proceso. Los salarios reales en general declinaron al rezagarse detrás de la inflación. Frente a la represión concertada por los empleadores y el Estado, los obreros poco podían hacer para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. La legislación laboral y social era escasa y su cumplimiento obligatorio se imponía sólo esporádicamente. Fuera de los lugares de trabajo la situación no era mucho mejor, pues las familias obreras debían enfrentar, sin ayuda del Estado, los problemas sociales de la rápida urbanización. Una encuesta efectuada en 1937 reveló, por ejemplo, que el 60 por ciento de las familias de clase obrera de la Capital vivían en un cuarto cada una.⁸

El movimiento laboral existente en el tiempo del golpe militar de 1943 estaba dividido y era débil. Había en la Argentina cuatro centrales gremiales: la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), anarquista, hoy apenas un puñado de militantes del anarquismo; la Unión Sindical Argentina (USA), sindicalista, también de escasa influencia, y además estaba la Confederación General del Trabajo (CGT), dividida en la CGT Nº 1 y la CGT Nº 2.⁹ El influjo de este fragmentado movimiento laboral sobre la clase trabajadora era limitado. En 1943 se encontraba organizado tal vez alrededor del 20 por ciento de la fuerza laboral urbana, con mayoría, en ese porcentaje, del sector terciario. La gran mayoría del proletariado industrial estaba al margen de toda organización sindical efectiva. El grupo más dinámico que intentó organizarse en campos no tradicionales fueron los comunistas, que alcanzaron cierto éxito entre los obreros de la construcción y la alimentación y los madereros. Pero áreas vitales de la expansión industrial en las décadas 1930-40 y siguiente —los textiles y los metalúrgicos— aún eran virtualmente, en 1943, *terra incognita* para la organización sindical. De los 447.212 afiliados sindicales que había en 1941, el sector del transporte y los servicios representaba bastante más que el 50 por ciento, y la industria sólo aportaba 144.922 afiliados.¹⁰

Perón, desde su posición como secretario de Trabajo y después vicepresidente del gobierno militar insaurado en 1943, se consagró a atender algunas de las preocupaciones fundamentales de la emergente fuerza laboral industrial.¹¹ Al mismo tiempo, se dedicó a socavar la influencia de las fuerzas de izquierda que competían con él en la esfera sindical. Su política social y laboral creó simpatías por el tanto entre los trabajadores agrimiados como entre los ajenos a toda organización. Además, sectores decisivos de la jefatura sindical llegaron a ver sus propios futuros en la organización ligados a la supervivencia política de Perón en momentos en que las fuerzas políticas tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, atacaban su figura y sus políticas en el curso de 1945. El creciente apoyo obrero a Perón provocado por esas circunstancias cristalizó por primera vez el 17 de octubre de 1945, fecha en que una manifestación popular logró sacar a Perón del confinamiento y lo puso en el camino a la victoria que conquistó en las elecciones presidenciales de febrero de 1946.¹²

Aunque en el periodo 1943-46 hubo muchas mejoras específicas de las condiciones laborales y la legislación social, la década de gobierno peronista 1946/55 tuvo un efecto mucho más profundo aún sobre la posición de la clase trabajadora en la sociedad argentina. Ante todo, durante ese lapso se asistió a un considerable aumento de la capacidad de organización y del peso social de la clase trabajadora. Combinándose, la simpatía del Estado por el fortalecimiento de la organización sindical y el anhelo de la clase trabajadora de trasladar su victoria política a ventajas concretas determinaron una rápida extensión del sindicalismo. En 1948 la tasa de sindicalización había ascendido al 30,5 por ciento de la población asalariada, y en 1954 era del 42,5 por ciento. En la mayoría de las industrias manufactureras la tasa oscilaba entre el 50 y el 70 por ciento.¹³ Entre 1946 y 1951 el número total de afiliados sindicales aumentó de 520.000 a 2.334.000. Actividades manufactureras como la textil y la metalúrgica, donde antes de 1946 el sindicalismo era débil o nulo, para fines de la década tenían sindicatos cuyo número de afiliados se contaba por cientos de millares. Además, por primera vez se agruparon grandes núcleos de empleados públicos. Esta extensión de la agrupación en amplia escala fue acompañada por la implantación de un sistema global de negociaciones colectivas. Los convenios firmados en toda la industria argentina en el periodo 1946-48 regulaban las escalas de salarios y las especificaciones laborales e incluían además un conjunto de disposiciones sociales que

contemplaban la licencia por enfermedad, la licencia por maternidad y las vacaciones pagas.¹⁴

La estructura de organización impuesta a la expansión sindical fue importante en el sentido de que moldeó el futuro desarrollo del movimiento gremial. La sindicalización debía basarse en la unidad de actividad económica, antes que en el oficio o la empresa particular. Además, en cada sector de la actividad económica sólo se otorgó a un sindicato el reconocimiento oficial que lo facultaba para negociar con los empleadores de esa actividad. Los empleadores estaban obligados por ley a negociar con el sindicato reconocido, y los salarios y condiciones establecidos por esa negociación se aplicaban a todos los obreros de esa industria, con prescindencia de que estuvieran agrupados o no. Además se creó una estructura sindical específica centralizada, que abarcaba las ramas locales y ascendía, por intermedio de federaciones nacionales, hasta una única central, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Finalmente, quedaba bien establecido el papel del Estado en la supervisión y articulación de esa estructura. El Ministerio de Trabajo era la autoridad estatal que otorgaba a un sindicato el reconocimiento que lo facultaba para negociar con los empleadores. El decreto 23.852, de octubre de 1945, conocido como Ley de Asociaciones Profesionales, que estableció ese sistema, estipulaba también el derecho del Estado a supervisar vastas áreas de la actividad sindical. En esta forma la estructura legal aseguraba a los sindicatos muchas ventajas: derechos de negociación, protección de los funcionarios sindicales contra la adopción de medidas punitivas que los afectaran, estructura sindical centralizada y unificada, deducción automática de los sueldos y salarios de las cuotas sindicales y aplicación de éstas a vastos planes de bienestar social. Pero al mismo tiempo otorgó al Estado las funciones de garante y supervisor final de este proceso y de los beneficios derivados de él.

Mientras la expansión en gran escala de la organización sindical aseguraba el reconocimiento de la clase trabajadora como fuerza social en la esfera de la producción, durante el periodo peronista también se asistió a la integración de esa fuerza social a una coalición política emergente, supervisada por el Estado. Desde el punto de vista de los trabajadores, la índole exacta de su incorporación política al régimen no se evidenció enseguida. Los contornos generales de esa integración política sólo se manifestaron durante la primera presidencia de Perón y fueron confirmados y desarrollados en el curso de la segunda. En el primer periodo, de 1946 a 1951, se operaron la

gradual subordinación del movimiento sindical al Estado y la eliminación de los líderes de la vieja guardia, de acción decisiva en la movilización de los sindicatos en apoyo de Perón en 1945 y quienes habían formado el Partido Laborista para que actuara como rama política de los trabajadores. Sus ideas de autonomía política y organizativa, así como el carácter condicional de su apoyo a Perón, no se armonizaban con las ambiciones políticas de éste. Y es preciso reconocer que tampoco su insistencia en el principio de autonomía sindical se correspondía con los conceptos que prevalecían entre afiliados sindicales cuyo número aumentaba rápidamente.¹⁵ Por añadidura, el peso de la intervención estatal y el apoyo político popular que recibía Perón de los trabajadores agremiados limitó inevitablemente las opciones abiertas a los líderes de la vieja guardia sindical. Cada vez más, los sindicatos se incorporaron a un monolítico movimiento peronista y fueron llamados a actuar como agentes del Estado ante la clase trabajadora, que organizaban el apoyo político a Perón y servían como conductos que llevaban las políticas del gobierno a los trabajadores.

A medida que, en la segunda presidencia, se perfiló más claramente el Estado justicialista, con sus pretensiones corporativistas de organizar y dirigir grandes esferas de la vida social, política y económica, se tornó evidente el papel oficialmente asignado al movimiento sindical: incorporar a la clase trabajadora a ese Estado. Los atractivos que ofrecía esa relación fueron grandes tanto para los dirigentes como para las bases. Se creó una vasta red de bienestar social, operada por el Ministerio de Trabajo y Previsión, la Fundación Eva Perón y los propios sindicatos. Los dirigentes gremiales ocupaban ahora bancas en el Congreso, eran habitualmente consultados por el gobierno acerca de una variedad de problemas nacionales e ingresaban en el cuerpo diplomático en carácter de agregados laborales.¹⁶ Además, las ventajas económicas concretas para la clase trabajadora resultaban claras e inmediatas. A medida que la industria argentina se expandía, impulsada por incentivos estatales y una situación económica internacional favorable, los trabajadores se sintieron beneficiados. Entre 1946 y 1949 los salarios reales de los trabajadores industriales aumentaron un 53 por ciento. Aunque esos salarios reales declinaron durante la crisis económica de los últimos años del régimen, la proporción de la renta nacional correspondiente a los obreros no se alteró. Entre 1946 y 1949 la parte de los salarios en la renta nacional subió del 40,1 por ciento al 49 por ciento.¹⁷

Si bien surgieron expresiones de oposición de la clase tra-

bajadora a ciertos aspectos de la política económica peronista, los términos de la integración política del sindicalismo al Estado peronista fueron muy poco cuestionados en sentido general. Ciertamente, un legado crucial que los sindicalistas recibieron de la era peronista consistió en la integración de la clase trabajadora a una comunidad política nacional y un correspondiente reconocimiento de su status cívico y político dentro de esa comunidad. Aparte de esto, la experiencia de esa década legó a la presencia de la clase trabajadora dentro de la comunidad un notable grado de cohesión política. La era peronista borró en gran medida las anteriores lealtades políticas que existían en las filas obreras e implantó otras nuevas. Los socialistas, comunistas y radicales, que antes de Perón habían compelido por lograr el apoyo de la clase trabajadora, en 1955 se encontraban en gran medida marginados en lo que concierne a influencia. Para los socialistas y radicales, el peronismo había de seguir siendo un ultraje moral y cívico, una prueba del atraso y la carencia de virtudes cívicas de los trabajadores argentinos. Esa actitud había determinado su oposición al régimen militar de 1943-46, su apoyo a la Unión Democrática y su continua hostilidad a Perón durante la siguiente década.

El Partido Comunista intentó asumir una posición más flexible que la de sus aliados de otra hora. Poco después de la victoria electoral peronista, el PC dejó de caracterizar al peronismo como una forma de fascismo, disolvió su aparato sindical y ordenó a sus militantes incorporarse a la CGT y sus sindicatos a fin de trabajar con las descarriadas masas peronistas y conquistarlas.¹⁸ Pero tampoco el comunismo fue capaz de ponerse del error político que había sido apoyar a la Unión Democrática, coalición antiperonista, en las elecciones de 1946; ni fue capaz tampoco de ofrecer una alternativa creíble a las notorias ventajas que se derivaban de integrarse al Estado peronista. Si bien en el plano local algunos militantes comunistas fueron capaces de conservar su credibilidad y de dirigir algunas huelgas importantes, el PC nunca pudo desafiar la hegemonía política del peronismo en las filas sindicales. La importancia de ese legado de cohesión política se aprecia mejor si también tomamos en cuenta la relativa homogeneidad racial y étnica de la clase trabajadora argentina y su concentración en unos pocos centros urbanos, principalmente el Gran Buenos Aires. Sumados, estos factores contribuyeron a otorgar a la clase trabajadora argentina y su movimiento sindical un peso, sin paralelo en América Latina dentro de la comunidad nacional.

Unión Democrática Coalición
Antiperonista en los elecciones de 1946

LOS TRABAJADORES Y LA ATRACCIÓN POLÍTICA DEL PERONISMO

La relación entre los trabajadores y sus organizaciones y el movimiento y el Estado peronistas resulta por lo tanto indudablemente vital para la comprensión del período 1943-55. La intimidad de esa relación ha sido tomada en general, por cierto, como definitoria del carácter excepcional del peronismo en el espectro de las experiencias populistas latinoamericanas. ¿Cómo debemos interpretar la base de esa relación y, además, el significado de la experiencia peronista para los trabajadores peronistas? Las respuestas a estas preguntas han rechazado cada vez más las anteriores explicaciones, que entendían el apoyo de los obreros a Perón en función de una división entre la vieja y la nueva clase trabajadora. Sociólogos como Cino Bocchini, Izquierdistas que competían por las simpatías de la clase trabajadora, e incluso algunos peronistas, explicaron la adhesión popular al peronismo en términos de obreros migrantes sin experiencia que, incapaces de afirmar en su nuevo ámbito urbano una propia identidad social y política e insensibles a las instituciones y la ideología de la clase trabajadora tradicional, se encontraron "disponibles" para ser utilizados por sectores disidentes de la élite. Esos proletarios inmigrantes fueron quienes, según esa explicación, se congregaron bajo la bandera peronista en el período 1943-46.¹⁹

En los estudios revisionistas, el apoyo de la clase trabajadora a Perón ha sido visto como el lógico compromiso de los obreros con un proyecto reformista dirigido por el Estado que les prometía ventajas materiales concretas.²⁰ Más recientes, esos estudios no han presentado la imagen de una masa pasiva manipulada sino la de actores, dotados de conciencia de clase, que procuraban encontrar un camino realista para la satisfacción de sus necesidades materiales. En consecuencia, dentro de este enfoque la adhesión política ha sido vista, al menos implícitamente, como reducible a un racionalismo social y económico básico. Ese instrumentalismo tenía al parecer el respaldo del sentido común. Casi todos los que interrogaban a un peronista sobre las causas de su apoyo a Perón recibían por respuesta el significativo gesto de palparse el bolsillo donde se lleva el dinero, que simbolizaba un pragmatismo de clase básico, atento a las necesidades de dinero y a su satisfacción. No hay duda de que el peronismo, desde el punto de vista de los trabajadores, fue en un sentido fundamental una respuesta a las dificultades económicas y la explotación de clase.

Sin embargo, era también algo más. Era también un movimiento representativo de un cambio decisivo en la conducta y las lealtades políticas de la clase trabajadora, que adquirió una visión política de la realidad diferente. Para comprender el significado de esa nueva filiación política necesitamos examinar cuidadosamente sus rasgos específicos y el discurso en el cual se expresó, en vez de considerar al peronismo como una inevitable expresión de insatisfacción social y económica. Gareth Stedman Jones, al comentar la renuencia de los historiadores de fenómenos sociales a tomar seriamente en cuenta lo político, observó hace corto tiempo que "un movimiento político no es simplemente una manifestación de miseria y dolor; su existencia se caracteriza por una convicción, común a muchos, que articula una solución política de la miseria y un diagnóstico político de sus causas".²¹ Por lo tanto, si bien el peronismo representó una solución concreta de necesidades materiales expimentadas, todavía nos falta comprender por qué la solución adoptó la forma específica de peronismo y no una diferente. Otros movimientos políticos se habían preocupado por esas mismas necesidades y habían ofrecido soluciones. Incluso desde el punto de vista programático había muchas similitudes formales entre el peronismo y otras fuerzas políticas. Lo que necesitamos entender es el éxito del peronismo, sus cualidades distintivas, la razón por la cual su llamamiento político inspiró más confianza a los trabajadores; en suma, qué facetas tocó que otros no tocaron. Para ello necesitamos considerar seriamente el atractivo político e ideológico de Perón, así como examinar la índole de la retórica peronista y compararla con la de quienes le disputaban la adhesión de la clase trabajadora.

Los trabajadores como ciudadanos en la retórica política peronista

El atractivo político fundamental del peronismo reside en su capacidad para redefinir la noción de ciudadanía dentro de un contexto más amplio, esencialmente social. La cuestión de la ciudadanía en sí misma, y la del acceso a la plenitud de los derechos políticos, fue un aspecto poderoso del discurso peronista, donde formó parte de un lenguaje de protesta, de gran resonancia popular, frente a la exclusión política. Algo del poder de esos componentes del lenguaje político peronista se originó en que ya formaban parte del lenguaje tradicional de la política democrática, que demandaba igualdad de acceso a los

derechos políticos. Esa tradición ya se había encarnado principalmente en la Unión Cívica Radical y su líder Hipólito Yrigoyen. Antes de 1930, el Partido Radical había movlizado a las clases medias urbanas y rurales, así como a una porción no pequeña de las clases humildes urbanas, con una retórica donde prevalecían los símbolos de una lucha contra la oligarquía y con un lenguaje tradicional acerca de la ciudadanía y los derechos y obligaciones de carácter político.²² El peronismo era lo bastante ecléctico como para postular su derecho a elementos de ese legado yrigoyenista y apoderarse de ellos.²³

En parte, además, la fuerza de ese interés por los derechos políticos de la ciudadanía se originaba en la foja de escándalos de la "década infame" que siguió al derrocamiento de Yrigoyen por los militares en 1930.²⁴ En la "década infame", que en rigor se extendió desde 1930 hasta el golpe militar de 1943, se asistió a la reimposición y el mantenimiento del poder político de la élite conservadora mediante un sistema de fraude y corrupción institucionalizados. Era la época del "ya votaste, rajá pronto para tu casa", impuesto por los matones a sueldo de los comités conservadores.²⁵ En Avellaneda, Alberto Barceló controlaba la inminente zona industrial con ayuda de la policía, de su maquinaria política, del hampa y los votos de los muertos, tal como lo venía haciendo, en gran medida, desde la Primera Guerra Mundial.²⁶ En el resto de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Manuel Fresco coordinaba un aparato similar de favoritismos y corrupción. La única isla de relativa rectitud política era la Capital Federal, donde rara vez se hacía fraude. La corrupción política dio un tinte de degeneración social a la élite tradicional, protagonista de una serie de escándalos, apertamente interminable en los que intervenían figuras públicas y grupos económicos extranjeros, episodios que los nacientes grupos nacionalistas condenaron en muchas oportunidades.²⁷

Asimismo, esa corrupción institucional alimentó un vasto cinismo público. En las palabras de un autor, "era una corrupción que hacía escuela".²⁸ El malestar político y moral acarreado por esta situación engendró una notoria crisis de la confianza que inspiraban las instituciones políticas establecidas y de la creencia en su legitimidad. El peronismo pudo, en consecuencia, reunir capital político denunciando la hipocresía de un sistema democrático formal que tenía escaso contenido democrático real. Por añadidura, el peso de las acusaciones peronistas contra ese sistema fue acrecentado por el hecho de que incluso aquellos partidos formalmente opuestos al fraude en la década 1930-40 fueron vistos como comprometidos con el régimen

conservador. Tal fue particularmente el caso del Partido Radical, que al cabo de un periodo de abstención principista, entre 1931 y 1936, se reincorporó a la contienda política, bajo la dirección de Marcelo T. de Alvear, con el fin de actuar como oposición leal a un sistema político del que el radicalismo sabía que jamás podría desplazarlo. La crisis de legitimidad se extendió entonces mucho más allá de la élite conservadora misma y fue un tema constantemente reiterado por la propaganda peronista en 1945 y 1946. En la campaña previa a las elecciones de 1946, el órgano oficial del Partido Laborista expresó así ese concepto:

"Los viejos y tradicionales partidos desde hace varios años dejaron de ser intérpretes del pueblo para serlo en círculos y cenáculos de evidente matiz impopular, sordos y ciegos a las inquietudes de esa masa que llaman en su auxilio cuando se trata de elecciones."²⁹

Sin embargo, la atracción ejercida por el peronismo sobre los trabajadores no puede explicarse simplemente en función de su capacidad para articular exigencias de participación política y pleno reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Formalmente, los derechos asociados a esas reclamaciones —sufragio universal, derecho de asociación, igualdad ante la ley— existían desde hacía largo tiempo en la Argentina. La Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal masculino en 1912, siguió en vigencia durante la "década infame". Similarmente, en la Argentina existía una sólida tradición de instituciones sociales y políticas representativas. La formulación por el peronismo de demandas democráticas era, por lo tanto, la exigencia de restablecimiento de derechos ya anteriormente reconocidos. Más aún, Perón no tenía el monopolio de este discurso contra la exclusión política. Por cierto fue el mismo lenguaje que sus adversarios de la Unión Democrática utilizaron contra él, acusándolo de representar un sistema cerrado y antidemocrático, y fue asimismo el discurso que continuaría constituyendo la base de la oposición política a Perón durante todo su régimen y después de su caída. Finalmente, en el sentido de que se refería a la cuestión general de la ciudadanía, no era un llamamiento dirigido específicamente a los trabajadores sino, por definición, a todos los votantes cuyos derechos habían sido violados.

El éxito de Perón con los trabajadores se explicó, más bien, por su capacidad para refundir el problema total de la ciudadanía en un molde nuevo, de carácter social.³⁰ El discurso peronista negó la validez de la separación, formulada por el li-

beralismo, entre el Estado y la política por un lado y la sociedad civil por otro. La ciudadanía ya no debía ser definida más simplemente en función de derechos individuales y relaciones dentro de la sociedad política, sino redefinida en función de la esfera económica y social de la sociedad civil. En los términos de su retórica, luchar por derechos en el orden de la política implicaba inevitablemente cambio social. Más aún, al subrayar constantemente la dimensión social de la ciudadanía, Perón desafiaba en forma explícita la validez de un concepto de democracia que la limitaba al goce de derechos políticos formales, y a la vez ampliaba ese concepto hasta hacerlo incluir en la participación en la vida social y económica de la nación. En parte esto se reflejó en la reclamación de una democracia que incluyera derechos y reformas sociales, así como en una actitud que trataba con escepticismo las demandas políticas formuladas en la retórica del liberalismo formal. Esto se tornó del todo patente en la campaña electoral de 1946. El llamamiento político de la Unión Democrática se expresó poco menos que totalmente en el lenguaje de las consignas democráticas liberales. En los discursos y manifiestos políticos no hubo virtualmente mención alguna del tema social. En cambio, se encuentra un discurso político totalmente estructurado en términos de "libertad", "democracia", "la Constitución", "elecciones libres", "libertad de palabra", y demás.³¹

Perón, en cambio, constantemente recordaba a su público que tras la fraseología del liberalismo había una división social básica y que una verdadera democracia sólo podría ser construida si se enfrentaba con justicia esa cuestión social. En un discurso de julio de 1945, en que contestó las crecientes exigencias de elecciones formuladas por la oposición, dijo:

"Si algunos piden libertad, nosotros también la pedimos [...] pero no la libertad del fraude [...]. Ni tampoco la libertad de vender el país ni la de explotar al pueblo trabajador."³²

Luis Gay, secretario general del Partido Laborista, se hizo eco de ese concepto en el discurso que pronunció al proclamarse formalmente la fórmula presidencial peronista en febrero de 1946:

"La democracia política es una mentira por sí sola. Únicamente es una realidad cuando va efectivamente acompañada por una estructuración económica de la sociedad, que la haga posible en el terreno de las realizaciones prácticas. Mienten quienes no hagan suyo este concepto y sólo hablan de la Constitución y de la libertad que ellos desvirtuaron y negaron hasta el 3 de junio de 1943."³³

No hay duda alguna de que esta clase de retórica tocó una fibra sensible de los trabajadores que acababan de salir de la década infame. En el primer acto público organizado por la CGT para respaldar a Perón contra el creciente ataque opositor, en julio de 1945, Manuel Pichel, delegado de aquel organismo gremial, afirmó:

"No basta hablar de democracia. Una democracia defendida por los capitales reaccionarios no la querremos, una democracia que sea un retorno a la oligarquía no la auspiciaremos."³⁴

Mariano Tedesco, dirigente textil, recordó algunos años después que

"la gente en 1945 ya estaba cansada. Durante años y años le habían engañado su hambre atrasada con canciones sobre la libertad"³⁵

Análogamente, el escepticismo con que eran recibidos los símbolos formales del liberalismo se torna patente en una anécdota que Julio Maíud recuerda del año 1945. Según Maíud, un grupo de trabajadores fue interrogado acerca de si tenían por la existencia de la libertad de palabra en caso de que Perón triunfara en las elecciones venideras. Le contestaron: "La libertad de expresión es cosa de usledes. Nosotros nunca la hemos tenido."³⁶

Más fundamentalmente aún, la refundición por Perón del tema de la ciudadanía involucraba una visión distinta y nueva del papel de la clase trabajadora en la sociedad. Tradicionalmente, el sistema político liberal en la Argentina, como en otras partes, había reconocido la existencia política de los trabajadores como atomizados ciudadanos individuales dotados de una formal igualdad de derechos en el campo político, pero al mismo tiempo había rechazado, u obstruculado, su constitución como clase social en ese campo. Ciertamente fiel a la separación liberal entre Estado y sociedad civil, aquel sistema había negado que fuera legítimo transferir al terreno político la identidad social construida en torno del conflicto en el nivel social. Entendía que toda unidad, cohesión social y sentimiento de intereses distintos que se hubiera alcanzado en la sociedad civil debían disolverse y atomizarse en el mercado político, donde los ciudadanos particulares podían, por intermedio de los partidos políticos, influir sobre el Estado y así reconciliar y equilibrar los intereses que existen en recíproca competencia en la sociedad civil.

El radicalismo, pose a toda su retórica sobre "el pueblo"

y la "oligarquía", nunca cuestionó los supuestos del sistema político liberal. Más aún, su maquinaria política, basada en el favoritismo personal y estructurada en torno de jefes locales, estaba en la posición ideal para actuar como "vendedor" de las exigencias de los ciudadanos individuales en el mercado político.³⁷ El peronismo, en cambio, fundaba su llamamiento político a los trabajadores en un reconocimiento de la clase trabajadora como fuerza social propiamente dicha, que solicitaba reconocimiento y representación como tal en la vida política de la nación. Esa representación ya no había de materializarse simplemente mediante el ejercicio de los derechos formales de la ciudadanía y la mediación primaria de los partidos políticos. En vez de ello, la clase trabajadora, como fuerza social autónoma, había de tener acceso directo y por cierto privilegiado al Estado por intermedio de sus sindicatos.

El carácter excepcional de esa visión de la integración política y social de la clase trabajadora en la Argentina de la década 1940-50 se torna más patente si examinamos la manera distintiva en que Perón se dirigió a los trabajadores en los discursos que pronunció en la campaña electoral de 1945-46 y después.³⁸ A diferencia del caudillo o cacique político tradicional, el discurso de Perón no se dirigió a los obreros como individuos atomizados cuya única esperanza de lograr coherencia social y significado político en su vida radicaba en estrechar lazos con un líder capaz de interceder por ellos ante un Estado todopoderoso. En cambio Perón les habló como a una fuerza social cuya organización y vigor propios eran vitales para que él pudiera afirmar con éxito, en el plano del Estado, los derechos de ellos. Él era sólo su vocero, y sólo podía tener éxito en la medida en que ellos se unieran y organizaran. Continuamente subrayó Perón la fragilidad de los individuos y lo arbitrario del destino humano, y por lo tanto la necesidad de los trabajadores de depender solamente de su propia voluntad para materializar sus derechos. En el marco de esta retórica, por consiguiente, el Estado no se limitaba a ser un dispensador todopoderoso de recursos apetecidos que los distribuía -por intermedio de su instrumento elegido, el líder- a individuos pasivos. Más bien el Estado era un espacio donde las clases -no los individuos aislados- podían actuar política y socialmente unos junto con los otros para establecer derechos y exigencias de orden corporativo. Según este discurso el árbitro final de ese proceso podía ser el Estado, y en definitiva la figura de Perón identificada con el Estado, pero éste no constituía a esos grupos como fuerzas sociales, pues ellos tenían cierta independencia, así

como una presencia irreductible, social y, por lo tanto, política.³⁹

Sin duda alguna, la retórica peronista contenía fuertes elementos de caudillismo personalista, poco menos que místico, asociados a las figuras de Perón y Evita. Esto resultó en parte de las distintas necesidades políticas de Perón y el peronismo en diferentes momentos. Desde una posición segura en el poder estatal, la necesidad de subrayar la autonomía organizativa y la cohesión social de la clase trabajadora era notoriamente menor que en el periodo de lucha política previo a la conquista de ese poder. Incluso durante el periodo anterior a 1946 los elementos personalistas de la atracción política peronista se encontraban presentes, como lo prueba la arrolladora consigna "¡Perón, Perón!" insistentemente vocada en la movilización del 17 de octubre de 1945. Sin embargo, aun en el punto más alto de la adulación a Evita y del creciente culto, patrocinado por el gobierno, al poder personal de Perón durante la segunda presidencia, este elemento personalista no se hizo presente a expensas de una continua afirmación de la fuerza social y organizativa de la clase trabajadora.

Esta afirmación de los trabajadores como presencia social y su incorporación directa al manejo de la cosa pública suponía obviamente un nuevo concepto de las legítimas esferas de interés y actividad de la clase obrera y sus instituciones. Esto se hizo patente sobre todo en la afirmación, por parte de Perón, de que los trabajadores tenían derecho a interesarse por el desarrollo económico de la nación y a contribuir a determinarlo. Las cuestiones de la industrialización y del nacionalismo económico, factores clave de la atracción ejercida por el peronismo, debían ser situadas en el marco de esa nueva visión del papel de los obreros en la sociedad. La retórica peronista era lo bastante abierta como para absorber las fibras de pensamiento nacionalista existentes. Algunas de ellas se remontaban, también, al legado yrigoyenista, en particular el conflicto con las compañías petroleras extranjeras durante los últimos años de Yrigoyen en el poder. Otros elementos fueron tomados a los grupos de intelectuales nacionalistas que afloraron en la década 1930-40 y cuyas ideas influían sobre los militares. Por ejemplo, términos como "cipayo" y "vende-patria" se incorporaron al lenguaje político peronista para designar aquellas fuerzas que deseaban mantener a la Argentina dentro de la órbita económica de los Estados Unidos y Gran Bretaña como proveedora de productos agropecuarios.⁴⁰ Tal lenguaje se tornó simbólico de una puja hacia la industrialización, proceso que debía ser guiado y supervisado con arreglo a la meta "Argentina potencia", en vez

de la "Argentina granja" postulada, según los peronistas, por sus adversarios.

El éxito de la identificación de Perón mismo con la creación de una Argentina industrial, así como la atracción política ejercida por esa simbolización, no residía primordialmente en los términos programáticos. Dados el evidente interés de una fuerza de trabajo industrial emergente por la cuestión de la industrialización, así como la vigorosa autoidentificación del peronismo con este símbolo y su posterior monopolio del lenguaje del desarrollo económico, resultaría lentador explicar ese éxito en función de un interés, también monopolístico, de Perón en ese programa. Sin embargo, en lo que se refiere a planes políticos y compromisos formales, la identificación del peronismo con la industrialización y de sus adversarios con una Argentina agropecuaria estaba lejos de ser exacta. Con diversos énfasis y no sin irregularidad en el compromiso adoptado, solo muy pocos de los principales partidos argentinos negaban, en la década 1940-50, la necesidad de alguna suerte de industrialización patrocinada por el Estado. Mediante el Plan Pinedo, de 1940, el sector más articulado de la élite conservadora había afirmado su reconocimiento de la irreversibilidad de la industrialización. También el Partido Radical había adoptado una actitud cada vez más favorable a la industrialización, y su ala yrigoyenista aprobó en abril de 1945, en la Declaración de Avellaneda, un proyecto económico tan industrialista, en cualquiera de sus expresiones, como el de Perón. También la izquierda, encarnada por los comunistas y socialistas, había recurrido persistentemente a una retórica antimperialista durante la década 1930-40.⁴¹

La verdadera cuestión en juego en la década 1940-50 no era, en consecuencia, tanto industrialización versus desarrollo agrario como intervención estatal versus *laissez-faire*. Más bien se trataba del problema de los distintos significados políticos de la industrialización, es decir los parámetros sociales y políticos con arreglo a los cuales ese proceso debía operarse. Perón tuvo la habilidad de definir esos parámetros en una forma nueva que atrajo a la clase obrera, así como la habilidad de abordar este problema en una forma que, particularmente creíble para los trabajadores, le permitió apropiarse del tema y el símbolo del desarrollo industrial y convertirlo en un arma política mediante la cual pudo diferenciarse de sus adversarios. El éxito de esta apropiación fue, en alguna medida, cuestión de cómo se la percibiera. Claramente, el vínculo entre los rivales políticos de Perón en 1945-46 y los bastiones de la élite

agropecuaria tradicional, como lo eran la Sociedad Rural y el Jockey Club, debilitaba la credibilidad de su compromiso con la industrialización. Análogamente, su estrecho nexo con el embajador norteamericano no fortalecía la creencia en su devoción por la soberanía nacional y la independencia económica. En cuanto a imagen, hacia fines de la campaña electoral de 1946 ya era un hecho establecido la identificación del peronismo con el progreso industrial y social y con la modernidad. Pero no se trató exclusivamente de un problema de imagen y relaciones públicas. Más fundamentalmente, la clase obrera veía en el apoyo de Perón al desarrollo industrial un papel vital para sí misma como agente en la esfera pública, considerablemente ampliada, que el peronismo le ofrecía como campo de actividad. En efecto, Perón por cierto establecía como premisa del concepto mismo de desarrollo industrial la plena participación de la clase trabajadora en la vida pública y la justicia social. En su pensamiento, la industrialización ya no era concebible, como lo había sido antes de 1943, al precio de la extrema explotación de la clase trabajadora. En un discurso que pronunció durante la campaña electoral, Perón afirmó:

"En definitiva: la Argentina no puede estancarse en el rítmico somnoliento a que la condenaron cuantos se lanzaron a vivir a sus costillas. La Argentina ha de recobrar el pulso firme de una juventud sana y de una sangre limpia. La Argentina necesita la aportación de esta sangre juvenil de la clase obrera."⁴²

En la retórica peronista, la justicia social y la soberanía nacional eran temas verosimilmente interrelacionados antes que consignas abstractas meramente enunciadas.

Una visión digna de crédito: carácter concreto y creíble del discurso político de Perón

La cuestión de la credibilidad es decisiva para comprender tanto la exitosa identificación, efectuada por Perón, de sí mismo con ciertos símbolos importantes, por ejemplo la industrialización, como, más en general, el impacto político de su discurso sobre los trabajadores. En el ensayo a que ya nos hemos referido, Gareth Stedman Jones señala que para tener éxito un vocabulario político particular debe proponer una alternativa general capaz de inspirar una esperanza factible y proponer a la vez un medio de realizarla que, siendo creíble, permita a los posibles reclutas pensar en esos términos.⁴³ El vocabulario

del peronismo era a la vez visionario y creíble. La credibilidad arraigaba en parte en la índole inmediata y concreta de esa retórica. Esto involucraba la limitación de las consignas políticas abstractas a sus aspectos materiales más concretos. Según ya vimos, esa retórica contrastó nitidamente, en los decisivos años 1945-46, con el lenguaje de alta abstracción empleado por los adversarios de Perón. Si bien Perón fue capaz de sermonear desde la altura, sobre todo después de alcanzar la presidencia, y de acuerdo con la audiencia a que se dirigiera, sus discursos a los obreros en el período inicial tuvieron un tono único en ese momento.

Por ejemplo, se encuentran estructurados en un lenguaje claramente distinto del empleado por el radicalismo clásico, que abundaba en densas generalidades sobre la renovación nacional y la virtud cívica. La terminología radical de "la oligarquía" y "el pueblo" seguía presente, pero ahora era habitualmente definida con mayor precisión. Perduraba su empleo de categorías generales que denotaban el bien y el mal, o sea los que estaban por Perón y los que se oponían a él, pero ahora esos términos eran con frecuencia concretados, a veces como ricos y pobres, a menudo como capitalistas y trabajadores. Si bien se hablaba de una comunidad indivisible —simbolizada por "el pueblo" y "la nación"—, la clase trabajadora recibía un papel implícitamente superior en esa totalidad y con frecuencia se la erigía en depositaria de los valores nacionales. El "pueblo" muchas veces se transformaba en "el pueblo trabajador", de modo que "el pueblo", "la nación" y "los trabajadores" eran intercambiables entre sí.

Similar negación de lo abstracto puede encontrarse en el llamamiento peronista en favor del nacionalismo económico y político. Desde el punto de vista de la construcción formal, por el Estado, de la ideología peronista, categorías como "la nación" y "la Argentina" recibían un significado abstracto, místico.⁴⁴ Sin embargo, en los discursos que Perón dirigió específicamente a la clase obrera, particularmente en el período inicial, pero también después, se advierten pocos de los elementos místicos e irracionales de la ideología nacionalista. Esos discursos no se interesaban mayormente por las virtudes intrínsecas de la "argentinidad" ni por los antecedentes históricos de la cultura "criolla" que hallaban expresión en una nostalgia evocadora de alguna esencia nacional desaparecida largo tiempo atrás. Esas preocupaciones estaban reservadas de hecho, principalmente, a intelectuales de clase media pertenecientes a los diversos grupos nacionalistas que procuraban, con escaso éxito, servirse

del peronismo como vehículo para realizar sus aspiraciones. El nacionalismo de la clase trabajadora era invocado principalmente en función de problemas económicos concretos.

Por añadidura, la credibilidad política que el peronismo ofrecía a los trabajadores se debía no sólo a lo concreto de su retórica, sino también a su inmediatez. La visión peronista de una sociedad basada en la justicia social y en la integración social y política de los trabajadores a esa sociedad no estaba sujeta al previo cumplimiento de preuissas —como lo estaba por ejemplo en el discurso político izquierdista tales como transformaciones estructurales abstractas de largo plazo, ni lo estaba a la gradual adquisición en alguna fecha futura de una conciencia apropiada por parte de la clase obrera. La doctrina peronista tomaba la conciencia, los hábitos, los estilos de vida y los valores de la clase trabajadora tales como los encontraba y afirmaba su suficiencia y su validez. Glorificaba lo cotidiano y lo común como base suficiente para la rápida consecución de una sociedad justa, con tal de que se alcanzaran ciertas metas fáciles de lograr y evidentes por sí mismas. Primordialmente esto significaba apoyar a Perón como jefe de Estado y mantener un fuerte movimiento sindical. En este sentido, la atracción política del peronismo era esencialmente plebeya; ignoraba la necesidad de una élite política particularmente iluminada y reflejaba e inculcaba un profundo antinelectualismo.

La glorificación de estilos de vida y hábitos populares involucró un estilo y un idioma políticos bien a tono con las sensibilidades populares. Fuera asumiendo simbólicamente la actitud de "descamisado" en una reunión política, fuera con la clase de imaginaria que empleaba en sus discursos, Perón tenía una especial capacidad, que a sus rivales les faltaba, para comunicarse con sus audiencias obreras. El poeta Luis Franco observó en Perón una "afinidad de espíritu con las letras de tango".⁴⁵ Su habilidad para utilizar esa afinidad con el fin de establecer un nexo con su público se manifestó con claridad en el discurso que dirigió a la multitud reunida en la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945.

Hacia el final de ese discurso Perón evocó a su madre, "mi vieja":

"Por eso hace poco les dije que los abrazaba como abrazaría a mi madre. Porque ustedes han tenido los mismos dolores y los mismos pensamientos que mi pobre vieja habrá sentido en esos días."⁴⁶

Discurso
ulterior

La referencia parece gratuita, parece la fraseología vacua de alguien que no encuentra nada mejor que decir. Sin embargo, allí identificamos el eco de un importante tema sentimental de las leuras de tango: la pobre madre dolorida, cuya congola simboliza la congola de sus hijos, de todos los pobres. La identificación, efectuada por Perón, de su propia madre con los pobres, establecía una identidad sentimental entre él mismo y su audiencia, nota patética que resonaba en la sensibilidad de la cultura popular argentina del momento.⁴⁷ También resultó significativo que el discurso terminara con otra nota "languera": Perón recordó a su público, en el momento en que se disponía a abandonar la plaza:

"Recuerden que entre todos hay numerosas mujeres obreras que han de ser protegidas aquí y en la vida por los mismos obreros."⁴⁸

El tema de la amenaza a las obreras, y de la necesidad de proteger a sus mujeres, era un tema constante del tango y otras formas de cultura popular.

Que Perón estructurara en ese lenguaje su llamamiento político hoy a menudo nos parece, y por cierto les pareció a los críticos de su tiempo, un remanente de la condescendencia paternalista propia de la tradicional figura del caudillo. Su frecuente empleo de versos de *Marlin Fierro* y su uso deliberado de términos del lunfardo puede extrañar a la sensibilidad actual. Sin embargo, debemos ser cuidadosos al apreciar el impacto de su capacidad para manejar un idioma que reflejaba la sensibilidad popular del momento. En relatos efectuados por observadores y periodistas en los decisivos años iniciales del peronismo, encontramos con frecuencia los adjetivos "chabacano" y "burdo" para describir el estilo de expresarse de Perón y sus partidarios, calificativos que denotan una cualidad grosera, propia de un rústico. Sin embargo, no son epítetos que los peronistas hubieran rechazado necesariamente.

No hay duda alguna de que esa capacidad para reconocer, reflejar y promover un estilo y un idioma políticos y populares basados en el realismo plebeyo contrastaba nitidamente con el llamamiento lanzado por los partidos políticos que tradicionalmente representaban a la clase obrera. El tono adoptado por éstos frente a la efervescencia de los trabajadores al promediar la década 1940-50 era didáctico y parecía dirigirse a un público moral e intelectualmente inferior. Tal fue particularmente el caso del Partido Socialista. Su análisis de los episodios del 17 de octubre es ilustrativo de su actitud y su tono:

"La parte del pueblo que vive su resentimiento, y acaso para su resentimiento se desborda en las calles, amenaza, atropella, asalta diarios, persigue en su furia demoníaca a los propios adalides permanentes y responsables de su elevación y dignificación."⁴⁹

Tras este tono de temor, frustración y moralización había un discurso dirigido a una clase trabajadora abstracta, poco menos que mítica. El peronismo, en cambio, estaba dispuesto, en particular durante su período inicial, a reconocer e incluso glorificar a trabajadores.

Al comparar el enfoque político de Perón con el de sus adversarios no es posible menos que recordar el comentario de Ernst Bloch acerca de la apropiación, por los nazis, de las simpatías que los socialistas y comunistas tenían entre los obreros: "Los nazis hablaban falsamente, pero a la gente: los comunistas decían la verdad, pero hablaban de cosas."⁵⁰

La capacidad de Perón para apreciar el tono de la sensibilidad de la clase trabajadora y los supuestos con que ésta se manejaba se reflejó también en otros terrenos. La retórica peronista, por ejemplo, incluía un reconocimiento tácito de la inmutabilidad de la desigualdad social, una resignada aceptación, dictada por el sentido común, de la realidad de las desigualdades sociales y económicas, un reconocimiento de lo que Pierre Bourdieu denominó "un sentido de los límites".⁵¹ Los remedios propuestos para mitigar esas desigualdades eran plausibles e inmediatos. En un discurso que pronunció en Rosario en agosto de 1944, Perón puso de relieve el carácter razonable, evidente por sí mismo, de su llamamiento, es decir, la realidad mundana que había tras la retórica abstracta de la igualdad social:

"Queremos que desaparezca de nuestro país la explotación del hombre por el hombre y que cuando ese problema desaparezca iguálemos un poco las clases sociales para que no haya como he dicho ya en este país hombres demasiado, pobres ni demasiado ricos."⁵²

Este realismo suponía una visión política limitada, pero no descartaba resonancias utópicas: simplemente lograba que esas resonancias —un anhelo de igualdad social de que se pusiera fin a la explotación— resultaran más creíbles para una clase trabajadora imbuida, por su experiencia, de la década infame, de cierto cinismo frente a las promesas políticas y las consignas abstractas. Más aún, la credibilidad de la visión política de Perón, la practicabilidad de la esperanza que ofrecía, eran afirmadas a diario por las acciones que él ejecutaba desde

el plano del Estado. La confirmación de las soluciones que ofrecía no dependía de algún futuro apocalipsis, sino que se la podía verificar bastante directamente a la luz de la actividad y experiencia políticas de cada día. En 1945 ya había empezado a circular entre los trabajadores la consigna que había de simbolizar esa credibilidad: "¡Perón cumple!".

EL HERÉTICO IMPACTO SOCIAL DEL PERONISMO

El peronismo significó una presencia social y política mucho mayor de la clase trabajadora en la sociedad argentina. El impacto de este hecho puede ser medido, en términos institucionales, por referencia a factores tales como la relación íntima entre gobierno y sindicalismo durante la era de Perón, la masiva ampliación del gremialismo y el número de parlamentarios de extracción gremial. Estos son factores de fácil demostración empírica y en más de un caso estadísticamente mensurables. Sin embargo, existieron otros factores que es preciso tener en cuenta al evaluar el significado social del peronismo para la clase trabajadora, factores mucho menos tangibles y mucho más difíciles de cuantificar. Nos referimos a factores como el orgullo, el respeto propio y la dignidad.

Significado de la década infame: respuestas de la clase obrera

Para evaluar la importancia de esos factores debemos volver a la década infame, pues fue sin duda alguna el punto de referencia en relación con el cual los trabajadores midieron su experiencia del peronismo. La cultura popular de la era peronista fue dominada por una dicotomía temporal que contrastaba el presente peronista con el pasado reciente. Según lo observa Ernesto Golder en su análisis de la ficción literaria popular peronista, esa dicotomía fue acompañada por un correspondiente contraste de valores asociado al "hoy" de 1950-60 y al "ayer" de 1930-40.⁵³ Algunos de esos contrastes evaluativos se referían a los cambios sociales concretos conectados con el mayor bienestar social, el aumento de los salarios y la eficaz organización gremial. Sin embargo, otros se relacionaban con un campo social más amplio y más personal, al margen de los mejoramientos alcanzados en la línea de producción, el paquete salarial o el sindicato. Esto sugiere claramente que la década infame fue

experimentada por muchos trabajadores como un tiempo de frustración y humillación profundas, sentidas colectiva e individualmente.

Si bien carecemos de un informe detallado y amplio de los elementos que configuraban el universo social de la clase trabajadora del período preperonista, pruebas consistentes en anécdotas, testimonios personales, formas culturales populares y extractos biográficos sobre obreros pueden aportarnos fragmentos ilustrativos de la imagen total. La dureza de las condiciones de trabajo y la disciplina testimoniada por la mayoría de los observadores de aquel período tuvo impacto sin duda alguna sobre la clase trabajadora en general. Por ejemplo, en las memorias donde relata sus experiencias como organizador de los obreros de los frigoríficos de Berisso, en las décadas (1930-40) y siguiente, Cipriano Reyes señala que

"la empresa era dueña de las vidas y las haciendas de sus obreros. Unos cuenterniks, le digo esto como ejemplo, andaban por las casas vendiendo ropa en cuotas. Cuando un obrero no pagaba iban a ver al jefe del personal del frigorífico y entonces el moroso era suspendido. La vigilancia era increíble, estaba todo controlado".⁵⁴

Probablemente, un control de estas características fuese más duro en comunidades obreras dominadas por una sola empresa grande, como un frigorífico. Sin embargo, las condiciones sociales que reflejaba esa situación de dominio por el empleador no estaban confinadas al caso extremo de la ciudad-empresa. Angel Perelman recuerda haber dejado la escuela primaria a los 10 años para entrar en un taller metalúrgico de la Capital Federal, donde trabajaba

"jornadas sin horario [...] la hora de salida la fijaba el patrón. Toda la felicidad para una familia obrera consistía... en conservar el trabajo".

Los años treinta, recuerda Perelman,

"eran los tiempos de los desocupados, de los ingeniosos y de las pequeñas ratcias".⁵⁵

Otro autor, al comentar las condiciones generales de la situación laboral en la misma época, dice:

"El miedo a la desocupación en esa época lleva a la humillación. Al callarse y no hablar, la falta de acciones de defensa elementales lleva a la declinación moral, al escepticismo. Dentro de una fábrica,

trabajo
pre peronista

de un establecimiento, el obrero estaba solo, desintegrado de toda conciencia social.⁵⁵

Aunque generalizaciones tan tajantes sobre la declinación moral y el cinismo que habrían caracterizado la actitud de la clase obrera en la década 1930-40 deben ser tomadas con cautela, existe una prueba que tiende a apuntar en la misma dirección.

Algunos de los indicios más reveladores al respecto pueden obtenerse en formas culturales populares, en particular el tango. El universo social pintado en los tangos de la década 1930-40 era universalmente sombrío. Los temas tradicionales del tango siguieron presentes —la tracción amorosa, la nostalgia de un pasado más simple centrada en torno de la recreación idílica del barrio o del arrabal, la afirmación de virtudes como el coraje—, pero a esto se sumó, en algunos de los tangos, un contexto social amplio. En particular, en los tangos de Enrique Santos Discépolo la imposibilidad de una relación significativa entre un hombre y una mujer llega a simbolizar la imposibilidad de cualquier relación social que no se base en la codicia, el egoísmo y una falta total de escrúpulos morales en un mundo basado en la injusticia y el engaño. En muchos tangos de Discépolo la figura crucial es el "gilito embanderado", el lluso que trata de vivir honestamente o, más aún, es lo bastante ingenuo como para imaginarse que podrá cambiar un mundo injusto.⁵⁷ El propósito del tango es, entonces, desencañarlo de sus ilusiones enfrentándolo con una realidad donde "(si) aquí ni Dios rescata lo perdido".⁵⁸ El tono es de amargura y resignación. La idea popular de la vida social, tal como la reflejan esas letras, aconseja adoptar los valores dominantes, es decir el egoísmo y la inmoralidad. Llevada hasta sus últimas consecuencias, esa idea involucra la comprensión —si no la aprobación— de la atracción que ejerce sobre los pobres la lógica de la "mala vida", la prostitución, el proxenetismo, el delito.⁵⁹ La alternativa, en el caso de los que no aceptaran el ethos social dominante, era una aceptación resignada o un "obstinado silencio".⁶⁰

Evidentemente, hay que cuidarse de extraer, del tango y otras formas culturales populares del momento, conclusiones sobre las actitudes de la clase trabajadora. El tango, por ejemplo, era cada vez más una forma de arte comercializado cuya conexión con el "barrio" de trabajadores era tenue.

Lo que llegaba al público general era determinado en gran medida por las firmas productoras de discos, y el éxito y el fracaso comercial dependían de la recepción que se tributara

a la grabación en el mercado de consumo y los teatros y salones de baile de la zona céntrica de Buenos Aires. También parece probable que el elemento bohemio, que siempre había constituido parte importante del tango, recibiera mayor realce a medida que las letras provinieron cada vez más de la baja clase media urbana. Ciertamente, el desesperado lamento que profiere Discépolo en su gran tango *Cambalache*, escrito en 1935, donde dice que "todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor", suena a desencanto de un educado miembro de la clase media cuyo mérito la sociedad no reconoce. Las letras de la década infame también carecen de algo del optimismo y el compromiso social que hay en algunos tangos de la era anterior. De una u otra manera, la inmensa popularidad de esos tangos en la clase trabajadora de Buenos Aires parece demostrar que cualesquiera que fuesen las manipulaciones de la industria cultural, y cualesquiera que sean las precauciones con que leamos la conciencia de la clase trabajadora directamente en las letras de tango, éstas por cierto respondían a algunas actitudes y experiencias que, recreadas en esas letras, los trabajadores reconocían como auténticamente propias.

Empero, aun si reconocemos que tales hechos son significativos, también debemos admitir que las únicas respuestas con que contaron los trabajadores no consistieron en el cinismo, la apatía o la resignación. Luis Danussi, que después de 1955 llegaría a encabezar el sindicato de los gráficos, tras llegar a Buenos Aires en 1938 vio una ciudad

"tumultuosa, y con febril actividad sindical, ofrecía un amplio campo de acción: congresos nacionales, zonales, comarcales, asambleas de personales y de gremios".⁶¹

Aún se encontraba presente la característica militante que la cultura de la clase trabajadora había tenido en una época anterior. Esa cultura se centraba en torno de la existencia de

"[...] sindicatos, ateneos, bibliotecas mediante la distribución de volantes, periódicos, diarios, revistas, folletos y libros; manifestaciones, comités pro-presos, grupos teatrales, cooperativas, comunidades o ensayos de vida solidaria. También se realizaban campañas contra el alcoholismo, el tabaco, se organizaban plénes, lecturas comentadas y se procuraba dar amplitud al espíritu de apoyo mutuo".⁶²

También se organizaban campañas contra el alcohol y el tabaco, se realizaban picnics, se dictaban conferencias seguidas de debate y se inculcaba el espíritu de ayuda mutua.⁶² Todavía florecían, en 1938, elementos de esta suerte de cultura militante tradicional, compartida por igual por socialistas, comunistas, anarquistas y sindicalistas. Esos elementos encontraron expresión en los muchos comités formados en la década 1930-40 para ayudar a la España republicana y eran todavía una presencia viva en sindicatos como el de los gráficos, al que se incorporó Luis Danussi.

El propio Danussi tenía alguna formación anarquista al llegar a Buenos Aires, pero los trabajadores ajenos a esa cultura podían ser atraídos por ella y utilizarla como canal para expresar su resentimiento con la explotación y como parte de su búsqueda de soluciones políticas. Ángel Perelman señalaba, por ejemplo, que:

"La explotación capitalista y la lucha de clases las aprendí primero en esa fábrica del año 30 que leyéndola en los libros [...]. A los 14 años de edad y ya con cuatro de obrero, no pudo menos que interesarme la política. ¡Como para no interesarme! Había muchas manifestaciones realizadas por los desocupados. Algunos partidos de izquierda protestaban por la miseria reinante. Las asambleas sindicales [...] reunían a los trabajadores más militantes y decididos."⁶³

Otros datos aun sugieren un aumento de la actividad gremial y la asistencia a las reuniones sindicales a fines de 1930-40 y principios de la siguiente década, a medida que el desempleo decrecía, la industria se expandía y el movimiento obrero se recuperaba en alguna medida de la declinación experimentada en los años que siguieron al golpe militar de 1930. La afiliación gremial respondió a un clima nacional e internacional mejor y aumentó alrededor de un 10 por ciento entre 1941 y 1945.⁶⁴

"[...] abrir camino a las organizaciones sindicales era una empresa con enormes dificultades, en muchos aspectos por efecto de la represión patronal y policial, pero las que ofrecía escollos casi imposibles de superar consistía, muchas veces, en la indiferencia y el descreimiento de los mismos trabajadores, reacios a organizarse en defensa de sus propios intereses."⁶⁵

Algo del sentimiento de impotencia y resignación que, según lo sugerimos, caracterizó la respuesta de muchos trabajadores a la experiencia del período previo a 1943 puede

hallárselo en el testimonio personal de los no militantes. A continuación se reproducen, con el fin de transmitir en lo posible la escena de ese sentimiento, dos fragmentos testimoniales. El primero proviene de un obrero que trabajaba en puertos situados a lo largo del río Paraná, particularmente en el de Rosario:

Pregunta: ¿Cómo fueron los años 30 para usted?

Don Ramiro: Bueno, la vida era muy dura en aquel entonces [...] la gente trabajadora no valía nada y no fuimos respetados por los que controlaban todo [...]. Uno tenía que saber mantenerse en su lugar. Yo votaba por los radicales en los años 20 pero después del 30 todo fue mal. Los caudillos conservadores controlaban todo. Los días de los comicios yo iba al municipio para votar pero no conseguía entrar [...]. Resultaba que yo era conocido como alguien en quien no se podía confiar, de modo que no me permitían votar. Según la ley no podían hacerlo pero se burlaban de ella. En aquellos años, ¿qué importancia tenía la ley? Había un grupo de ellos, matones, pagados por el comité conservador [...] todo el mundo los conocía [...] y ellos cerraban el paso cuando uno quería entrar. Se podía ver a sus pistolas por debajo del saco.

Pregunta: ¿Quiere decir que le obligaba a desistir a votar con amenazas?

Respuesta: No. Nunca lo hacían abiertamente [...] por lo menos conmigo: no había por qué hacerlo [...] sabías que tendrías que pagar de alguna forma si te opusieras a ellos. Era un tipo de juego para ellos.

Pregunta: Pues, ¿qué hacía usted?

Respuesta: Y, bueno, ¿qué podías hacer? Nada. Volver a casa. Tal vez quejarme a los amigos de esos hijos de puta. Si uno armaba un escándalo te harían pagar de algún modo y no servía para nada. Vos no tenías ninguna importancia para ellos. Pero, después con Perón todo cambió. Volé por él.

Pregunta: ¿Cómo cambió?

Respuesta: Bueno, con Perón todos éramos machos.⁶⁶

El segundo fragmento fue aportado por un trabajador joven, de Buenos Aires, que entró en la fuerza laboral a fines de la década del 30:

Lautaro: Una cosa que recuerdo de los años 30 fue la manera en que la trataban a la gente. Sentías que no tenías ningún derecho a nada. Todo parecía ser un favor que te hacían a través de la Iglesia o alguna caridad o si ibas a pedir un favor al caudillo de comité él te ayudaba a conseguir remedios o entrar al hospital. Otra cosa que recuerdo de los años 30 es que siempre me sentía extraño cuando iba al centro de Buenos Aires [...] como si uno no estuviera en su ambiente, que era absurdo pero te sentías que ellos te miraban

*Declaración
9/10/45*

despectivamente, que no estabas bien vestido. La policía te trataba como animales también.)

Pregunta: ¿Los sindicatos y partidos políticos tuvieron importancia para usted en aquel entonces?

Respuesta: Bueno, normalmente yo votaba por los socialistas. Mi hermano se interesaba más que yo por ellos, aunque yo siempre pensaba que eran honestos. Perón nunca creía que serviría para algo. Lo mismo con los sindicatos. No teníamos un sindicato en los talleres donde trabajaba yo. Debía haber sido en los primeros años del 40, antes de Perón. Teníamos mucho de que quejarnos, pero aun así no creo que tomáramos en serio al sindicalismo. La vida era simplemente así, uno tenía que aguantar todo, su maldita arrogancia, como te trataban. Algunos de los activistas compañeros de mi hermano quisieron cambiar todo esto, pero eran excepciones. No había muchos obreros que quisieran ser héroes.⁶⁷

Experiencia privada y discurso público

El más profundo impacto social del peronismo debe ser considerado a la luz de esa experiencia de la clase trabajadora en el periodo anterior a 1943. En la crisis del orden tradicional inaugurada por el golpe militar de 1943 fue puesto en cuestión mucho más que la autoridad política e institucional de la élite conservadora. Hacia 1945, la crisis política había provocado, y además contenía en su propio seno, un cuestionamiento de todo un conjunto de supuestos concernientes a las relaciones sociales, las formas de deferencia y los acuerdos, en gran medida tácitos, acerca de cuál era "el orden natural de las cosas" y el "sentido de los límites" acerca de lo que se podía o no se podía discutir y expresar legítimamente. En este sentido, el poder del peronismo radicó, en definitiva, en su capacidad para dar expresión pública a lo que hasta entonces sólo había sido internalizado, vivido como experiencia privada. Así lo señala Pierre Bourdieu:

Las experiencias privadas pasan nada menos que por un cambio de estado cuando se reconocen a sí mismas en la *objetividad pública* de un discurso ya constituido, signo objetivo de su derecho a que se hable de ellas y a que se hable públicamente. "Las palabras", dice Sartre, "hacen estragos cuando encuentran un nombre para lo que hasta entonces ha vivido innominado".⁶⁸

No hay duda alguna de que éste es el contexto donde los fragmentos que se presentan en el apartado anterior adquirieron su significado. En particular, podemos apreciar la imagen de

silencio que pasa de uno a otro: "Tenés que quedarte callado, no hablar"; "un obstinado silencio", o la respuesta de don Raimundo cuando se le preguntó qué hacía frente al poder de los caciques políticos: "Nada. Volver a casa. Tal vez quejarme a los amigos". La capacidad del discurso peronista para articular esas experiencias no formuladas constituyó la base de su poder, auténticamente herético. En efecto, existían otros discursos heréticos —en el sentido de que ofrecían alternativas distintas de la ortodoxia instituida—, bajo forma de retórica socialista, o comunista, o radical. Sin embargo, según hemos visto, estas líneas no fueron capaces de adquirir una autoridad indiscutible como expresiones válidas de la experiencia de la clase trabajadora. Sobre esas otras fuerzas políticas el peronismo tuvo la enorme ventaja de ser un "discurso ya constituido", articulado desde una posición de poder estatal, lo que acrecentaba considerablemente la legitimidad que confería a las experiencias que expresaba.

El poder social herético que el peronismo expresaba se reflejó en su empleo del lenguaje. Términos que traducían las nociones de justicia social, equidad, decencia —cuya expresión había sido silenciada (o ridiculizada como en el tango)—, habían de ocupar ahora posiciones centrales en el nuevo lenguaje del poder. Sin embargo, más importante que esto fue la circunstancia de que términos que antes simbolizaban la humillación de la clase obrera y su explícita falta de status en una sociedad profundamente y consciente del status adquirieron ahora connotaciones y valores diametralmente opuestos. El ejemplo más famoso sin duda reside en las implicaciones asignadas a la palabra "descamisado". Este vocablo había sido utilizado inicialmente por los antiperonistas, antes del triunfo electoral de Perón en 1946, como calificativo de los trabajadores que lo apoyaban.⁶⁹ La explícita connotación de inferioridad social, y por tanto política y moral, se basaba en un criterio de valor social que tomaba uno de los signos más evidentes del status de la clase trabajadora —las ropas de trabajo— y lo presentaba como insignia evidente por sí misma de inferioridad. El peronismo adoptó el término e invirtió su significado simbólico, transformándolo en afirmación del valor de la clase trabajadora. Esa inversión fue magnificada mediante la adhesión del término "descamisados", en la retórica oficial, a la figura de Eva Perón, protectora titular de aquellos.⁷⁰

Más significativo aún tal vez sea el hecho de encontrar términos que eran de uso corriente, antes de 1943, para

mencionar en forma todavía más despectiva a la clase trabajadora, transformados e invertidos ahora en forma similar. En su uso general, "negro" designaba a los habitantes del interior del país y a menudo tenía evidentes connotaciones étnicas peyorativas. Despectivamente, la élite tradicional designaba "los negros radicales" a quienes respaldaban a Yrigoyen.⁷¹ Con la afluencia masiva de migrantes del interior a la industria de Buenos Aires en 1930-40, el término fue utilizado como sinónimo de trabajador manual, y "negrada" fue un equivalente genérico de proletariado. Las connotaciones son inconfundibles: una "negra" significa en lenguaje coloquial porteo una mujer de condición humilde, y "negrear" significa buscar a esas mujeres para fines sexuales. Según lo observa José Gobello en su *Diccionario lunfardo*, todas las variaciones de negro excepto una están cargadas de desprecio y falta de respeto por algo inferior.⁷² El uso de "negrada" como sinónimo del proletariado en los años 1930-40 poscía, pues, un fuerte simbolismo social donde se originó su posterior empleo por las fuerzas antiperonistas. Al promediar la década 1940-50, los adversarios de Perón empleaban con frecuencia expresiones burlescas y despectivas como "la negrada de Perón" y "los cabecitas negras". Su incorporación al lenguaje del peronismo, en cambio, les otorgó un nuevo status. El hecho de que en este discurso público "la negrada" encontrara expresión y afirmación significó que toda una gama de experiencias normalmente asociadas a ese término —y que por haber sido designadas así habían sido decretadas ilegítimas, indignas de preocupación, y en consecuencia condenadas a ser sufridas en silencio, internalizadas o expresadas oblicuamente en ciertas expresiones angustiadas de la cultura popular— podían ahora ser dichas en voz alta y entrar en el campo del debate público, la preocupación social y por lo tanto la acción política.

Algo de ese significado social herético se tornó patente en la vasta movilización de la clase trabajadora que se extendió desde el 17 de octubre de 1945 hasta el triunfo electoral peronista de febrero de 1946. Esa movilización demostró la capacidad de los trabajadores para actuar en defensa de lo que consideraban sus intereses. Pero además representó, de manera más difusa, un rechazo de las formas aceptadas de jerarquía social y los símbolos de autoridad. Esto fue particularmente notable durante la manifestación del 17 de octubre. Si bien la atención se centró en el objetivo esencial del acto —la figura de Perón y su liberación del confinamiento—, la movilización misma, y las formas que asumió, sugieren por sí solas un

significado social más amplio. Los observadores más sagaces de ese episodio han concordado en el tono dominante de irreverencia e irónico sentido del humor que caracterizó a los manifestantes. Félix Luna resumió esa atmósfera diciendo que parecía "de fiesta grande, de murga, de candombé".⁷³ La prensa comunista había despectivamente de los grupos con "aspecto de murga" que intervinieron en la manifestación.⁷⁴ El empleo del término "murga" resulta interesante, pues popularmente designa a los grupos que en carnaval se disfrazaban e iban de un lado a otro por la calle, cantando, bailando y tocando instrumentos. Así como esa conducta era tolerable dentro de los estrictos límites del carnaval y se manifestaba sobre todo en los barrios obreros, su ruptura de esos confines durante una manifestación de indiscutible contenido político representó una subversión simbólica de los códigos de conducta aceptados y asimismo un acto de deferencia con la clase trabajadora.

Un aspecto importante de esa subversión se relacionó con el sitio donde se expresaba tal conducta, es decir, con criterios tácticos de jerarquía espacial. Al desplazarse las multitudes irreverentes desde los suburbios obreros que bordeaban la Capital Federal, o al cruzar los puentes del Riachuelo desde Avellaneda y otros puntos situados al Sur, para concentrarse en la zona céntrica y la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, se violaron esos criterios. El comportamiento de los trabajadores al atravesar los suburbios más ricos agravó la blasfemia implícita en tal violación. Sus canciones fueron cada vez más insultantes para los adinerados, la "gente decente" de la sociedad porteña, a la cual ridiculizaban. Uno de los muchos estribillos dirigidos a los estupefactos espectadores que, desde sus balcones del Barrio Norte, observaban la aparición de la "Argentina invisible"⁷⁵ decía así: "Salte de la esquina oligarca loco, tu madre no te quiere y Perón tampoco".⁷⁶

El hecho de que la manifestación culminara en la Plaza de Mayo fue por sí solo significativo. Hasta 1945 esa plaza, situada frente a la Casa de Gobierno, había sido en gran medida un territorio reservado a la "gente decente", y los trabajadores que se aventuraban allí sin saco ni corbata fueron más de una vez alçados o incluso detenidos. Una fotografía ampliamente difundida que se tomó el 17 de octubre muestra a los obreros arremangados y sentados en los bordes de las fuentes de la plaza, con los pies sumergidos en el agua. El simbolismo implícito en esta imagen es fácil de apreciar si se tiene en cuenta el sentimiento de incomodidad que em-

bargaba al obrero Lautaro Ferlini cuando visitaba el sector céntrico en los años anteriores al peronismo.

Gran parte de ese espíritu de irreverencia y blasfemia, y de esa redistribución del espacio público, característicos del 17 de octubre y la campaña electoral siguiente, parecerían constituir una suerte de "antiteatro", basado en el ridículo y el insulto, contra la autoridad simbólica y las preclensiones de la elite argentina.⁷⁷ El resultado fue, por cierto, desfilanar un tanto la seguridad que la elite tenía de sí misma. También representó una recuperación del orgullo y la autoestima de la clase trabajadora, sintetizados en la expresiva frase de don Ramiro: "Bueno, con Perón todos eramos machos". Tal vez ante todo haya significado una afirmación de la existencia de la clase trabajadora y un punto final, puesto en forma desafiante, al silencio y el ocultamiento del agravio experimentado. Esta combinación de significados simbólicos es sagazmente captada en los recuerdos que Félix Luna escribe del 17 de octubre, del día en que él y sus compañeros de estudio, todos radicales antiperonistas, vieron desfilanar por la ciudad a las columnas de trabajadores:

"Bueno, ahí estaban. Como si hubieran querido mostrar todo su poder para que nadie dudara de que realmente existían. Ahí estaban por toda la ciudad, pululando en grupos que parecían el mismo grupo multiplicado por centenares. Los mirábamos desde la vereda con un sentimiento parecido a la compasión. ¿De dónde salían? ¿Entonces estaban? ¿Tantos? ¿Tan diferentes a nosotros? ¿Realmente venían a pie desde estos suburbios cuyos nombres componían una vaga geografía desconocida, una terra incognita por la que nunca habíamos andado? [...] Habíamos recorrido todos esos días los lugares donde se debatían preocupaciones como las nuestras. Nos habíamos movido en un mapa conocido, familiar: la facultad, la Recoleta en el entierro de Salnún Feijóo, la Plaza San Martín, la Casa Radical. Todo, hasta entonces, era coherente y lógico: todo apoyaba nuestras propias creencias. Pero ese día cuando empezaron a estallar las voces y a desfilanar las columnas de rostros anónimos color tierra sentíamos vacilar algo que hasta entonces había sido inconvencional."⁷⁸

Los límites de la heresia: ambivalencia del legado social peronista

Resultaría engañoso, empero, dejar en este nivel la caracterización del impacto social del peronismo. Una vez en el poder, el peronismo no contempló la ebullición y la esponta-

neidad mostrada por la clase trabajadora desde octubre de 1945 hasta febrero de 1946 con mirada tan favorable como la que tuvo en este lapso de lucha. Más aún, gran parte de los esfuerzos del Estado peronista desde 1946 hasta su deposición en 1955 pueden ser vistos como un intento por institucionalizar y controlar el desafío herético que había desencadenado en el período inicial y por absorber esa actitud desafiante en el seno de una nueva ortodoxia patrocinada por el Estado. Considerado bajo esta luz el peronismo fue en cierto sentido, para los trabajadores, un experimento social de desmovilización pasiva. En su retórica oficial puso cada vez más de relieve la movilización controlada y limitada de los trabajadores bajo la lucha del Estado. El propio Perón se refirió con frecuencia a su preocupación por los peligros de las "masas desorganizadas", y en la situación peronista ideal los sindicatos debían actuar en gran medida como instrumentos del Estado para movilizar y controlar a los trabajadores. Este aspecto cooptativo del experimento peronista se reflejó en la consigna fundamental dirigida por el Estado a los trabajadores en la época de Perón para exhortarlos a conducirse pacíficamente: "De casa al trabajo y del trabajo a casa".

La ideología peronista formal relegaba esa preocupación. Predicaba la necesidad de armonizar los intereses del capital y el trabajo dentro de la estructura de un Estado benévolo, en nombre de la nación y de su desarrollo económico. En su discurso del Primero de Mayo de 1944, Perón había dicho:

"Buscamos suprimir la lucha de clases suplantándola por un acuerdo justo entre obreros y patronos al amparo de la justicia que emana del Estado."⁷⁹

La ideología peronista distinguía entre el capital explotador e inhumano y el capital progresista, socialmente responsable, comprometido con el desarrollo de la economía nacional. De este los trabajadores no tenían nada que temer.

"El capital internacional es instrumento de explotación, y el capital patrimonial lo es de bienestar; el primero representa por lo tanto la miseria mientras que el segundo la prosperidad."⁸⁰

Como conclusión lógica de esa premisa, la ideología peronista también subrayaba que los intereses de la nación y su desarrollo económico debían identificarse con los de los trabajadores y sus sindicatos. Se entendía que los trabajadores compartían con el capital nacional, no explotador, un

interés común en la defensa del desarrollo nacional contra las depredaciones del capital internacional y su aliado interno, la oligarquía, que querían impedir el desarrollo independiente de la Argentina.

En el contexto de estas consideraciones sobre el significado social del peronismo para los trabajadores y el éxito que alcanzó al canalizar y absorber lo que hemos llamado el potencial social herético de esa clase, es necesario tomar en cuenta varios factores. El Estado peronista tuvo sin duda alguna considerable éxito en el control de la clase trabajadora, tanto social como políticamente, y si bien el conflicto de clases no fue en modo alguno abolido, así como no se cumplió el idilio de armonía social retratado por la propaganda oficial, las relaciones entre capital y trabajo por cierto mejoraron. La tenida venganza del sans-culotte porteño, aparentemente presagiada por los tumultos sociales y políticos de 1945-46, no se materializó. Varias razones pueden proponerse para explicar ese éxito. Una fue la capacidad de la clase trabajadora para satisfacer sus aspiraciones materiales dentro de los parámetros ofrecidos por el Estado; otra, el prestigio personal de Perón. También es preciso tomar en consideración la habilidad del Estado y su aparato cultural, político e ideológico para promover e inculcar nociones de armonía e intereses comunes de las clases. Sin embargo, debemos cuidarnos de analizar esto exclusivamente en función de la manipulación y el control social. La eficacia de la ideología oficial dependió en forma decisiva de su capacidad para asociarse con las percepciones y la experiencia de la clase trabajadora. La retórica peronista, como cualquier otra, derivó su influjo, en definitiva, de su aptitud para decirle a su público lo que éste deseaba escuchar.

Como ejemplo de lo que deseamos significar puede tomarse la forma en que la retórica peronista trató el tema del Primero de Mayo, el Día de los Trabajadores. Un organismo oficial publicó en 1952 un documento, titulado *Emancipation of the workers*, típico de los esfuerzos del gobierno en aquella dirección. Su parte fundamental consiste en una colección de fotografías, a cada una de las cuales corresponde un texto escrito. Las primeras fotos muestran a trabajadores reunidos para celebrar el Primero de Mayo, que enarbolan banderas rojas y las banderas rojas y negras de los anarquistas. En las fotos se ven jinetes de la policía montada. El comentario dice: "El Día del Trabajo, tal como era celebrado antiguamente en este país". "para tomar parte en las celebraciones era necesario tener mucho coraje. La policía, poderosamente armada y

lista para cualquier eventualidad, impidió que los trabajadores proclamaran sus justas aspiraciones". La tercera foto refleja "un triste testimonio de los trágicos sucesos del Día del Trabajo de treinta años atrás", y muestra a trabajadores muertos o heridos por la policía. Las tres fotos siguientes están en abierto contraste y exponen la moraleja del caso. Muestran una gran manifestación reunida en Plaza de Mayo con motivo del Día del Trabajo; se ven muchas insignias sindicales pero no banderas rojas. Los textos dicen: "En la nueva Argentina creada por el general Perón, el 1° de Mayo es alegremente celebrado por un pueblo unido", y: "el Día del Trabajo es siempre un acontecimiento popular de gran importancia en la Argentina". La foto presenta muchedumbres obreras en marcha hacia la Plaza de Mayo para escuchar un discurso de Perón.⁸¹

Este documento es sin duda alguna ilustrativo de la capacidad del peronismo para apropiarse de los símbolos de las tradiciones de la clase obrera anteriores y rivales, que los peronistas absorbieron y neutralizaron. Más importante para estas consideraciones es la manera en que esa apropiación involucró alteración de significados. Es imposible no advertir el contraste simbólico propuesto por el documento. Lejos de ser la afirmación de una identidad forjada en el conflicto de clases, un símbolo de lucha y firmeza de posición en nombre de un principio, el Primero de Mayo antes de Perón representaba la tristeza, el dolor y la impotencia revelados por los rostros vendados que miran al lector desde el documento. Por otro lado, el Día del Trabajo en la era de Perón significaba rostros sonrientes de obreros en marcha hacia la Casa de Gobierno, una atmósfera de tranquilidad y armonía, ausencia de pánico, de policías y de lesiones. Por supuesto, se trataba de propaganda gubernamental, pero lo significativo reside en que su eficacia dependía, por lo menos en parte, de su capacidad para dirigirse a la receptividad de ese mensaje por parte de los trabajadores.

Entre éstos existía esa receptividad. Una vez más, sostenemos que arraigaba en la experiencia de los trabajadores en la era previa a 1943. Las lecciones dejadas por esa experiencia constituyeron un tema importante de la cultura popular en los años peronistas. Goldar resume del siguiente modo la manera en que la narrativa popular abordó ese tema:

"El día de los trabajadores durante la década infame será de lucha, represión, consignas internacionales, rebellón impotente, tu

hambre, el odio de esta gente, la miseria de ustedes, la espera, la ropa sucia y rota, el pellejo fatigado, las voces roncas. Luchando para que la vida no fuera otra cosa que cansancio y sueño viejo."⁸²

En contraste con esa imagen de conflicto y dolor asociado al Primero de Mayo antes de Perón, la imagen que se asoció después de 1946 fue la de una tranquilidad en cuyo marco aquel día era la fiesta del trabajo y las manifestaciones que terminaban con efusión de sangre se desvanecían en el recuerdo del pasado.

Testimonios personales dejan constancia de actitudes similares frente a los símbolos de las luchas de clase de otro tiempo. Un obrero, activista de largo tiempo atrás y de papel prominente en la fundación del Partido Laborista, al explicar por qué se interesó en la política en 1945, dijo:

"Decidí también colaborar en la acción política, para que la clase trabajadora, mi clase, obtuviera el derecho de vivir mejor sin el peligro de tener que afrontar tragedias como la semana de enero de 1919, la masacre de Patagonia año 1921, Gualeguaychú, Berisso, Avellaneda, Mendoza y muchos otros casos que sería largo enumerar."⁸³

Debemos cuidarnos de interpretar ese testimonio sólo en términos de incorporación de la clase trabajadora. Fragmentos tales reflejan por cierto claramente un anhelo de progreso social sin el dolor de la lucha de clases, deseo de estabilidad y rutina en comparación con la arbitrariedad y la impotencia características del período anterior. Sin embargo ese anhelo podía coexistir, según veremos, con un reconocimiento de que en realidad no había armonía. Más aún, la roca sobre la cual esas actitudes se sustentaban —lo que les confería credibilidad tanto a ellas como a la retórica oficial que las reflejaba— era la sensación de haber recobrado la dignidad y el respeto propio. Una y otra vez ese factor parecía ponerse en primer plano como significado social irreductible y mínimo de la experiencia peronista a juicio de los trabajadores. Enrique Dickmann, cumplidos los 80 años de edad y con más de 50 años como militante y dirigente del Partido Socialista, intentó por fin, no sin renuencia, reconocer lo que había significado el peronismo para la clase trabajadora:

"Yo he conversado con muchos obreros en la Capital y en el interior y cada uno dice: 'Ahora soy algo, soy alguien'. Y yo pregunté a un obrero su opinión y en su ingenua simplicidad me dijo esto: 'Para que usted comprenda el cambio producido le dire que cuando

con el antiguo Departamento de Trabajo teníamos alguna cuestión que discutir el patrón estaba sentado y yo, obrero, parado; ahora, dice, yo obrero estoy sentado y el patrón está parado."⁸⁴

Al resumir nuestro análisis de la naturaleza de la experiencia peronista para los trabajadores argentinos en el período 1943-55 debemos empezar por señalar lo obvio: el peronismo marcó una coyuntura decisiva en la aparición y formación de la moderna clase trabajadora argentina. Su existencia y su sentido de identidad como fuerza nacional coherente, tanto en lo social como en lo político, se remonta a la era de Perón. El legado que dejó ese período no podía ser fácil de hacer a un lado una vez derrocado Perón. Sin embargo, el legado no era inequívoco. Su impacto sobre los trabajadores fue tanto social como políticamente complejo. Hemos sugerido, por ejemplo, que la atracción que ejerció sobre los trabajadores no puede ser reducida simplemente a un instrumentalismo básico de una clase. Hemos sugerido que prestar atención adecuada a la atracción específicamente política del peronismo permite descubrir un discurso que, no sin poner énfasis en la corrección de las desigualdades sociales y económicas, la asociaba a cierta visión de la ciudadanía y el papel de la clase trabajadora en la sociedad. Esa visión fue expresada en una retórica diferente y un estilo político particularmente atractivo para los trabajadores argentinos.

De este análisis se pueden extraer varias consecuencias. En primer término, el apoyo que los trabajadores dieron a Perón no se limitó exclusivamente en su experiencia de clase en las fábricas. Fue también una adhesión de índole política generada por una forma particular de movilización y discurso políticos. Resulta claro que las dos bases de la movilización no deben ser contrapuestas; ciertamente no deben serlo bajo la forma de la clásica dicotomía entre clases trabajadoras "vieja" y "nueva", "tradicional" y "moderna". Una retórica política exige dirigirse a necesidades de clase sentidas para tener éxito en la movilización política de los obreros, pero eso no agota la gama de sus atractivos. Según lo han observado Silvia Sigal y Juan Carlos Torre, en América Latina ha sido con frecuencia la plaza pública, antes que la fábrica, el principal punto de constitución de la clase trabajadora como fuerza política.⁸⁵

Esto plantea una cuestión relacionada con lo anterior. La clase trabajadora no llegó al peronismo ya plenamente formada y se limitó a adoptar esa causa y su retórica como el más

conveniente de los vehículos disponibles para satisfacer sus necesidades materiales. En un sentido importante, la clase trabajadora misma fue constituida por Perón: su propia identificación como fuerza social y política dentro de la sociedad nacional fue, al menos en parte, construida por el discurso político peronista, que ofreció a los trabajadores soluciones viables para sus problemas y una visión creíble de la sociedad argentina y el papel que les correspondía en ella. Este fue evidentemente un proceso complejo, que involucró para algunos trabajadores una reconstitución de su identidad y su lealtad política cuando abandonaban identidades y lealtades establecidas. La construcción de la clase trabajadora no implicó necesariamente la manipulación y la pasividad asociadas a la poderosa imagen de las "masas disponibles" formulada por Gino Germani, contra la cual se ha dirigido gran parte de lo escrito sobre el peronismo.⁶⁶ Había en juego indiscutiblemente un proceso de interacción en dos direcciones, y si bien la clase trabajadora fue constituida en parte por el peronismo, éste fue a su vez en parte creación de la clase trabajadora.

También desde el punto de vista social el legado que la experiencia peronista dejó a la clase trabajadora fue profundamente ambivalente. Es ciertamente verdad, por ejemplo, que la retórica peronista predicó y la política oficial procuró cada vez más la identificación de la clase trabajadora con el Estado y su incorporación a él, lo cual suponía, según lo sugerimos, la pasividad de dicha clase. La visión peronista oficial del papel de la clase trabajadora tendía a ser la de un idilio profundamente saporífero donde los obreros se trasladaban satisfechos de un armonioso ámbito de trabajo al hotel de veraneo provisto por el sindicato y de allí a los organismos estatales que resolverían sus problemas personales y sociales. Más allá del Estado, el propio Perón sería la garantía última de esa visión.

Análogamente, el movimiento sindical emergió de este período imbuído de un profundo espíritu reformista. Este se fundaba en la convicción de que era preciso alcanzar una conciliación con los empleadores y satisfacer las necesidades de los afiliados mediante el establecimiento de una relación íntima con el Estado. Esa relación suponía un compromiso, por parte de los dirigentes sindicales, con el concepto de controlar y limitar la actividad de la clase trabajadora dentro de los límites establecidos por el Estado y servir como conducto político hacia esa misma clase. En este sentido, puede

considerarse que el peronismo desempeñó un papel profláctico al adelantarse al surgimiento de un gremialismo activo y autónomo.

Sin embargo, la era peronista también logró a la clase trabajadora un sentimiento muy profundo de solidez e importancia potencial nacional. Por añadidura, la legislación laboral y de bienestar social representó en su conjunto una realización en gran escala en lo que concernía a derechos y reconocimiento de la clase trabajadora; una realización que reflejaba movilización de los trabajadores y conciencia de clase y no simplemente aceptación pasiva de la largueza estatal. El desarrollo de un movimiento sindical centralizado y masivo —cualquiera que fuese la medida en que contara con el apoyo y la supervisión del Estado— confirmó inevitablemente la existencia de los trabajadores como fuerza social dentro del capitalismo. Esto significaba que en el nivel del movimiento gremial, y por más que una cúpula cada vez más burocratizada actuara como vocero del Estado, los intereses de clase conflictivos se manifestaban realmente y los intereses de la clase obrera eran en verdad articulados. El punto hasta el cual podía confiarse en que la integración de los sindicatos al Estado peronista sería capaz de asegurar la aceptación de políticas inconvenientes para los trabajadores siempre tenía un límite. En general, el sindicato cumplía con notable fidelidad su función para el Estado, pero en cambio éste, lo cual significaba fundamentalmente el propio Perón, debía ceder al menos la base mínima para un trueque. La relación no era de decreto, sino más bien de trato que se debe negociar.

Análogamente, el peso de una filosofía formal de conciliación y armonía de las clases, una filosofía que ponía de relieve valores decisivos para la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, era considerable. Por otro lado, la eficacia de tal ideología estaba limitada, en la práctica diaria, por el desarrollo de una cultura que afirmaba los derechos del trabajador dentro de la sociedad en general y el sitio de trabajo en particular.

El peronismo aspiraba a lograr una alternativa hegemónica viable para el capitalismo argentino, gucra promover un desarrollo económico basado en la integración social y política de la clase trabajadora. En este sentido, son acertadas las comparaciones del peronismo con el *New Deal* de Roosevelt y con el desarrollo del capitalismo bajo un Estado benefactor en Europa occidental después de 1945: en distintos grados, todos esos sistemas proclamaron los "derechos civiles econó-

micos" de la clase trabajadora, a la vez que confirmaban, y ciertamente fortalecían, la continua existencia de las relaciones de producción capitalistas. Sin embargo, a la vez el peronismo se definió a sí mismo en un sentido importante, y también fue definido así por su electorado obrero, como un movimiento de oposición política y social, como una negación del poder, los símbolos y los valores de la élite dominante. En un sentido fundamental, siguió siendo una voz potencialmente herética, que daba expresión a las esperanzas de los oprimidos tanto dentro como fuera de la fábrica, como reclamación de dignidad social y de igualdad.

Las tensiones resultantes de ese legado ambiguo fueron considerables. En último término podría decirse que la principal de ellas se centró en el conflicto entre el significado del peronismo como movimiento social y sus necesidades funcionales como forma específica del poder estatal. En relación con este punto, hablar del peronismo como movimiento monolítico más bien oscurece que esclarece. Para aquellos que aspiraban a posiciones de poder en la burocracia administrativa y la maquinaria política, el peronismo estaba encarnado en un conjunto de políticas e instituciones formales. Para los empleadores que habían apoyado a Perón, se trataba de una jugada riesgosa: un mercado interno expandido, incentivos económicos brindados por el Estado y una garantía contra la toma de los gremios por la izquierda, en cambio de lo cual debían aceptar una clase obrera de poder institucional mucho más grande y consiguiente de su propio peso. Para algunos sectores de la clase media, el peronismo tal vez representara mayores oportunidades de empleo en el sector estatal, ampliado. Para la masa obrera que respaldaba a Perón, las políticas sociales formales y los beneficios económicos eran importantes, pero no agotaban el significado del peronismo. En un sentido más duradero, acaso este significara para ellas la visión de una sociedad más digna en que se les reconocía un papel vital, visión expresada en un lenguaje que eran capaces de comprender. También suponía una cultura política de oposición, de rechazo de todo cuanto había existido antes en lo político, lo social y lo económico, y un sentimiento de blasfemia contra las normas de la élite tradicional y la estirpe en que ésta se tenía a sí misma.

A todo eso, para quienes controlaban el aparato político y social del peronismo esa cultura de oposición era un peso muerto, pues indicaba la incapacidad del peronismo para ofrecerse como opción hegemónica viable para el capitalismo

argentino. Reconocían el potencial de movilización inherente a la adhesión de la clase obrera al peronismo y lo utilizaban en la mesa de regateo donde se medían con otros pretendientes al poder político, lo cual equivalía a una suerte de táctica *après moi le déluge*. Finalmente, empero, debieron reconocer que era como cabalgar un tigre. Sin duda alguna, las fuerzas económicas y sociales que prevalecían en la sociedad argentina, que inicialmente habían debido tolerar el peronismo, reconocieron a principios de la década 1950-60 el peligro inherente a aquella ambivalencia. Pero desde el punto de vista del peronismo en cuanto movimiento social, ese elemento de oposición representó una enorme ventaja, puesto que le confirió una base dinámica que sobreviviría largo tiempo después de que condiciones económicas y sociales particularmente favorables se hubieran desvanecido y que ni siquiera la creciente escasez de diez años de servilismo y corrupción pudieron socavar. En ese substrato se nutrió la actitud de los militantes de base que ofrecieron resistencia a los regímenes posteriores a 1955 y tuvo fundamento la reafirmación del peronismo como fuerza dominante en el movimiento obrero argentino.

NOTAS

¹ Los antecedentes militares del golpe de 1943 se encuentran en Robert Polash: *The Arm and Politics in Argentina, 1928-1945*, *Yrigoyen to Peron*, Stanford, 1969 (hay trad. cast.). Un análisis general de la era 1943-55 hay en Peter Waldmann: *El peronismo, 1943-55*, Buenos Aires, 1981. La evolución de los hechos en el campo laboral está en Samuel L. Baily: *Labor, Nationalism and Politics in Argentina*, New Brunswick, 1967 (hay traducción, Hispanérica) y en Hugo del Campo: *Sindicalismo y peronismo*, Buenos Aires, 1983.

² Los intereses económicos de la élite rural fueron protegidos por el tratado Roca-Runciman de 1933, que garantizó el continuo acceso de carne argentina a los mercados británicos a cambio de concesiones importantes en favor de las importaciones británicas por la Argentina. En definitiva ese tratado aseguró el mantenimiento de la Argentina en la posición que tradicionalmente ocupaba en la esfera británica de la economía internacional y como tal fue denunciado por los nacionalistas y otras fuerzas. Véase Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero: "Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina, 1930-40", *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, vol. 1, Buenos Aires, 1972.

³ Cifras calculadas sobre la base de datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en *El desarrollo económico*

en la Argentina, Buenos Aires, 1959, citado en Miguel Ángel García: *Peronismo: desarrollo económico y lucha de clases*, Llobrigat, 1979, pág. 54.

⁴ Esto culminó en 1943, cuando a las exportaciones manufacturadas no tradicionales les correspondió alrededor del 19,4 por ciento del total de exportaciones. Se ha estimado que en los años de la guerra esta evolución encabezada por la industria determinó la creación de unos 180.000 puestos de trabajo. Véase Juan José Llach: "El Plan Pincido de 1940: su significación histórica y los orígenes de la economía política del peronismo", *Desarrollo Económico*, vol. 23, n° 92, 1984, págs. 515-58.

⁵ García: *Peronismo*, pág. 62.

⁶ Gino Germani: *Política y sociedad en una época de transición*.

Buenos Aires, 1962, pág. 307.

⁷ Rubén Rotondaro: *Realidad y cambio en el sindicalismo*, Buenos

Aires, 1972, pág. 128.

⁸ Alejandro Bunge: *Una nueva Argentina*, Buenos Aires, 1940, pág. 372.

⁹ Un análisis detallado de las divisiones internas dentro del gremialismo organizado correspondiente a este período hay en Hirschel Matsushita: *Movimiento obrero argentino, 1930-45: sus proyecciones en los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, 1983, y en David Tamarin: *The Argentine Labor Movement, 1930-40: a study in the origins of Peronism*, Albuquerque, 1985.

¹⁰ Véase Miguel Murnis y Juan Carlos Portantiero: "El movimiento obrero en los orígenes del peronismo", *Estudios*, pág. 80.

¹¹ Los antecedentes personales de Perón y sus ideas pueden encontrarse en Joseph Page: *Perón: a biography*, Nueva York, 1983.

Un análisis de la política obrera de Perón y el impacto que tuvo en 1943-45 hay en Walter Little: "La organización obrera y el Estado peronista", *Desarrollo Económico*, vol. 19, n° 75, 1979, págs. 331-76.

¹² Los antecedentes de los episodios de octubre están en Félix Luna: *El 45, crónica de un año decisivo*, Buenos Aires, 1969.

¹³ Véase Louise Doyon: "El crecimiento sindical bajo el peronismo", *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 57, 1975, págs. 151-61.

¹⁴ Véase Louise Doyon: "Conflictos obreros durante el régimen peronista, 1946-55", *Desarrollo Económico*, vol. 17, n° 67, 1977, págs. 437-73.

¹⁵ Véase Juan Carlos Torre: "La caída de Luis Gay", *Todo es Historia*, vol. 8, n° 89, 1974. Uno de los últimos símbolos de la autonomía laborista fue Cipriano Reyes, el líder de los obreros de la carne, quien permaneció en el Congreso como diputado laborista hasta 1948, año en que su mandato expiró. Entonces Perón lo hizo encarcelar y Reyes permaneció cautivo hasta el fin del régimen. Acerca del laborismo véase Cipriano Reyes: *¿Qué es el laborismo?*, Buenos Aires, 1946.

¹⁶ Véase Rotondaro: *Realidad y cambio*, cap. 4. La Fundación Eva Perón, creada por ley del Congreso, era totalmente controlada

por Eva Perón. Actuaba como poderosa maquinaria de dispensar favores y distribuir recursos de bienestar social.

¹⁷ CEPAL; *El desarrollo económico*, págs. 122 y sigs.

¹⁸ Véase en Jorge Abelardo Ramos: *Historia del stalinismo en la Argentina*, Buenos Aires, 1974, un relato de tono altamente crítico. Una versión oficial comunista hay en *Esbozo de la historia del Partido Comunista argentino*, Buenos Aires, 1947. Véase también Rubens Iscaro: *Historia del movimiento sindical*, vol. 1. Bs. As., 1974.

¹⁹ Ejemplos de este enfoque hay en Germani: *Política y Sociedad*; Rodolfo Puiggrós: *El peronismo: sus causas*, Buenos Aires, 1965, y Alberto Belloni: *Del anarquismo al peronismo*, Buenos Aires, 1960. Un examen crítico de algunos de los supuestos básicos hay en Walter Little: "The popular origins of Peronism", en David Rock, comp.: *Argentina in the Twentieth Century*, Pittsburgh, 1975.

²⁰ Un estudio sobre esa bibliografía revisionista se encuentra en Ian Roxborough: "Unity and diversity in Latin American history", *Journal of Latin American Studies*, vol. 16, parte 1, 1984, págs. 1-26. Las interpretaciones revisionistas no fueron aceptadas sin discusión. En su último aporte al debate sobre los orígenes del peronismo, Gino Germani refirma sus argumentos básicos acerca del peso de los nuevos migrantes en la formación del peronismo y la importancia de las pautas culturales psicosociales tradicionales. Véase al respecto "El rol de los obreros y los migrantes internos en los orígenes del peronismo", *Desarrollo Económico*, vol. 13, n° 51, 1973, págs. 435-48. Comentarios críticos sobre este punto hay en Tulio Halperin Donghi: "Algunas observaciones sobre Germani, el surgimiento del peronismo y los migrantes internos", *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 56, 1975, págs. 765-81.

²¹ Gareth Stedman Jones: "Rethinking Chartism", *Languages of Class: studies in English working class history*, Cambridge, 1984, pág. 97.

²² Acerca del Partido Radical véase David Rock, *Politics in Argentina, 1890-1930: the rise and fall of radicalism*, Cambridge, 1975 (hay trad. cast.).

²³ El reconocimiento por Perón de la importancia de la herencia yrigoyenista está en Félix Luna: *El 45: crónica de un año decisivo*, Buenos Aires, 1969, pág. 205 y passim.

²⁴ El término fue acuñado por el historiador nacionalista José Luis Torre, y llegó a ser ampliamente utilizado en la bibliografía nacionalista y opositora de la época.

²⁵ Una historia política de la década 1930-40 hay en Alberto Ciria: *Parties and Power in Modern Argentina, 1930-46*, Albany, 1969 (hay trad. cast.). Ejemplos de los mecanismos específicos del fraude pueden verse en Félix Luna: *Albear*, Buenos Aires, 1958.

²⁶ Véase Norberto Folino: *Darceló, Ruggierito y el populismo oligárquico*, Buenos Aires, 1966.

²⁷ Un relato de ese proceso de corrupción es expuesto en Luna: *Albear*, págs. 196-234.

- ²⁸ *Ibid.*, pág. 232.
- ²⁹ El Laborista, 24 de enero de 1946, citado en Dario Cantón, *Elecciones y partidos políticos en la Argentina*, Bs. As., 1972, pág. 227.
- ³⁰ El tema de las distintas categorías de derechos asociados con un concepto evolutivo de ciudadanía es analizado por T. H. Marshall: *Citizenship and Social Class*, Londres, 1947. Marshall distingue entre derechos civiles y políticos asociados con la democracia formal y la gradual ampliación de este concepto de ciudadanía hasta incluir en él los "derechos sociales". Un bosquejo y una crítica de ese concepto hay en Anthony Giddens: "Class divisions, class conflict and citizenship rights", *Profiles and Critiques in Social Theory*, Berkeley, 1982. Un intento de elaborar esos conceptos en el caso de los países en desarrollo hay en Gino Germani, "Clases populares y democracia representativa en América Latina", vol. 2, n° 2, 1962, págs. 23-43.
- ³¹ El comentario del político conservador Marcelo Sánchez Sorondo sobre los discursos de Alvear podría extenderse con razón a los pronunciados por los políticos de la Unión Democrática: "Sus discursos parecían arrancados de una antología o de lugares comunes de monarcas", citado en Cúria, *Parties and Power*, pág. 128. Véase también Luna: El 45, págs. 108 y sigs., un examen de la retórica del antiperonismo en 1945-46.
- ³² Luna: El 45, pág. 206.
- ³³ Citado en Carlos Fayt: *La naturaleza del peronismo*, Buenos Aires, 1967, pág. 143.
- ³⁴ Citado en Luna: El 45, pág. 192.
- ³⁵ Véase *Primera Plana*: "Historia del peronismo", 31 de agosto de 1965.
- ³⁶ Julio Mañud: *Sociología del peronismo*, Buenos Aires, 1972, pág. 107.
- ³⁷ Véase lo dicho por Rock, *Politics in Argentina*, pág. 59: "Como lo ilustran las actividades de los comités, los radicales confiaban mucho en las medidas paternalistas. También en este caso, la principal ventaja residía en que el método podía servir para desintegrar los lazos que separaban al grupo de interés porque atomizaba al electorado e individualizaba al volante".
- ³⁸ Los principales discursos que pronunció Perón en esta era fueron reunidos y publicados en Juan D. Perón: *El pueblo quiere saber de qué se trata*, Buenos Aires, 1957.
- ³⁹ Guila Grin Debert, en *Ideología e populismo*, San Pablo, 1979, presenta un interesante análisis de los roles de los individuos, las clases y el Estado en diferentes formas de discurso populista. Su análisis de la retórica populista quinquiescencial de un líder populista como Adhemar de Barros permite establecer un instructivo contraste con el discurso político de Perón.
- ⁴⁰ El principal grupo que influyó sobre el peronismo fue la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), constituida principalmente por intelectuales radicales disidentes. Si bien su influencia política fue limitada, el status de algunos intelectuales que militaban en ella, como Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche,

- Luis Dellepiane y otros, fue considerable. "Cipayo" significaba literalmente soldado nativo enrolado en el ejército británico en la India e implicaba instrumento servil de una potencia colonial. Que la referencia fuera tomada directamente de la historia colonial británica denotaba a las claras que la Argentina, gobernada por su elite tradicional estaba al servicio de los intereses británicos no menos que la India colonial.
- ⁴¹ Véanse en Liach: "El Plan Pinedo de 1940", diferentes respuestas políticas al problema de la industrialización.
- ⁴² Militades Peña: *El peronismo, selección de documentos para la historia*, Buenos Aires, 1973, pág. 10.
- ⁴³ Steedman Jones: *Languages of Class*, pág. 96.
- ⁴⁴ Véase, por ejemplo, Juan D. Perón: *Doctrina peronista*, Buenos Aires, 1973, págs. 51-83.
- ⁴⁵ Luis Franco: *Biografía patria*, Buenos Aires, 1958, pág. 173.
- ⁴⁶ Eduardo Colom: *17 de octubre, la revolución de los descamisados*, Buenos Aires, 1946, págs. 106-7.
- ⁴⁷ Un estudio de temas como el tango hay en Judith Evans: "Tango and popular culture in Buenos Aires", trabajo sin publicación presentado ante la conferencia de la American Historical Association, Washington, 1958. Un análisis del subtexto del discurso peronista, tal como lo expresa el discurso pronunciado por Perón el 17 de octubre, se encuentra en Enillo de Ipoia: "Desde estos mismos balcones", *Ideología y discurso populista*, Buenos Aires, 1983.
- ⁴⁸ Colom: *17 de octubre*, pág. 107.
- ⁴⁹ Del diario socialista *La Vanguardia*, citado en Ángel Perelman: *Como hicimos el 17 de octubre*, Buenos Aires, 1961, pág. 78.
- ⁵⁰ Véase Anson Rabinach: "Bloch's Theory of fascism", *New German Critique*, primavera de 1977.
- ⁵¹ Pierre Bourdieu: *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, 1977, pág. 178.
- ⁵² Citado en Manuel Gálvez: *En el mundo de los seres reales*, Buenos Aires, 1955, pág. 79.
- ⁵³ Ernesto Gollari: "La literatura peronista", en Gonzalo Cárdenas y otros: *El peronismo*, Buenos Aires, 1969, pág. 151.
- ⁵⁴ Así, 25 de octubre de 1970.
- ⁵⁵ Perelman: *Como hicimos el 17 de octubre*, pág. 12.
- ⁵⁶ Mañud: *Sociología del peronismo*, pág. 107.
- ⁵⁷ Véanse por ejemplo los clásicos tangos de Discépolo "Qué vachaché" y "Yira, yira". Temas similares pueden encontrarse en otras expresiones de la cultura popular de las décadas 1920-30 y siguientes, como el teatro del grotesco. Véanse Noemí Ulla: *Tango, rebelión y nostalgia*, Buenos Aires, 1967; Norberto Galasso: *Discépolo y su época*, Buenos Aires, 1967; Gustavo Sosa Pujato: "Popular culture", en Ronald Dockett y Mark Falcoff: *Prologue to Peron: Argentina in depression and war*, Berkeley, 1975.
- ⁵⁸ Del tango de Discépolo "Qué vachaché". La letra figura en Osvaldo Pellicieri: *Enrique Santos Discépolo: obra poética*, Buenos Aires, 1976, pág. 80.

⁵⁰ Véase Julio Mafud: *La vida obrera en la Argentina*, Buenos Aires, 1976, pág. 241.

⁵¹ La frase es de Osvaldo Pelletieri, en *Discépolo*, pág. 63.

⁵² Jacinto Cimazo y José Grunfeld: *Luis Danussi en el movimiento social y obrero argentino*, Buenos Aires, 1976, pág. 93.

⁵³ *Ibid.*, pág. 86.

⁵⁴ Perelman: *Cómo hicimos el 17 de octubre*, pág. 12.

⁵⁵ Véase del Campo: *Sindicalismo y peronismo*. También ofrece interés Ricardo Caudío y Jorge Pilone: *Estado y relaciones obrero-patronales en los orígenes de la negociación colectiva en Argentina*, CEDES, Estudios Sociales, n.º 5, Buenos Aires, 1976.

⁵⁶ Cimazo y Grunfeld: *Luis Danussi*, pág. 103. Véase también "Tamarin: *Argentine Labor Movement*", en especial el capítulo 7. Tamarin subraya la importancia de la actividad de organización de los comunistas, que penetró más allá de los límites de los sectores tradicionalmente organizados de la clase trabajadora, si bien señala que el aumento de la afiliación sindical a fines de 1930-40 y comienzos de la década siguiente apenas si logró mantener el ritmo del aumento de la fuerza laboral o consiguió penetrar en las zonas de mayor expansión industrial.

⁵⁷ Entrevista con Ramiro González, Rosario, noviembre de 1976.

⁵⁸ Entrevista con Lautaro Ferlini, Buenos Aires, noviembre/diciembre de 1976.

⁵⁹ Bourdieu, *Outline*, pág. 170.

⁶⁰ De acuerdo con Félix Luna, esta palabra fue empleada por primera vez por los socialistas en su diario, *La Vanguardia*, para mencionar a los partidarios de Perón. En Luna: *El 45*.

⁶¹ Véase Julie M. Taylor: *Eva Peron: the myths of a woman*, Chicago, 1979. La biografía más completa de Evita es la de Nicholas Fraser y Marysa Navarro: *Eva Perón*, Nueva York, 1981.

⁶² Lo señala Dario Cantón en Fayt: *La naturaleza del peronismo*, pág. 343.

⁶³ José Gobelio: *Diccionario lunfardo y otros términos antiguos y modernos usados en Buenos Aires*, Buenos Aires, 1975. La excepción consistía en el empleo de "negra" o "negro" como término de afecto, usado por los pobres, entre hombre y mujer.

⁶⁴ Luna: *El 45*, pág. 350.

⁶⁵ Citado en Perelman: *Cómo hicimos el 17 de octubre*, pág. 78.

⁶⁶ La frase es de Leopoldo Marechal: "Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente sin conocer ni amar sus millones de caras concretas y que no bien las conocieron les dieron la espalda". Véase Elbia Rosbaco Marechal: *Mi vida con Leopoldo Marechal*, Buenos Aires, 1973, pág. 91.

⁶⁷ Luna: *El 45*, pág. 350.

⁶⁸ Acerca del concepto de contrateatro véase E. P. Thompson: "Eighteenth-century English society", *Social History*, mayo de 1978.

⁶⁹ Luna: *El 45*, pág. 397.

⁷⁰ Citado en Mónica Peralta Ramos: *Etapas de acumulación y*

altanzas de clase en la Argentina, 1930-1970, Buenos Aires, 1972, pág. 120. En lo que se refiere a la ideología justicialista, véase Alberto Ciria: *Perón y el justicialismo*, Buenos Aires, 1974.

⁸⁰ Peralta Ramos: *Etapas de acumulación*.

⁸¹ Servicio Internacional de Publicaciones Argentinas: *Emancipation of the Workers*, Buenos Aires, 1952, págs. 27-30.

⁸² Golder: "Literatura peronista", pág. 155.

⁸³ Citado en Dario Cantón: *El parlamento argentino en épocas de cambio, 1890, 1916 y 1946*, Buenos Aires, 1966, pág. 168.

⁸⁴ *Argentina de hoy*, agosto de 1953.

⁸⁵ Silvia Sigal y Juan Carlos Torre: "Reflexiones en torno a los movimientos laborales en América Latina", en Rubén Katzman y José Luis Reyna, comps.: *Fuerza de trabajo y movimientos laborales en América Latina*, México D. F., 1969, pág. 145.

⁸⁶ El concepto de "disponibilidad" se presenta en muchas de las obras principales de Germani. Véase en especial *Política y sociedad* y "Clases populares y democracia representativa". Si bien me parece que las críticas de éste y otros conceptos de la obra de Germani en cuanto a sus significados de pasividad y manipulación se justifican, la obra de Germani contiene, sin embargo, muchas intuiciones fundamentales, acerca de la especificidad y peculiaridad de un movimiento como el peronismo, que concuerdan con la orientación general de lo argumentado en este capítulo. En particular, creo que su insistencia en el carácter excepcional del peronismo como forma de movilización política a mi juicio sigue siendo válida. Su insistencia en que esto debe ser entendido en el marco de una dicotomía tradicional/moderno me parece tan errónea como innecesaria, punto que sagazmente señala Tulio Halperin Donghi en "Algunas observaciones".

SEGUNDA PARTE

La resistencia peronista
1955-58

Supervivencia del peronismo:
la resistencia en las fábricas

"La Comisión interna se presentó al Capitán Tropea, el Interventor, y nos dijo que estos compañeros definitivamente no iban a volver a trabajar en el frigorífico. Esto fue a las nueve menos diez. A las nueve la fábrica se paró. 100%. Y el paro duró seis días. Y al final tuvieron que traer a los compañeros de Villa Devoto en autos oficiales y reinstalarlos en sus puestos."

Sebastián Borro

"No sabían qué responder. Eran hijos de un gobierno paternal y el padre se había ido."

Alberto Belloni

"NI VENCEDORES NI VENCIDOS": EL INTERREGNO DE LONARDI

El colapso del compromiso: Lonardi y la Jefatura
sindical peronista

El primer gobierno de la Revolución Libertadora, el del general Eduardo Lonardi, representó un interregno en la relación entre el movimiento sindical peronista y las autoridades no peronistas. Tras adoptar una hostil actitud inicial que llevó al secretario general de la CGT, Hugo Di Pietro, a proclamar que "cada trabajador luchará con las armas en la mano y con aquellos medios que estén a su alcance", la CGT no efectuó

en la práctica tentativa alguna por movilizar a los trabajadores en apoyo del régimen de Perón. Al día siguiente de su belicosa declaración, Di Pietro exhortó a los trabajadores a permanecer en calma y denunció a "algunos grupos provocadores que pretenden alterar el orden".² La actitud de la CGT concordó con la reacción fatalista del propio Perón ante el golpe y, ante la virtual abdicación del ala política del movimiento, la CGT no demostró por cierto inclinación alguna a quedarse sola y adoptar una postura agresiva con las nuevas autoridades. Al prestar juramento Lonardi como presidente provisional el 23 de setiembre, y pronunciar un discurso inaugural de tono conciliatorio donde afirmó que no había "vencedores ni vencidos", quedó preparado el escenario para una tentativa, de siete semanas de duración, por lograr un acercamiento entre el movimiento sindical peronista y el primer gobierno no peronista.

El 24 de setiembre la CGT respondió el discurso de Lonardi subrayando "la necesidad de mantener la más absoluta calma [...] cada trabajador en su puesto por el camino de la armonía".³

Al día siguiente Lonardi recibió a una delegación gremial, a la que aseguró que su gobierno respetaría las medidas de justicia social logradas, así como la integridad de la CGT y las organizaciones que la formaban. La atmósfera general de benevolencia limitada se consolidó al ser designado ministro de Trabajo Luis B. Cernutti Costa, quien hasta entonces había sido el principal asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica. Uno de sus primeros actos consistió en disponer que la Dirección Nacional de Seguridad reabriera los locales gremiales clausurados u ocupados por antiperonistas. En esto residía por cierto el principal escollo para el frágil modus vivendi establecido.

Para fines de setiembre, los locales de los sindicatos de gráficos, ferroviarios, bancarios, petroleros y trabajadores de la carne y del vestido habían sido abandonados por los peronistas frente a los ataques de grupos antiperonistas armados. Esos grupos, conocidos como "comandos civiles", consistían principalmente en activistas socialistas y radicales. Habían desempeñado un papel importante en la rebelión contra Perón y se consideraban como una milicia civil que serviría de garantía contra cualquier resurgimiento peronista. En ese carácter tendieron a recibir apoyo de sectores de las fuerzas armadas para los ataques a los locales sindicales. Con el fin de contrapesar la creciente presión que ejercían sobre Lonardi

y Cernutti Costa esos sectores de las fuerzas armadas que apoyaban a los comandos civiles, la CGT emitió el 3 de octubre un comunicado donde se solicitaba al gobierno poner fin a la ocupación de algunos locales gremiales por gente armada y, al mismo tiempo, se reafirmaba el deseo de la CGT de que se celebraran elecciones democráticas lo antes posible. Como paso adicional hacia la desactivación de la situación, el consejo ejecutivo de la CGT renunció y designó en su lugar a un triunvirato provisional constituido por Andrés Framini, de los trabajadores textiles; Luis Natalini, de Luz y Fuerza, y Dante Viel, de los empleados públicos.

El 6 de octubre se publicó un acuerdo concluido entre la CGT y el gobierno, por el cual se comprometían a celebrar elecciones en todos los gremios en un lapso de 120 días y a la designación por la central obrera de interventores en todos aquellos sindicatos que se encontraban en situación irregular, principalmente los ocupados por antiperonistas. Esos interventores supervisarían el proceso electoral.⁴ En ese momento, las perspectivas de futuro entendimiento entre el gobierno y los gremios parecían promisorias. Ciertamente número de centrales sindicales habían retornado a manos peronistas. En el caso de los ferroviarios, sus líderes peronistas entrevistaron a Lonardi después de ser ocupada su sede central e instalada allí una jefatura antiperonista, y el presidente ordenó la devolución del sindicato a sus anteriores titulares.⁵ Además, la respuesta de los sindicatos al acuerdo del 6 de octubre sobre elecciones fue inmediata, y al día siguiente muchos de ellos anunciaron la fecha en que se efectuarían sus comicios. En la semana siguiente el número continuó en aumento, y con frecuencia el llamado a elecciones fue acompañado por otras medidas destinadas a contrarrestar el ataque antiperonista. En último término, esto involucró a menudo la renuncia de los líderes existentes. En algunos gremios los gestos fueron más allá: los dirigentes del sindicato de obreros panaderos, por ejemplo, resolvieron que todos los documentos y libros fueran puestos a disposición de quien deseara examinarlos.⁶ En el sindicato de fiduceros se creó, para supervisar las elecciones, un comité constituido por diferentes tendencias políticas y cuyo fin era investigar en detalle las actividades de la dirección anterior.⁷

Los gremialistas antiperonistas no quedaron satisfechos por esas medidas. Por lo contrario, proclamaron en voz cada vez más alta sus inquietudes frente a ese proceso y resolvieron ejercer presión sobre el gobierno para que lo reviera. Esa preocupación era fácil de comprender. La animaba una opo-

sición fundamental a toda la política del gobierno de Lonardi con los sindicatos peronistas. A su vez, esa oposición arralgaba en una actitud fundamental frente al peronismo y en determinado concepto, que analizaremos en otro lugar de este capítulo, acerca de esa corriente. Desde un punto de vista inmediato, en octubre de 1955 se oponían a la inauguración de un proceso electoral sindical que casi seguramente confirmaría el dominio de los gremios, y por lo tanto de la CGT, por los peronistas. También los alarmaba el hecho de que no obstante las muchas renuncias de dirigentes peronistas y la iniciación del proceso electoral, los comicios terminarían por quedar bajo el control general de los peronistas. Esos temores fueron acentuados por la decisión gubernamental de instalar interventores designados por la CGT en sindicatos donde había un conflicto abierto entre peronistas y no peronistas. Los sindicatos más afectados por esta política eran precisamente aquellos donde las fuerzas antiperonistas tenían mayor poder.

Durante todo el mes de octubre, los socialistas, radicales y algunos sindicalistas alzaron cada vez más la voz contra el hecho de que el Ministerio de Trabajo no intensificara la acción de la Revolución Libertadora en la esfera gremial.⁸ Por añadidura, el creciente espíritu de conciliación pareció subrayado por la exhortación que la CGT lanzó a los trabajadores en el sentido de que consideraran el 17 de octubre —la fecha decisiva en el calendario peronista— como un día de trabajo normal.

Sin embargo, el gobierno, y Cerrutti Costa en particular, tenían clara conciencia de los recelos que movían a los sindicalistas antiperonistas, así como de la consiguiente presión ejercida por aquellos sectores del gobierno sobre los cuales éstos influían para que se abandonara la política de conciliación.⁹ En respuesta a esa presión, el 20 de octubre el gobierno advirtió a muchos gremios peronistas, que por iniciativa propia habían puesto en marcha su proceso electoral, que antes era necesaria la aprobación de sus estatutos por el Ministerio de Trabajo. Además se produjeron varios otros ataques, siempre organizados por los comandos civiles. En los sindicatos donde el conflicto entre peronistas y antiperonistas era particularmente áspero, muchos de los interventores nombrados por la CGT no pudieron desalojar del poder a los grupos antiperonistas que se habían hecho cargo del sindicato. Todo lo cual llevó a una creciente pérdida de confianza por parte de la dirigencia peronista. El 26 de octubre, en una reunión a la que

concurrieron más de 300 jefes sindicales peronistas para tratar la crítica situación, Framini pidió que Cerrutti Costa rectificara esas violaciones del pacto del 6 de octubre.

Cerrutti Costa respondió con un decreto que regulaba el proceso electoral. Esencialmente, el decreto despojaba de su autoridad a todos los dirigentes gremiales, designaba a tres interventores por sindicato mientras se desarrollara el proceso electoral y nombraba un administrador de todos los bienes de la CGT. Esta contestó declarando una huelga general de protesta que debía iniciarse el 2 de noviembre a medianoche. Llegadas las cosas a ese punto, el gobierno pareció inclinarse inexorablemente por los partidarios de la línea dura. El propio Lonardi, cuya salud declinaba rápidamente, no estaba en el control efectivo del gobierno. Sólo Cerrutti Costa y el general Bengoa estaban en favor de evitar el conflicto a cualquier precio. El caso fue que el ala conciliadora obtuvo una victoria temporaria en negociaciones de último minuto con la CGT y se evitó la huelga.

Ese acuerdo representó una considerable concesión por parte del gobierno y demostró la importancia que el ala conciliadora asignaba al frágil *modus vivendi* establecido entre el gobierno y los gremios. Esencialmente, permitía a Natalini y Framini permanecer a la cabeza de la CGT. Además estipulaba que los sindicatos donde no hubiera conflicto interno podían seguir a cargo de los dirigentes que tenían, que serían ayudados por dos supervisores, designados por el Ministerio de Trabajo, hasta las elecciones internas. En aquellos gremios donde había conflicto se designaría un interventor hasta los comicios; nombrado por el Ministerio de Trabajo, ese funcionario sería asesorado por una comisión conjunta representativa de las tendencias rivales. Esta crisis convenció al ala tradicional y liberal del gobierno de que sólo el alejamiento de Lonardi, y junto con él de la influencia ejercida por los nacionalistas católicos, partidarios de la conciliación, aseguraría una aplicación cabalmente antiperonista de los principios de la revolución realizada contra Perón.

Si bien no hubo ningún problema específicamente sindical en los hechos conducentes al distanciamiento de Lonardi, a quien se lo obligó a renunciar el 13 de noviembre, el punto decisivo del ataque lanzado por las fuerzas antiperonistas siguió siendo la política sindical del gobierno. La prensa radical y socialista abundó en llamamientos apenas velados a las fuerzas armadas para que salvaguardaran la democracia y la libertad ganadas al caer Perón. Una campaña desatada por

no tuvo mucho influencia
el gobierno al renunciar a Perón

esa prensa y cuidadosamente orquestada insistió en subrayar la represión sufrida bajo Perón por los sindicalistas no peronistas y en destacar las opiniones de éstos sobre la continuación del liderazgo peronista en la CGT y las proyectadas elecciones gremiales. El tema básico era coherente. La CGT debía ser intervenida y los delitos de los peronistas investigados. Diego Martínez, dirigente del gremio de la carne antes de 1945, sostuvo:

"Hay que destruir una maraña, hay que desmontar la máquina pieza por pieza, hay que esclarecer conciencias, señalar delitos, negociados, defraudación de fondos sociales en los sindicatos antes de hablar de elecciones". *Podrón de los no peronistas*

La solución inmediata que preconizó fue

"la entrega de todas las organizaciones a los gremialistas libres".¹⁰

A la luz de esta actitud, el compromiso alcanzado el 2 de noviembre entre los dirigentes gremiales peronistas y el gobierno confirmó la opinión de radicales y socialistas en el sentido de que se necesitaba un cambio de gobierno. Ya no vieron esperanza alguna de que fuese posible convencer al gobierno de que era insensato seguir un camino que inevitablemente confirmaría el dominio peronista de los sindicatos. El 13 de noviembre asumió la presidencia el general Aramburu: la persuasión se tornó innecesaria, la primera tentativa por integrar los sindicatos peronistas a un Estado no peronista había fracasado. Tras renovados ataques de los antiperonistas contra muchos locales sindicales, y al no responder Aramburu un pedido de cumplimiento del pacto del 2 de noviembre, la CGT declaró el 14 de noviembre una huelga general por tiempo indeterminado. Ese mismo día el gobierno declaró ilegal la huelga y dos días después intervino la CGT y todos los sindicatos.

*Factores determinantes en el trasfondo de la ruptura:
el surgimiento de las bases*

Para comprender el desarrollo de las siete semanas siguientes a la caída de Perón debemos poner la mirada más allá del primer plano donde se destacaban los acuerdos, los compromisos y los conflictos. El factor que guió la política de Lonardi parece ser bastante claro. Lonardi estaba dispuesto a

considerar posible, en el nivel político general, una victoria peronista en elecciones convocadas en el lapso de un año.¹¹ La única reserva que formulaba era la exigencia de

"un peronismo depurado de los vicios que lo llevaron a la derrota. Para él, no había más vencidos que los dirigentes venales y corruptos".¹²

El sector de Lonardi admitía que el peronismo conservara el dominio de la clase trabajadora y sus instituciones con la condición de que, tras una breve depuración de los más implicados en la corrupción del régimen, los sindicatos se avinieran a respetar como esferas claramente demarcadas la acción del gobierno, por un lado, y la representación de los trabajadores, por otro, y restringieran su actividad a esta última.

El ala nacionalista del antiperonismo concordaba con buena parte de lo realizado por Perón. Veía en su movimiento un baluarte contra el comunismo. Al poner el énfasis en la justicia social dentro de una estructura de capital humanizado, al abrazar los intereses nacionales y comunitarios como opuestos a los de clase, el peronismo apelaba al ideal de armonía y orden sociales, de inspiración principalmente católica, que postulaba ese grupo. El problema era esencialmente de límites y excesos. Si los sindicatos admitían la necesidad de mantenerse en su propia esfera, y si podía eliminarse la corrupta demagogia de los personajes más estrechamente comprometidos con Perón, los sindicatos conducidos por peronistas tenían un importante papel que desempeñar en la Argentina posterior a Perón, como órganos de control social y canales de expresión de las masas trabajadoras. Ciertamente, un tema en el que insistió la prensa peronista que subsistió en libertad en ese período fue el peligro de que los comunistas coparan el movimiento laboral si los peronistas eran proscriptos de éste.

Desde el punto de vista de los dirigentes sindicales el problema de la motivación y los objetivos es más complejo. Estaban ciertamente preparados para realizar considerables sacrificios con tal de adaptarse a la nueva situación. Esto se advierte en la forma en que se opusieron a muchas expresiones de oposición espontáneamente brotadas de las bases y en la firmeza con que declararon el 17 de octubre día de trabajo normal. Similarmemente, parecieron hacer lo posible para evitar cualquier actividad que pudiera interpretarse como ajena a la esfera de intereses estrictamente sindicales. Así, por

ejemplo, la publicación a fines de octubre del Plan Prebisch, cuyas proposiciones parecían de orientación contraria a toda la filosofía económica de los sindicatos, no provocó ninguna declaración pública de la CGT.

En principio, no parece haber existido razón alguna por la cual no pudiera arribarse a un *modus vivendi* practicable entre el gobierno y los sindicatos. No fue una intransigente lealtad a su depuesto líder el obstáculo que surgió en el camino hacia tal acuerdo. Se ha sugerido que los dirigentes gremiales se excedieron en sus pretensiones, sin comprender el delicado hilo tenso sobre el cual Lonardi y sus seguidores caminaban haciendo equilibrio. Bengoa, ministro de Guerra y destacada figura entre los partidarios de la conciliación, envió a Lonardi el 8 de noviembre una carta de renuncia donde se refería a "la falta de comprensión de algunos grupos, que eran el mayor obstáculo para la realización de la consigna básica de Lonardi de 'ni vencedores ni vencidos'"¹³. Pero, ¿fue una "falta de comprensión"?

¿Sobreestimaron los dirigentes sindicales su propia fuerza y la solidez de su posición para negociar y terminaron por perder todo? ¿Por qué, una vez hechas las concesiones que se mencionaron, no cedieron más para robustecer la posición de Lonardi?

Al evaluar este problema es preciso tomar en cuenta dos factores. Primero, el hecho de que la CGT llegó a dudar cada vez más si no de las intenciones, al menos de la capacidad que Lonardi y su grupo tenían para cumplirlas. En la crisis del 26 de octubre, durante su entrevista con Cerrutti Costa, Framini se refirió precisamente a esa cuestión. No obstante los bellos discursos de Cerrutti, las ocupaciones de locales sindicales por comandos civiles continuaban. El problema residía en que en muchos campos Cerrutti no tenía poder para actuar. En la práctica, el sector nacionalista del gobierno carecía de autoridad suficiente, dentro de las fuerzas armadas o de la policía, para impedir esos ataques. El creciente número de detenciones de dirigentes sindicales de segunda o tercera fila planteaba un problema similar: los sectores de las fuerzas armadas o de la policía que las efectuaban tenían autonomía de acción.

Esto puso a la jefatura sindical en una posición muy difícil, pues existían concesiones que no podían hacer sin debilitar incluso la base mínima de su poder y advertían que la falta de control, por el gobierno, de esa actividad antiperonista conduciría inevitablemente a una creciente anarquía en el movimiento y a una erosión de sus propias posiciones

hasta el punto de tornarlas simplemente insostenibles. En algún punto del camino de los compromisos era necesario detenerse para no acabar autorizando su propia eliminación. Se trataba, entonces, de algo similar a un círculo vicioso, puesto que Cerrutti Costa y el sector nacionalista eran militar y políticamente demasiado débiles como para dar las seguridades prácticas que los dirigentes sindicales necesitaban para convencerse de que efectuando una concesión tras otra no desgastaban sus posiciones de liderazgo. Y, al mismo tiempo, sin esas concesiones de los sindicatos Lonardi y sus partidarios se debilitaban más aún en lo militar y lo político.

Sin embargo, un segundo factor, más decisivo aún, que se debe tomar en cuenta se refiere a la actividad de las bases peronistas. Cualquier tentativa por comprender las acciones de la jefatura peronista y el colapso del interregno de Lonardi debe tener en consideración ese factor. Durante esos meses, la jefatura sindical peronista de ningún modo tuvo las manos libres para obrar como mejor le pareciera. La amplitud de la resistencia ofrecida por la militancia peronista de base al golpe contra Perón, y la dureza de la respuesta a esa resistencia, contribuyeron en medida importante a determinar los acontecimientos de esos meses. No obstante la disposición a transar mostrada por Di Pietro, la reacción inicial de incredulidad estupefacta ante la renuncia de Perón pronto cedió su sitio a una serie de manifestaciones espontáneas en los distritos obreros de las principales ciudades. En Buenos Aires, por ejemplo, el ejército hizo fuego contra una numerosa manifestación que procuraba llegar al sector céntrico de la Capital Federal y muchos de sus integrantes resultaron heridos. También se informó sobre nutridos disparos de armas pequeñas en la zona de Avellaneda.¹⁴ Fue preciso enviar a Ensenada y Berisso fuertes contingentes de refuerzos para ocupar todas las posiciones estratégicas y puntos de acceso a las ciudades.¹⁵

Rosario, llamada "la capital del peronismo", presentó las más serias dificultades a las fuerzas armadas. Ya el 24 de setiembre *The New York Times* informó sobre vehículos blindados que abrieron fuego contra las manifestaciones obreras, y la agencia Reuter habló de varios muertos en esos hechos. Estas versiones fueron sin duda exageradas, puesto que días después se informó sobre un número de bajas mucho menor, pero no hay duda de que en Rosario, en medio de una fuerte tensión, hubo considerable resistencia a las nuevas autoridades. En efecto, desde el 18 de setiembre, o sea desde dos

días después de estallada la revolución antiperonista, la ciudad estaba paralizada. Desde entonces hasta el 23 de septiembre hubo incesantes manifestaciones en el sector céntrico, adonde llegaban trabajadores del cinturón industrial, sobre todo desde los grandes frigoríficos de la zona Sur. Por la noche se oían constantes disparos de armas de fuego y detonaciones de bombas. Todas las fábricas estaban paralizadas.¹⁶

Las dificultades enfrentadas allí por las fuerzas rebeldes se acrecentaban por la firme lealtad a Perón del regimiento de infantería que, bajo las órdenes del general Inguéz, tenía su acantonamiento en Rosario y se mantuvo en su cuartel. Sólo cuando las unidades rebeldes de Santa Fe y Corrientes pudieron ser enviadas allí el 24 y el 25 de septiembre las nuevas autoridades iniciaron la tarea de recobrar el control de la ciudad. Esto exigió varios días más. El 24 y el 25 hubo serios combates callejeros en que se utilizaron tranvías y automóviles como barricadas.¹⁷ Los trabajadores de los talleres ferroviarios declararon una huelga general a la que se sumaron los obreros de los frigoríficos y otras plantas industriales. El 27 quedaron suspendidos todos los servicios de trenes y omnibuses entre Rosario y Buenos Aires. Sólo cuando el ejército ocupó físicamente todo el sector céntrico de la ciudad y dispuso el toque de queda —las tropas harían fuego contra cualquier persona que estuviera en las calles después de la 20— fue restaurado el orden.

El restablecimiento de la autoridad formal por las fuerzas revolucionarias no puso fin a la resistencia de las bases peronistas. Durante todo octubre, al intensificarse la batalla por la posesión de los sindicatos, hubo huelgas, no dispuestas por los dirigentes gremiales, en protesta contra los ataques de los comandos civiles y el creciente número de detenciones. El relato que ofrece un activista de la atmósfera vivida en Rosario a mediados de octubre constituye un elocuente testimonio de la lucha subyacente que se desarrollaba:

"Los trabajadores en cambio rugían de indignación y se hallaban prácticamente en pie de guerra dispuestos a lanzarse a la lucha en cualquier momento [...] Rosario daba la sensación de una ciudad ocupada por el enemigo, en medio de una atmósfera de sorda rebelión próxima a estallar."¹⁸

Ya para fines de octubre aparecieron los embriones de lo que llegaría a ser conocido como la Resistencia Peronista. En Santa Fe, por ejemplo, se creó un Frente Emancipador que empezó a coordinar la oposición sindical peronista.¹⁹ El rencor

subyacente y el sentimiento de rebelión ya descritos encontraron un canal de expresión en el llamamiento no oficial a una huelga general que lanzaron varios sectores peronistas para la simbólica fecha del 17 de octubre. A despecho de la orden dada por la cúpula de la CGT en el sentido de que debía ser un día laboral normal, grandes números de trabajadores peronistas ignoraron esa exhortación. *The New York Times* calculó que el ausentismo fue ese día del 33 por ciento.²⁰ Todos los puertos quedaron paralizados y tropas de marinería patrullaron infuocuosamente las zonas portuarias en busca de trabajadores ociosos para obligarlos a retomar sus tareas.²¹ Análogamente, la huelga proclamada por la CGT para el 3 de noviembre y cancelada después fue convertida por los militantes de base en otro masivo acto antib gubernamental. Plantas industriales muy importantes cerraron sus puertas en el país entero.²² Los "perturbadores" fueron sistemáticamente capturados. Si bien la afirmación de la CGT en el sentido de que resultaron detenidos alrededor de 25.000 delegados gremiales parece exagerada, no hay duda de que el número de arrestos fue tal que exacerbó considerablemente el resentimiento y la hostilidad de los peronistas de base contra las nuevas autoridades.

Es oportuno aclarar la índole de esa oposición de las bases. Fue fundamentalmente espontánea, intuitiva, confusa y acéfala. Un participante en esos hechos ha narrado cómo él y otros trabajadores peronistas fueron a preguntar a los dirigentes sindicales del frigorífico La Blanca, en Avellaneda, qué medidas se adoptarían para hacer frente al golpe contra Perón:

"Instintivamente tratábamos de defender algo que sentíamos que perdíamos; no pudimos hacer otra cosa que ir a nuestros dirigentes para ver lo que podíamos hacer en nuestra fábrica. Pero la respuesta fue definitiva: A Perón lo tiran al tacho de basura, y a nosotros también."²³

Este episodio se reiteró regularmente durante esos dos meses. El mismo activista que describió el "clima de rebelión" vivido en Rosario agregó:

"pero no se veía en qué forma podría llevarse a cabo la insurrección pues no había ni sombra de organización, ni se vislumbraba la existencia de un grupo que tuviese cierta autoridad."²⁴

Ya entonces aparecían formas embrionarias de resistencia organizada, pero en general los canales más frecuentes de

reacción consistieron en iniciativas espontáneas y atomizadas, que con frecuencia asumían la forma de huelgas no oficiales. Cuando se presentaba un motivo más general, como el 17 de octubre o la huelga proclamada por la CGT para el 3 de noviembre, las bases lo aprovechaban como medio de mostrar su rechazo de todo el proceso que se operaba en la Argentina. Pero en ausencia de una jefatura coherente y nacional esas acciones no podían pasar de la protesta defensiva.

Este fenómeno de la resistencia ofrecida por las bases, que duró subyacente durante todo ese período, agregó una dimensión vital al proceso entero de negociación y compromiso entre el gobierno y los líderes sindicales. A la luz de esta oposición se torna claro que los dirigentes gremiales, alrededor de 300, que negociaban en Buenos Aires el futuro del movimiento no tenían de ningún modo las manos libres para obrar como mejor les pareciera. La peligrosa ola de fondo de oposición creada por los afiliados de base amenazaba con hacerlos a un lado si concedían demasiado. En la reunión del 26 de octubre Framini dijo claramente al gobierno que "la masa obrera estaba dispuesta a demostrar fuerza", pero hasta el momento habían obedecido a sus líderes, en otras palabras, esa obediencia dependía de que estos lograran poner fin a los ataques contra los sindicatos.²⁵

Los jefes sindicales peronistas tenían muy clara conciencia de la amenaza que esto planteaba a su credibilidad y del peligro de ser conmovidos y superados que corrían si no obtenían de Cerrutti Costa concesiones concretas suficientes para convencer a los trabajadores peronistas de que los "sindicalistas libres", o sea los antiperonistas, no se quedarían con los gremios. En ausencia de tales concesiones era preciso que se los viera ejercer de alguna manera la conducción, así consistiera sólo en ponerles un sello de goma a movimientos ya emprendidos por las bases. El corolario lógico de esta situación era el siguiente: por más que personalmente favorecieran el compromiso, los jefes sindicales no podían, en la práctica, garantizar su cumplimiento. Tal como lo demostraban los episodios del 17 de octubre y el 3 de noviembre, el control que ejercían sobre sus afiliados era limitado. Esto a su vez alarmaba a los elementos más antiperonistas de las fuerzas armadas y robustecía sus posiciones, lo que dificultaba más aún a Lonardi efectuar concesiones como las que hubieran aplacado a las bases peronistas.

La cúpula gremial peronista pasó por un período de extrema confusión, muy vacilante su confianza en sí misma,

*El control por los líderes sindicales
de los afiliados en conflicto.*

estuvo lejos de pretender demasiado en sus conversaciones con el primer gobierno de la Revolución Libertadora y se limitó, en realidad, a reaccionar a una serie de presiones que no estaba a su alcance controlar. Así lo demostró ampliamente el acto final, la huelga general del 14 de noviembre. Aunque oficialmente sólo debía comenzar el 14, muchos obreros habían suspendido el trabajo ya el 13, día en que también se produjeron en Rosario, según se informó, choques con saldo de muertos.²⁶ Pero en tanto que los trabajadores peronistas utilizaron el llamamiento a la huelga para expresar su descontento, la cúpula sindical nacional hizo poco por organizar el movimiento, y su declaración de huelga tuvo los contornos de un último acto de desesperación. En sus recuerdos de ese período, Juan M. Vigo describe así la situación:

"se dio la orden desde Buenos Aires pero no se adoptó ninguna medida anticipada para asegurar su cumplimiento. Burócratas sin noción de lo que es el poder de la organización, acostumbrados siempre al apoyo o neutralidad benévola del gobierno, quizás creían que las cosas se iban a desarrollar igual que antes".²⁷

La respuesta que el obrero peronista medio dio al llamamiento de huelga fue rotunda. El 15 de noviembre, el gobierno admitió oficialmente que el ausentismo había sido del 75 por ciento en Buenos Aires y del 95 por ciento en las principales industrias.²⁸ Pero la falta de dirección en el plano nacional y la fuerza de la represión condenaron la huelga a la derrota. El nuevo presidente, general Aramburu, amenazó a los "agitadores huelguistas" con tres meses a tres años de cárcel. The New York Times informó sobre la detención de más de 100 delegados en Buenos Aires y el castigo físico de muchos otros activistas que desde el exterior de las fábricas exhortaban a los obreros a parar.²⁹ Hacia el fin del primer día habían sido arrestados más de mil huelguistas. El 16 de noviembre el gobierno intervino la CGT y todos los sindicatos que la integraban, a muchos de cuyos dirigentes encarceló. Ese mismo día la huelga fue levantada, aunque ya muchos trabajadores habían empezado, en vista de la represión, a concurrir al trabajo.

Así fue como la interrupción del interregno de Lonardi dejó una clase trabajadora peronista derrotada, confundida, pero que también había demostrado su disposición a defender espontáneamente "algo que instintivamente sentían que estaban perdiendo".

Para los dirigentes sindicales esos dos meses represen-

laron una divisoria de aguas, el paso de una era. Desde el principio habían demostrado incapacidad para actuar con decisión, una suerte de parálisis de la voluntad de obrar. Citada al comienzo de este capítulo, la descripción que de ellos deja Alberto Belloni refleja el juicio de los activistas de base acerca de sus líderes. La condena que formula Miguel Gazzera es más definitiva, aunque así sea tan sólo por dictarla alguien que fue dirigente sindical en ese momento:

"Estábamos satisfechos con lo que ya habíamos vivido y gozado. Estábamos inexorablemente terminados, agotados totalmente."³⁰

ARAMBURU Y LA CLASE OBRERA: PRIMEROS ELEMENTOS DE UNA POLÍTICA

Hemos visto que desde el comienzo de la rebelión militar contra Perón surgió en las bases peronistas una fuerte resistencia a las nuevas autoridades. Esa oposición se centró primero en la toma de los sindicatos por los dirigentes gremiales libres y en los arrestos que ya se efectuaban tanto de líderes como de activistas. Principalmente aquella actitud reflejó una sensación general de miedo, incertidumbre y confusión y se cristalizó en torno de temas como la ofensiva antiperonista para obtener el control de la estructura sindical. En general, durante el breve período del gobierno de Lonardi esa ofensiva antiperonista no llegó hasta el nivel del sitio de trabajo mismo, en el taller o en la planta.

Esto había de cambiar inmediata y radicalmente con el nuevo gobierno provisional del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. La política del nuevo gobierno se basó en el supuesto de que el peronismo constituía una aberración que debía ser borrada de la sociedad argentina, un mal sueño que debía ser exorcizado de las mentes que había subyugado. Concretamente, la política del nuevo gobierno con la clase trabajadora siguió tres líneas principales. Ante todo, se intentó proscribir legalmente un estrato entero de dirigentes sindicales peronistas para apartarlos de toda futura actividad. Esto concordó con la nueva intervención de la CGT y la designación de supervisores militares en todos sus sindicatos, lo que habría de preparar el camino para la creación de "bases democráticas en los sindicatos, y la elección de dirigentes con autoridad moral".³¹

En segundo término, se llevó a cabo una persistente política de represión e intimidación del sindicalismo y sus activistas en el plano más popular y básico. Finalmente, hubo un esfuerzo concertado entre el gobierno y los empleadores en torno del tema de la productividad y la racionalización del trabajo, proceso que marchó de la mano con un intento de frenar los salarios y reestructurar el funcionamiento del sistema de negociaciones colectivas.

La primera línea de esa política fue la de cumplimiento más fácil. Además de los centenares de dirigentes gremiales de nivel nacional arrestados por el gobierno de Aramburu al declararse ilegal la huelga de noviembre, miles de activistas sindicales de nivel intermedio fueron destituidos. La preponderante actitud de inercia y confusión en que estaban sumidos y que ya hemos descrito no había de serles muy útil para enfrentar los rigores del período en que ahora entraban. El gobierno fundó una comisión especial para investigar los delitos e irregularidades cometidos por los dirigentes sindicales peronistas. Las nuevas autoridades también aprobaron el decreto 7107, de abril de 1956, que excluía de cualquier actividad gremial a todos los que hubiesen tenido entre febrero de 1952 y setiembre de 1955 una posición de liderazgo en la CGT o sus sindicatos. Esta proscripción se amplió a todos los que habían tomado parte en el congreso celebrado por la CGT en 1949, donde se aprobaron nuevos estatutos que proclamaban a la central obrera como "fiel depositario de la doctrina peronista". La prohibición caía también sobre todos los dirigentes del ahora proscripto Partido Justicialista, así como sobre todos los investigados por la comisión especial. Este decreto se modificó meses después, pero gran número de antiguos dirigentes sindicales siguieron proscriptos.³²

Un problema mucho más decisivo y complejo fue el de la organización sindical en el nivel del taller o la planta, donde también prevalecían los peronistas. Inmediatamente después de intervenida la CGT, el Ministerio de Trabajo declaró disueltas y carentes de autoridad a todas las comisiones internas de los sitios de trabajo. Ya a mediados de noviembre de 1955³³, en muchas fábricas los delegados eran designados por el Ministerio de Trabajo. Este problema fue debatido a fines de diciembre de 1955 por la Junta Asesora Gremial creada para aconsejar al interventor de la CGT, capitán Patón Laplacette. Se convino en que la solución, arbitrada por el Ministerio, de nombrar delegados a los trabajadores más antiguos, no peronistas, resultaba insatisfactoria porque en general se con-

sideraba que esos obreros eran los menos militantes y, en consecuencia, no contaban con el respeto de sus representantes.³⁴ Finalmente, Patrón Laplace dispuso que los delegados gremiales fueran designados por los interventores de cada sindicato. En la práctica, empero, en muchas empresas, los empleadores tomaron la cosa en sus propias manos. En La Bernalesa, por ejemplo, importante planta textil situada en el Gran Buenos Aires, los 120 delegados gremiales, principalmente peronistas, fueron despedidos.³⁵ Incluso la Comisión Gremial del Partido Socialista consideró su deber enviar a Aramburu una nota donde le advirtió sobre los peligros de tales acciones e insistió en que ningún trabajador fuera despedido sin que su caso fuese visto por el tribunal de arbitraje de emergencia instituido por el gobierno.³⁶

IMPACTO DEL PERONISMO EN EL NIVEL DE TALLER Y PLANTA DURANTE LA ERA DE PERÓN

Esta actitud de controlar y debilitar las comisiones internas estuvo íntimamente ligada a una de las principales preocupaciones de la política económica preparada por el nuevo gobierno: aumentar la productividad de la industria argentina. No se trataba de una novedad para el gobierno y los empleadores argentinos. Esa inquietud subyacía en gran parte de las crecientes tensiones surgidas entre empresarios y sindicatos durante los últimos años del gobierno peronista. Para comprender la importancia de este punto en la formación de la resistencia obrera a las condiciones imperantes después de 1955, debemos primero examinar las tentativas realizadas en el lapso 1945-1955 para reestructurar el equilibrio del poder en el nivel del taller y la planta y echar así las bases de una racionalización eficaz. El mayor peso social alcanzado por la clase trabajadora y sus instituciones en la sociedad durante el régimen peronista se reflejó inevitablemente en el lugar de trabajo. En términos generales, esto significó una transferencia de poder, dentro del sitio de trabajo, de la empresa a los empleados. Esa transferencia proporcionó la lente a través de la cual se filtró gran parte de la retórica de la ideología peronista. Consignas formales relativas a la "dignidad del trabajo", "la humanización del capital", "la responsabilidad social del empleador", fueron concretamente interpretadas por el obrero en función de la capacidad que él tenía, bajo Perón, para controlar en mayor o menor grado su vida en el taller o la planta, o al menos para limitar las prerrogativas de la parte

patronal en esa esfera. Después de la crisis económica de 1951-52, toda esa esfera de las relaciones en el sitio de trabajo llegaría a ser el punto donde se centrarían las preocupaciones de las empresas y el Estado, pues allí se conectaba el tema del ulterior desarrollo económico argentino con el de la mayor productividad.

En términos económicos, se estimaba que aumentar la productividad del trabajo era vital para alcanzar la acumulación de capital necesaria con el fin de que la Argentina avanzara hacia una nueva etapa de crecimiento económico, basada en la producción de maquinaria pesada y bienes de consumo duraderos de tipo intermedio, fase estipulada en el Segundo Plan Quinquenal forjado por el régimen peronista. Desde el punto de vista técnico, en las condiciones de recesión económica que prevalecían a principios de la década 1950-60 ese aumento de producción no podía ser logrado principalmente mediante la adopción de maquinaria nueva. Se entendía, en cambio, que al menos en el corto plazo la mayor productividad del trabajo debería originarse en un aumento del producto por trabajador a partir de la maquinaria existente.³⁷ Empero, desde el punto de vista del empleador y del Estado el problema no era de naturaleza primordialmente económica o técnica, sino social. Residía precisamente en el insatisfactorio equilibrio de fuerzas generado en el plano del taller o la planta por una clase trabajadora confluente en sí misma y por un poderoso movimiento sindical que contaba con el apoyo del Estado.

Concretamente, los empleadores elaboraron una estrategia basada en tres puntos con el fin de contrarrestar los efectos del mayor poder de los obreros en los sitios de trabajo. Primero, desde principios de los años 1950-60 los empleadores se empeñaron cada vez más en revisar los planes de incentivos existentes, estableciendo nuevas tasas de bonificación con ayuda de estudios del trabajo conducentes a disminuir los tiempos de ejecución; en otras palabras, a acelerar la producción. Allí donde esos planes aún no existían los empleadores procuraron activamente introducirlos en sus fábricas. Este interés por recurrir a incentivos para intensificar la producción era inspi rado por una inquietud básica común a los empleadores y al Estado acerca de los hábitos laborales "antisociales". En condiciones de plena ocupación, con un movimiento gremial en expansión y respaldado por el Estado, y con un alto grado de confianza en sí mismos, los trabajadores, no poco naturalmente, tendieron a adoptar una definición de legítima in-

intensidad del trabajo más flexible que la vigente en la era anterior a Perón. Salarios básicos relativamente altos, junto con los beneficios marginales incorporados a los nuevos contratos, redujeron considerablemente la tradicional compulsion de los obreros a intensificar el esfuerzo y ajustarse a hábitos laborales "saludables". Si bien los empleadores habían aceptado esa actitud durante la expansión económica inmediatamente consecutiva a la guerra, a comienzos de la década 1950-60 estaban resueltos a reajustar los hábitos de trabajo y su intensidad.

El segundo motivo de preocupación de los empleadores era la existencia, en muchos de los contratos firmados en el período 1946-48, de cláusulas que regulaban las condiciones de trabajo. Tales cláusulas, obtenidas por un movimiento laboral insurgente en la ola de huelgas de aquellos años, limitaba los derechos de la empresa en lo relativo a movilidad de la mano de obra y especificación de la tarea y garantizaba beneficios sociales tales como la licencia por enfermedad sin pérdida de haberes. El símbolo del nuevo equilibrio del poder en el nivel del taller y la planta, y el principal motivo de queja de los empleadores, consistía en la comisión interna de delegados gremiales. Los contratos concluidos en los años iniciales del primer gobierno de Perón contenían cláusulas que garantizaban el reconocimiento de esas comisiones por la parte patronal y aseguraban la permanencia de los delegados en sus empleos tanto durante su gestión en ese carácter como después de concluida. Aunque sus funciones básicas consistían en supervisar el cumplimiento de las provisiones del contrato, a comienzos de los años 1950-60 llegaron a asumir un papel más amplio en la consolidación de la confianza de la clase obrera en sí misma y en la limitación de las prerrogativas de las empresas en la esfera de la producción. Los empleadores vieron en los delegados un importante obstáculo contra la racionalización eficaz y la imposición de disciplina laboral. José Gelbard, líder de los empresarios, había por cierto deplozado vigorosamente en el Congreso de la Productividad, celebrado en marzo de 1955, la posición que

"asumen en muchas empresas las comisiones internas sindicales que alteran el concepto de que es misión del obrero dar un día de trabajo honesto por una paga justa [...] tampoco es aceptable que por ningún motivo el delegado obrero loque el silbato en una fábrica y la paralice".³⁶

Los empleadores argentinos tropezaron con una resistencia considerable cuando intentaron poner en práctica su estrategia. Sin duda alguna fue esa resistencia, que rara vez se menciona en los documentos oficiales, lo que determinó a los empleadores a solicitar el apoyo tanto del Estado como de la cúpula sindical en una campaña oficial por la productividad lanzada en 1955. En este sentido, el Congreso de la Productividad, donde culminó esa campaña, constituyó una tentativa por aplicar oficialmente, con ayuda del prestigio personal de Perón y el peso del Estado y del aparato sindical, una política que los empleadores no habían sido capaces de imponer en los años anteriores sobre una base práctica en el plano de cada empresa. La resistencia de la clase trabajadora se cumplió en dos niveles. Uno consistió en una respuesta a los efectos concretos de la ofensiva patronal: oposición al aumento de la carga de trabajo, a la disminución del tiempo de ejecución de las tareas, a la aceleración del trabajo en línea o a la toma de medidas disciplinarias contra los delegados gremiales. En general, esta oposición adoptó la forma de una negativa a cooperar, antes que la de una abierta acción de huelga.³⁷

Con mayor fundamento, sin embargo, los proyectos empresariales sobre productividad y racionalización chocaron con algunos supuestos decisivos, de orden cultural y social, nacidos en el seno de la clase trabajadora por efecto de la experiencia peronista. Los trabajadores cuestionaban, en un sentido directamente básico, la *legitimidad* de muchas de las premisas de que partían los empleadores. Resulta claro, por ejemplo, que grandes sectores de la clase obrera negaban la legitimidad de cualquier tipo de incentivo basado en el pago por-resultado. La insistencia casi obsesiva con que los empleadores, tanto en el Congreso de Confindustria, de 1953, como en el Congreso de la Productividad, 1955, habían preconizado la elemental necesidad de aceptar esos esquemas indicaba su interés en afirmar, antes que la validez de los mecanismos específicos involucrados en la racionalización, la legitimidad de la idea de los planes de incentivación como base para establecer la relación entre paga y trabajo. Aunque es verdad que dichos planes resultaban cada vez más atractivos como medio para ganar aumentos de salario en un período de inflación y control salarial por el gobierno, la permanente insistencia de los empleadores en la aceptación del pago-por-resultado indica que ese concepto todavía era inaceptable para muchos trabajadores.

Esa resistencia generalizada al concepto de planes de

incentivación y de racionalización arralgaba en el desarrollo. Durante la era peronista, de una cultura de taller y de planta que traducía la nueva posición social y política de la clase trabajadora en la sociedad argentina a una serie de supuestos y afirmaciones, a menudo informales, acerca de lo que los empleadores tenían o no derecho de exigir a sus trabajadores en el marco del proceso de producción. En ese contexto, resulta claro que para los trabajadores argentinos la manera legítima de mejorar los niveles de vida consistía en actualizar los salarios básicos estipulados por los contratos y congelados muchos de ellos desde 1950.⁴⁰ Salarios basados en pagas altas por hora, junto con beneficios marginales como los aumentos por antigüedad, las asignaciones familiares, etcétera. Introducidos en los contratos del período 1946-48, eran considerados una conquista decisiva por la clase trabajadora. Representaban una expresión concreta de lo que significaba la justicia social para los obreros; la capacidad para ganar un buen salario sin estar sometidos a presiones inhumanas dentro del proceso de producción.

Análogamente, el clamor de los empleadores por la revisión de las cláusulas contractuales que regulaban las condiciones de trabajo encontró una oposición general de los asalariados. En tanto que para la parte patronal esas cláusulas constituían un gran obstáculo para la racionalización eficaz, las prácticas laborales y las restantes provisiones consagradas por ellas eran para los obreros una garantía esencial de la calidad de vida en los sitios de trabajo. Simbolizaban un aspecto crucial de lo que la experiencia peronista significaba para ellos. Expresaban en forma muy concreta el cambio operado en la posición sociopolítica de los trabajadores en el marco social general, en cuanto esa transformación era experimentada en un nivel sumamente básico de la relación entre las clases: en la relación entre empleador y empleado dentro del lugar de trabajo. Representaban, por así decirlo, la letra impresa de la realidad cotidiana que existía más allá de las abstracciones de la retórica peronista. Encarnaban lo que los obreros habían llegado a considerar como la regulación valedera y esencial de la parte que les correspondía en el proceso laboral, por lo que tendían a entender que no estaban sujetos a negociación entre las empresas y los sindicatos.

Esa resistencia ideológica generalizada de los obreros a la estrategia de sus empleadores era de índole a la vez limitada y ambigua. Nunca involucró una crítica de los criterios subyacentes en las relaciones de producción capitalistas. La

oposición a la racionalización nunca fue extendida al carácter de negación o duda del derecho de los empresarios a manejar sus plantas. Existen escasos indicios, por ejemplo, de que los trabajadores, en medio de la batalla contra el taylorismo, hayan podido intervenir ellos en ese manejo. Sin duda alguna, la aceptación general de la legitimidad de las relaciones de producción capitalistas y las relaciones de autoridad conllevadas en ellas constituía un reflejo de ciertos principios básicos de la ideología peronista.

Pero debemos cuidarnos, por otra parte, de adjudicar las limitaciones del desafío lanzado por los trabajadores a la autoridad capitalista exclusivamente al peso de la manipulación ideológica practicada por el Estado peronista. Tal como lo hemos sugerido ya en el capítulo anterior, así como la conveniencia de armonía social general predicada por Perón encontraba eco importante en la clase trabajadora, así también puede pensarse que el reconocimiento de los intereses respectivos del capital y el trabajo en colaborar mutuamente en el proceso de producción formaba parte en aquel momento de la cultura de la clase obrera. Esto suponía el reconocimiento general del derecho de los empresarios a ejercer el control y la autoridad, así como la aceptación general de un ideal ético según el cual la relación entre empleadores y empleados debía ser consensual. Esto parece haber sido reforzado por una genuina internalización, por parte de los trabajadores, del orgullo en el desempeño industrial argentino, que simbolizaba la recuperación de la estima propia bajo Perón.

Lo que tornó este problema tan complejo y cargado de dificultades tanto para el sector empresarial como para el Estado fue la circunstancia de que si bien pudo haber un acuerdo genuino y abstracto sobre la conveniencia ética de armonía y consenso, la traducción de ese acuerdo a la realidad concreta de las relaciones en el lugar de trabajo supuso versiones distintas de lo que esa situación ideal debía incluir. Desde el punto de vista de la clase obrera, sus nociones de cuál debía ser la fuente de inspiración de los parámetros legítimos de la autoridad gerencial eran profundamente influidas por la cultura del taller a que nos hemos referido y, en forma más general, por el nuevo status de los obreros en la sociedad. Esto significa que no obstante la aceptación general de la autoridad del empleador, en la práctica cotidiana de las fábricas la resistencia ofrecida por los trabajadores en torno de estos puntos representó en efecto un táctico desafío a los

conceptos fundamentales de la organización capitalista de la producción. Aunque no se lanzó ningún desafío manifiesto al control gerencial, el resultado concreto de la insistencia de los trabajadores en su definición del esfuerzo y las prácticas laborales aceptables en el sitio de trabajo consistió en poner sobre el tapete la autoridad de los empleadores dentro de sus fábricas.

Hacia fines del primer régimen peronista, los empleadores habían obtenido pocos resultados positivos en lo relativo a acuerdos laborales de alcance nacional y de cumplimiento obligatorio por la clase obrera. La cúpula sindical, consciente de la hostilidad de sus miembros, firmó el Acuerdo Nacional de Productividad estipulado por el Congreso de la Productividad, pero ese documento consistía en gran medida en una declaración de propósitos simbólica, lo menos que los dirigentes gremiales podían hacer en vista del considerable capital político personal invertido por Perón en la campaña. Una de las razones de este fracaso residió simplemente en la resistencia ofrecida en el taller y la planta. Frente a la desintegración de la coalición peronista inicial, la creciente dependencia en que se encontró Perón respecto de la clase trabajadora y los sindicatos puso un límite a la presión que el Estado podía ejercer en nombre de los empleadores. Este fracaso siguió obsediando a los empleadores argentinos. En abril de 1956, la Cámara de Industrias Metalúrgicas se hizo eco de la misma queja proferida por José Gelbard en el Congreso de la Productividad un año antes:

"Es urgente reestablecer la sana disciplina en las industrias que son hoy algo así como un ejército en el cual mandan los soldados y no sus jefes."⁴¹

RACIONALIZACIÓN Y REPRESIÓN EN EL TALLER Y LA PLANTA: LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA LLEGA AL LUGAR DE TRABAJO

Una vez resuelto el problema del poder de los delegados gremiales, el gobierno de Aramburu dirigió su atención al tema de la productividad. Lo abordó mediante el decreto 2739, de febrero de 1956, que autorizó un aumento salarial de emergencia del 10 por ciento mientras se negociaban acuerdos de más largo plazo. El artículo 8 autorizaba la movilidad laboral dentro de una fábrica si se la consideraba necesaria para acrecentar la productividad. El párrafo (d) de ese artículo permitía a los empleadores concluir acuerdos especiales con

sus trabajadores en lo relativo a nuevos sistemas de producción, por encima y al margen de las condiciones estipuladas en los contratos existentes. Las cláusulas vigentes relativas a las condiciones de trabajo y a las clasificaciones de las tareas serían prolongadas.

"con excepción de aquellas condiciones, clasificaciones y cláusulas que directa o indirectamente atenten contra la necesidad nacional de incrementar productividad, las que quedan eliminadas."⁴²

Por lo tanto, quedaba bien claro que nuevos acuerdos sobre salarios estarían sujetos a circunstancias relacionadas con la productividad. Pocos días después del decreto, Patrón Lapicette comentó que

"El gobierno después no hizo sino ordenar al Congreso de la Productividad que llegara a conclusiones conocidas y se limitó a anunciarlas sin tomar ninguna medida concreta al respecto."⁴³

Como reacción contra esas políticas y contra lo que significaban concretamente en términos de peores condiciones de trabajo y debilitamiento de la organización gremial en la fábrica y en el nivel nacional, importantes sectores de la clase trabajadora se embarcaron en la larga lucha defensiva que llegaría a ser conocida, en la cultura de la clase obrera peronista, como "la Resistencia". En parte constituyó una respuesta defensiva a la franca represión y al hostigamiento de los trabajadores en el sitio de trabajo. Casi todo operario que pudiera ser conceptualizado un "perturbador" era vulnerable y estaba expuesto a represalias al capricho del sector patronal. Particularmente vulnerables resultaron ser los delegados gremiales. La situación fue por cierto tan mala, que el Partido Socialista se sintió obligado a enviar a Aramburu, en junio de 1956, un memorial donde deploraba la contraproducente política del gobierno. A su juicio,

"en el ámbito obrero se considera que está en marcha un desquite patronal contra ellos que se ve alentado por la política del gobierno que no actúa para que se haga efectiva su promesa de garantizar la estabilidad pues en muchas partes se han hecho despidos en masa y se deja cesantes a los delegados en las fábricas."⁴⁴

En la aplicación de esa línea la policía colaboró ampliamente con los empleadores. Un panfleto emitido por obreros metalúrgicos de base se refirió así a una de las estrategias más comúnmente practicadas por los empleadores:

"El empresario que quiere desprenderse de operarios capaces de hacerse respetar en sus derechos y de exigir el cumplimiento fiel de las leyes o convenios moviliza a la policía y ésta, por intermedio de la Sección Orden Gremial de la Policía Federal, amasa un parte en el que siempre de una manera híbrida y con buen artificio atribuye al obrero el propósito de sabotear la producción. Simultáneamente lo detiene y lo comunica remitiéndolo a la Sección que corresponde de acuerdo al lugar donde se habría cometido el supuesto delito [...] no interesa ya, para los fines perseguidos, que el procesado sea puesto en libertad [...] la medida intimidatoria se cumplió y el despidió al que se atribuye justa causa legal por el patrón se hizo sin indemnización."⁴⁵

También era frecuente el hostigamiento dentro de los sindicatos. Los interventores eran con frecuencia socialistas, radicales o sindicalistas que, activos en la era anterior a 1946, ahora aprovechaban las nuevas circunstancias para ajustar viejas cuentas. También dentro de las fábricas, en el plano de los jefes y capataces, hubo mucho margen para la persecución por motivos personales. En los astilleros de Rosario, por ejemplo, el nuevo gobierno reemplazó a todos los ingenieros y jefes de taller. Según las palabras de un activista que trabajaba en los astilleros de ese tiempo, el nuevo jefe de ingenieros era

"un social demócrata muy gorila que había sido castigado por el peronismo. Entonces este hombre venía con mucho espíritu de revancha y él, y el técnico que fue nombrado jefe de talleres se rodearon de toda gente revanchista".⁴⁶

Esta nueva relación de fuerzas en el plano del taller y la planta fue una condición vital de cumplimiento indispensable para la aplicación de la política de productividad ideada por el gobierno. El decreto 2739 se convirtió en la Biblia de los empleadores que, según lo autorizaba el artículo 8, procuraban eliminar los "obstáculos a la productividad". Considerados individualmente, esos "obstáculos" eran cuestiones de poca monta, pero acumulados representaban mucho más. En el ánimo de los trabajadores constituyeron la decisiva piedra de toque mediante la cual podían evaluar el cambio de circunstancias operado desde la caída de Perón y medir las consecuencias concretas que la nueva conducción política del país significaba para su vida de trabajo. En este sentido tal vez hayan sido de más importancia, para confirmar la lealtad peronista de la mayoría de los trabajadores, que la cuestión lisa y llana de los salarios.

Un ejemplo típico de esos aspectos secundarios pero simbólicos consistió en la cláusula sobre procedimiento de conciliación contenida en la mayoría de los contratos de la era peronista. En el documento a que ya nos referimos, la Cámara de Industrias Metalúrgicas denunciaba:

"para resolver cualquier reclamación concurren el interesado y los miembros de la comisión interna, a veces en número de hasta cinco a los cuales se les debe abonar las horas perdidas. La concurrencia del reclamante, asistido por el asesor del sindicato, bastaría para garantizar la mejor defensa de sus intereses".⁴⁷

Debilitado el poder de las comisiones internas, los descos de los empleadores se convirtieron en la práctica común, lo que disminuyó las garantías de juicio imparcial que el trabajador individual pudiera tener en caso de disputa con el sector patronal.

En forma similar, las garantías contenidas en los contratos en lo referente a clasificación de los trabajos y a salarios eran ahora atacadas como improductivas restricciones de la movilidad laboral y del derecho de los patrones a distribuir a los trabajadores, dentro de las fábricas, como a ellos les pareciera mejor. En muchos casos, el artículo 8 fue interpretado como específicamente prohibitivo de esas salvaguardias. Los empleadores también se quejaban de los derechos de que disfrutaban los obreros cuando se enfermaban en el trabajo: derecho a que se los enviara a su casa, con el día pago, etcétera. También esto se encontraba ahora limitado.⁴⁸ Incluso hubo cambios más pequeños de un lugar de trabajo a otro, aunque pudiera argumentarse que tenían mayor significado inmediato para los trabajadores. En los astilleros de Rosario, por ejemplo, se suprimió el vaso de leche gratuito brindado a los que tenían a su cargo la insalubre tarea de limpiar la sala de máquinas, como se suprimió la provisión, obligatoria para la gerencia, de proporcionarles ropas especiales y máscaras protectoras.⁴⁹

Resultó claro, en consecuencia, que el drástico cambio operado en el equilibrio del poder en el plano político nacional no podía dejar de reflejarse en las fábricas. Sin embargo, una vez más los empleadores fueron decepcionados en lo relativo a resultados de largo término. Aunque hubo amplia supresión de "obstáculos para la productividad", no hubo aplicación en escala total de los planes de racionalización, ni renovación general de los contratos en un sentido vasto que consagrara legalmente nuevos acuerdos de alcance nacional para toda la

industria. Ello se debió en parte a la actitud ambigua del gobierno cuando hubo que interpretar la ley frente a casos reales. En este sentido los tribunales de arbitraje y los funcionarios del Ministerio de Trabajo no fueron uniformemente favorables a los empleadores y parecieron vacilar ante la incorporación en masa, en los contratos existentes, de nuevas cláusulas sobre acuerdos en materia de productividad. Esta ambigüedad por parte del gobierno se explica en cierto modo por la resistencia que provocaba en la clase obrera la ofensiva en favor de la productividad, cuya eficacia se redujo. Pero cualesquiera que hayan sido las limitaciones de la implantación general de nuevos planes de trabajo, el efecto total de la supresión de cláusulas que regulaban las condiciones de trabajo y el ataque contra la organización laboral en el nivel de taller y planta fue tal que los obreros consideraron este período como uno de abuso empresarial sin restricciones. Un período sindical lo expresó así:

"En particular los empresarios intentaron ignorar y debilitar a las comisiones internas [...] todos estos casos nos dan la pauta de que estamos frente a un revanchismo desmedido e injustificado de los industriales."⁵⁰

ORGANIZACIÓN DE LA RESISTENCIA EN LAS FÁBRICAS

Fue precisamente para defenderse contra ese "revanchismo" apoyado por el gobierno que los trabajadores emprendieron en las fábricas un proceso de reorganización que apuntaba a mantener las conquistas logradas bajo Perón. Se trató de un proceso fundamentalmente espontáneo y localizado. Un activista de base lo describió en los siguientes términos:

"En realidad todo se da en un proceso larvado, embrionario y gradual que surge de las bases mismas del movimiento obrero y que no es dominado por los viejos burocratas pero tampoco consigue consolidar en la dirección ni siquiera local en Rosario ni siquiera nacional [...], en realidad es un poco como son islotes. Porque yo recuerdo que nosotros, los hombres de ATE en Rosario empezamos a formar una agrupación semiclandestina, la mayoría eran jóvenes que no habían tenido participación antes del 55 y aparte tenemos muy poca vinculación con otros gremios. Recuerdo que aparte de reuniones en casas particulares la única comunicación con otra gente gremial que teníamos era con vitivinícolas, UTA, ATE de Puerto Borghi y madera."⁵¹

Esas agrupaciones semiclandestinas, que a menudo se reunían en casas privadas, basaron su actividad en cuestiones muy concretas. En el caso del grupo que se acaba de mencionar, una de las primeras medidas adversas contra las cuales se organizaron fue la supresión de la jornada de 6 horas para el trabajo insalubre y la no provisión de ropa protectora. Más común como motivo de encuentro y de organización fue la defensa de los delegados gremiales. En CATTIA, gran planta metalúrgica de la provincia de Buenos Aires, se efectuó en diciembre de 1955 una huelga exitosa contra el despido de varios delegados.⁵² En el Frigorífico Lisandro de la Torre, de la Capital Federal, se realizaron en abril de 1956 una movilización y una huelga contra el arresto de tres delegados por el interventor militar. Dirigió la huelga un comité integrado por militantes de base y al cabo de 6 días los delegados fueron puestos en libertad.⁵³

No todas las luchas tuvieron el mismo éxito, pero hacia mayo y junio de 1956 había cada vez más signos de la creciente confianza obrera y la mayor organización de comités semiclandestinos. Tanto en el frigorífico Swill de Rosario como en el de Berisso comités no oficiales organizaron huelgas también exitosas con motivo de los mismos problemas.⁵⁴ El comité no oficial que había organizado la huelga en la planta Lisandro de la Torre fue reconocido oficialmente por el interventor, en el mes de junio, como representativo de los trabajadores. Por supuesto, no se trató de un proceso uniforme; mucho dependió del estado de organización sindical que se hubiera alcanzado en cada fábrica antes de la revolución de setiembre. Bajo Perón, los trabajadores de la carne habían sido uno de los gremios mejor organizados y más militantes. También representaban un sector decisivo de la economía. Era obvio que a trabajadores de sectores menos importantes y con menor tradición de organización militante les resultaría más difícil abordar la tarea de reorganizarse en gran proporción clandestinamente. Incluso en los frigoríficos la organización de esos comités fue en gran medida un proceso que se cumplió planta por planta. El caso fue que para mediados de 1956 esa corriente adquirió mayor impulso y que las autoridades militares designadas en la intervención de varios otros sindicatos organizaron un reconocimiento de hecho.⁵⁵

Esc reconocimiento de los comités no oficiales significó, por parte de los militares, la admisión de que no habían acertado, en vista de la respuesta dada por las bases obreras, a eliminar efectivamente las comisiones internas o erradicar de

ellas la influencia peronista. Una conclusión similar se derivó de las elecciones de delegados ante las comisiones que negociaban salarios. Esas elecciones empezaron en marzo de 1956, y a despecho de las maniobras efectuadas por los interventores con el fin de asegurar la presencia de mayorías antiperonistas, en la mayor parte de los sindicatos fueron elegidos delegados peronistas. En Alpargatas, la mayor planta textil del país, más de 12.000 obreros votaron por la lista peronista, en tanto que la lista socialista sólo recibió 400 sufragios.⁵⁶ Allí donde las maniobras de los interventores imposibilitaron la realización de comicios libres, los comités no oficiales organizaron abstenciones en gran escala y campañas de "voto en blanco".

La tendencia demostrada por las elecciones para las comisiones salariales fue confirmada por las que se realizaron en agosto, setiembre y octubre para designar comisiones internas. La convocatoria misma a esos comicios fue por sí sola una admisión, por las autoridades, de que no habían podido, en vista del creciente número de comisiones no oficiales, imponer a representantes obreros designados por los militares. En octubre, la Cámara de Industrias del Calzado denunció ante el Ministerio de Trabajo que

"en la mayoría de las fábricas los dirigentes obreros vuelven a ser los mismos que en épocas que considerábamos superadas entorpecieron con sus actitudes el normal desenvolvimiento de las tareas. Todos los cargos caen en manos de indudables adictos del régimen depues-

to".⁵⁷

Esta confirmación del dominio de la clase trabajadora por los peronistas en el nivel de planta arraigaba en la lucha por defender conquistas inmediatas. En un importante sentido nunca se había dudado de esto, nunca se había registrado una oscilación de las opiniones por la cual hubiese podido pensarse que la lealtad al peronismo era jaqueada con éxito. Al describir la respuesta inicial de la clase trabajadora al golpe de setiembre de 1955, un obrero peronista, al que citamos en el capítulo anterior, había dicho que "defendimos instintivamente algo que sentíamos estar perdiendo". El gobierno de Aramburu-Rojas inmediatamente dio un contenido concreto a ese "algo". Los ataques a las comisiones internas, el "revanchismo" general en los lugares de trabajo, la ofensiva contra las condiciones laborales, todo ello explicó muy clara e inmediatamente qué era lo que se perdía y señaló el contraste con la era peronista. La política del nuevo gobierno y de los

empleadores reforzó directamente la identificación de Perón y el peronismo con esas experiencias concretas y cotidianas de los trabajadores. Lo cual también fue subrayado por la actitud de otros sectores que bregaban por conquistar la opinión de la clase obrera.

SOCIALISTAS Y COMUNISTAS EN LA ÉPOCA DE ARAMBURU

La posición de los socialistas era particularmente ambigua. Consideraban que la Revolución Libertadora tenía por fin restablecer la democracia y poner fin a la tiranía de Perón. En cuanto tal no era la revolución de una clase, sino que más bien representaba las aspiraciones unidas de todas las fuerzas democráticas. La prensa socialista recordaba con frecuencia a los empleadores y al gobierno que la revolución no se proponía enfrentar a la clase obrera y que los ataques contra los salarios y las condiciones de trabajo constituían una tralación a sus propios ideales. Sin embargo, a la vez advertían que librada a sí misma la clase trabajadora continuaría, en su mayoría, siendo leal al peronismo. En vista de ello, era preciso reconocer la necesidad de limitar la actividad peronista, tanto políticamente como en los sindicatos. Esto condujo a los socialistas a adoptar una actitud ambivalente ante las medidas gubernamentales que afectaban a la clase obrera y los gremios. Por un lado, criticaron abiertamente a los militares por coligarse con los empleadores en el ataque a las condiciones y derechos básicos de los trabajadores. Por otro, también condenaban al gobierno cuando reconocía las comisiones de trabajadores de base, dominadas por los peronistas, que defendían aquellas condiciones y derechos. Tal como muchos otros demócratas declarados de aquel tiempo, los socialistas estaban atrapados en un círculo vicioso: en vista de que los trabajadores, contrariamente a lo esperado de ellos, no comprendían que se habían equivocado al apoyar a Perón, ahora resultaba claro que la aplicación de los principios democráticos confirmaría la lealtad de la clase trabajadora al peronismo, anfitesis misma, según los socialistas, de la libertad y la democracia.

Más aún, los socialistas y otros militantes no peronistas no se avenían a aceptar las implicaciones de una experiencia de diez años de sindicalismo y de mejoramiento de los salarios y condiciones de trabajo con el respaldo del Estado. A juicio de todos ellos esto había significado una desviación del de-

sarrollo saludable del movimiento obrero, proceso donde trabajadores de insuficiente nivel intelectual habían sido desca- triados por un demagogio corrupto. Las ventajas obtenidas, por lo tanto, estaban manchadas en un sentido moral por su nexo con un gobierno paternalista y democrático. En la práctica, esto condujo a que se asociara a los socialistas con la política del gobierno y los empleadores, circunstancia claramente simbolizada por las figuras de eminentes socialistas en la jefatura de sindicatos intervenidos.⁵⁵

Sin duda alguna, esto fue un problema particular de los dirigentes socialistas anteriores a 1946. Sin embargo, incluso los militantes de base se encontraban desconcertados cuando intentaban identificarse con las luchas obreras, elementales y en gran medida espontáneas, que tenían lugar en ese momento. Esos socialistas representaban una tradición diferente y otro concepto de actividad organizada de la clase trabajadora. Acerca de una huelga espontáneamente declarada por los conductores de ómnibus de Buenos Aires, un militante socialista deploró:

"Una huelga gremial se prepara y se decide; generalmente se anuncia con actos y declaraciones preliminares tendiendo a lograr con esa primera manifestación coactiva la finalidad que se persigue."⁵⁶

Esta actitud les dejaba escaso terreno común con los peronistas que integraban las comisiones no oficiales.

Durante todo ese período el Partido Socialista observó oficialmente una actitud de superioridad moral, de queja y de admonición continua a la clase obrera por su incapacidad para comprender que sus verdaderos intereses se encontraban al margen del peronismo. Su política osciló entre referendar en la práctica las medidas del gobierno militar y proclamar la necesidad de una regeneración moral y una reducción de los trabajadores peronistas. Un editorial de *La Vanguardia* se lamentaba así:

"La auténtica masa obrera [...] no ha podido ser asistida, moralmente por quienes tuvieron la virtud de mantenerse lejos de la contaminación demagógica y del bajo electoralismo. Aunque resulte difícil explicarlo esta masa obrera no ha podido todavía ser liberada de influencias tan regresivas como perniciosas."⁵⁷

Si bien los comunistas compartían muchas de las mismas actitudes básicas frente al peronismo y su influencia sobre los

trabajadores, en general adoptaron un enfoque más realista. Aunque tomaron parte en algunos de los ataques iniciales lanzados contra los sindicatos peronistas en setiembre, pronto adoptaron en las fábricas una línea de trabajo junto a los obreros peronistas en defensa de las condiciones laborales y la permanencia de los delegados gremiales. Esto significó para los comunistas el problema de que luchar junto con los peronistas esencialmente en el mismo terreno les dejaba prácticamente muy poco que les permitiera diferenciarse de ellos o que pudieran ofrecerles para atraerlos a sus propias filas. Si bien en ese tiempo trabajaron con los peronistas en muchos sindicatos y fueron aceptados por los peronistas de base como aliados en una forma en que muy pocos socialistas lo fueron, nunca hicieron peligrar el poder del peronismo sobre la mayoría de los obreros. Fuera del terreno de la lucha por un objetivo inmediato, el Partido Comunista como tal inspiraba fuertes recelos. En parte esto reflejó recuerdos del anterior antiperonismo del PC, y en parte sospechas sobre la estrategia general de ese partido en ese momento, en que pareció apuntar a lograr la aceptación del PC como fuerza esencial del campo "democrático". Muchos obreros peronistas sospecharon que la línea dura adoptada por los comunistas en el campo gremial era negociable por una apertura que diera entrada al PC en el escenario político.⁶¹

Hacia fines de 1956 el gobierno había llegado a aceptar, con renuencia, que era imposible borrar tranquilamente el peronismo de los sindicatos por medio de decretos o simple represión. También se convenció de la falta de viabilidad de otros candidatos al liderazgo de la clase trabajadora. La política que emergió de esta visión consistió, en general, en mantener la línea dura y en una tentativa por disminuir el continuo dominio absoluto del peronismo en los gremios. Se adoptaron medidas para debilitar todo futuro movimiento sindical: garantizar la representación de la minoría, permitir que los trabajadores de cada industria fueran representados por más de un solo sindicato, otorgar a los organismos locales de la CGT autonomía respecto de la central obrera. Ante todo el gobierno de Ariburu intentó, en las elecciones sindicales que empezaron a efectuarse de octubre de 1956 en adelante, poner en manos de los antiperonistas una porción significativa, aunque minoritaria, del movimiento gremial. Se estimó que con un grado suficiente de intervención del gobierno y manipulación por parte de los interventores militares en ese proceso electoral, el avance peronista en el movimiento obrero

sería mantenido dentro de límites aceptables. Esa política tuvo escaso éxito. Los resultados de las primeras elecciones realizadas en octubre no hicieron más que confirmar la tendencia ya expresada en las elecciones de las comisiones internas y los delegados para las negociaciones salariales.⁶²

LA LUCHA SALARIAL DURANTE EL GOBIERNO DE ARAMBURU

La política de ingresos del gobierno de Aramburu se basó inicialmente en el supuesto de que la inflación resultante de la devaluación del peso, lo cual formó parte de la estrategia del nuevo régimen, no superaría el 10 por ciento. El aumento salarial concedido en febrero de 1956 se fundó en ese supuesto. Pero la devaluación, combinada con la relajación de los controles gubernamentales sobre los precios, llevaron la inflación muy por encima de esa cifra. Los empleadores apelaron a las nuevas circunstancias políticas para reajustar los márgenes de beneficio, que a juicio de ellos habían sido mantenidos durante años en bajo nivel por los controles del régimen peronista. En consecuencia las comisiones salariales, que habían empezado a reunirse a mediados de 1956, se encontraron con una intransigencia poco menos que absoluta por parte de los patronos. Los ofrecimientos de éstos consistían por lo general en porcentajes sobre las tasas de 1954 y su otorgamiento efectivo estaba casi siempre condicionado a la aceptación de cláusulas sobre racionalización. La mayoría de los trabajadores ya ganaban bastante más que los salarios básicos, de modo que los aumentos ofrecidos les significaron muy poco. El resultado consistió en crecientes conflictos que, en definitiva, fueron resueltos por el tribunal de arbitraje establecido por el decreto 2739.

Para los trabajadores los resultados fueron desparejos. En términos reales ganaban ciertamente muy poco; los salarios reales, que habían aumentado ligeramente en 1956, cayeron agudamente en 1957 al alcanzar la inflación una tasa del 25 por ciento.⁶³ De cualquier manera, durante ese período hubo una evidente redistribución de la renta que desfavoreció a la clase trabajadora, y puesto que en el mismo período no hubo mayores signos de que aumentara la inversión interna,

"existe una fuerte presunción de que el principal resultado de la distribución del ingreso en este período fue la reducción de la parte de los asalariados en beneficio de los más acomodados".⁶⁴

La verdad es que el significado de la cuestión de los salarios bajo Aramburu residió más en la esfera de lo que se percibía y se pensaba que en la simple y directa cuestión del aumento o la caída de los salarios reales. A fin de cuentas, los salarios reales habían declinado también por momentos, bajo Perón, particularmente a principios de los años 1950-60. Lo que agregó después otro significado al problema fue la intensidad del antagonismo social y la animosidad existentes. Habitualmente las concesiones salariales eran arrancadas, al cabo de una áspera lucha, a un sector patronal reacio a otorgarlas. Cuando se producían huelgas prolongadas, el gobierno invariablemente intervenía para declararlas ilegales y tomar en sus manos la tarea de romperlas. El resentimiento resultante fue tanto mayor cuando la batalla de las huelgas se libró en un contexto general de crecimiento económico firme, aunque no fuese espectacular. Esto no sólo aguzó en la mayoría de los trabajadores la conciencia de la injusticia de la política salarial gubernamental; además puso de relieve el papel directo que desempeñaba el gobierno en el mantenimiento de un bajo nivel de vida. La declinación de los salarios reales y la insatisfactoria redistribución de la renta no eran efecto de una crisis económica general y una creciente desocupación. Las mismas estadísticas de huelgas testimoniaban la capacidad de los trabajadores para defender sus salarios en puros términos de mercado laboral. La declinación de los niveles de vida resultaba más bien de una derrota política, es decir la caída de Perón, antes que de circunstancias económicas adversas. Era el resultado directo del ataque gubernamental contra los sindicatos y de una congelación salarial respaldada por el gobierno. El gobierno y los empleadores imponían por medios legales y gracias al poder del Estado lo que no eran capaces de imponer mediante los mecanismos del mercado laboral.

Las luchas salariales de fines de 1956 ayudaron a consolidar el creciente movimiento de resistencia. La huelga más grave desde el punto de vista gubernamental, y en muchos sentidos un símbolo de la aspeceza de las relaciones industriales en ese momento, fue el paro metalúrgico de fines de 1956. Descadenada inicialmente por el ofrecimiento patronal de un aumento de sólo el 20 por ciento sobre los salarios básicos de 1954, la huelga duró más de seis semanas y se centró cada vez más en torno de la liberación de los trabajadores detenidos y la reincorporación de millares de despedidos. Durante la huelga, aviones y vehículos movlizados por

el gobierno distribuyeron volantes donde se exhortaba a los comerciantes de los suburbios obreros, como Avellaneda y Lanús, a no abrirles crédito a los huelguistas. Canchones con altoparlantes recorrieron esos barrios dando los nombres de los jefes huelguistas y exhortando a los trabajadores a volver a sus ocupaciones porque otros obreros lo estaban haciendo. Tanques y tropas patrullaron las calles; la policía entraba en bares y cafés elegidos al azar y expulsaba a los obreros metalúrgicos.⁶⁵ La mayor parte de las plantas fueron ocupadas por el ejército, que efectuaba ostentosas maniobras en las inmediaciones.

La huelga fue dirigida por comités de militantes de base que constituyeron una formidable estructura organizativa y manejan el movimiento por medio de frecuentes reuniones entre delegados y bases, además de crear numerosas comisiones para movilizar el apoyo de la comunidad. Aunque la huelga no triunfó en lo relativo a reclamaciones salariales concretas, los trabajadores no la recordaron después como una derrota desmoralizante, ni tampoco la presentaron así las publicaciones gremiales de aquel momento. Más bien llegó a constituir un símbolo del orgullo de la clase obrera por su capacidad para organizarse y enfrentar a los empleadores y al Estado. A ese sentimiento de orgullo y solidaridad comunitaria se sumó una profunda amargura. Los obreros que dirigieron la huelga eran hombres buscados que vivían en la clandestinidad. Finalmente los huelguistas volvieron al trabajo al recibir una promesa de mejor pago, pero no de libertad para los detenidos ni garantías de reincorporación de los despedidos. Más aún, los despedidos en masa continuaron en la industria metalúrgica a medida que los obreros reanudaban sus tareas. En algunas plantas fueron despedidos entre el 50 y el 70 por ciento. En la firma CAMEA, una de las principales de Buenos Aires, los empleadores pidieron que los obreros firmaran antes una petición de reincorporación; cuando se negaron, los 1300 que había en la planta fueron despedidos.⁶⁶

La huelga metalúrgica fue el peor ejemplo de intranquilidad gubernamental y patronal que se dio en ese período, pero no el único. En el tramo final de 1956, las huelgas estalladas en las industrias de la construcción, el calzado, gráfica, textil, de la carne y de la construcción naval fueron declaradas igualmente ilegales y los huelguistas sometidos a un tratamiento similar. La ira ante la ferocidad de la represión y el orgullo por la resistencia obrera debían perdurar como parte decisiva de la cultura militante que nació en ese tiempo.

Raimundo Villafior, miembro del comité de metalúrgicos de Avellaneda, describió así, años después, la forma en que los 29 integrantes de ese comité fueron arrestados finalmente por la policía:

"Éramos veintinueve miembros del plenario cuando llegó la brigada con camiones, toda la palota [...] los estaban subiendo al camión policial. La gente se amontonaba y la policía dijo que eran ladrones, qué grande: una banda de 29 ladrones. Entonces ellos gritaban: '¡No somos ladrones, somos obreros!' Pero igual los llevaron."⁶⁷

Bajo Perón los trabajadores habían padecido los efectos de la inflación y soportado tiempos difíciles, pero rara vez habían sido cazados y tratados como ladrones.

NOTAS

¹ *Crítica*, 19 de setiembre de 1955.

² *Crítica*, 21 de setiembre de 1955.

³ Santiago Senén González y Juan Carlos Torre: *Ejército y sindicatos*, Buenos Aires, 1969, pág. 12.

⁴ *Ibid.*, pág. 33.

⁵ *El Obrero Ferroviario*, octubre de 1955. Un fenómeno similar se presentó en los sindicatos de obreros del petróleo, de la carne y del vestido.

⁶ CGT, 7 de octubre de 1955.

⁷ *Ibid.*

⁸ *La Vanguardia*, el diario socialista, publicó hacia fines de octubre una información sobre la situación sindical en Rosario donde atacó energicamente la actitud de las autoridades locales de devolver la sede de la CGT a los peronistas, después de que hubiera sido tomada por una comisión local socialista/sindicalista. Véase *La Vanguardia* del 27 de octubre de 1955.

⁹ Véase Senén González y Torre: *Ejército y sindicatos*, págs. 87-90, en lo relativo a diferentes respaldos civiles de distintas tendencias militares.

¹⁰ *Crítica*, 2 de noviembre de 1955.

¹¹ Véase la declaración formulada al respecto por Cerrutti Costa, en Senén González y Torre: *Ejército y sindicatos*, págs. 137-43. Acerca de los pensamientos y actos de Lonardi en ese período véanse Luis Ernesto Lonardi: *Dios es justo*, Buenos Aires, 1958, y María Lonardi: *Mi padre y la revolución del 55*, Buenos Aires, 1980.

¹² Senén González y Torre: *Ejército y sindicatos*, pág. 139.

¹³ *Ibid.*, pág. 97.

¹⁴ *La Nación*, 24 de setiembre de 1955, menciona tiroteos que se produjeron en Avellaneda con intervención de "elementos

indisciplinados". Detalles de la manifestación en Lanús hay en Roberto: "De la resistencia peronista a las elecciones del 11 de marzo". *Peronismo y Socialismo*, n° 1, setiembre de 1973.

¹⁵ *La Nación*, 26 de setiembre de 1955.

¹⁶ Entrevista con Alberto Belloni, Buenos Aires, 14 de enero de 1974. En ese momento Belloni trabajaba en el puerto de Rosario.

¹⁷ *New York Times*, 25 de setiembre de 1955. Esta es una de las mejores fuentes acerca de los sucesos de la Argentina en ese tiempo: ciertamente muchos sucesos que nunca aparecieron en la prensa argentina pueden encontrarse allí.

¹⁸ Juan M. Vigo: *La vida por Perón: crónicas de la Resistencia*, Buenos Aires, 1973, pág. 54.

¹⁹ *Ibid.*, pág. 50.

²⁰ *New York Times*, 20 de octubre de 1955.

²¹ Entrevista con Alberto Belloni.

²² *New York Times*, 4 de noviembre de 1955. Este diario da para todo el país una cifra de ausentismo del 65 por ciento, que llegó al 100 por ciento en los barrios de mayor concentración industrial.

²³ Roberto: "De la resistencia peronista".

²⁴ Vigo: *La vida por Perón*, pág. 55.

²⁵ Véase Senén González y Torre: *Ejército y sindicatos*, pág. 54.

²⁶ *New York Times*, 15 de noviembre de 1955.

²⁷ Vigo: *La vida por Perón*, pág. 69.

²⁸ *La Nación*, 16 de noviembre de 1955. Sólo se abstuvieron de responder aquellos sindicatos ya tomados por los antiperonistas, como los de empleados de comercio y los bancarios, y los servicios públicos, que los militares mantuvieron abiertos por la fuerza.

²⁹ *New York Times*, 16 de noviembre de 1955.

³⁰ Miguel Gazzera: "Nosotros los dirigentes", en Norberto Ceresole y Miguel Gazzera: *Peronismo: autocrítica y perspectivas*, Buenos Aires, 1970, pág. 61.

³¹ Declaración del ministro de Trabajo, Raúl Migone, *La Nación*, 17 de noviembre de 1955.

³² El decreto 14.190, que modificó el anterior decreto 7107, habló de la rehabilitación de aproximadamente 92.000 personas. Sin embargo, aún después de esto algunos observadores sostuvieron que más de 50.000 seguían legalmente proscriptas de la actividad gremial. Véase *Qué*, 26 de agosto de 1956.

³³ Esto sucedió por ejemplo en las plantas de la SIAM Di Tella. Véase *La Verdad*, 28 de noviembre de 1955.

³⁴ *Qué*, 21 de diciembre de 1955.

³⁵ *La Verdad*, 2 de enero de 1956.

³⁶ *La Vanguardia*, 5 de enero de 1956.

³⁷ Véase el discurso de José Gelbard, presidente de la Confederación General Económica, ante el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar celebrado en marzo de 1955, en el informe sobre las actas de dicho congreso. *Hechos e Ideas*, Buenos Aires, 1955, pág. 282.

³⁸ *Ibid.*, pág. 280.

³⁹ Detalles de esa resistencia hay en Daniel James: "Rationalization and working class response: the limits of factor floor activity in Argentina", *Journal of Latin American Studies*, vol. 3, parte 2, 1981, págs. 375-402.

⁴⁰ Véase Doyon: "Conflictos obreros".

⁴¹ *Qué*, 25 de abril de 1956.

⁴² Ministerio de Trabajo y Previsión: *Nuevo régimen de remuneraciones y de las convenciones colectivas de trabajo*, Buenos Aires, 1956.

⁴³ *La Nación*, 20 de febrero de 1956. Un nuevo decreto, el 6121, dado en abril de 1956, establecía específicamente que en el caso de modernizarse una fábrica no se aplicarían las provisiones sobre el número de operarios consagrados a cada trabajo.

⁴⁴ *La Vanguardia*, 21 de junio de 1956.

⁴⁵ Folleto sin fecha pero probablemente de fines de 1956, en el archivo del autor.

⁴⁶ Entrevista con Alberto Belloni, Buenos Aires, enero de 1974.

⁴⁷ *Qué*, 25 de abril de 1956.

⁴⁸ Un laudo arbitral dado en la industria frigorífica declaró que las normas existentes de licencia por enfermedad constituían un "obstáculo indirecto" a la productividad tal como se la definía en el decreto 2739, Ministerio de Trabajo y Previsión: *Laudo del tribunal arbitral*, n° 63/1956, Buenos Aires, 1956.

⁴⁹ Entrevista con Alberto Belloni, Buenos Aires, enero/febrero de 1974.

⁵⁰ *El Vitivinícola*, febrero de 1956.

⁵¹ Entrevista con Alberto Belloni, Buenos Aires, enero/febrero de 1974.

⁵² *Lucha Obrera*, 22 de diciembre de 1955.

⁵³ Entrevista con Sebastián Borro, Buenos Aires, enero de 1974.

⁵⁴ *Unidad Obrera*, junio de 1956.

⁵⁵ Véase en *La Vanguardia*, 17 de mayo de 1956, una enérgica denuncia de los socialistas contra esa tendencia.

⁵⁶ *Unidad Obrera*, junio de 1956.

⁵⁷ *Qué*, 9 de octubre de 1956.

⁵⁸ Los ejemplos más prominentes fueron Ángel di Giorgio, interventor del sindicato de tranviarios, y Francisco Pérez Leirós, en el sindicato de trabajadores municipales.

⁵⁹ *La Vanguardia*, 31 de mayo de 1956.

⁶⁰ *La Vanguardia*, 16 de agosto de 1956.

⁶¹ En realidad el partido fue autorizado a participar en las elecciones de la asamblea constituyente, realizadas en julio de 1957. En ese tiempo hubo una notable declinación de su militancia sindical.

⁶² Los peronistas triunfaron en los sindicatos industriales, y los libres en algunos gremios de empleados, como los de comercio. También los trabajadores del vestido eligieron una lista socialista, y los gráficos una encabezada por un sindicalista.

⁶³ CEPAL: *Economic Development and Income Distribution in Argentina*, Nueva York, 1969, pág. 254.

⁶⁴ R. Mallon y Juan Sourrouille: *Economic Policy Making in a Conflict Society*. Cambridge, Massachusetts, 1975, pág. 18. Hay versión castellana. Un autor calcula que la parte correspondiente a los salarios en la renta nacional bruta declinó del 49,5 por ciento en 1955 al 47,3 por ciento en 1957. Véase Clarence Zuvekas (h.): "Economic growth and income distribution in post-war Argentina", *Inter-American Economic Affairs*, vol. 20, n° 3, 1966, págs. 19-39.

⁶⁵ Entrevista con Ernesto González, Buenos Aires, febrero de 1974.

⁶⁶ Volante en poder del autor, sin fecha, pero publicado por grupos de base a principios de enero de 1957. Una información publicada por *La Vanguardia* el 3 de enero de 1957 confirmó la noticia del incidente.

⁶⁷ Rodolfo Walsh: *¿Quién mató a Rosendo?*, Buenos Aires, 1969, pág. 19.

3

Comandos y sindicatos: surgimiento del nuevo liderazgo sindical peronista

"No teníamos armas, no podíamos hablar, ni volar, ni hacer nada. No teníamos explosivos; el sabotaje era la única manera que teníamos de enfrentar esta banda que nos explotaba. No teníamos libertad de prensa, nada. Todo lo que teníamos era el Decreto 4161 que decretaba que con sólo mencionar a Perón podíamos ir en cana. No podíamos tener ni siquiera una foto de Perón en nuestras casas. Así que recurrimos a los caños."

Juan Carlos Brío

VEJOS Y NUEVOS LÍDERES SINDICALES

Quiénes dirigieron las huelgas de 1956, y quienes resullaron elegidos en los sindicatos donde se permitió la normalización, eran en gran medida figuras nuevas surgidas en el curso de las luchas suscitadas en las fábricas y talleres desde la caída de Perón. En el vacío creado por el decreto 7107, que proscribió a muchos de los que eran hasta entonces dirigentes gremiales, adquirieron naturalmente prominencia los activistas que se habían distinguido en la acción diaria en los sitios de trabajo. La actitud de éstos frente a los anteriores líderes gremiales es bien ilustrada por la despectiva descalificación que Sebastián Borro pronunció de los antiguos dirigentes de su gremio, el de la carne, quienes

"gritaban mucho 'Viva Perón' pero no hacían nada [...]. Eran hombres que esperaban todo desde arriba, nada de lucha de abajo. Y se ve eso cuando cae Perón. Allí empieza nuestra lucha en el frigorífico Lisandro de la Torre; comenzamos con un pequeño grupo, casi toda gente nueva, había tal vez 2 o 3 viejos dirigentes que no habían desaparecido".¹

No todos los antiguos dirigentes se eclipsaron del escenario o fueron víctimas de semejante desprecio. Algunos habían adoptado desde el principio una posición de intransigencia y mantenido un relieve propio entre los militantes de base. Augusto Vandor, metalúrgico, Miguel Gazzera, de los fideeros, y Aníbal Olmos, del personal no médico de hospitales, constituyeron ejemplos de jóvenes líderes surgidos como importantes figuras en sus sindicatos en las etapas postreras del régimen peronista y que ahora, desde la cárcel, continuaban influyendo sobre sus gremios. Cuando un dirigente anterior había mantenido su actitud de lucha, los nuevos líderes elegidos en 1956 y 1957 con frecuencia se consideraron a sí mismos como reemplazantes provisionales hasta que aquél pudiera volver a ocupar su posición.

Los antiguos dirigentes que optaron por seguir influyendo en los gremios y en el movimiento peronista en general empezaron, en 1956, a organizarse entre sí. En 1957 ya existían cuatro grupos principales: la CGT Única e Intransigente, el Comando Sindical, la CGT Negra y una entidad llamada simplemente CGT. La mayoría de esos grupos tenía, en el mejor de los casos, una influencia muy limitada sobre los militantes de base. Su influjo aumentó algo cuando se unieron, en julio de 1957, para formar la CGT Auténtica, con Andrés Framini en el cargo de secretario general. Framini era realmente un caso típico de la especie de influencia residual que ejercía la CGT Auténtica. Dirigente de los textiles desde comienzos de los años 1950-60, su actitud intransigente desde noviembre de 1955 y su encarcelamiento habían devuelto algún lustre a su decaída reputación entre los trabajadores peronistas.

Entre esos grupos y la nueva dirigencia emergente hubo fricciones. Reflejaron en parte distintos temperamentos, diferentes clases de personas y distintas prácticas sindicales. Los nuevos líderes, que en gran medida habían surgido de una lucha democrática espontánea y *de facto* en las plantas y talleres, tendieron a llevar esa experiencias a las prácticas de los sindicatos renormalizados. Muy pocos de ellos habían tenido alguna experiencia de la jerarquía sindical peronista, y

en general debían sus posiciones actuales principalmente a su actividad en la resistencia diaria a las políticas de los empresarios y del gobierno. Existía por lo tanto una estrecha identificación entre los militantes de base y los nuevos líderes, y esto se reflejó en una mayor democratización de la práctica sindical. Sebastián Borro, líder obrero en el Frigorífico Lisandro de la Torre, recordó:

"Una vez un general me dice, 'usted permite que hablen los comunistas'. Yo le dije:

'En mi gremio yo practico la democracia sindical. Todos los aliados tienen derechos y responsabilidades. Yo respeto los derechos, ellos tienen que cumplir con las obligaciones.'"²

También Alberto Belloni recuerda que su sindicato, en Rosario, celebraba regularmente reuniones a las que asistían más de 300 trabajadores aún antes de que la entidad gremial hubiera sido formalmente normalizada.³ Esta mayor intervención en los asuntos sindicales no sólo reflejó una actitud distinta por parte de los nuevos líderes sino también el deseo, por parte de los trabajadores mismos, de asumir un papel más activo. Tal posición fue robustecida por la índole de la lucha que se libraba en aquel momento. Frente a un Estado hostil y condenada gran parte de la actividad gremial básica a una legalidad a medias, que sólo dejaba muy poca estructura burocrática formal en condiciones de ser utilizada, se operó un inevitable aumento de la participación del militante común. Además de sentirse amenazados por ese nuevo espíritu, los antiguos dirigentes se resistieron al verse obligados a quedar al margen y observar cómo sus sindicatos se ponían cada vez más fuera de su alcance. Ese sentimiento se intensificó a medida que, durante todo 1957, fueron surgiendo más estructuras formalizadas que contribuyeron a definir el perfil del movimiento, en gran medida espontáneo, de 1956.

LA INTERSINDICAL Y LAS 62 ORGANIZACIONES

A comienzos de 1957, algunos de los gremios normalizados crearon una Comisión Intersindical con el fin de promover el restablecimiento completo de todos los sindicatos mediante elecciones libres, la reaparición de la CGT, la suspensión de todas las restricciones legales que trababan la intervención en cuestiones sindicales y la liberación de todos los encarcelados por sus actividades gremiales. La fuerza

impulsora inicial de la Intersindical fueron los comunistas, pero pronto la entidad pasó a manos de otros que quisieron emplearla como primera estructura legal en torno de la cual podría organizarse alguna presión sobre el gobierno. En abril de 1957 la Intersindical afirmó que le respondían treinta y cinco sindicatos y cinco federaciones, y meses después, a medida que mayor número de grandes gremios, como los textiles, los metalúrgicos y los obreros de la carne, fueron ganados por los peronistas, su influencia se acrecentó.⁴ Disminuida la influencia comunista inicial sobre el comité organizador, en julio éste se encontraba ya bajo el dominio de los peronistas. El 1º de mayo de 1957 la Intersindical realizó una manifestación para celebrar el día internacional de los trabajadores; fue el primer acto público legal efectuado por los obreros desde noviembre de 1955. Para el 12 de julio la central obrera dispuso una huelga general con el fin de pedir la liberación de todos los presos sindicales y la normalización completa de los gremios. Cálculos no oficiales estimaron en alrededor de dos millones y medio el número de los que participaron en la huelga.⁵

La creciente influencia de la Intersindical avivó el antagonismo latente entre los viejos líderes gremiales peronistas y los nuevos. Para los anteriores dirigentes, el poder de la Intersindical representaba una amenaza directa a sus esperanzas de recobrar sus antiguas posiciones, puesto que la legalidad misma en que actuaba confirmaba la legitimidad del nuevo elenco dirigente. En los círculos clandestinos del movimiento peronista —y particularmente en los argumentos aducidos ante John William Cooke, delegado personal de Perón—, sostuvieron que era preciso combatir a la Intersindical porque muchos de los líderes que, recién elegidos, emergían bajo su protección sólo eran peronistas "tibios", cuyas posiciones resultaban de comicios fraudulentos. Por añadidura, decían, la Intersindical no alteraría la decisión del gobierno de debilitar en todo lo posible la influencia peronista en los sindicatos y de reemplazarlos a los obreros sólo cuando lo considerase oportuno. Por su parte, los nuevos líderes argüían que era esencial utilizar la Intersindical y la legalidad de que disfrutaba. Todavía fallaba recuperar muchos sindicatos que seguían en manos del gobierno y de los antiperonistas, y una organización como la Intersindical podría contribuir a limitar los efectos de las fraudulentas maniobras gubernamentales. Más aún, ignorar este punto significaría abrir el camino a la utilización de la Intersindical por los antiperonistas.⁶

Sólo el surgimiento de la Intersindical posibilitó alcanzar cierta coherencia en la organización de las fuerzas peronistas en el ámbito gremial. En 1956 la lucha había sido local, atomizada: los activistas de un sindicato apenas sabían lo que sucedía fuera de su gremio y, con frecuencia, fuera de su lugar de trabajo. El espacio concedido por Aramburu al pasar de una política de franca represión a una solución más realista del "problema de la clase trabajadora" fue ocupado y usado por los nuevos dirigentes para consolidar y organizar las posiciones ganadas durante 1956. Esto confirió mayor coherencia también al movimiento peronista clandestino, al proporcionar una estructura institucional de la que carecía desde la proscripción del Partido Justicialista y la CGT en noviembre de 1955. Por ejemplo, sólo gracias a la aparición de la Intersindical empezaron a llegar regularmente las órdenes de Perón a los líderes gremiales y por éstos a las bases. Análogamente, por intermedio de los sindicatos se organizó en gran medida la campaña favorable al voto en blanco en las elecciones nacionales celebradas en julio de 1957 para designar a la convención constituyente.

Este progreso en el plano de la estructura fue confirmado y acrecentado al fundarse las 62 Organizaciones, entidad que emergió del congreso realizado en setiembre de 1957 para normalizar la CGT. El interventor militar de la CGT, capitán de navío Patrón Laplace, había intentado, mediante la purga de las listas comitales internas en algunos sindicatos donde los antiperonistas tenían influjo, asegurar una considerable presencia de éstos en dicho congreso. En setiembre, los socialistas y otros antiperonistas dominaban en los sindicatos de empleados de comercio, bancarios y empleados públicos, además de controlar los sindicatos donde habían ganado las elecciones en 1956, los más importantes de los cuales eran los gráficos, los municipales y los trabajadores del vestido. Por añadidura, dominaban muchas seccionales de la Unión Ferroviaria, principal sindicato del riel. Patrón Laplace calculó que si inflaba considerablemente las cifras de afiliados de esos sindicatos lograría asegurarse la mayoría de los delegados ante el congreso.⁷ Al fracasar este procedimiento y encontrarse los antiperonistas en minoría en la comisión de poderes que verificaba las credenciales de los delegados, abandonaron el congreso. Los sindicatos que se quedaron, principalmente peronistas, aunque también algunos donde había influencia comunista, sumaron un total de 62 organizaciones, que se constituyeron como agrupación bajo ese título. Los comunistas no tardaron

lo bastante grave como para que la Dirección Nacional de Seguridad se sintiera llamada a advertir a la población:

"La ley califica como sabotaje y reprime hasta con prisión perpetua al que destruyere, desorganizare, deteriorare o inutilizare en todo o en parte documentos, objetos, materiales, instalaciones, servicios o industrias de cualquier naturaleza [...] hace saber a la población que las fuerzas policiales y de seguridad han recibido instrucciones precisas para hacer uso de sus armas cada vez que sea necesario impedir la comisión de actos de sabotaje."¹²

La amplitud de la advertencia constituyó una indicación de la escala de las acciones que se producían. Resulta difícil saber con exactitud qué grado de organización estructurada alcanzaban éstas. Parece probable que en las fábricas el sabotaje haya sido en gran medida obra de la iniciativa individual, manifestada poco menos que literalmente en actos tales como arrojar una llave inglesa en el mecanismo de una máquina en funcionamiento, o un cigarrillo encendido en el taller de pintura de la planta. Un caso típico de los llevados a los tribunales en esos días fue el de un obrero textil acusado de destruir kilómetros del hilado de algodón y paralizar así el turno de noche en su fábrica.¹³ En un caso similar, se acusó a dos obreros metalúrgicos de destruir maquinaria vital para todo el proceso de producción de su fábrica.¹⁴ Tal vez más comunes fueran otras formas de sabotaje indirecto de la producción consumado por los trabajadores como medio de elevar su protesta. El propietario de una fábrica de zapatos del partido de Matanza, muy cerca de la Capital Federal, se quejó ante la policía de que la calidad de sus productos había declinado espectacularmente.¹⁵ En la industria procesadora de alimentos, un método de sabotaje bastante común consistió en poner vidrio molido en las latas de conservas; hubo aun otras maneras de arruinar los alimentos envasados.

Por otro lado, también resulta claro que desde principios de 1956 existían los gérmenes de una organización muy caótica y basada en grupos locales. En muchas zonas grupos de trabajadores, a menudo de la misma fábrica, empezaron a reunirse regularmente y planificar acciones. Esto fue particularmente así en el caso de los ferrocarriles. En marzo de ese año un grupo de diez ferroviarios, fue acusado de planear y ejecutar actos de sabotaje en el Ferrocarril Belgrano, en el Gran Buenos Aires.¹⁶ Juan Vigo, figura importante en el movimiento de resistencia de ese tiempo, estimó que en abril de 1956 existían en el Gran Buenos Aires más de doscientos

"comandos", de los que formaban parte alrededor de 10.000 hombres, si bien "el control que había sobre esos 10.000 hombres era muy relativo".¹⁷ En esa etapa, muchos de esos "comandos" estaban formados exclusivamente por obreros y basados en una fábrica o grupo de fábricas particular. Vigo describe un grupo típico de esa clase centrado en el suburbio de Ramos Mejía. Su jefe era un prominente líder del sindicato de obreros del cuero y sus militantes pertenecían a este gremio, a los textiles y metalúrgicos y al personal de la usina eléctrica local.¹⁸

De cualquier manera, es evidente que también existían incontables células clandestinas consistentes sobre todo en amigos que vivían en el mismo barrio y cuya influencia y acciones estaban mucho más circunscriptas. En el máximo de los casos, toda coordinación entre esos grupos, incluso en el mismo vecindario, no pasó de ser muy débil. Esas células se consagraron principalmente a la pintura de consignas y la distribución de volantes; puesto que se trataba de una actividad ilegal si se mencionaba el nombre de Perón o se producían consignas peronistas, desarrollarla suponía riesgos y constituía una legítima forma de protesta. También se dio el caso de que muchas de esas células no estuviesen constituidas específicamente y ni siquiera principalmente por trabajadores agremiados. Muchas contenían una suerte de muestra representativa de clases sociales. Una célula descubierta en Pergamino, provincia de Buenos Aires, incluía a un médico, un subinspector de la policía local, un contratista de construcción y un ex dirigente de la CGT local.¹⁹ En Junín actuó una célula formada por el ex intendente local, un aviador y el capataz del taller ferroviario de la ciudad.²⁰

En 1956 también se intensificó el empleo de bombas contra objetivos militares y edificios públicos. Esta forma de acción exigió una ejecución planificada y cierta experiencia en la fabricación de artefactos explosivos. Actos como la colocación de una bomba en la fábrica militar de Villa Martelli y el atentado contra el depósito de armas del Colegio Militar debieron ser minuciosamente planeados y contar con un mínimo de organización de apoyo.²¹ Esto se acentuó particularmente debido a la índole del proceso de fabricación de las bombas. En esos años se utilizaba muy poca dinamita, por ser ésta sumamente difícil de obtener en Buenos Aires; la mayoría de las bombas consistían en rudimentarios artefactos hechos de sustancias químicas básicas alojadas en cascos improvisados. Se las conocía como "caños" y llegaron a formar parte de la mitología

en apartarse, para formar un cuerpo de 19 gremios contralados por ellos. Los sindicatos antiperonistas, que se habían alejado del congreso, constituyeron una rama distinta conocida como las 32 Organizaciones Democráticas.

El surgimiento de las 62 Organizaciones fue un acontecimiento importante, pues no sólo confirmó la dominante posición de los peronistas en los gremios, sino que además les proporcionó una entidad totalmente peronista mediante la cual podrían actuar y presionar sobre el gobierno en una vasta esfera sindical y política. También confirmó algo que, en la práctica, dos años de lucha desde la caída de Perón habían demostrado: los sindicatos constituían la principal fuerza organizadora y la expresión institucional del peronismo en la era posterior a 1955. Las 62 Organizaciones, reflejando la creciente confianza de los trabajadores de base, adoptaron una política muy militante, que se tradujo en las huelgas generales del 27 de setiembre y del 22 y 23 de octubre, declaradas en protesta contra las políticas económica y gremial del gobierno. Este respondió con una nueva ola de intervenciones y arrestos de dirigentes sindicales. En diciembre de 1957, una reunión pública preparada por las 62 Organizaciones fue dispersada por la policía, que deluvo a los oradores, y además fueron nuevamente intervenidos los sindicatos. Estas medidas cayeron sobre gremios industriales muy importantes, como los metalúrgicos, los textiles y los de la carne, pero el gobierno no logró quebrar la capacidad de los sindicatos peronistas para actuar como fuerza organizadora de la totalidad del peronismo. Lo cual quedó claramente demostrado por el papel que las 62 Organizaciones desempeñaron en la orientación del voto de la clase trabajadora en las elecciones presidenciales que llevaron a Arturo Frondizi al poder en febrero de 1958.

SABOTAJE Y GRUPOS CLANDESTINOS

El repudio popular del gobierno militar y sus políticas recurrió a canales de expresión que estaban al margen de la esfera específicamente sindical. El término "la Resistencia", que llegó a constituir un punto de referencia decisivo en la cultura política peronista, tenía connotaciones más amplias que las correspondientes al proceso de defender las condiciones de trabajo y la organización en las fábricas. En el folklore del movimiento-folklore que integró la ideología de la clase obrera después de 1955, la resistencia en las fábricas

estuvo indisolublemente ligada a la resistencia en otros terrenos. Esto involucró una heterogénea mezcla de actividades de distintos tipos. En la conciencia popular peronista, la Resistencia incluyó un variado conjunto de respuestas que iban de la protesta individual en el plano público hasta el sabotaje individualmente efectuado y la actividad clandestina, sin excluir la tentativa de sublevación militar. Todas esas respuestas tendieron a mezclarse en una serie muy confusa de imágenes que tiempo después serían encapsuladas por una nueva generación de peronistas en frases tales como "guerrilla popular" o "resistencia popular nacional" y que connotaban toda una mitología de heroísmo, abnegación, sufrimiento, camaradería compartida y lealtad a un ideal, mitos que habían de constituir un elemento decisivo en la evolución del peronismo en años venideros.

La primera y más inmediata respuesta a los actos del nuevo gobierno provisional adoptaron la forma de lo que podría denominarse un terrorismo espontáneo. En la primera mitad de 1956 cundió una ola de tentativas de sabotaje. Una información periodística, típica de las publicadas sobre los hechos de esa índole, refería por ejemplo cómo en Paraná, provincia de Entre Ríos, había sido arrestado un grupo por perpetrar una serie de acciones tales como pintar consignas, tratar de incendiar un depósito de granos de una importante firma cerealera, quemar vagones ferroviarios e intentar el incendio de un local de la Unión Cívica Radical. Los detenidos fueron un conductor de camiones, un empleado ferroviario y otras dos personas, todos ellos de "condición humilde". La prensa publicaba a diario muchas informaciones de este tipo. Un blanco particularmente vulnerable fue el sistema ferroviario. En Tacuarí, provincia de Buenos Aires, a principios de febrero de 1956, "de un convoy de 27 vagones saltaron de los rieles la locomotora y los primeros siete vagones", por lo que fueron detenidos dos empleados del ferrocarril.⁹ Hechos como éste fueron poco menos que cotidianos, junto con los cometidos contra otro blanco predilecto, las plantas de electricidad. Al mismo tiempo se desarrollaba dentro de las fábricas una creciente actividad de sabotaje. La situación fue ejemplificada por una fábrica de vidrio de Berazategui, cuyo proletario denunció los daños constantemente causados a la maquinaria y los bajos niveles de producción.¹⁰ Tan sólo en el mes de febrero, en el Frigorífico Wilson, de Avellaneda, se realizaron tres actos de sabotaje, uno de los cuales determinó el cierre de la planta por varios días.¹¹ La situación llegó a ser

que "la hora se acerca" y "Perón vuelve". Un factor decisivo de esa perspectiva era la creencia de que grandes sectores de las fuerzas armadas seguían siendo leales a Perón y esperaban su orden para rebelarse. Suponíase que esa sublevación sería coordinada con una huelga general y la paralización del país.

Si bien esta visión se correspondía plenamente con una necesidad emocional, tuvo dos efectos inmediatos sobre el movimiento de resistencia en la primera mitad de 1956. En primer término, agravó la ya crónica falta de seguridad que experimentaban la mayoría de los grupos. En efecto, si la revolución era para la semana próxima difícilmente podían necesitarse perspectivas seguras en el largo plazo. En segundo lugar, muchos grupos resistentes centraron su actividad y sus aspiraciones en encontrar a figuras militares que simpatizaran con esa actitud, lo que también tendió a obviar la necesidad de organización en el largo plazo. En efecto, no faltaban militares que simpatizaran con la causa, y Juan Vigo deplora que siempre hubiera habido algún "oficial retirado desecho de prometer la revolución para la semana que viene o incluso para mañana".²³ Todo lo cual promovió el caos en todo intento por coordinar tantos grupos dispares. En marzo de 1956, *La Razón* describió el caso, de ningún modo atípico, de un grupo de resistencia desbaratado en Córdoba, en que

"todos los que habían caído presos eran obreros que se dejaron suggestionar por consejos de otros y por rumores que señalaban a los generales Bengoa y Uranga en actitud subversiva".²⁴

Sólo al ser derrotado el levantamiento que en junio de ese año encabezó el general Valle disminuyó en alguna medida la búsqueda de militares salvadores y junto con ésta la perspectiva de cataclismo a corto plazo.²⁵ Asimismo, para mediados de 1956 se había operado un proceso de selección: sólo sobrevivían los grupos mejor organizados, que habían aprendido bien las lecciones sobre táctica y seguridad.

DIVERGENCIAS EN LA RESISTENCIA

De mediados de 1956 en adelante, los activistas peronistas de clase trabajadora consagraron la mayor parte de sus energías a la recuperación de las comisiones internas y después de los sindicatos. Inevitablemente, el sector decisivo de la resistencia peronista tenía que ser el que se relacionara en forma más directa con la vida de los peronistas perte-

de la Resistencia. Su lugar entre los mitos se originó, en parte, en su proceso mismo de producción, obra de aficionados que compartían las mismas ideas. Contaban con muy pocos especialistas con conocimientos de bombas y armamentos en general, y los artefactos eran confeccionados, en 1956, mediante el método de prueba y error, con riesgo considerable de quiebres intervernia. La obtención de los materiales exigía una organización de personas dispuestas a robarlos, generalmente de farmacias, droguerías o fábricas. Una operación de armado de bomba exigía por lo menos la participación de seis personas para cumplirse eficazmente. En consecuencia todo ese proceso llegó a ser simbólico de la resistencia en general, pues sintetizó una serie de virtudes asociadas, en el folklore peronista, con el período de la resistencia: no profesionalismo, espíritu de sacrificio, participación activa de gente común y carencia de una élite burocrática que centrara la organización.

Sin duda alguna, la motivación general que impulsaba estas diferentes formas de resistencia al régimen militar puede ser entendida como un rechazo del nuevo régimen político y lo que implicaba en materia social y política. Sin embargo, acciones como la colocación de bombas y el sabotaje eran inspiradas también por un abrumador sentimiento de desesperación. El sabotaje, fuera perpetrado en una fábrica o contra un edificio público, representaba prácticamente la única salida que se ofrecía a la mayoría de los peronistas para expresar su rechazo del statu quo. Aquellos peronistas que experimentaron la necesidad de luchar apelaron a alguna forma de sabotaje como medio de expresar su ira y su sentimiento de extravío, así como de afirmar su capacidad para hacer algo al respecto. En el comentario que se cita a comienzos de este capítulo, Juan Carlos Bríd, veterano de los "comandos" de la Resistencia, describe ese sentimiento de frustración.

La perspectiva en la que estas acciones se situaban era, como no podía menos que ser, la de un cataclismo. Los militantes esperaban que el nuevo régimen se desplomara de una semana para la siguiente. Abundaban rumores sobre el inminente retorno de Perón; circuló ampliamente la leyenda del "avión negro" en que Perón volvería para dirigir a su pueblo en la lucha contra la tiranía. Circulaban incontables volantes donde se aconsejaba qué debía hacerse para acelerar el retorno del líder. Uno aconsejaba a todos los peronistas retirar su dinero de los bancos, no comprar más bienes de consumo y almacenar alimentos, sacrificio que conduciría al retorno de Perón.²² Los volantes siempre concluían con la afirmación de

necientes a dicha clase. Pero las restantes formas de actividad centradas en torno de los comandos por cierto continuaron, y la línea que separó a una de las otras fue con frecuencia difícil de trazar. Más aún, el propio Perón había contemplado desde el principio la adopción de una estrategia general que incluyera los distintos niveles de actividad, conjunto al que dio el nombre de "resistencia civil". Esbozó sus ideas al respecto en las "Instrucciones Generales para los dirigentes", elaboradas en diciembre de 1955, pero que probablemente hayan llegado a esos jefes en marzo o abril de 1956. De acuerdo con Perón, la estrategia general que el movimiento debía seguir era la de una "guerra de guerrillas", donde la resistencia civil debía desempeñar un papel importante. Se debían evitar todas las tentativas por hacer frente al régimen militar allí donde era más fuerte, es decir, en el nivel puramente militar. Mucho más eficaces, sostuvo Perón, serían millares de pequeñas acciones que desgastarían gradualmente al régimen y socavarían su voluntad de mantenerse en el poder. En el terreno social, la resistencia debía mantener a los trabajadores en permanente estado de conmoción, mediante huelgas, trabajo a desgano, baja productividad. En un plano más individual, se debían emprender millares de acciones tanto pasivas como activas. La resistencia activa podía incluir el sabotaje, y la resistencia pasiva podría consistir en difusión de rumores, distribución de volantes y pintada de consignas. Toda esa miríada de actos de resistencia finalmente tornarían ingobernable el país y prepararían el terreno para la huelga general revolucionaria que, a juicio de Perón, daría la señal para la insurrección en escala nacional. En esa fase resultaría decisiva la acción de los comandos que, junto con sectores leales de las fuerzas armadas, garantizarían el éxito de la insurrección. Para este fin los comandos debían entrenarse mediante acciones tales como ataques contra instalaciones militares y gubernamentales.²⁶

La estrategia bosquejada en esas instrucciones generales era realista, si se deja de lado el concepto, siempre problemático, de huelga general revolucionaria y subsiguiente insurrección. La noción básica de resistencia civil tomaba en cuenta los distintos niveles de compromiso y actividad. Más aún, esas instrucciones tuvieron para el movimiento el positivo efecto de poner el sabotaje y la acción clandestina en una perspectiva menos cataclísmica, de verlos como una forma de actividad paralela a la sindical y de objetivo similar: el desgaste del régimen.

En la práctica, sin embargo, a partir de mediados de 1956

hubo una creciente diferenciación entre los comandos emprendidos en el sabotaje y otras actividades clandestinas y el movimiento de resistencia en los sindicatos. Esto se reflejó en una tensión subyacente, que fue en aumento, en lo que se refería a las funciones de los sindicatos recién reconstituidos. Inicialmente, en la primera parte del año, a personas como Vígolo les fue difícil convencer a otras de la necesidad de organizarse en las fábricas y en los gremios.²⁷ Esta actitud extrema no persistió, pero sí quedó una diferencia de énfasis. En agosto de 1956, un periódico semiclandestino conectado con los activistas que combatían en los sindicatos consideró necesario debatir los méritos relativos del terrorismo y el trabajo sindical y tomar parte por éste:

"No hay manera de enfrentar con éxito a esta fuerza organizada de los enemigos sino mediante la organización de los propios trabajadores. Reorganizarse es, pues, la tarea fundamental. La organización fabril debe ser reconstruida."²⁸

En teoría, desde luego, no había desacuerdo. Aquellos que se habían comprometido principalmente con los comandos reconocían la necesidad de recuperar los gremios. Pero este reconocimiento estaba teñido de sospechas. Todavía quedaban recuerdos de la inercia demostrada por el movimiento sindical al caer Perón. Un activista de ese tiempo describió tal actitud, compartida entonces por un número no desdeñable de militantes:

"Todos pensábamos que los gremios tenían que ser recuperados en la medida en que esos dirigentes que fueran a la conducción de los gremios sirvieran a los intereses de la revolución. Pensábamos que los gremios se tenían que jugar íntegramente a favor del movimiento revolucionario porque si no no tenía ningún sentido ocuparnos de los gremios que querían integrarse al sistema [...]. Recuperar los gremios tenía algún sentido para defender los derechos de los trabajadores pero tenía fundamentalmente valor para trabajar en favor de la revolución, porque tener un gremio por tenerlo no más carecía de sentido."²⁹

En gran medida esa tensión fue tácita, sobre todo en 1956, cuando la idea de integrar los sindicatos al sistema gubernamental resultaba absurda en vista de los persistentes ataques lanzados por el gobierno. Es necesario subrayar que nunca hubo, en ese período, una división manifiesta en torno de este problema. Más bien hubo a menudo no poca superposición de actividades en lo personal, y en muchas ocasiones

los comandos recibieron ayuda material de grupos de base gremial. Con frecuencia un grupo sindical que como tal funcionaba eficazmente prestaba su solidaridad y su apoyo a grupos clandestinos. En esos años, el sabotaje formaba parte integrante de las luchas obreras. Era poco menos que inimaginable una disputa laboral intensa sin el concomitante estallido de bombas e incendios.

De cualquier manera, quienes en la práctica tenían nexos más estrechos con los comandos eran los viejos líderes sindicales, antes que las nuevas agrupaciones sindicales. Los más cercanos a la CGT Negra habían colaborado con la tentativa de golpe efectuada por el general Valle, y en diciembre de 1956 lanzaron una huelga general coincidente con otra promesa de Insurrección. El episodio tuvo resultado desastroso y condujo al arresto de muchos sindicalistas. También fueron aquellos viejos líderes quienes influyeron sobre los gremialistas jóvenes y más entusiastas para que se sumaran a los comandos. Pero también en este caso las diferencias fueron tácticas y tal vez, durante gran parte de este período, pasaron inadvertidas. En forma general y mal definida, los hombres de la resistencia de base gremial consideraban la Insurrección y la huelga general para traer de vuelta a Perón como el objetivo último de sus actividades sindicales. Por ejemplo, rechazaron la propuesta presentada por los comunistas en la Intersindical en el sentido de realizar una huelga general para pedir la excarcelación de los activistas presos. Por entender que una huelga general sólo merecía ser realizada para pedir el retorno de Perón. En verdad se consideraban a sí mismos tan justos e intransigentes como los de la resistencia armada, y combatían tan enérgicamente como éstos a los políticos neoperonistas recién surgidos, que trataban de atraer a los trabajadores a sus propias filas sin hablar de la vuelta del líder.³⁰

En definitiva, sin embargo, se confirmó que los caminos estratégicos de ambas formas de resistencia eran de órdenes fundamentalmente distintos. Esto se tornó cada vez más patente en el curso de 1957, y si bien en gran medida permaneció oculto mientras duró el régimen militar, los más sagaces no dejaron de advertir sus implicaciones. Uno de ellos fue John William Cooke, quien a comienzos de 1957 se encontraba exiliado en Montevideo, donde actuaba como principal delegado de Perón, que estaba en Caracas y con quien se mantenía en constante contacto. Sus cartas a Perón durante todo 1957 testimonian una preocupación, a veces vagamente expresada

pero siempre presente, por el futuro estratégico del movimiento peronista.

En particular, a Cooke lo inquietaba lo que juzgaba como una disonancia entre el proyecto estratégico fundamental peronista —que según él tenía que ser la toma del poder mediante la insurrección para llevar a cabo una revolución social— y los ajustes tácticos que los cambios de la coyuntura política imponían al movimiento. Esta disonancia reflejaba en parte la distancia entre los propios deseos y la realidad. Cooke y el propio Perón afirmaban constantemente que la única estrategia válida para el peronismo consistía en la Insurrección. La meta propia de ésta era una revolución social: "Nosotros no estamos contra una política, sino contra un sistema".³¹ Por esta razón el movimiento debía mantener su intransigencia. Según palabras de Cooke.

"Un movimiento como el Peronismo se nutre de absolutos. Es la gloria y es el inconveniente de las fuerzas nacional-libertadoras. Deben llegar incorruptos, deben estar encima de las politiquerías, al margen del juego común que desarrollan los partidos tradicionales."³²

Y sin embargo las condiciones apropiadas para lanzar esa Insurrección se resistían tenazmente a presentarse. Una y otra vez, Cooke se quejó a Perón de que no existieran las condiciones para desencadenar la huelga general revolucionaria. En junio de 1957 le escribió:

"La repulsión general por la Tiranía provoca protestas, incita al terrorismo y desata rebelías. Ese estado de ánimo no se traduce, sin embargo, en una resistencia civil total como la que deseamos. Hay grupos activistas que ponen bombas y hacen sabotajes; esto va creando una mentalidad proclive a la acción y anima a muchos expectantes. Pero como usted señala la gente admira estos actos pero sólo muy débilmente los secunda [...] ese descontento contra el gobierno de facto [...] debe ser canalizado en realizaciones insurreccionales que vayan desembocando en el levantamiento popular."³³

No sólo las circunstancias propicias para ese levantamiento se abstuvieron de materializarse; además, durante todo 1957 las probabilidades de que se concretaran se alejaron de manera creciente. El éxito mismo de la Resistencia, especialmente en los sindicatos, modificaba el contexto en el cual debía operar el movimiento. El gobierno retrocedía y dejaba posibilidades de desarrollar, dentro de las estructuras exis-

lentes, actividades semilegales o incluso plenamente legales. Cooke reconocía que el movimiento no podía ignorar las nuevas posibilidades tácticas que se le ofrecían y retirarse a un purismo revolucionario que sólo dejaría el terreno libre para los que querían desviarlo hacia el lodazal de la política tradicional. Escribió a Perón:

"La semi-legalidad actual con el alojamiento de la persecución hizo aflorar a la capa blanda del peronismo."³⁴

Sin embargo, el problema no consistía realmente en que los elementos "blandos" ganaran terreno. Más bien se trataba de lo que la realidad social podía imponer a aquellos elementos que se mostraban intransigentes. En forma más concreta, el problema se planteó en toda su claridad a los sindicatos que los peronistas acababan de recobrar. Acrecentada su confianza por las batallas salariales de fines de 1956, los trabajadores buscaban canales de expresión al margen de la esfera gremial, puramente defensiva. Lo que vieron en la Intersindical fue ese canal. Para Cooke el peligro residía en que la Intersindical llegara a ser considerada como un fin en sí misma y no como un simple instrumento de lucha. Algo muy parecido fue lo puesto en juego en el congreso que la CGT celebró en septiembre de 1957, donde llegó a discutirse incluso si debían aceptarse o no las elecciones realizadas en los sindicatos patrocinados por el gobierno.

Para los comandos la solución del problema era simple y equivalía a lo que Cooke había denominado una retirada hacia el purismo: mantener ni más ni menos que una negativa intransigente a toda relación con aperturas al sistema institucional. El periódico *Soberanía*, vocero de esos grupos, afirmó que el problema de cómo enfrentar el fraude en el congreso de la CGT era irrelevante, pues los sindicalistas peronistas simplemente no tenían nada que ver con un congreso de la CGT inspirado por el gobierno.³⁵ Dos figuras importantes de los grupos clandestinos, Lagonarsino y Marcos, enviaron a Cooke un documento de 45 páginas donde denunciaban la toma de control de la Intersindical por los peronistas como una ruptura con la posición intransigente.³⁶ Cooke rechazó ese punto de vista. En un largo plan de acción que sometió a Perón en agosto de 1957, Cooke argumentó que la intransigencia lisa y llana ya no era una posición viable. Las grandes consignas intransigentes de la Resistencia debían recibir una "traducción táctica" que les permitiera responder al deseo de actuar concreta y positivamente que experimentaban las masas pe-

ronistas. Era preciso crear para el movimiento nuevas estructuras semilegales. Según Cooke, éstas permitirían desamollar una actividad práctica que culminaría, cuando las circunstancias resultaran apropiadas, en la insurrección.

Aunque teóricamente admisible, el plan de Cooke estaba expuesto a objeciones. En particular, evitaba el problema de las indoles fundamentalmente distintas de los sindicatos y los comandos y, por lo tanto, de sus diferentes posibilidades estratégicas. Los sindicatos eran fundamentalmente instituciones sociales arraigadas en la existencia misma de una sociedad industrial, y como tales tenían que cumplir un papel funcional intrínseco en esa sociedad. Su existencia como medios de actividad y organización de la clase trabajadora les confería cierto grado de inmunidad a los cambios de la situación política, cierta capacidad para durar y resistir al ataque político. Los comandos, en cambio, eran organizaciones estrictamente políticas, cuya existencia y perspectivas dependían mucho de un conjunto específico de circunstancias. A diferencia de los sindicatos, no respondían a ninguna necesidad social o económica intrínseca de la clase obrera. En ausencia de ésta, a los grupos clandestinos les era imposible procurarse una base duradera de supervivencia en aquella área donde tal base habría sido posible bajo forma de alguna clase de relación orgánica con los sindicatos. Necesitaban una posibilidad de acción concreta y éxito práctico. Cuanto más se alejaban esas posibilidades, más probable se tornaba que las estructuras semilegales y legales, en especial los gremios, se comprometieran con su dinámica y su lógica propias. Existía un límite para la posibilidad de mantener en reserva los sectores clandestinos sin que se osificaran, carentes de toda perspectiva propia genuinamente factible, hasta subordinarse inevitablemente a los sectores legales del movimiento.

En ese periodo, este conflicto permaneció en lo esencial latente. En el contexto de un gobierno militar, que aun si otorgaba cierta legalidad a los sindicatos mantenía una política de represión y violento antiperonismo, el conflicto potencial entre sectores legales y clandestinos era escasamente perceptible. Sin embargo, la tensión implícita existía. Se advirtió en especial su presencia durante todo el debate sobre las elecciones presidenciales que se efectuarían en febrero de 1958. ¿Debian los peronistas votar y, en caso de hacerlo, votar por un candidato como Arturo Frondizi? Si bien Cooke y Perón exhibían una posición retórica adversa a toda participación en los comicios, no dejaban de advertir las ventajas que ofrecía

un voto positivo. Los inquietaba, empero, la posibilidad de que la "capa blanda" fuese fortalecida por la perspectiva electoral. Otra vez más, sin embargo, éste no era el verdadero problema. Los políticos neoperonistas que habrían podido intentar beneficiarse gracias a una apertura electoral disfrutaban de poco predicamento en la clase trabajadora, y si Perón hubiese ordenado de nuevo votar en blanco hubiera sido obedecido por la mayoría de los obreros peronistas.

El problema radicaba, más bien, en las alternativas creíbles que podían ofrecerse en vez del voto por un candidato no peronista. Cooke parece haber nutrido la vaga esperanza de que una insurrección resolviera el problema antes de febrero de 1958; en particular, confió en la posibilidad de capitalizar las huelgas dirigidas por las 62 Organizaciones a fines de 1957. Sin embargo se vio obligado a reconocer que en las mentes de la mayoría de los peronistas la sublevación sólo representaba un camino muy vago. Las huelgas sirvieron de poco para convencer a los gremialistas de la viabilidad de la insurrección. Más aún, después de la represión policial contra la reunión efectuada por las 62 Organizaciones a fines de diciembre fueron intervenidos los principales gremios industriales dirigidos por peronistas y las 62 Organizaciones se vieron obligadas a negar cualquier contenido político a sus actividades. Las negociaciones secretas iniciadas en ese momento con representantes de Frondizi fueron el reconocimiento táctico, por parte de Perón y Cooke, del fracaso de la opción revolucionaria.³⁷

El grito de batalla de los comandos y grupos clandestinos fue entonces el mantenimiento de la intransigencia y la necesidad de votar en blanco. En ausencia de toda posibilidad, ni siquiera de mediano plazo, de organizar una rebelión armada, aquella actitud no podía ser más que un gesto de fe, una afirmación de valores y un rechazo del statu quo antiperonista. Objetivamente, esa posición tenía poco que ofrecer a los militantes sindicales. En cambio, del voto por Frondizi podían derivarse ventajas concretas. Una victoria del candidato "no continuista" ayudaría a consolidar las posiciones arrancadas por los gremios al régimen militar.³⁸ Las intervenciones siguientes a la reunión de diciembre habían hecho comprender la fragilidad de las posiciones recién recobradas.

Por añadidura, existía la posibilidad de consolidar más aún el poder gremial mediante la reconstitución de la CGT. En su propaganda electoral Frondizi insistió particularmente en ese tema. Existía también el problema de la legislación im-

plantada por los militares para debilitar la central sindical. El decreto 9270, por ejemplo, permitía la representación minoritaria en los organismos dirigentes sindicales y el establecimiento de varios sindicatos en una industria, todos con iguales derechos a la representación obrera. Este mismo decreto prohibía además toda actividad política a los sindicatos. En la práctica gran parte de esa legislación había resultado muy difícil de aplicar, pero seguía siendo un recordatorio de las arbitrariedades del régimen militar y de su antipatía fundamental por un movimiento gremial fuerte y centralizado. Sin duda alguna un candidato como Frondizi, quien prometía realizar elecciones libres en todos los gremios donde no se hubieran efectuado, restablecer la CGT y reconstituir un poderoso sistema de negociaciones colectivas similar al existente bajo Perón, no podía menos que ejercer fuerte atracción sobre el sector sindical del peronismo.³⁹

A muchos militantes sindicales, empero, les costaba aceptar el argumento de que debían volar por Frondizi, de largo pasado antiperonista antes de 1955. Sebastián Borro recuerda cuán difícil era para el peronista común imaginarse a Perón en el acto de dar esa orden y qué esfuerzos debieron desarrollar los dirigentes sindicales para convencer a los militantes de base. En Rosario, las 62 Organizaciones necesitaron celebrar diez sesiones antes de avenirse a respaldar esa orden.⁴⁰ Sin embargo, en general la nueva jefatura peronista aceptó la lógica de la orden, es decir, la necesidad de prevenir la consolidación del antiperonismo más virulento. Esa jefatura y su influencia fueron decisivas en la obtención de los votos peronistas para Frondizi. Aun así, más de 800.000 peronistas desobedecieron la orden y refirmaron su intransigencia abstiniéndose o votando en blanco.

NOTAS

¹ Entrevista con Sebastián Borro, Buenos Aires, enero de 1974.

² *Ibid.*

³ Entrevista con Alberto Belloni, Buenos Aires, enero/febrero de 1974. Belloni comparó esta cifra con la de aproximadamente 30 afiliados que asistían a las reuniones antes de 1956.

⁴ *Quilmes*, 16 de abril de 1957, publicó el programa de la Intersindical.

⁵ *Mayoría*, 17 de julio de 1957.

⁶ *Perón-Cooke correspondencia*, vol. 1, Buenos Aires, 1972, pág. 151.

⁷ Detalles de este intento hay en *Mayoría*, 24 de junio de 1957 y 6 de enero de 1958. En efecto, se asignaron 358 delegados a 10 organizaciones, y 311 a 87, y de aquellos 10 sindicatos 6 eran antiperonistas. Véase *Qué*, 22 de agosto de 1957.

⁸ *Noticias Gráficas*, 7 de enero de 1956.

⁹ *Noticias Gráficas*, 7 de febrero de 1956.

¹⁰ *Noticias Gráficas*, 18 de febrero de 1956.

¹¹ *Noticias Gráficas*, 10 de febrero de 1956.

¹² *Noticias Gráficas*, 7 de febrero de 1956.

¹³ *La Razón*, 3 de abril de 1956.

¹⁴ *Noticias Gráficas*, 18 de marzo de 1956.

¹⁵ *Noticias Gráficas*, 14 de febrero de 1956.

¹⁶ *La Razón*, 7 de marzo de 1956.

¹⁷ *Vigo: La vida por Perón*, pág. 175.

¹⁸ *Ibid.*, pág. 149.

¹⁹ *Noticias Gráficas*, 25 de febrero de 1956.

²⁰ *Noticias Gráficas*, 21 de febrero de 1956.

²¹ *Noticias Gráficas*, 22 de febrero y 2 de marzo de 1956.

²² Volante en posesión del autor, sin fecha pero probablemente de mediados de 1956.

²³ *Vigo: La vida por Perón*, pág. 24.

²⁴ *La Razón*, 16 de marzo de 1956.

²⁵ La sublevación encabezada por Valle se basó en los pocos oficiales peronistas que quedaban, particularmente de baja graduación, y en suboficiales, así como en algunos oficiales nacionalistas desencantados que habían integrado la facción de Lonardi. El levantamiento estaba condenado desde el principio, pues la inteligencia militar conocía sus planes. Al parecer, Aramburu les permitió deliberadamente proseguir, con el fin de tener un pretexto para una purga ejemplar. La ejecución de oficiales y suboficiales que tomaron parte en la revuelta no tenía precedentes en la historia militar argentina y pasó a constituir parte importante de la cultura popular de la Resistencia. La represión de civiles que se sumaron a la sublevación es relatada por Rodolfo Walsh en *Operación Masacre*, Buenos Aires, 1963.

²⁶ Véase *Perón-Cooke, Correspondencia*, vol. 2, pág. 391.

²⁷ *Vigo: La vida por Perón*, pág. 31.

²⁸ *Frente Obrero*, agosto de 1956.

²⁹ "Crónica por un resistente: crónicas de la Resistencia", *Antropología del Tercer Mundo*, agosto de 1972.

³⁰ Los neoperonistas eran principalmente políticos del período anterior a 1955 que habían detenido cargos en el partido peronista. Sus carreras posteriores a 1955 se basaron habitualmente en su capacidad potencial para apelar a la lealtad del aparato político de la región particular de cada uno.

³¹ *Perón-Cooke, Correspondencia*, vol. 2, pág. 11.

³² *Ibid.*, pág. 35.

³³ *Perón-Cooke, Correspondencia*, vol. 1, pág. 144.

³⁴ *Ibid.*, pág. 227.

³⁵ *Soberanía*, 4 de junio de 1957.

³⁶ *Perón-Cooke, Correspondencia*, vol. 2, pág. 8.

³⁷ Detalles de estas negociaciones, que culminaron en el acuerdo conducente al voto peronista por Frondizi, hay en Ramón Prieto: *El Pacto*, Buenos Aires, 1965.

³⁸ Se denominó "continuidad" la candidatura de Ricardo Balbín por la Unión Cívica Radical del Pueblo por entenderse que los militares veían en los radicales un medio de continuar las políticas antiperonistas posteriores a 1955.

³⁹ Otro problema importante para los sindicalistas era el mal estado financiero de los sindicatos después de las intervenciones militares. Esto gravitó negativamente sobre los servicios que los sindicatos ofrecían a los afiliados e impartió especial urgencia al tema de la recuperación completa de los gremios.

⁴⁰ Entrevistas con Alberto Belloni y Sebastián Borro, Buenos Aires, enero/febrero de 1974.

chas, el movimiento sindical peronista ahora era dirigido en gran medida por una nueva generación de líderes emergidos de las bases y cuya posición denotaba un grado mucho mayor de democracia y participación sindicales. ¿Cómo podríamos intentar un bosquejo de la ideología que resultó de ese contexto general entre los militantes peronistas de base?

4

Ideología y conciencia en la resistencia peronista

"Para nosotros la vuelta de Perón era la vuelta de la decencia y la dignidad para los que trabajábamos, sacarnos la pata del patrón de encima, era la vuelta de la felicidad, era el final de tanta tristeza y tanta amargura que había en los millones de hombres del pueblo, era el fin de la persecución..."

Obrero anónimo.

Durante la década 1960-70 y la siguiente, la izquierda peronista y otros observadores consideraron que el tiempo del gobierno de Aramburu y la resistencia que los peronistas le ofrecieron constituyeron un período culminante de la militancia, digno de quedar como ejemplo de combatividad de la clase trabajadora. El término mismo de "Resistencia" llegó a incluir el extremismo, a significar un movimiento de izquierda, un concepto en cierto modo revolucionario. Las bases de esa evaluación han sido bosquejadas en los dos capítulos inmediatamente anteriores. En términos de estadísticas de huelgas, los años 1956 y 1957 no tuvieron hasta entonces punto de comparación en la historia argentina. En 1956, tan sólo en la Capital Federal se perdieron más de 5 millones de días de trabajo, y más de 3.300.000 en 1957.¹ Estas cifras reflejaron no una simple batalla por los salarios; además simbolizaron la lucha que se libraba a diario en los lugares de trabajo para defender condiciones laborales y de organización, conquistadas durante la era de Perón, contra un ataque concertado del Estado y los empleadores. Revitalizado durante esas lu-

REFIRMACIÓN DE LOS PRINCIPIOS TRADICIONALES

El análisis de los periódicos y panfletos sindicales clandes-
tinos y de las memorias de los militantes permite discernir cierto número de líneas representativas de la influencia que seguían ejerciendo los principios ideológicos tradicionales propios del discurso formal del peronismo en el poder. Ante todo se descubre un estentóreo nacionalismo económico que defiende el patrimonio nacional. Ya vimos que fue un tema constantemente reiterado desde el principio mismo del período post-peronista. Una de las primeras hojas mimeografiadas que los obreros del Puerto General San Martín hicieron circular en la zona de Rosario advertía que

"en el momento quieren hacernos retroceder a un estado pastoril, a una situación en la cual la única riqueza viene de la agricultura y la ganadería".²

Uno de los principales blancos del ataque lanzado por ese nacionalismo económico fue la política seguida en esa esfera por el gobierno militar. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la liquidación del control del comercio exterior por el Estado, el descontrol de las importaciones y la relajación de los controles de precios, especialmente en el caso de los productos agrícolas, confirmaron por igual la imagen de un régimen proimperialista aplicado a llevar a la Argentina de vuelta a la edad de oro de la economía exportadora de ganado. A ello contribuyó el traslado de recursos a la agricultura en general, efectuado mediante la devaluación del peso.

Los libros y panfletos de Perón insistieron sin cesar en el mismo tema, tal como los órganos de la Resistencia. Un diario clandestino de Rosario, *El Cuarenta*, explicó su título afirmando:

"Somos antoligarcas y antiimperialistas, y para nosotros 40 es el número del artículo de la constitución del 49 que garantiza el derecho de nuestro pueblo a las riquezas naturales del subsuelo, prohibiendo su entrega al imperialismo."³

José Rucci, en aquel tiempo delegado en el gremio metalúrgico, escribió en *Palabra Argentina* un artículo donde expresó lo que sin duda era el juicio general de la clase trabajadora peronista sobre este punto:

"la Argentina parece ignorar que vivimos actualmente dentro de una civilización metalúrgica, bien lejos ya, por cierto, de la economía pastoril y semicolonial que conocieron nuestros inmediatos antepasados y que todavía, anacrónicamente se empeñan en imponernos unas decenas de familias oligárquicas que quieren parar con la defensa de sus mezquinos intereses, las fuerzas históricas del país, el desarrollo técnico argentino y la marcha de la nación hacia una civilización industrial".⁴

Los peronistas de la clase trabajadora asociaban la era anterior a 1955 con un tiempo de desarrollo nacional que había marchado de la mano con una política de justicia social. En consecuencia consideraban fundamentalmente antinacional, antindustrial y antiobrera la política del gobierno militar. Veían conexiones recíprocas entre esos aspectos. Así lo testimoniaba una declaración emitida por una conferencia de delegados durante la huelga metalúrgica de 1956:

"Estamos presentando la creación de un frente antinacional y antiobrero: los representantes del estado y capital extranjero unidos con una meta común de aniquilar a la industria argentina y destruir la organización sindical de la clase obrera [...] una semicolonía como la Argentina sólo podrá librar la batalla de su liberación económica sobre la base de una clase obrera respetada y organizada que se gobierna a sí misma sin interferencias y que sostenga al país frente a los grandes monopolios internacionales."⁵

Innecesario es agregar que otro componente de la ideología de la Resistencia era la defensa de las ventajas económicas obtenidas bajo Perón y de la organización obrera. Este punto era entendido en los términos del tradicional concepto peronista de "justicia social", que con el de "sobreranía nacional" formaba dos de las piedras angulares de la retórica ideológica estatal bajo Perón. El nacionalismo económico y el antiliberalismo tenían por corolario la afirmación de conceptos tradicionales como los del común interés del empleador y el trabajador de proteger la industria nacional. Similarmente, la "justicia social" era acompañada por el concepto de un capital humanizado, inbuido de conciencia social, opuesto al capital especulativo y explotador. En el mencionado artículo, José Rucci advertía a los empleadores que

"sabemos distinguir también entre industria nacional y capitalismo especulativo, opresor y explotador de las masas trabajadoras".⁶

A ello se conectaba estrechamente la noción del equitativo beneficio que ese capital humanizado tenía derecho a ganar. El principal reproche de Rucci a los empleadores de la industria metalúrgica sostenía, precisamente, que sus ganancias eran excesivas y por lo tanto explotadoras.

En una línea similar, un dirigente textil, Juan Carlos Loholaberry, expresó una idea común a todos cuando se le preguntó su juicio sobre el concepto socialista de la abolición de clases. Contestó que para los peronistas no se trataba de oponerse a la empresa privada sino más bien de asegurar que contribuyera al bien público:

"En lo que respecta a las clases sociales ellas existen para nosotros sin lugar a dudas y creemos que su existencia no es creación artificial de nadie, sino más bien que ello obedece a un orden natural imposible de anular. En este aspecto lo que propugnamos es no que desaparezcan las clases en cuanto tales, sino que todos concurren a un solo interés que a nuestro juicio debe ser el bienestar social."⁷

De esto formaba parte un concepto implícito sobre el especial papel del Estado como garantía última de la aplicación efectiva de aquellas ideas: el Estado aseguraba la armonía social, moderaba los excesivos intereses de clases, protegía la soberanía nacional. A veces había también en esta afirmación una fuerte nota paternalista. Por momentos implícitamente, si bien con frecuencia explícitamente, se identificaba a Perón con el Estado. "La vuelta de Perón" llegó a ser una garantía de que el Estado seguiría comprometido con el desempeño de ese papel de guía en la sociedad.

ELEMENTOS DE UN CONTRADISCURSO

Pero aunque esos elementos tradicionales de la retórica peronista formal pesaban con su presencia en el discurso de la clase trabajadora, en éste se encontraban presentes otros elementos, es decir, fragmentos de lo que ha sido descrito como un "contradiscurso".⁸ Muchos de esos elementos se encontraban simbolizados en la lucha misma librada por la clase trabajadora. La situación de enfrentamiento directo con los empleadores y con las fuerzas del Estado, así como la

intestad de ese enfrentamiento. generaron e involucraron ciertos valores y opciones morales derivados de la experiencia social concreta, cuyo significado encapsulaban. Las huelgas, según lo hemos sugerido, representaban más que lo que nos transmiten los índices cuantitativos. También tenían su tono y cualidad peculiares, que impartían un carácter particular al pensamiento de los trabajadores en contacto con esa experiencia. Durante este período todos los aspectos de las relaciones de clase se caracterizaron por una virulencia que se hizo notar sobre todo en las principales huelgas. Según vimos, la huelga metalúrgica de noviembre/diciembre de 1956 fue un notable ejemplo de ello. Como muchas otras de ese tiempo, esta huelga simbolizó la solidaridad concreta y el sentimiento de unión de los trabajadores. Conflictos cotidianos de escala mucho menor —consistentes a menudo en disputas por cuestiones de organización en el sitio de trabajo y defensa de delegados y de las normas laborales tradicionales— reforzaron esos valores de orgullo, solidaridad y confianza en las propias fuerzas. La actividad misma de sabotaje suponía valores muy concretos. Aunque de ningún modo fue una manera de expresión puramente obrera, esta clase de acción influyó claramente sobre las percepciones de la clase trabajadora. El sabotaje en las fábricas no se limitó a ser el rechazo negativo de tal o cual empleador. También representó una afirmación de la capacidad del obrero para hacer frente, así fuera en forma mínima, a una situación social, económica y política que rechazaba, y afirmó su presencia como factor social.

Esta experiencia viva tuvo, pues, sus significados y valores implícitos, que con frecuencia encontramos articulados más explícitamente en los periódicos clandestinos, los testimonios personales y las hojas barriales de ese tiempo, expresiones que surgidas de esa esfera de conciencia práctica a la vez se dirigían a ella. En esas variadas fuentes de la militancia de base se manifiesta ampliamente, por ejemplo, un fuerte antipolitismo. Alguien que intervino en los episodios de ese tiempo lo recuerda así:

"Durante la Resistencia desdenábamos todo lo político. Para los peronistas lo político significaba la misma cosa que electoral y llamar a alguien un político fue percibido como un tipo de insulto. Los de la Resistencia pensaban que solamente los gorilas eran aliados de partidos políticos."

Este profundo recelo frente al sistema político y sus representantes tenía estrecha relación con la situación posterior

a 1955. La credibilidad y legitimidad de un régimen que empleaba la retórica de la democracia a la vez que proscribía a la expresión política de la mayoría eran evidentemente frágiles. Sin embargo la cuestión no terminaba allí. Además había un notorio escepticismo con las consignas políticas de la ideología oficial. Términos como "democracia", "justicia", "libertad", "imperio del derecho" inspiraban a menudo consideraciones despectivas, pero no en favor de ideas autoritarias y antidemocráticas, sino más bien en relación con la hipocresía de la retórica política oficial. Un periódico mimeografiado que editaban los militantes del Puerto General San Martín, que ya hemos mencionado, expresó así una noción típica en esa materia:

"No es necesario ser inteligente, basta ser un poco sensible para entender que esta 'libertad' está demasiado manchiada con la sangre del pueblo: es una libertad repudiada que precisa de la fuerza del miedo, la vigilancia y de la muerte para sostenerla [...] somos democratas pero no de una democracia en la que la libertad, la justicia y la ley son instrumentos que los opresores utilizan para mantener sus privilegios. Reconocemos que solamente existe una verdadera y auténtica democracia: la social democracia."¹⁰

Un corolario de este escepticismo político fue una orgulloso afirmación de su existencia como obreros, que más de una vez se expresó como preocupación e interés por la confianza en sí misma y la autonomía de la clase trabajadora. Lo cual reflejaba una clara sensación de aislamiento y de abandono por parte de otros sectores sociales, antes aliados de ellos:

"Los dirigentes nos han defraudado, los políticos nos han engañado, los intelectuales nos han olvidado."¹¹

Lamentación que se dirigía tanto a los políticos peronistas como a cualesquiera otros. Pero rara vez esa actitud se quedó en el simple lamento. En definitiva se le sumaba, por lo menos, alguna conclusión política o moral:

"Hasta cuándo seremos la carne de cañón electoral sobre la cual los oportunistas, los aventureros y los atrevidos pisan para llegar al poder."¹²

De allí se derivaba la implícita lección de que la clase trabajadora sufría ese destino debido a sus propias fallas, a su falta de autonomía, a que ella misma permitía que se la

utilizara. En mayo de 1956 una coalición de militantes gremiales que simplemente se llamaron Agrupamiento Sindical Argentino hizo circular en las fábricas del Gran Buenos Aires un volante entre cuyas principales afirmaciones se leía:

"Las conquistas que hemos ganado deben ser mantenidas y extendidas por la acción consecuente de los trabajadores sin prolectores oficiales que compiten para redimir lo que suponen es nuestra incapacidad o nuestra ignorancia. Nadie hará por nosotros lo que somos incapaces de hacer por nuestra propia cuenta."¹³

Para remediar esta situación los trabajadores debían convencerse de su propio valor, de su presencia como la clase fundamental de la sociedad. Los militantes que publicaban *Crisol del Litoral*, por ejemplo, volvían a menudo a ese tema, muchas veces en tono de imploración:

"La dinámica social está en nosotros, en nuestros pechos, en nuestros músculos, en nuestras manos."¹⁴

En muchos otros materiales publicados en ese momento por los militantes de base pueden hallarse idénticas afirmaciones del propio valor y de la importancia de los trabajadores en la sociedad. Un documento de una organización titulada simplemente Agrupación Obrera, de Lomas de Zamora, empezaba por afirmar que:

"La Revolución realizada por la oligarquía que siempre dominaba nuestra sociedad [...] está subestimando el poder y el valor de los trabajadores [...] pero, ¿han pensado para qué sirve su dinero? El dinero sólo tiene valor para comprar bienes para uso o consumo. ¿Quién hace con su energía todos, absolutamente todos, los bienes? ¿OBREROS!!! Ni marineros, ni soldados ni empleados ni comerciantes hacen bienes [...] ellos sólo consumen [...] mientras que los que producen, los obreros, nunca ganan suficiente para poder disfrutar las mercancías que hacen [...]. Pero ¿entendía esta verdad innegable [...] sabía y sabe que ustedes son la base de todo: las casas, los rascacielos, las máquinas, los caminos, los puentes, todo, todo está hecho por ustedes. El capital está muerto, no tiene valor sin trabajo que lo transforme en un producto. ¿De qué sirve el dinero en los bancos si éste no es usado para crear mercancías que representen riqueza? ¡Ningún uso! ¿Para qué tener millones en billetes si no hay comida para comprar? El capital sin ustedes es un cadáver que se está pudriendo."¹⁵

El volante bosquejaba la estrategia que debía seguirse: una huelga general total y una negativa de los trabajadores a producir, consumir o distribuir durante cinco días. Esto enseñaría a la oligarquía que valor tenía sin el concurso de los trabajadores y aumentaría las posibilidades de retorno de Perón.

Esta extraña mezcla de anarcosindicalismo, teoría económica marxista y devoción personal a Perón no debe ser tomada con ligereza como pintoresca anécdota de confusión conceptual. A mi juicio representa una recapitulación condensada de la experiencia de un significativo sector de la clase trabajadora antes de 1955, así como una afirmación de esa experiencia y las lecciones que dejó para la situación posterior a 1955. También esto fue hecho en una forma que, potencial e implícitamente, desafiaba muchos de los supuestos de la ideología peronista formal. Corresponde subrayar que entendiendo así ese proceso no significa negar su complejidad y ambigüedad. Depuesto Perón, el propio discurso oficial peronista había adoptado una actitud más radical, lo que por cierto contribuía a legitimar las ideas de los militantes de base acerca de la autonomía de la clase trabajadora. Pero sin duda alguna también había elementos que incluso a un peronismo oficial de posición más extremista le habría sido difícil absorber. Por añadidura, las formas de organización que la eslima propia y la autonomía de la clase trabajadora podían asumir fueron a menudo planteadas muy concretamente. El *Cuarenta*, por ejemplo, publicó un detallado estudio de la estructura celular en las fábricas como manera de asegurar la independencia y la eficacia organizativa de la clase trabajadora.¹⁶

IDEOLOGÍA FORMAL Y CONCIENCIA PRÁCTICA

Las formas específicas de subjetividad producidas por el proceso que bosquejamos encontraron expresión parcial en algunos de los conceptos y principios que, según hemos sugerido, estaban presentes en el discurso de la clase trabajadora posterior a 1955. Esta cultura de las bases, este "sentido común" de los trabajadores peronistas evidentemente impone una dimensión ambivalente a nuestra comprensión del impeto de la ideología peronista formal en los obreros durante el período que siguió inmediatamente a la caída de Perón. Pero debemos cuidarnos de oponer rígidamente entre sí y separar

ambos componentes. Aquí estamos examinando un proceso histórico e ideológico. Según vimos, los principios más formales y tradicionalmente válidos del peronismo fueron sin duda una presencia importante en la cultura de la clase trabajadora y contribuyeron poderosamente a formar sus percepciones. Más que ante una separación o una oposición rígida estamos ante una tensión, tanto explícita como implícita, entre ambos elementos. Esa tensión a su vez se relacionaba con otra tensión siempre presente entre la realidad experimentada, y la "conciencia práctica" que ésta generaba, y los principios de la ideología formal.

Acerca de esa tensión Raymond Williams ha comentado: "Allí donde se puede observar directa y explícitamente esa tensión, o donde se puede encontrar alguna interpretación alternativa, siempre nos mantenemos dentro de una dimensión de formas relativamente fijas. Pero con frecuencia no menor la tensión es un malestar, una presión, una latencia: el momento de la comparación consciente aún no ha llegado. y con frecuencia ni siquiera llega".¹⁷ Los mecanismos que intervienen en el manejo de esa tensión son diversos. Así, por ejemplo, en el período posterior a 1955 una solución adoptada como posible por los trabajadores peronistas consistió en insistir en una interpretación literal de los principios ideológicos tradicionales. Esto fue en parte añoranza de un pasado en que las nociones de la realidad y de la ideología formal coincidían. Y en parte supuso una insistencia sobre la legitimidad de conceptos ahora incompatibles con la experiencia. En este caso, nociones como "armonía de clases" y "justicia social", adoptadas por los trabajadores peronistas, no parecen negar la realidad sino más bien proponer una alternativa moral, reclamar una sociedad mejor. Esa insistencia literal en el valor de máximas ideológicas tradicionales en contextos sociales radicalmente distintos no podía menos que tener efectos perturbadores sobre la coherencia interna del discurso peronista formal.

Otro mecanismo para resolver esta discrepancia consiste en plantear nociones alternativas, o incluso opuestas, que se correspondan más adecuadamente a la experiencia de la clase trabajadora. Elementos de esas interpretaciones alternativas estaban claramente presentes en el discurso de los militantes de base que hemos examinado, allí donde pone el énfasis en la autonomía de la clase trabajadora y el papel exclusivamente propio de los trabajadores en la sociedad. La expresión más explícita de esas interpretaciones alternativas dentro del pe-

ronismo puede ser hallada en el programa que las 62 Organizaciones adoptaron en la reunión que celebraron en La Falda en noviembre de 1957. El documento incluía proposiciones en favor del control de la producción por los trabajadores y la destrucción de la oligarquía.

Debemos subrayar de nuevo la ambigüedad, el carácter contradictorio y la irregularidad del proceso que estamos describiendo. Los principios tradicionales rara vez fueron lisa y llanamente abandonados. En cambio perduraron a veces en forma modificada, quizá con implicaciones y significados modificados, en otros casos con nuevos y alternativos elementos sobreimpuestos a ellos, y también a veces en manifestación contradicción con otros elementos del discurso ideológico de la clase trabajadora. Los ejemplos de esto último abundan en los materiales impresos del período de la Resistencia. Ya hemos visto que la afirmación de la autonomía de la clase trabajadora iba de la mano con la afirmación de la mística peronista. El concepto de que había un interés común a trabajadores y patrones en la protección de la industria nacional persistió incluso en momentos en que el conflicto de clases culminó, así como persistió la idea del capital humanizado. Con frecuencia la identificación de un enemigo de clase fue no menos ambigua, incluso para trabajadores que padecían los efectos tanto de las listas negras de los empleadores como de la represión estatal. En ocasiones, la burguesía nacional era incluida entre los enemigos de la clase trabajadora, virtualmente sola en el espectro social. En este caso, el fuerte sentido de identidad corporativa de la clase trabajadora implicaba una nítida identificación de un enemigo de clase. En otras ocasiones, se consideraba que la burguesía nacional era simplemente incapaz de comprender los intereses comunes que tenía con los trabajadores.

En parte, la razón de esta ambigüedad reside en la indole misma del contexto político general en que los obreros peronistas actuaron en ese tiempo. La división del país entre peronistas y antiperonistas tuvo por efecto que un intenso conflicto de clases fuera absorbido por una polarización política que, en definitiva, no se basaba en las clases. "Peronista" y "antiperonista" no eran necesariamente sinónimos de posiciones de clase. Lo que fue acentuado por la concienzuda actitud del gobierno antiperonista. El decreto 4161, dado en 1956, prohibía y castigaba con cárcel la posesión de una foto de Perón en una casa particular y el hecho de cantar una canción peronista o de pasar un disco que la contenía, lo que

llevó la dicotomía política de la Argentina al nivel más elemental de la vida diaria. Si un obrero podía ser detenido por ir al trabajo en una bicicleta que tenía pegada una foto de Evita, mal podía sorprender que la figura de Perón y su retorno al poder sirvieran de centro a esa rebelión. Esto implicaba atravesar las líneas divisorias entre clases. No obstante su amargura y su aislamiento, la clase obrera comprendió claramente que la Resistencia se presentaba como una lucha al margen de las clases:

"para el peronismo de la resistencia no había duda de que el enemigo principal era el antiperonismo cualquiera sea su aspecto; y a la inversa el amigo fundamental era otro peronista. Delegando en Perón la suma de lo que era bueno y justo, la resistencia no precisaba de ninguna diferenciación interna. De este modo el neonazi podría luchar hombre a hombre con el protocomunista".¹⁸

El enemigo fundamental era el *gorila*, que teóricamente podía ser desde un compañero de trabajo hasta un oligarca.

Por añadidura, se diría que algunos de los valores y supuestos que integraban la cultura de la clase trabajadora en ese tiempo eran asimilados y reflejados por los principios formales de la ideología peronista más fácilmente que otros. Los supuestos relativos a la plena integración de los trabajadores, en cuanto ciudadanos, a la vida política, así como los relativos al papel político de los obreros en la sociedad civil, planteaban pocos problemas cuando se trataba de articularlos a la ideología peronista oficial. Ernesto Laclau considera que esos eran elementos "democráticos populares" dentro de un discurso ideológico, relacionados con un plano de antagonismo social y político que no coincide con el conflicto de clases por lo económico, sino con lo que ese autor llama el "antagonismo entre el pueblo y el bloque en el poder".¹⁹

A esta categoría pertenecían también las nociones sobre el papel de la clase obrera en el desarrollo económico y la defensa del Estado nacional y popular.

Por otro lado, los supuestos y principios derivados de la experiencia del conflicto de clases no eran tan fáciles de expresar. Ese fue particularmente el caso de los conflictos surgidos en el proceso laboral. Uno de los legados más importantes del peronismo había sido una cultura de planta y taller que afirmaba los derechos de los trabajadores en el proceso del trabajo mismo. Estos conceptos rara vez eran articulados explícitamente en términos ideológicos más específicos. En la medida en que eran formalmente expresados y

justificados, lo eran en términos de las tradicionales máximas peronistas sobre justicia social y bienestar social. Con la mayor frecuencia se mantenían implícitos, presentes en la conciencia práctica en el lugar de trabajo, explícitos en conflictos concretos en el plano del taller. El peronismo oficial tenía poco que decir sobre esas áreas de experiencia de la clase trabajadora, de modo que la tensión causada por ese vacío entre los conceptos formales peronistas de armonía social y capital humanizado no explotador y, por otro lado, la experiencia vivida en la planta y el taller se expresaba en gran medida —para usar de nuevo la frase de Williams— como "un malestar, una presión, una latencia". Lo cierto es que no se puede ignorar la presencia de esos factores de clase latentes, sumergidos a medias. En el curso de la década siguiente habían de representar un obstáculo con el que tropezarían tanto los empleadores como el Estado.

NOSTALGIA Y OBRERISMO EN LA CONCIENCIA DE LA CLASE TRABAJADORA

Raymond Williams ha desarrollado el concepto de "estructuras de sentimiento" para referirse a esas tensiones y desplazamientos que se reúnen a una expresión ideológica formal y sin embargo "definen una cualidad particular de experiencia y relación sociales". Distintas de la ideología formal, "conciernen a significados y valores tal como se los vive y se los siente activamente".²⁰ En la Resistencia peronista encontramos un período de historia de la clase trabajadora cuyas "estructuras de sentimiento" estaban profundamente penetradas por resonancias de clase y cuyos elementos característicos contribuyeron a establecer el tono de las relaciones políticas y sociales no sólo en el tiempo inmediatamente posterior a 1955, sino también para toda una generación de peronistas de la clase obrera.

Uno de los elementos característicos que definieron esa "estructura de sentimiento" fue sin duda un obrerismo de hondo arraigo, una exaltación de lo que podríamos llamar el "populismo obrerista". El análisis formal no permite perfilarlo del todo, pero sus resonancias son de cualquier manera discernibles. Se las advierte en el lenguaje. El peronismo de la clase trabajadora se exaltaba identificándose con "la chusma", "los grasas", "los descamisados", "los cabeceas negras". Al mismo tiempo, había animosidad y desprecio hacia el no obrero. Creo que muchas hojas de barrio, escritas en términos

erudos, que circularon en ese momento, deben ser interpretadas en términos de esta resonancia particular. Una que circuló en Rosario en 1957, con el título de *Juancito*, contiene una nota que podría ser relegada a la esfera de lo trivial si no reflejara precisamente esta cuestión de los "valores tal como se los vive y se los siente activamente". Titulada "Todo el mundo debe tener uno", exhorta a los peronistas a elegir su propio "gorila".

"Elijalo en su club o dondequiera, cuidelo, pero sea un poco perverso, haga su vida divertida. Cualquiera cosa servirá; rompa sus ventanas, haga pis en su jardín, mándele notas anónimas, haga sonar su timbre a las tres de la mañana. Cuando llegue la hora indicada el hijo de puta sabrá que es un hombre marcado."²¹

El tono de este y muchos otros fragmentos publicados por esa prensa está impregnado de amargura, frustración y desprecio visceral por el enemigo social y político.

Al mismo tiempo, este obrerismo latente e implícito contenía una afirmación de la existencia de la clase trabajadora, que no siempre se formulaba, sin embargo, en términos de un llamamiento, políticamente articulado, en favor de la organización autónoma, o de una conceptualización del papel de la clase trabajadora como productora de riqueza social. En cambio encontramos con frecuencia una afirmación de un sentimiento de clase expresado poco menos que en términos de un folklore que subrayaba la dureza y la aflicción de la vida de la clase trabajadora, así como celebraba los valores afectivos asociados al hogar y la familia, el barrio y los compañeros de trabajo. En otro número de *Juancito* encontramos, por ejemplo, un suelto donde se exhorta a las madres que tienen hijos en el servicio militar a despertar en ellos su solidaridad con sus compañeros, los trabajadores:

"Hágale sentir su amor y extrañar a su hogar; recuérdale del sudor amargo de su padre y de las lágrimas tiernas de su madre, todo el dolor y el amor de su hogar humilde. El sentimiento de su propio cuarto, el grupo del barrio, los muchachos del taller. Nada más hará falta. Si hace todo esto su hijo el soldado nunca tirará sobre su propia gente."²²

Otro elemento, más problemático, de la "estructura de sentimiento" característica de ese período fue la nostalgia por la era peronista. Tanto en los testimonios personales como en los panfletos clandestinos se subraya insistentemente el contraste

entre el caos y los conflictos de la vida bajo el régimen militar y la armonía y unidad social de la Argentina anterior a 1955. Presentes con claridad en esa nostalgia había elementos de fantasía regresiva por "los buenos días de antes" de una "edad de oro", meditación quejosa por un pasado utópico y glorificado. Pero eso no era todo. Por idealizada que fuese la visión del pasado peronista, no se trataba simplemente de una estructura conceptual agradable de imaginar a capricho. De esa "utopía" reciente se tomaban selectivamente elementos adecuados para atender las actuales necesidades y apuntar hacia futuras esperanzas. En particular, el pasado no servía sólo para anhelar el restablecimiento de un confortable idilio entre billeteras abultadas y hoteles sindicados en Mar del Plata, sino también como base para reclamar una sociedad futura fundada en la justicia social y el cese de la explotación.

El fundamento último de tales esperanzas residía en una noción del Estado -extraída de la experiencia en los tiempos de Perón- como motor del desarrollo nacional y, más decisivamente, como esfera donde la clase trabajadora debía buscar la satisfacción de su deseo de justicia social. Ello no significaba que los trabajadores no tuvieran conciencia de la indolencia y partidista del Estado existente. Más bien representaba un enunciado de lo que el Estado debía ser en lo futuro a partir de una interpretación selectiva de lo que había sido en el pasado. El Estado, en cuanto esfera pública soberana, debía ser la garantía de justicia y acaso alcanzara de nuevo esa condición si se lograba protegerlo contra el poder de los ricos, la oligarquía. Sobre esta visión de un Estado potencial idealizado había de fundarse el apoyo que la clase trabajadora dio a Frondizi en 1958.

Análogamente, la posición personal de Perón en esa actitud nostálgica involucraba más que la búsqueda de un reconfortante líder paternalista. La figura de Perón y sus atributos alcanzaron proporciones poco menos que míticas en el período 1955-58, pero de nuevo debemos insistir en que los elementos de ese mito no fueron imaginados arbitrariamente. En las mentes de muchos trabajadores enfrentados con el poder de los opresores, que no podían negar, y con la consiguiente capacidad de éstos para apartar el uso del poder público de su camino ideal, el propio Perón se convirtió en la garantía indeclinable y en la condición previa que los protegería contra la recurrencia de ese poder. Esto supuso, tal como en su visión del Estado peronista, cierta amnesia selectiva orientada a crear un Perón mítico que sirviera para sus necesidades.

Esto fue en alguna medida, por cierto, fabricación consciente del mito. En ese momento los militantes todavía recordaban y discutían las falibilidades de Perón -tanto personales como políticas-, y también eran comunes las bromas sobre su vida privada. Sin embargo, reconocer la "realidad" que había tras el mito no disminuía mayormente la importancia simbólica de la figura creada por los trabajadores peronistas. La "vuelta de Perón" no demostraba una lealtad emocional sin conciencia política. En cambio, como en el caso del activista cuyas palabras sirven de acápite a este capítulo, la vuelta de Perón llegó a simbolizar y sintetizar una gama de aspiraciones de los trabajadores en cuanto a dignidad, justicia social y fin de la aflicción.

La imagen que resulta de este análisis de la ideología y la conciencia en el lapso 1955-58 es, como se ha visto, compleja y matizada. Ciertamente, muchos de los principios tradicionales de la ideología peronista conservaron su atracción. Continuaron demostrando su capacidad para expresar ciertas necesidades y antagonismos emergentes de la experiencia y la actividad cotidiana de los trabajadores. El intenso conflicto de clases de aquel tiempo fue en definitiva absorbido por una dicotomía política que, sin basarse en clases, resultó ser más poderosa. De cualquier manera, también se ve claramente que no se operó una simple fusión de las máximas tradicionales del peronismo y las percepciones y acciones de la clase obrera. En ciertas esferas, particularmente las relativas a específicas cuestiones de clase derivadas del proceso de producción, hubo un manifiesto desacuerdo entre la realidad vivida y la filosofía formal. Esta discrepancia constituyó la base para la aparición potencial de elementos de un contradiscursus. Había entre esos dos campos una compleja relación recíproca que, según he sugerido, a veces se resolvió explícitamente en favor de nuevas interpretaciones alternativas o, con la mayor frecuencia, se resolvió en la coexistencia de elementos contradictorios.

Así fue como el pesar, el resentimiento y la nostalgia experimentados ante la extinción de una sociedad armoniosa e idealizada y su correspondiente discurso marcharon de la mano con el descubrimiento de las coercitivas relaciones sociales y políticas del presente. Si bien esto favoreció sin duda alguna la adopción de posiciones más extremas e intensificó las tensiones en el seno del peronismo y del discurso

peronista, ese proceso se operó dentro del contexto y los términos proporcionados por la retórica peronista existente, por lo que se alcanzó un equilibrio ambivalente entre la ideología peronista formal y los elementos de un contradiscursus en formación y a menudo sólo latente. La ambigüedad inherente a esta situación tuvo un nexo causal directo con la inestabilidad social y política de los años siguientes. En la base del apoyo peronista a Frondizi se encontró sin duda la idea de la recreación de un genuino Estado nacional y popular donde por fin pudiera establecerse la justicia social, idea que contribuyó a legitimar la actividad política de los dirigentes sindicales en la década 1960-70. Sin embargo, la experiencia de la Resistencia y su específica estructura de sentimientos, hecha de orgullo, amargura y sensación de solidaridad y poder de clase, también constituyó la base de una prolongada oposición obrera a Frondizi y los burocratas sindicales, porque proporcionó criterios sociales y morales para políticas públicas que discrepaban directamente con las ideas fundamentales del Estado desarrollista.

NOTAS

- ¹ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: *Conflictos de trabajo*, Buenos Aires, 1961.
- ² *Crisol del Litoral*, n° 2, noviembre de 1955.
- ³ *El Cuarenta*, n° 1, abril de 1957.
- ⁴ *Palabra Argentina*, 10 de diciembre de 1957.
- ⁵ *Azul y Blanco*, 26 de diciembre de 1956.
- ⁶ *Palabra Argentina*, 10 de diciembre de 1957.
- ⁷ *Mayoría*, 9 de diciembre de 1957.
- ⁸ Véase Marilena Chauvi: "O discurso competente", *Cultura e democracia, o discurso incompetente e outras falas*, San Pablo, 1982.
- ⁹ Citado en Roberto Carré: "La resistencia peronista: crónica por los resistentes", *Antropología del Tercer Mundo*, junio de 1972.
- ¹⁰ *Crisol del Litoral*, n° 1, octubre de 1955.
- ¹¹ *Crisol del Litoral*, n° 1, octubre de 1955. *Ibid.*
- ¹² *Ibid.*
- ¹³ Volante en posesión del autor.
- ¹⁴ *Crisol del Litoral*, n° 4, diciembre de 1955.
- ¹⁵ Volante en posesión del autor, probablemente de fines de 1956, que se dirige simplemente a los "Obreros argentinos".
- ¹⁶ *El Cuarenta*, n° 2, mayo de 1957.
- ¹⁷ Raymond Williams: *Marxism and Literature*, Oxford, 1977, pág. 130 (hay trad. cast.).

¹⁸ Carli, "La Resistencia peronista".

¹⁹ Ernesto Laclau: "Towards a theory of populism". *Politics and Ideology in Marxist Theory*. Londres. 1977. págs. 143-200 (hay trad. cast.).

²⁰ Williams: *Marxism and Literature*. pág. 132.

²¹ Juancito. Rosario. 18 de setiembre de 1967.

²² Juancito. Rosario. octubre de 1957.

TERCERA PARTE

Frondizi y la integración: tentación y desencanto, 1958-62

Resistencia y derrota: impacto sobre los dirigentes, los activistas y las bases

"Y no ceden por tratadores, ni porque están vendidos a Frigierio ni a Vitolio; ceden porque han entrado por la variante de que los obreros son los responsables de todo. La tremenda presión del gobierno y de la propia patronal y lo 'nacional y popular' puede más que el clamor de los obreros de las fábricas, de las que están alejados. En otras palabras, ceden porque ellos son la dirección de una etapa: la de la resistencia a los gorilas donde no cambian tratativas. Pero han dejado de reflejar en su conjunto a los combativos delegados de los plenarios."

Delegado anónimo ante la reunión de las
62 Organizaciones, noviembre de 1958.

DESARROLISMO: SU ATRACCIÓN Y SU RECHAZO EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE FRONDISI

A fines de octubre de 1958, cinco meses después de asumir Arturo Frondizi la presidencia, estalló una huelga en los yacimientos petrolíferos de Mendoza. La huelga era dirigida por una coalición de militantes comunistas y radicales y tenía por fin protestar contra los contratos que Frondizi había firmado con empresas petroleras extranjeras. El sindicato que tenía jurisdicción en los yacimientos, controlados por el Estado, era el Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE). El sector peronista del sindicato afirmaba contar con el apoyo de la mayoría de los obreros, pero no había podido demostrarlo

efectivamente porque las nuevas elecciones, si bien preparadas, aún no se habían llevado a cabo. El 13 de diciembre, la agrupación peronista del sindicato, es decir la Junta de Petroleros, reaccionó abiertamente contra la huelga, y la misma actitud adoptó el conjunto del movimiento oficial. Al plantearse por primera vez, en junio y julio de ese año, la cuestión de los nuevos contratos petroleros, la jefatura de las 62 Organizaciones había denunciado la oposición de "ciertos elementos agitando banderas supuestamente nacionalistas". En lenguaje muy similar al empleado por el gobierno para justificar los contratos, los había defendido como necesarios para asegurar el futuro autoabastecimiento de energía y romper así el vínculo de dependencia colonial. Recurrir a capitales extranjeros para ese fin era legítimo. En octubre, frente a la huelga, se siguió la misma línea. La Junta de Petroleros exhortó a los trabajadores peronistas a ignorar el llamamiento a la huelga. El Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, ente creado corto tiempo atrás por Perón para fiscalizar las actividades del movimiento en la Argentina, adoptó la misma actitud, como lo hizo *Luzca Dura*, periódico semi-oficial del peronismo. En los sectores del SUPE controlados por los peronistas, como en Comodoro Rivadavia, Salta y las refineries de Ensenada, la huelga no se propagó. El 4 de noviembre Frondizi la declaró ilegal.

El desecho de la jefatura sindical peronista de evitar un conflicto directo con el gobierno con motivo de los contratos petroleros no carecía de precedentes. La verdad era que en varias ocasiones, durante los primeros meses de la presidencia frondicista, esos líderes habían retrocedido para no entrar en pugna con el gobierno.² El motivo de la libertad de acción concedida a Frondizi era, al menos en parte, pragmático. Inicialmente, durante el período que medió entre las elecciones y la asunción del poder en mayo, los gremios no hicieron nada que pudiera diferir el traspaso del mando a Frondizi. Una vez éste en la Casa Rosada, optaron por darle la posibilidad de cumplir las promesas formuladas durante la campaña electoral a la clase trabajadora y al movimiento peronista. Los peronistas habían votado a Frondizi a cambio de la adopción explícita, por parte de éste, de ciertos compromisos secretos. Estos incluían: revisión de todas las medidas económicas adoptadas desde 1955 que fuesen perjudiciales para la soberanía nacional, anulación de todas las disposiciones de persecución política, suspensión de todas las proscripciones sindicales y políticas, devolución de la CGT y

realización de elecciones en un plazo de 120 días, y reconocimiento legal del partido peronista. Los dirigentes gremiales no querían provocar una crisis institucional que impidiera el cumplimiento de estos compromisos.

Esa actitud cambió radicalmente al llegar, a principios de noviembre, órdenes de Perón en el sentido de que se denunciaran los contratos. El 6 de noviembre el Consejo Coordinador cambió de rumbo y aconsejó a los sindicalistas peronistas adoptar "una acción decidida y enérgica de repudio a los convenios".³ El 9 de noviembre, Frondizi, en un discurso a la nación, afirmó que la huelga formaba parte de un movimiento insurrecto dirigido primero por los comunistas y después por "los que creen en el retorno del dictador depuesto".

Al día siguiente se declaró el estado de sitio, se movilizaron tropas hacia los yacimientos petrolíferos y se inició el arresto de dirigentes gremiales. Rogelio Frigerio, considerado el principal arquitecto de la conciliación con los sindicatos peronistas, renunció a sus funciones en el gobierno. Al mismo tiempo, en una tormentosa sesión plenaria de las 62 Organizaciones, los delegados obligaron a un renuente comité coordinador a denunciar los contratos y convocar a una huelga general para el 20 y el 21 de noviembre. Se hizo sentir la fuerza de los militantes de base: 48 delegados votaron por la huelga de 48 horas y 7 en favor de un paro por tiempo indeterminado. Se prohibió teminantemente a la jefatura de las 62 Organizaciones entablar por iniciativa propia negociaciones para concluir un acuerdo.⁴

No obstante esa resolución, los líderes de las 62 Organizaciones empezaron a buscar inmediatamente vías para llegar a un compromiso. En los días siguientes a la sesión plenaria circularon rumores en el sentido de que el vicepresidente, Alejandro Gómez, cuya oposición a los contratos era conocida, conspiraba con sectores fuertemente antiperonistas de las fuerzas armadas. El 14 de noviembre los dirigentes de las 62 celebraron una larga reunión con Frondizi. Se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos en litigio. Se levantaba el estado de sitio, se tomarían medidas para controlar los precios, se aplicaría lo antes posible la nueva Ley de Asociaciones Profesionales y se iniciarían conversaciones sobre nuevos convenios colectivos. Frondizi aseguró a los jefes sindicales que los contratos petroleros no perjudicarían a YPF en lo concerniente a refinación y comercialización. Sobre esta base, la proyectada huelga de 48 horas quedó sin efecto. Se confió a Augusto Vandor, dirigente de los metalúrgicos, la

tarca de convencer telefónicamente a Perón de la sensatez del arreglo.⁵ Al día siguiente se canceló la huelga en los yacimientos petroleros.

En sí mismo este episodio no tuvo mucha importancia. El choque definitivo entre los trabajadores peronistas y el gobierno de Frondizi había de producirse seis semanas después. De cualquier manera, constituyó un acontecimiento sintomático. Se encontraron en juego la mayoría de las variables que determinarían la relación entre aquellos y éste: el reconocimiento de los beneficios concretos que suponía para los gremios un gobierno constitucional y la inconveniencia de llevar la agitación hasta un punto donde pudiera provocar un golpe militar contra Frondizi; una simpatía ideológica con algunos principios fundamentales del desarrollismo, lo que contribuyó a prevenir el apoyo inicial a la huelga; la divergencia entre los dirigentes sindicales y los activistas de base en torno de las relaciones con el Estado, y finalmente el papel de Perón en la determinación de la estrategia del movimiento y su posible conflicto con la dirigencia gremial.

El interés que ofrecía, desde el punto de vista de los dirigentes gremiales, no contribuir a la caída de Frondizi era evidente. Para noviembre ya habían obtenido ventajas concretas. La más importante era la Ley 14.455, de Asociaciones Profesionales. Modelada con arreglo al código laboral peronista, estipulaba el reconocimiento de una sola unidad negociadora en cada industria. Esto acababa con las tentativas, efectuadas durante el régimen de Aramburu, de aplicar un sistema de negociaciones multisindical. Además la nueva ley abolía la representación de la minoría en la dirigencia sindical y restablecía el sistema peronista que asignaba a la lista ganadora todo el control del sindicato. En muchos gremios ya se habían programado elecciones con arreglo a la nueva ley y se habían programado otras en sindicatos donde los peronistas, suprimida la interferencia militar, confiaban en ganar. Los gremios estaban preocupados también por otros puntos de interés inmediato, como la reconstrucción de los fondos jubilatorios y de las obras sociales. El salvamento de las finanzas sindicales dependía crucialmente de la aplicación regular de la nueva Ley de Asociaciones Profesionales, que autorizaba a los empleadores a retener de los haberes de los empleados, en nombre del sindicato, las cuotas que éstos aportaban al gremio. Esa ley había de ser un tema permanente del descontento militar. Entre sus compromisos de largo plazo, Frondizi había asegurado también la devolución de la CGT una vez

realizadas las nuevas elecciones; puesto que los peronistas confiaban en triunfar en ellas, podían darse por seguro un papel dominante en la futura Confederación.

Todo esto había de dar a Frondizi una carta de considerable peso que podría jugar en sus tratos con los gremialistas. En los primeros momentos de su gobierno, los sectores clandestinos del movimiento peronista, e incluso el propio Perón, la consideraron una carta falsa. O excluían la posibilidad de un golpe militar, o bien estimaban que no habría gran diferencia en las políticas concretas y la situación del movimiento. Pero la dirigencia gremial no podía permitirse tanto optimismo. La declaración del estado de sitio, la renuncia de Frigetto y los rumores de golpe militar durante el incidente con Gómez eran poderosos recordatorios del delicado equilibrio institucional y de cuánto tenían que perder en caso de alcanzarse ese equilibrio. Si bien tenían muchas razones específicas de queja contra Frondizi, como los aumentos del costo de la vida y la lentitud en la aplicación de la nueva ley laboral, los jefes sindicales en general lo consideraban la mejor opción. Al promediar la crisis de noviembre *Línea Dura* lo reconoció así, al advertir a sus lectores:

"Si se deja arrastrar al terreno de la violencia servirá inexorablemente a la reacción con todas las consecuencias que ello implica: gobierno gorila, terrorismo, cierre de toda salida que supere la contingencia actual."⁶

El crédito abierto a Frondizi por los sindicatos no fue simple resultado de consideraciones pragmáticas. Como lo indicó la crisis de noviembre, existía también una simpatía ideológica fundamental con algunos principios básicos de la política desarrollista. Desde su postulación como candidato presidencial en noviembre de 1956, episodio que había dividido al radicalismo y conducido a la formación de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), Frondizi había desarrollado un programa socioeconómico coherente y distintivo, que llegó a ser el aspecto central de su campaña electoral.

Frondizi y el grupo de intelectuales que lo rodeaba —en primer término Rogelio Frigetto, propietario de la revista *Qué-sostenían* que la Argentina debía romper su viejo modelo económico, con arreglo al cual el crecimiento dependía de una declinante capacidad para importar generada por su tradicional sector exportador, el agropecuario. La Argentina debía producir por sí misma las materias primas y los bienes terminados que hasta ahora importaba del mundo desarrollado.

Sólo en esta forma podría superar la división internacional del trabajo, impuesta desde el exterior, que la condenaba al papel de proveedora de ciertas materias primas al mundo desarrollado, a precios cada vez más desfavorables.⁷ Si bien reconocían la rápida industrialización operada en el país desde la década 1930-40, afirmaban que ese fenómeno se había limitado a la industria liviana a expensas de las materias primas, los combustibles, la maquinaria y el equipo industrial. En el esquema desarrollista el crecimiento económico era sinónimo de industrialización, y la promoción de una industrialización "genuina" era la piedra angular de la estrategia económica de Frondizi.

En la retórica desarrollista e industrialista de Frondizi, ciertas áreas clave recibieron preferencia. En la campaña electoral de 1957 y principios de 1958 la producción petrolera ocupaba el primer puesto de la lista de prioridades, seguida por el desarrollo de la industria pesada y por el de bienes de consumo de alta tecnología en las esferas petroquímica y electrometalúrgica. También se puso mucho énfasis en la creación de un sistema integrado de transporte por carretera que echaría las bases de una industria automovilística local.

En general, Frondizi y los desarrollistas estructuraron su programa económico en el marco de una vieja tradición nacionalista. Atacaron ciertamente al capital extranjero y preconizaron la protección de la industria nacional contra una competencia desleal, así como la creación de un poderoso mercado nacional basado en el mantenimiento de altos niveles de consumo interno. Análogamente, la reforma agraria tenía sitio en su plataforma. Frondizi se había destacado tiempo atrás como uno de los principales críticos de los contratos petroleros firmados por Perón con la Standard Oil en 1955.⁸ Similarmente, el programa de la UCRl había postulado con toda claridad la nacionalización de la industria petrolera y el mantenimiento de la posición monopólica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Sin embargo, hacia 1958 Frondizi había aceptado cada vez más la posición sostenida desde 1956 por Frigerio, a cuyo juicio era necesaria la inversión extranjera, tanto pública como privada, para alcanzar la industrialización en la escala pretendida. Al llegar las elecciones de 1958 ya se consideraba que el capital extranjero no era un mal en sí sino que era capaz, bajo un adecuado control estatal, de proporcionar acumulación de capital en áreas vitales de la industrialización.⁹

El desarrollismo involucraba también ciertas nociones

sociales fundamentales. Recorriendo una vez más un conocido surco del pensamiento nacionalista, empezaba por conceder a la nación como una principalísima categoría que subordinaba y armonizaba en su seno a las clases sociales, los intereses económicos y las fuerzas políticas. Como parte dominante de la nación, la clase trabajadora debía perseguir sus objetivos en el marco del bien común. Se admitía la existencia de conflictos de clase, pero debían ser resueltos en el contexto del bien nacional. Si la clase obrera intentaba prolongar sus ideas sectoriales más allá de los límites impuestos por el bien común se condenaba a sí misma a un estéril enfrentamiento con otros "factores de poder". A juicio de los desarrollistas, exactamente eso era lo sucedido bajo Perón. En persecución de intereses sectoriales la clase trabajadora había roto la alianza "nacional y popular" con los empleadores, los militares y la Iglesia, en inmediato perjuicio de los trabajadores, que habían debido soportar al gobierno antiobrero y antinacional de Aramburu.

Los desarrollistas prestaron gran atención a la relación entre empleadores y trabajadores. Sostuvieron que si bien el histórico antagonismo entre ambas clases debía ser sumergido en la síntesis nacional global, también era preciso asegurar su papel a una fuerte organización sindical:

"Así como es necesario que los trabajadores puedan participar con su propia organización y con un punto de vista independiente en el curso del desarrollo nacional, es necesario fortalecer y ampliar la acción unida. Esto asegurará que la expansión económica no beneficie exclusivamente el capital nacional o extranjero."¹⁰

Esta actitud ante la clase trabajadora y su organización formaba parte de una retórica social más amplia, que reunía varias líneas económicas y sociales de la ideología desarrollista y que habitualmente recibía el nombre de "integracionismo". Resumiendo esta filosofía, Juan José Real, destacado propagandista del desarrollismo, argumentaba que:

"El empleador argentino había superado los estrechos horizontes de los primeros industriales. La presencia y representatividad de los trabajadores ya había sido reconocida y activamente promovida. Maquinarias, materias primas, energía, a las que debía agregarse la tecnología adecuada y una nueva relación entre empleadores y trabajadores, eran la base adecuada del desarrollo."¹¹

En este contexto es posible apreciar la indole y la profundidad de la atracción que ejerció el desarrollismo sobre los gremialistas peronistas. Resulta claro que esa atracción iba más allá de los beneficios inmediatos prometidos por Frondizi. En el sentido más general, la teoría desarrollista, tal como la expusieron Frondizi y Frigerio, abrevaba en una honda fuente que se originaba en el nacionalismo argentino y arraigaba en la década 1930-40. Según vimos, de esa tradición ya se había apoderado el peronismo. Por lo tanto, en un sentido general el desarrollismo era escasamente innovador, en lo cual residía una de sus fuerzas. Se inspiraba en una tradición ideológica de sólido arraigo. Mas específicamente, el nacionalismo económico de Frondizi tenía paralelos en la experiencia peronista anterior a 1955. El segundo plan quinquenal del peronismo, lanzado en 1953, prefiguraba en gran medida el programa económico preconizado por Frondizi en 1957. El primer puesto había pasado a la producción de petróleo, seguida por la de acero, productos químicos y automotores. Análogamente, al principio Perón había puesto en tela de juicio el papel del capital extranjero en el proceso de industrialización. En 1953 se había aprobado una nueva ley, más liberal, sobre inversiones extranjeras, y las metas de mayor producción industrial y petrolera fijadas en el segundo plan quinquenal tenían como premisa inversiones extranjeras en gran escala.¹² El propio Perón había persistido en la defensa de los contratos con la Standard.¹³

También en la esfera social el desarrollismo y el peronismo tenían mucho en común. El énfasis puesto por Frigerio y sus colaboradores en la necesidad de que los trabajadores, por intermedio de fuertes sindicatos independientes, colaboraran con otros "factores de poder", como la Iglesia y los empleadores, coincidía con conceptos fundamentales de la ideología y la práctica peronistas. El discurso desarrollista se hacía eco de la afirmación contenida en la retórica peronista, de que la clásica relación conflictiva entre el capital y el trabajo se había desgastado y era preciso reemplazarla por el reconocimiento del aporte común de ambos al proceso de producción. En la retórica frondista también era un lugar común el lenguaje de la revolución empresarial y la moderna filosofía de las relaciones laborales, lenguaje que en los últimos años del Estado peronista había dominado cada vez más los esfuerzos oficiales por acrecentar la productividad.

Existía, por lo tanto, una afinidad subyacente entre los principios clave desarrollistas y ciertas nociones de la idolo-

logía peronista formal, y la atracción ejercida por esto condujo a uno de los puntos constantes de la actividad sindical bajo el gobierno de Frondizi y sus sucesores. La búsqueda de una versión u otra de esa estrategia desarrollista había de obrar como una razón fundamental coherente que impulsó la actividad social y política de los sindicatos peronistas en la década siguiente. Sin embargo, las afinidades ideológicas formales no pudieron impedir una profunda ruptura entre los sindicatos y Frondizi. Tal ruptura se centró en el plan de estabilización que Frondizi presentó a fines de diciembre de 1958.

En términos generales, la política económica de Frondizi siguió de cerca la lógica del análisis propuesto por los desarrollistas en los años anteriores: acelerar la industrialización y racionalizar la producción. En la práctica, la más activa de sus políticas durante los nueve primeros meses involucró un esfuerzo por aumentar la inversión industrial y en particular la inversión extranjera.¹⁴ Estas medidas, junto con las introducidas por el plan de estabilización de diciembre, habían de tener efectos espectaculares. La proporción correspondiente a los bienes de capital producidos en el país en el total de bienes de capital aportados aumentó del 37 por ciento en 1950 al 63,7 por ciento en 1961. En el total de la economía, la inversión fija global creció del 17 por ciento del Producto Bruto en 1955 al 25 por ciento en 1961. Entre 1960 y 1962 el total de nueva maquinaria y equipo comprados fue igual, en precios constantes, a la cantidad de todo el período 1953-58.¹⁵ También en 1962 la Argentina contaba con las bases de una industria de automotores y se autoabastecía de petróleo.

Sin embargo, para fines de 1958 Frondizi se enfrentaba con una crisis crónica de la balanza de pagos. A cambio de un préstamo de *stand by* por el FMI aceptó aplicar un plan de estabilización, que fue presentado a fines de diciembre. El plan incluía una reducción radical de las tarifas aduaneras y los recargos para los bienes de capital importados, una devaluación del peso, la suspensión de la mayoría de los controles de precios y la de las restricciones comerciales cuantitativas. El gobierno anunció también claramente su decisión de aplicar medidas que equivalían a una congelación de los salarios. Este plan quebró la frágil alianza entre los sindicatos y Frondizi. El impacto inmediato del plan sobre la clase obrera fue notorio. Entre 1958 y 1959 los salarios reales bajaron un 20 por ciento, y si bien hubo cierta recuperación en los dos años siguientes, para 1961 se encontraban aún un 5 por ciento por

debajo del nivel de 1958. El plan supuso igualmente una notable redistribución de la renta nacional; la parte correspondiente a salarios declinó del 48,7 por ciento en 1958 al 42,1 por ciento en 1961. También gravitó sobre el nivel de empleo al provocar una breve pero aguda recesión en 1959, momento en que los precios aumentaron un 113 por ciento.¹⁶

La política económica de Frondizi, junto con la represión de actividades políticas y gremiales que la acompañó, fue considerada una "traición" por el movimiento sindical. Con la mayor frecuencia, su hostilidad a la política económica de Frondizi se expresó en el lenguaje del nacionalismo y se centró en las concesiones al capital extranjero. Sin embargo, con mayor fundamento los sindicatos condenaron la traición al concepto de que el desarrollo económico podría realizarse sobre la base del consenso entre las clases, y de que la modernización industrial podría ser alcanzada en el marco de una política de redistribución orientada por el Estado. Condenaron a Frondizi por no aplicar la dimensión social de su ideología preelectoral, donde había insistido en la necesidad de un fuerte movimiento gremial que marchara de la mano con los empleadores y el gobierno hacia un "genuino" desarrollo nacional que también beneficiaría a los trabajadores. Ese sentimiento de traición subsistió con fuerza durante toda la era de Frondizi y obstaculizó sin cesar las tentativas del presidente por restablecer su derruida alianza con los gremios.

Sin embargo la oposición a Frondizi no era homogénea. Más aún, la idea misma de "traición" suponía la subsistencia de la fe en la eficacia de las ideas "traicionadas"; el acento caía en la buena o mala fe de quién debía aplicarlas más que en la validez de los conceptos "traicionados" mismos. Frondizi había de consagrar mucho tiempo del que le quedaba en el gobierno a tentativas por persuadir a los dirigentes sindicales peronistas de su buena fe y de la permanencia de su "compromiso con los conceptos del desarrollo "nacional y popular". Argumentaba que el plan de estabilización había sido una infortunada necesidad del momento y que las concesiones al capital extranjero eran indispensables para romper los vínculos del subdesarrollo. Con el transcurso del tiempo, según veremos, consideraciones pragmáticas llevaron a los gremialistas a conceder cada vez más a Frondizi, acerca de este punto, el beneficio de la duda.

Existía sin embargo una oposición de distinto tipo a Frondizi, arraigada en el legado del período de la Resistencia. Esta oposición de los trabajadores se sustentaba en la expe-

riencia de los militantes de base que habían luchado contra el régimen militar después de 1955, así como en el característico conjunto de valores y en la "estructura de sentimiento" que esa lucha había engendrado. Por más que la identidad entre muchas nociones fundamentales del peronismo y de la ideología desarrollista hubiera gravitado en favor de una alianza de los trabajadores con el frondicismo, más aún habían de gravitar la experiencia y la cultura de la Resistencia sobre una minoría militante nada desdeñable durante todo el gobierno de Frondizi. La aspreza de la lucha entablada en 1959 contra Frondizi había de confirmarlo más todavía. Esa oposición, que ya se había manifestado en los 800.000 votantes que en febrero de 1958 habían desobedecido la orden de Perón de votar por Frondizi, se expresaría de nuevo en el pedido que formularon las bases en el sentido de realizar una huelga el 17 de octubre de ese año, y otra vez en la simpatía de los delegados de base con la huelga petrolera y el llamamiento a huelga general que esos delegados lanzaron en apoyo al paro de los petroleros.

Esta oposición a Frondizi se inspiraba en los elementos de contradicción que analizamos en el capítulo anterior y que, evidentemente, comprendían varias nociones que desafiaban la ideología peronista formal. Más importante, sin embargo, fue el hecho de que la oposición a Frondizi y a todo compromiso con él se basara en una interpretación literal de elementos tradicionales de la ideología peronista, precisamente los mismos elementos que podían llevar a una alianza con el Estado desarrollista. La base de la oposición pasó a consistir en una insistencia literal en esos elementos. Esto implicaba una interpretación selectiva de la experiencia peronista. Implicaba insistir seriamente en la retórica del nacionalismo económico, pero omitiendo toda referencia, por ejemplo, a los contratos de Perón con la Standard Oil, o al convenio con la Kaiser, o a la visita de Milton Eisenhower, para subrayar en cambio la nacionalización de los ferrocarriles por Perón y sus denuncias del capital foráneo. También se encontraba presente, si bien implícita, la noción de la importancia del propio Perón. Este sería capaz de garantizar que no se empleara el poder del Estado en detrimento de los trabajadores o del país.

Todo lo cual acabaría por significar, según veremos, que esta oposición a Frondizi no elaboró una crítica básica formal de las bases de la estrategia desarrollista, sino que persistió bajo forma de un rechazo moral de su impacto, un hondo

defensiva y en ningún momento fue acompañada por un plan político coherente para derribar a Frondizi, de cualquier manera testimonió la extraordinaria combatividad de la militancia peronista de base y la amplia gama de iniciativas que era capaz de tomar espontáneamente. También demostró la profundidad del impacto provocado por la experiencia de la Resistencia y, por comparación, la superficialidad del efecto surtido por el engatusamiento desarrollista del período anterior a 1959. Asimismo constituyó una clara prueba de la hondura del nacionalismo de la clase obrera y de la forma en que este importante puntal de la ideología peronista podía ser usado por los trabajadores no como base de la colaboración entre las clases sino más bien como razón fundamental de conflicto entre ellas.

En el corto plazo, la severidad con que el gobierno reaccionó a la ocupación del frigorífico y a la huelga fue una severa indicación del punto hasta el cual estaba dispuesto a llegar en el cumplimiento de su programa económico. Puso fin a cualquier posibilidad inmediata de aplicar un plan de desarrollo integracionista basado en la idea de una alianza nacional "multiclassista" —que incluyera una poderosa organización gremial— como base social y política estable para los planes económicos desarrollistas. El sector del gobierno más estrechamente comprometido con esos conceptos —centrado principalmente en torno de Frigerio— adoptó una actitud de fuerte crítica con la forma en que el gobierno había manejado el episodio. En mayo, Frigerio fue obligado a renunciar como asesor personal del presidente; además en junio renunció el ministro de Trabajo, David Blejer, frigerista. En el mismo mes de junio, Alvaro Alsogaray que había sido funcionario en el área económica con Aramburu, fue designado ministro de Economía. En agosto fue nombrado comandante en jefe del Ejército el general Toranzo Montero, notorio antiperonista. Estas decisiones reflejaron la comprensión, por parte de Frondizi, de que para llevar adelante sus planes económicos debería seguir una línea de dureza. También reflejaron el creciente recelo que Frondizi y sus consejeros desarrollistas inspiraban a la mayor parte de las fuerzas armadas. La designación de Alsogaray se había debido a un pedido directo de los militares a Frondizi. Ese mismo planeamiento condujo también a la renuncia del subsecretario del Ministerio de Defensa, coronel Reinández, conocido por sus contactos con la cúpula sindical.

Sin embargo, la clase obrera no fue intimidada por esos hechos. Durante 1959 hubo otros tres conflictos, de alcances

sin precedentes, en defensa del nivel de vida. De fines de abril a fines de junio hubo una huelga nacional de bancos. A fines de agosto los metalúrgicos se embarcaron en un paro nacional, que duró hasta mediados de octubre, en procura de un nuevo acuerdo salarial. El 23 de setiembre el sindicato de textiles declaró por el mismo motivo una huelga por tiempo indeterminado que duró hasta el 9 de noviembre. Además de estos tres grandes conflictos hubo muchos otros de escala menor.

En el seno de las 62 Organizaciones, la militancia de las bases se reflejó en la composición del nuevo comité coordinador elegido a fines de enero. Inmediatamente después de la huelga general. Quedó constituido en gran medida por delegados del interior y de sindicatos pequeños que se habían opuesto al levantamiento del paro. Esa composición se debió en parte a que la mayoría de los grandes sindicatos habían sido intervenidos durante la huelga. Pero más importante fue el hecho de que reflejaba el resentimiento contra ellos por su modo de manejar el paro, así como la sospecha de que, antes de enero, el viejo comité se había comprometido demasiado estrechamente con Frondizi.²⁸ Ese proceso de crítica por parte de las bases sindicales continuó. A principios de febrero, una conferencia de delegados de 24 seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica, reunida en Rosario, censuró severamente las acciones del Secretariado Nacional del gremio durante la huelga.²⁹ La Federación de Trabajadores de los Servicios de Salud, cuyo jefe, Amado Olmos, había integrado el comité coordinador anterior, se retiró temporariamente de las 62 Organizaciones debido a la severidad de las críticas lanzadas contra la dirigencia durante una asamblea celebrada para considerar la huelga. En esa reunión, los delegados de las bases acusaron a sus líderes de aceptar tácitamente el plan de estabilización.³⁰ Ni siquiera la nueva cúpula de las 62 se salvó de los ataques lanzados por las bases. En una reunión que estas organizaciones realizaron a principios de marzo, el comité coordinador fue

²⁸ "bombardeado desde la barra con epíletos de 'Traidores!', 'Vendidos!',...".

La militancia y la decisión de enfrentamiento presentes en un año en que se habían producido cuatro conflictos nacionales de tal convergadura y tres huelgas generales de solida-
 ridad culminaron en la reunión plenaria que las 62 Organi-

zaciones efectuaron en Rosario en diciembre de 1959. El documento político presentado por el comité coordinador rechazó enfáticamente el proyecto económico de Frondizi:

"Con nuestra industria desprotegida, la política económica actual del gobierno significa un retroceso en el avance de nuestro país al cual se lo pretende volver a su anterior situación de Nación exportadora de materias primas e importadora de artículos manufacturados que hasta 1944 nos colocara en situación de colonia extranjera. Rechazamos el sistema económico patrocinado por el FMI [...] ya que significa lisa y llanamente la explotación del hombre por el hombre."³²

El documento, unánimemente aprobado con entusiasmo, reflejó claramente los sentimientos de la mayoría de los militantes peronistas y buena parte de las bases. Retomó la veta nacionalista y antimperialista de la ideología peronista. Más importante, sin embargo, fue su afirmación explícita de que todo desarrollo no basado en el consenso de clases y en un capital no explotador y humanizado implicaba una regresión, un intento de volver a la dominación que ejercían los intereses terratenientes antes de 1944. Este concepto de un nexo indisoluble entre justicia social y desarrollo económico era, según hemos sostenido, decisivo en el discurso peronista de la década 1940-50 y siguió configurando la idea, sustentada por los trabajadores, de la "traición" de Frondizi, así como su creencia en la posibilidad de un desarrollo nacional "genuino". El documento denunciaba cómo

"el gobierno estaba vilmente al pueblo en la aplicación del enunciado programa nacional y popular".³³

Los conflictos de 1959 fueron en muchos sentidos la culminación de la militancia y la confianza que el peronismo de base había adquirido en los años de la Resistencia.

En tanto que los propagandistas del desarrollo argumentaban que era absurdo hablar de un retorno a las condiciones económicas y sociales anteriores a 1943 y que eso demostraba incompreensión de los cambios económicos que se operaban bajo Frondizi, los militantes peronistas y sus bases se gutaban por una lógica distinta y menos abstracta. Las deliberaciones de la reunión de Rosario destilaron un sentimiento de amargura genuinamente experimentado, causado por una traición profunda, como lo indicaron las resoluciones adoptadas al concluir la reunión. Las dos últimas

anunciaban una campaña, organizada por los sindicatos, en favor del voto en blanco en todas las futuras elecciones, con el fin de rechazar un gobierno fraudulento e ilegítimo. Asimismo, se declaraba a la clase trabajadora en

"un estado de resistencia civil enfrentando a los poderes del estado, cualquiera que fuere su jurisdicción".

En muchos sentidos, en los conflictos de 1959 culminaron la militancia de las bases peronistas y la confianza propia que habían adquirido en los años de la Resistencia. La reunión de Rosario significó un paso importante al confirmar la madurez del movimiento sindical y su dominio dentro del peronismo como organizador de la oposición a Frondizi. Sin embargo, a pesar de toda la arrogancia militante de esa reunión, el año 1959 vino a simbolizar también una serie de derrotas cruciales para la clase trabajadora. Al reabrirse en marzo el Frigorífico Lisandro de la Torre, sólo fueron retomados 4500 del total de 9000 obreros, y la planta siguió en manos privadas.³⁴ Al cabo de 70 días de una huelga que los desmoralizó, los bancarios volvieron finalmente al trabajo en condiciones similares. Tanto los metalúrgicos como los textiles perdieron sus batallas por una revisión amplia de sus convenios. Que los dos sindicatos más poderosos fracasaran en sus gestiones para lograr nuevos convenios inevitablemente tendió a disuadir a gremios más pequeños de intentar otro tanto. La mayoría de los contratos firmados concedieron insuficientes aumentos de emergencia en vez de ser auténticas renegociaciones.

Los sindicatos, tanto peronistas como no peronistas, se encontraron en una situación muy desventajosa frente a un gobierno respaldado por las fuerzas armadas y dispuesto a recurrir al poder del Estado para mantener su política económica. En el curso de 1959 muchos de los sindicatos declinivos fueron intervenidos por el gobierno. Por añadidura, la aguda recesión provocada por el plan de estabilización debilitó mucho la posición de los sindicatos para negociar. Los gremialistas veían con bastante claridad que se encontraban en un aprieto desesperado y se hacían pocas ilusiones de vencer. Al promediar la huelga textil, el órgano oficial del sindicato dijo:

"No estamos luchando por un aumento de salarios [...] estamos luchando por la supervivencia del gremio textil, puesto que la intransigencia patronal esta vez no se reduce solamente a negarse a

reconocer nuestras justas demandas sino que pretenden que el gremio renuncie a sus conquistas."³⁵

La intransigencia empresarial era respaldada por el propio gobierno. La prensa desarrollista criticaba la negativa del gobierno a obligar a las empresas a efectuar un esfuerzo serio para resolver las disputas. El redactor sindical de *Mayoría* deploró la forma en que habían sido tratados los gremialistas en el conflicto con los textiles y los metalúrgicos:

"Antes de que los sindicatos, espada contra la pared, declararan la huelga, los patronos se niegan siquiera a hablar de posibles contraofertas, manteniendo en cambio sus primeras ofertas que fueron inaceptables. Y cuando la huelga comienza ellos anuncian 'No negociaremos mientras los sindicatos empleen medidas de fuerza'. ¿Esto podría ser considerado una manera seria de practicar las relaciones laborales? [...]. Además, las huelgas normalmente comienzan después de varios meses de esfuerzos inútiles en que los sindicatos han andado de una repartición a otra en varios ministerios, al final sin lograr nada."³⁶

Esto no niega el entusiasmo con que la clase trabajadora participaba en los conflictos. El paro textil había sido resuelto por una asamblea en que tomaron parte 20.000 obreros, que unánimemente aprobaron una huelga por tiempo indeterminado. Aun así, los resultados de esa movilización en gran escala señalaron un giro decisivo en lo referente a la movilización de la clase trabajadora y su confianza en sí misma.

EL IMPACTO DE LA DERROTA: DESMORALIZACIÓN Y AISLAMIENTO

El impacto de la derrota puede ser medido en parte por las estadísticas de huelgas correspondientes a los años siguientes. Desde el pico de más de diez millones de días perdidos en 1959, las cifras declinaron a muy poco más que un millón y medio en 1960 y 1961, para desplomarse a 268.000 días de trabajo perdidos en 1962.³⁷ En términos no tan fácilmente cuantificables, esas cifras reflejan un proceso de derrota y desmoralización, es decir, el abandono de la militancia y participación por parte de miles de activistas de nivel bajo y mediano, que habían sido el alma de la Resistencia posterior a 1955 y del renacimiento del sindicalismo peronista.

En parte esto fue efecto de la represión estatal y empresarial. Millares de militantes peronistas fueron arrestados con arreglo a las disposiciones de seguridad adoptadas por el

gobierno de Frondizi. En marzo de 1960 se aplicó el Plan Conintes (Comisión Interna del Estado), que otorgaba a las fuerzas armadas amplia jurisdicción en la lucha contra todas las fuerzas que crearan "disturbios internos". En la industria la lista negra se alargaba cada vez más. Sebastián Borro jamás volvió a trabajar en un frigorífico, y su caso simbolizó el de muchos miles de militantes más. Un extraordinario discurso que pronunció el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, doctor Galileo Puentes, en mayo de 1960, nos da cierta idea de las dimensiones que alcanzó esa purga de activistas. Tras jactarse de la forma en que "fueron eliminados de los sindicatos quienes causaban problemas", el doctor Puentes refirió cómo se había realizado esto en el caso de una importante compañía tabacalera, la Piccardo:

"Me vino a ver el gerente de personal, haciéndome saber mil tropelías que cometa la comisión interna [...]. Según mis instrucciones los delegados fueron echados. Vinieron al Ministerio y yo también los eché, porque allí no estamos para proteger a subversivos. Muy pronto los obreros sanos empezaron a golpear las puertas de la fábrica. La empresa entonces comenzó a seleccionar: 'ése entra, éste no', y así de 800 obreros, 500 fueron retornados y doscientos malandras quedaron afuera."³⁸

A continuación el doctor Puentes se jactó de la manera en que:

"En Duello, Alparagatas y Good Year ya se ha depurado al personal de los malandras, y todos viven felices."

Así como éste fue el resultado concreto de la derrota de los textiles, en los metalúrgicos pudo advertirse un proceso idéntico. Raimundo Villafior, miembro del comité de delegados que en 1956 había dirigido la huelga metalúrgica en Avellaneda, describió en los siguientes términos la situación en que él y muchos otros militantes se encontraron:

"Me la pasé yirando, changuendo, años enteros [...]. Era un continuo yirar de montones de gente. No nos daban trabajo, nos perseguían, jamás podíamos hacer pic."³⁹

De cualquier manera, la lista negra era sólo parte de la historia. También el abandono de la militancia reflejó una gradual si bien renuente aceptación, por muchos activistas de posición media en la jerarquía sindical, de la esterilidad de

una oposición continua e intransigente tanto al gobierno como al empleador. Después de la prolongada militancia del período 1956-59, las derrotas de 1959, asociadas a la represión y la crisis económica de los años siguientes, socavaron considerablemente la confianza y el temple de una capa de activistas que tenían papel decisivo. El cansancio y la desmoralización de esos activistas se advirtieron claramente en la reunión plenaria que las 62 Organizaciones realizaron en la Capital Federal en mayo de 1960. En un discurso pronunciado en nombre de la dirigencia de las 62, Eleuterio Cardozo, líder de la Federación Nacional de Trabajadores de la Carne, bosquejó la situación a que hacían frente los sindicatos peronistas. Destacó que la clase trabajadora tenía dos caminos abiertos, uno revolucionario y el otro evolucionista. En la alternativa, la clase obrera debía optar por la única estrategia factible, es decir la legal, la de la evolución. Cardozo no empleó medias tintas al describir el sombrío escenario que enfrentaban los sindicatos ni al preconizar la solución a su juicio necesaria:

"El panorama actual se caracteriza por un retraimiento de las masas con el sector mayoritario proscripto y el movimiento obrero dividido y con un gobierno negativo. Frente a esto es necesario un desarrollo económico que rompa estructuras sin lo cual no hay justicia social posible, y un frente nacional, en el que los distintos factores de poder y la clase obrera se hallen unidos tal cual había ocurrido en la década del 45 al 55. La clase obrera no es el único factor del poder. Nos guste o no nos guste también lo son la Iglesia, el Ejército y las fuerzas económicas. Se debe conversar con todos estos grupos, para lo cual la dirección del movimiento requiere una imprescindible flexibilidad."⁴⁰

Su discurso no suscitó virtualmente oposición alguna en la asamblea. Pedro Comis, líder de los petroleros, habló en apoyo de Cardozo. Difícil hubiera sido imaginar un cambio más drástico en relación con la reunión de Rosario y su postulación de "resistencia civil". La prensa favorable a Frondizi saludó con gran entusiasmo este plenario de las 62.

La única oposición al discurso de Cardozo provino de dos delegados, de gremios relativamente menores. Uno de ellos, Alberto Belloni, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado, comentó con bastante claridad lo que significaba, a su juicio, la falta de oposición de los restantes delegados:

"En este plenario Cardozo habló casi dos horas [...] y para mí era la muerte de la resistencia. Hay que reconstruir, dice, el frente

nacional con las fuerzas armadas, la Iglesia y los empresarios' [...] y en el plenario un silencio bárbaro. Concretamente, el que se levantó a oponerse fue un español republicano que militaba en gráficos [...] un plenario de 200 delegados donde hubo un silencio mortal y una hostilidad tremenda contra el español y yo. Mi compañero Américo Guileña un hombre formado en la escuela más dura de la Resistencia, quedó callado. [...] Y Vador dos o tres veces me cortó la palabra."⁴¹

El silencio de la masa de delegados, que doce meses atrás, en reuniones similares, habían fustigado a la jefatura de las 62 por lo que a su juicio era una traición a la huelga en solidaridad con los obreros de la carne, testimonió la creciente confusión y la erosión de la confianza.

El núcleo humano de la Resistencia, pues, se marchitaba; la base humana de la militancia y la combatividad del período 1956-59 estaba desgastándose. Lo cual se manifestó no sólo en expresiones públicas como las asambleas de las 62 Organizaciones. También era evidente, y acaso en un sentido más legítimo, en el plano personal y privado. Jorge Di Pascuale, dirigente de las 62 Organizaciones, lo recuerda así:

"La dura lucha estaba agolando a mucha gente [...] la represión era cada vez más intensa, el Plan Conintes se introdujo y las condiciones llegaron a ser cada vez más difíciles. Había muchos compañeros que no querían seguir el camino de la confrontación y los íbamos perdiendo poco a poco. [...] la mayoría comenzaban a alejarse de posiciones combativas y a dedicarse exclusivamente a sus propias cosas."⁴²

El frenético ritmo de la militancia de años anteriores, la intensidad de la actividad y la renuncia a una vida personal y social que esto implicaba, empezaban a tener ahora fuerte impacto sobre muchos activistas. El siguiente es un testimonio tal vez extremado, pero de ninguna manera atípico, ofrecido acerca de ese proceso por un activista que muchos años después recordó su propia toma de conciencia del precio personal que el activismo suponía:

"Mi hermano y yo entramos en la Resistencia cuando éramos poco más que pibes. Yo tenía 18 años cuando cayó Perón, mi hermano era un poco menor. En los años siguientes nos dedicábamos casi exclusivamente a la militancia sindical. Resulta que los dos sabíamos manejarlos con palabras de modo que nos daban la tarea de escribir la mayor parte de los folletos, todo ese tipo de trabajo. Bueno, la verdad es que perdimos muchas de las cosas que

hacen otros muchachos. La lucha fue todo: la revolución social, la vuelta de Perón. Un día, debe haber sido en 1959, mi hermano y yo trabajábamos en nuestra pieza escribiendo un folleto. Fue un día de domingo. Vivíamos en una pensión barata que estaba llena de obreros jóvenes que no tenían familia en la ciudad. Compartíamos esa pieza con otro tipo que trabajaba en el mismo taller que nosotros; de hecho el mismo fue bastante combativo en la fábrica. Aquel día volvió de una fiesta y nos encontró malondos con la máquina de escribir discutiendo la política. Se asombró y nos dijo: ¿Pero ustedes dos nunca van a ver la cara de Dios? Por supuesto tuvo razón y de golpe me di cuenta de todo lo que habíamos perdido."⁴³

No sólo los activistas fueron afectados por ese proceso, porque también se presentó, bajo forma de un creciente fatalismo, en la masa general de trabajadores. Era inevitable que también en este terreno se hicieran sentir las derrotas de 1959, sumadas a los efectos de la política económica del gobierno. En una reunión efectuada en Berisso por el gremio de la carne para discutir los medios de enfrentar los despidos, Eleuterio Cardozo anunció que era "la hora de los patronos", por lo que correspondía ser realista y concluir acuerdos poco ventajosos. Cardozo no hablaba simplemente como arquetipo de líder sindical que se disculpa por haber cerrado un mal trato; además locaba una fibra de experiencia común a todo el movimiento de la clase trabajadora. En la misma reunión, un delegado de la planta Armour en Berisso se hizo eco del argumento de Cardozo, diciendo:

"Es imposible una huelga general indefinida por los despidos, dado el retroceso general producido por la política del gobierno [...] una huelga indefinida era lo que estaba buscando la patronal con el objeto de evitarse pagar jornales."⁴⁴

Tanto este obrero como Cardozo hablaban con la resignación de activistas de un gremio donde en ese momento ya había más de 7000 despidos. La industria de la carne había sido golpeada con rigor excepcional: no solamente padecía la recesión causada por el plan de estabilización, sino también los efectos de una crisis estructural de largo plazo que conducía al eclipse de los grandes frigoríficos extranjeros. Pero la experiencia de los trabajadores de la carne no era en modo alguno atípica. En ausencia de ejemplos en contra, es decir, ejemplos de militancia victoriosa, el argumento fundamental del pragmatismo institucional, cada vez más usado por los líderes sindicales, no podía menos que recibir así fuera una

aceptación pasiva por parte de la mayoría de las bases sindicales.

Un claro caso de esta aceptación, por renuente que fuese, en otros sindicatos puede hallarse en las elecciones internas que el sindicato de los metalúrgicos realizó en febrero de 1961. En la Capital Federal, sobre unos 97.000 afiliados oficialmente empadronados sólo 17.085 se molestaron en ir a votar, o sea unos 8000 menos que en 1958. La Lista Azul, agrupación peronista constituida durante la Resistencia en torno de las figuras de Augusto Vador y Avelino Fernández, perdió más de la mitad de sus votos. En 1958 se había adjudicado la casi totalidad de los 25.000 votos emitidos; en 1961 sólo logró obtener 11.053.⁴⁵ Las cifras de la votación ofrecidas en el Cuadro 1 para las once principales plantas de la Capital federal muestran un cuadro más sombrío aún.

CUADRO 1

Cifras de las elecciones efectuadas por la UOM en 1961 correspondientes a once grandes plantas metalúrgicas de la Capital Federal

| | Nº de trabajadores | Abstenciones | L. Azul | L. Rosa | L. Verde |
|---------------|-----------------------|--------------|---------|---------|----------|
| FAPESA | 1.800 | 929 | 662 | 107 | 102 |
| CAMEA | 1.200 | 574 | 378 | 46 | 202 |
| Centenara | 1.200 | 762 | 315 | 94 | 102 |
| TAMET | 1.000 | 530 | 365 | 283 | 32 |
| CAIGE | 800 | 520 | 144 | 56 | 80 |
| FERRINI | 700 | 545 | 83 | 30 | 42 |
| RCA Victor | 500 | 339 | 52 | 16 | 93 |
| Decker | 500 | 233 | 136 | 51 | 80 |
| Volcan | 500 | 189 | 202 | 51 | 58 |
| Lutz Ferrando | 500 | 438 | 16 | 2 | 44 |
| SIAM Peridiel | 300 | 223 | 14 | 26 | 37 |
| Totales | 9.000 | 5.282 | 2.342 | 762 | 612 |

Fuente: volante distribuido por la Lista Verde, opositora.

Las cifras muestran que el 58 por ciento de los trabajadores se abstuvieron de votar en esas plantas: sin embargo en los comicios de 1958 todas ellas habían dado a Vador una mayoría abrumadora. En 1961 solamente en una planta los

votos por la Lista Azul superaron a las abstenciones. En el caso de los metalúrgicos, las derrotas y compromisos condujeron a la abstención antes que al voto por candidatos rivales del liderazgo existente. Pero no siempre sucedió así, pues las derrotas y los compromisos podían conducir a formas de reacción más positivas contra los líderes del momento. Incluso entre los metalúrgicos, en Avellaneda el voto combinado de tres listas opositoras superó el que obtuvieron los dirigentes vanguardistas. En el sector de los textiles, Andrés Framini perdió las elecciones en algunas de las principales plantas. En las elecciones para designar la comisión interna de la planta Grafa, en setiembre de 1960, la lista comunista derrotó a una lista peronista disidente que se había separado de Framini.⁴⁶ En La Bernalesa y Sudamtex, dos de las principales plantas del Gran Buenos Aires, las listas peronistas disidentes se impusieron a los candidatos de Framini.⁴⁷ En otros sindicatos, sin embargo, la insatisfacción se tradujo más en abstenciones que en expresiones positivas.

La creciente resignación y la pasividad de las bases inevitablemente debilitó a los activistas que procuraban mantener la marea de la retirada. No fue poco común el caso de dirigentes locales y activistas de posición intermedia que se volcaron a posiciones extremistas bajo la presión del ataque patronal y la crisis económica; pero ese proceso tuvo cada vez menos respaldo entre las bases. Un militante de Avellaneda, activista en esos años, recuerda un ejemplo de ese fenómeno:

"Recuerdo que José Vázquez fue el dirigente del Frigorífico La Negra. Era un muchacho que se había dado a conocer después del 55 y tenía un buen nombre en Avellaneda y estaba en las 62 y la CGT local. Cuando vino la crisis en los frigoríficos en 1960 y empezaron a despedir gente asumió una postura muy combativa y lanzó la huelga en La Negra. Pero el ánimo de las bases no dio para tanto. Sentían que el frigorífico estaba condenado y comenzaron a buscar otro trabajo. Llegó un momento hacia el final cuando la situación fue tan mala que el mismo Vázquez tenía que hacer casi todo, ni siquiera había obreros para distribuir folletos, así que él y algunos amigos tenían que pedir un auto prestado y andar por el barrio."⁴⁸

El creciente aislamiento de los activistas se tornó cada vez más patente a medida que se marchitaba el apoyo de las bases a la militancia de los años de la Resistencia. Los activistas que se volcaron a posiciones extremas se distanciaron cada vez más de la experiencia que vivía la gran masa de obreros:

"Aquellos dirigentes que proponían más enfrentamientos, más huelgas, llegaron a ser percibidos por las bases como algún tipo de superhombre. No se podía esperar que estos hombres que ya habían sufrido una huelga, que no tenían ningún fondo sindical y que sabían cuán poco trabajo había, no se podía esperar que ellos se iban a seguir de nuevo a la calle."⁴⁹

Las diferencias entre las respectivas experiencias, los grados de compromiso y los estilos de vida de los activistas y las bases sindicales constituyeron una característica permanente que subyacía en gran parte de la ambivalencia y los dilemas de un militante. Este formaba parte de la clase trabajadora, muchas de sus acciones dependían de ella, y sin embargo en un sentido importante se encontraba al margen de ella. En tiempos de insurgencia general y de confianza, esa brecha podía minimizarse y los líderes y los liderados converger; en cambio, en tiempos de derrota y crisis podía conducir a un profundo aislamiento de los activistas, que quedaban alienados respecto de la gran masa de las bases. A principios de la década 1960-70, Raimundo Villafior y sus compañeros de Avellaneda trataron de rescatar algo del desastre. La fuerza impulsora de su grupo era Domingo Blajaquis, militante bien conocido en las zonas obreras del Sur del Gran Buenos Aires. Blajaquis había estado desde 1955 en prácticamente todas las prisiones del país.⁵⁰ Rolando Villafior, hermano de Raimundo, no formaba parte del grupo, y los integrantes de éste, en broma, lo llamaban "la bestia" por sus crudas opiniones y su falta de compromiso con una vida de militancia. Muchas veces al volver a su casa Rolando los encontraba reunidos para hablar de política. Años después, en declaraciones a Rodolfo Walsh, recordaría que en cierta ocasión contestó así las bromas que le dirigieron:

"Pero decíme una cosa, le digo, Griego ¿vos, cuantos años tenés? Me dijo cuarenta y pico. Y decíme, ¿qué hiciste de tu vida vos? hasta ahora. Porque yo no veo que hayas hecho nada vos. Siempre te lo pasaste en cana porque es la verdad: estubo en la Resistencia [...] Y cuando me dijo que no tenía nada, le digo: Claro, qué vas a tener, si vos siempre te la pasaste en cana, molido a palos, muerto de hambre: sos un hombre grande y no tenés familia, no tenés nada. no formalizaste nada."⁵¹

Blajaquis, Raimundo Villafior y otros activistas podían retirarse a la circunscripta actividad de pequeños grupos de activistas. Esos militantes también podían, en el corto plazo y

gracias a su prestigio personal, llegar a ser una voz dominante en el sindicalismo local —por ejemplo, en la seccional local de las 62 Organizaciones—, pero su posición tenía cada vez menos sostén en la clase trabajadora en cuanto ese sostén dependía de la concencia de ésta y su disposición a ser movilizada.

CAMBIANTE RELACIÓN ENTRE LÍDERES, ACTIVISTAS Y BASES

En los sindicatos, el aumento de la resignación y la pasividad formó el telón de fondo de un proceso de burocratización que se manifestó en una cambiante relación entre líder y bases y en una cambiante actitud de los líderes, así como en una creciente corrupción de los dirigentes. Los activistas de menor jerarquía y los militantes locales de jerarquía media comprobaron que sus sindicatos eran para ellos lugares cada vez más inhóspitos. Raimundo Villafior recuerda la forma en que ese proceso se operó entre los metalúrgicos:

"Ninguno de los que dirigimos aquella huelga en Avelandea pudimos volver al sindicato. Se convirtió en una mafia. Hasta los quinieleros independientes desaparecieron: había que banear para ellos. Los dirigentes hacían negocios de chatarra con los patronos [...] amasaban fortunas, se rodeaban de malones."⁵²

Para 1960, este cambio se reflejaba en una notoria erosión de la democracia interna, lo cual se advirtió particularmente en el creciente empleo de fraude en las elecciones sindicales. Después de las elecciones realizadas en 1961 en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), las listas opositoras publicaron un volante donde se detallaban las prácticas fraudulentas aplicadas por la jefatura sindical:

"A sólo 48 horas de las elecciones se ignoran los lugares en que había urnas, y los días en que estarán en los establecimientos, cosa que naturalmente no ignoran los oficialistas dado que las juntas electorales no las forman las distintas listas sino los oficialistas. El padrón de la Capital con 65.000 afiliados registra 90.000 afiliados [...] Ninguna lista que no disponga de los dineros de la organización como la de Vandoor puede tener en la calle pagando vialitos a muchos activistas durante 18 días ni disponer de los medios oficiales del sindicato."⁵³

Estas maniobras contrastaban con el proceso electoral de 1958. En esa oportunidad nadie intentó impugnar las creencias de los candidatos opositores. En 1961 las candi-

daturas de varios de los más destacados activistas de la Lista Verde, principal grupo opositor, fueron declaradas ilegales por la junta electoral, controlada por la jefatura del gremio.

En otros sindicatos se produjeron muchos otros casos similares. Esto formó parte del control cada vez más estricto que los dirigentes ejercían sobre las bases y la tolerancia cada vez menor, por parte de ellos, con el surgimiento de focos de discusión donde se manifestarían dissentimientos internos. Lo cual se tornó patente sobre todo en el creciente control por los líderes nacionales de los dirigentes de planta. Esta fiscalización a menudo marchó de la mano, en ese tiempo, con la purga de activistas de base. En las grandes fábricas metalúrgicas, por ejemplo, se consumó un riguroso proceso de purga selectiva de militantes conocidos. Los más militantes fueron despedidos, muchas de las comisiones internas de las grandes plantas quedaron disueltas. Entre los textiles, los grupos opositores afirmaron en abril de 1961 que más de la mitad de las plantas de San Martín, suburbio de Buenos Aires donde existe la mayor concentración de fábricas textiles del país, habían sido intervenidas por la jefatura gremial y que las comisiones internas habían sido disueltas por su "actividad opositora".⁵⁴ Más tarde, en ese año, la jefatura del gremio, conducido por Framini, empezó a crear secretarías generales en muchas de esas fábricas.⁵⁵ Desmoralizados y aislados muchos de los activistas, este proceso de afirmación del control central del sindicato no involucró necesariamente coerción abierta. Muchos delegados internos, exhaustos de luchar contra la corriente, estaban dispuestos a dejarse sobornar, a aceptar lo inevitable.

Muchos de los dirigentes que intervinieron en este proceso habían emergido recientemente como tales en el lugar de trabajo durante la lucha contra el gobierno militar. No estaban separados de los activistas de base por años de privilegios burocráticos. Hacia sólo cinco años que Augusto Vandoor había abandonado su puesto en la planta de la Philips, y su posterior papel en la Resistencia le había valido un considerable prestigio personal. En ese tiempo también Andrés Framini era conceptualizado un hombre de línea dura, que preconizaba la oposición más intransigente a Fronizl. El estilo de vida y los hábitos personales estaban cambiando, pero las ásperas luchas y penosos conflictos del pasado estaban demasiado cercanos, suponían demasiado una experiencia compartida como para que la corrupción personal explicara por completo el proceso de burocratización.

Gran parte de la explicación debe ser buscada en las actitudes de los propios activistas. El hecho de que compartieran la común experiencia de la resistencia al gobierno militar y las luchas contra Frondizi creaba una relación simbiótica entre ellos y los dirigentes de nivel nacional. En cierto sentido, reconocían en sus líderes a hombres como ellos mismos, habitualmente de iguales antecedentes, aspiraciones y fallibilidades. Más aún, en un plano local muchos activistas del período 1955-59 ahora formaban parte de la más alta jerarquía local. Su común lealtad a Perón y al movimiento peronista consolidaba más todavía esa relación. Por añadidura, no obstante el hecho de que la resistencia a los militares y después a Frondizi se hubiera basado primordialmente en los activistas de base y las comisiones internas, nunca se había formulado de modo explícito la importancia de ese hecho, de la necesidad de contar con sindicatos controlados democráticamente. Ante la forzosa ausencia de una estructura burocrática de la cual servirse, la actividad sindical peronista se había tornado, según vimos, más democrática. En un sentido práctico, había muy pocas razones en las que pudiera fundarse una separación entre las bases y los líderes. El resultado final de esa lucha fundada democráticamente en las bases había sido definido como la recuperación de los sindicatos por el peronismo mediante elecciones libres. Se dijo muy poco acerca de la forma en que serían dirigidos esos sindicatos una vez recobrados por los peronistas y resurgidas las posibilidades de manipulación de un aparato burocrático. Se dedicó muy poco tiempo a pensar cómo se garantizaría la continuación de la práctica democrática de facto florecida en los gremios después de 1955.

No se debe exagerar el cambio operado en la práctica democrática gremial. Antes de 1960 esa práctica no era en modo alguno uniforme, tal como tampoco lo era la cambiante naturaleza del gobierno interno en ese momento. La relación entre las bases y los líderes era mucho más abierta y democrática en algunos sindicatos que en otros. Sin embargo, algún cambio por cierto se produjo y fue notado claramente por los militantes. Alberto Belloni, por ejemplo, pone de relieve la práctica democrática inicial y su posterior perversión:

"Cuando entramos en la militancia activa sindical ni sabíamos qué era una moción de orden, nos preguntamos '¿qué es esta moción de orden?' '¿qué es una moción de cierre de debate?'. Pero teníamos un gran sentido democrático. Nosotros hacíamos asambleas dos o tres veces por mes en Rosario. Ningún plenario tenía menos de 500

trabajadores, y hemos tenido asambleas de hasta mil y hasta 1.200 en un gremio que tenía como afiliados 3.500. Yo decía: 'Compañeros, vamos a hacer asamblea. Este es el orden del día, si ustedes quieren agregar algún punto que se agregue, Elijan presidente, elijan un secretario de asamblea y un secretario de actas'. Yo nunca permití que un dirigente del sindicato fuese el presidente de una asamblea. Las asambleas tenían que ser dirigidas por alguien que estaba elegido por las asambleas. Y hubo algo de esto en otros sindicatos. Pero después empezó el caudillismo y el personalismo. El secretario general era el caudillo, el capo, el macho. Pero originalmente desde una orfandad burocrática, que no sabíamos la instrumentación, llegamos a un sentido ultrademocrático."⁵⁶

Con la mayor probabilidad, el sindicato a que pertenecía Belloni, en Rosario, fue un caso extremo, representativo de una franja final del espectro de la práctica democrática. Parece improbable que la mayoría de los demás sindicatos peronistas compartieran la misma honestidad frente a los procedimientos burocráticos formales. Sin duda la mayoría estaban más cerca de la zona media del espectro. Pero el caso de Belloni es significativo y digno de atención. Como no era peronista, tenía una particular sensibilidad a las cambiantes actitudes de los sindicatos, a los cambiantes márgenes de tolerancia dentro del gobierno interno de un gremio. El hecho mismo de que él, no siendo peronista, fuese una figura destacada en una agrupación gremial peronista, daba testimonio de la relativa apertura reinante en el sindicalismo peronista durante el período inmediatamente posterior a 1955. Sin embargo, Belloni recuerda en los siguientes términos las consecuencias de su abierta oposición a Cardozo en la reunión que las 62 Organizaciones celebraron en mayo de 1960:

"Además la mesa nacional de las 62 presionaba para que me quitaran la voz y la representatividad. Se hizo un acuerdo para que yo no fuera más a los plenarios [...] a partir del 61 yo empecé a perder terreno. Cuando la Resistencia se agota hay una frustración en las bases, un cansancio [...]. Las bases empiezan a concurrir cada vez menos a los sindicatos."⁵⁷

Ni tampoco ese cambio de actitud se notó sólo en el nivel nacional. Si bien Belloni señala que el hecho de no ser formalmente peronista nunca había sido esgrimido antes contra él, consigna que su posterior aislamiento en el plano nacional tuvo efecto sobre sus compañeros peronistas de Rosario. Los militantes que habían emergido durante la Resistencia, los que compartían la "orfandad burocrática" inicial, también ellos

"empezaron a alzarle, tratarme con sospecha. Estos compañeros también se estaban burocratizando, aprendices de burócratas".⁵⁸

Asimismo, la corrupción personal formó parte del proceso. Una acusación comúnmente dirigida a uno u otro dirigente sindical de ese momento era la de haber sido sobornado por Frondizi. Es imposible establecer la exactitud de esas acusaciones. Parece probable, sin embargo, que la corrupción tendiera a asumir un carácter indirecto. Por ejemplo, se rumoreó ampliamente que la moderada actitud de la Federación Nacional de Obreros de la Carne durante la ocupación del Frigorífico Lisandro de la Torre y la huelga de ese momento se debió al hecho de que, con arreglo a la nueva ley de carnes, la Federación iba a recibir fondos para su obra social en proporción con la cantidad de carne exportada. En 1959, la Federación recibió alrededor de 11 millones de pesos gracias a ese entendimiento.⁵⁹ Esta especie de soborno —dirigido más al espíritu que al bolsillo personal— era común no sólo entre los dirigentes nacionales, sino también entre los activistas de jerarquía media.

En ese tiempo aumentaron considerablemente las oportunidades de enriquecerse, o al menos de llevar una vida bastante más cómoda dentro del sistema sindical, e inevitablemente atrajeron incluso a aquellos militantes que con más desprendimiento personal se habían sumergido en las tareas del gremio. Las recompensas por aventarse al compromiso, por aceptar una vida apacible, eran considerables. Belloni recuerda que en 1960 el sueldo pagado a los representantes de los trabajadores en las cajas de jubilación era de 35.000 pesos. Al escribirle a Perón poco después de la huelga de enero de 1959, John William Cooke previó con exactitud cuál sería la doble atracción de la estrategia de Frondizi con los sindicatos peronistas. Dijo a Perón que

"desde ahora habrá mucho más represión, más cárcel y más palos. Pero también habrá mucho más dinero y muchas más facilidades para quienes quieren comprometerse con el gobierno. En cada localidad o provincia se buscará debilitar al peronismo por medio de una integración práctica".⁶⁰

Sobre la base de esta especie de "corrupción" muchos activistas asumieron posiciones, dentro de jerarquías sindicales locales, como representantes de la dirección nacional.

EL DILEMA DE LOS MILITANTES: LA LÓGICA DEL PRAGMATISMO INSTITUCIONAL

La cuestión básica en el proceso que hemos analizado residía en la aceptación o el rechazo, en los niveles de las bases, de los activistas y de los líderes nacionales, de la lógica del pragmatismo institucional. Esa lógica era inherente a la intervención que un sindicato tiene en las actividades diarias de una economía industrial: se trata de aprovechar las oportunidades que el sistema está dispuesto a ofrecer. Esto, a su vez, se basaba en el reconocimiento de que la situación que enfrentaban los gremios bajo Frondizi era distinta de la enfrentada bajo Aramburu. Si bien distaba mucho de la arremontosa utopía contemplada por la propaganda desarrollista, se habían producido, de cualquier manera, cambios significativos. Por ejemplo, los sindicatos estaban ahora ante la realidad de un sistema de relaciones industriales cada vez más complejo. La Ley 14.455 de Asociaciones Profesionales, a la vez que aseguraba al Estado un rol en la supervisión de los sindicatos, también garantizaba legalmente la existencia de un sistema sindical industrial centralizado y dotado de derechos de negociación que debían respetarse; asimismo, proporcionaba la base financiera, mediante el cobro de aportes obligatorios, para la reconstrucción de un poderoso aparato gremial como el que había existido bajo Perón. Frondizi había instituido además un sistema de conciliación obligatoria y arbitraje voluntario que así como confería al Estado un papel en las relaciones industriales, también consolidaba, mediante un nuevo conjunto de derechos y obligaciones, la facultad de los gremios para negociar. El restablecimiento de los fondos jubilatorios sindicales y de la representación gremial en su administración constituyó otro ejemplo de la creciente complejidad de la trama de relaciones entre los sindicatos y el gobierno.

Las implicaciones que esta situación, más compleja, tuvo para la jefatura sindical peronista se evidenciaron claramente en lo que se ha llegado a conocer como el "caso Cardozo". Después del discurso que pronunció en mayo de 1960 en la reunión de las 62 Organizaciones, Eleuterio Cardozo, jefe de la Federación Nacional de Trabajadores de la Carne, recibió de Perón signos de disgusto por los sentimientos que Cardozo había expresado. En nombre de la dirección de las 62 Organizaciones, Sebastián Borro había viajado a Madrid, nuevo

lugar de exilio de Perón, y traído de vuelta una carta donde se denunciaban los conceptos expuestos por Cardozo y Pedro Gomis. Varias semanas después, en el quinto congreso nacional de la Federación de Obreros de la Carne, Cardozo pronunció un discurso inaugural donde reiteró los conceptos legalistas y evolucionistas que había expresado en mayo:

"El cuerpo ejecutivo luchó por el respeto a los derechos adquiridos y las reivindicaciones alcanzadas, tanto por mérito de la ley como por convenios colectivos. Cuidamos en todos los casos que se reconociera por los organismos estatales la violación de estos derechos. Esta actitud de apoyarnos en los resortes de la legalidad subsistentes en tan débil estado de derecho, no siempre rindió sus frutos pero permitió mantener las estructuras sindicales constantemente amenazadas por la regresión [...]. Que ninguna clase social en la historia del mundo ha demostrado mayor consecuencia en defensa de la legalidad constitucional que la clase trabajadora, porque el imperio de la ley es para las organizaciones obreras lo mismo que el oxígeno para la vida [...]. Como ciudadano soy absolutamente leal al Movimiento y su conductor, el General Perón, y me siento en el deber de responder disciplinadamente a las exigencias de su conducción [...] como dirigente obrero [...] me veo obligado de conducir al gremio por caminos y tácticas que la experiencia me indica impracticables y contraproducentes."⁶¹

Cardozo ofreció su renuncia, que fue rechazada por los delegados. En su discurso de clausura de la reunión, Cardozo atacó a los que quisieran "minar la moral de las masas, llevándolas contra todo y contra todos". De nuevo subrayó la necesidad de ser realistas y adaptar las tácticas a las realidades de la situación. Esa realidad incluía, ante todo, un sistema legal que otorgaba a los trabajadores y a los sindicatos derechos que éstos debían utilizar y defender. Algunas semanas después de la conferencia, Cardozo fue expulsado del movimiento peronista y de las 62 Organizaciones por deslealtad a Perón y al movimiento.

A todo eso, lo notable de los sentimientos expresados por Cardozo fue su carácter totalmente razonable: representaban, por así decirlo, afirmaciones típicas dictadas a un líder sindical por el sentido común. El reiterado énfasis de Cardozo sobre la necesidad de ser evolucionistas, de trabajar dentro del sistema, era en la práctica un punto de vista que otros líderes sindicales peronistas no podían dejar de compartir. No podían permitirse, por ejemplo, despreocuparse por la suerte del gobierno de Frondizi cuando recibía amenazas de los militares. Por ilegítimo que pudieran considerar a su gobierno, el caso

era que, en definitiva, la legalidad de Frondizi era una legalidad que incluía la Ley de Asociaciones Profesionales. Los dirigentes gremiales debían tomar en cuenta las posibles repercusiones de sus movilizaciones sobre la intranquilidad militar. Entre enero de 1959 y abril de 1961 se habían producido siete "incidentes" militares de consideración, que suponían retos a la autoridad presidencial y en todos los cuales había influido la insatisfacción militar ante la ley 14.455.

En forma similar, por mucho que Frondizi pudiera disgustar a los gremios éstos no podían contemplar en la práctica estrategia alguna conducente a reemplazarlo. La lógica de su función de líderes sindicales inevitablemente los comprometía con la realización de negociaciones donde debían hacer concesiones y a la vez valerse de los derechos concedidos a ellos por el sistema e insistir en ellos. Lo cual se demostró claramente en las negociaciones relativas a la devolución de la CGT a los gremios. Cardozo y otros sostuvieron que la devolución de la central obrera era una prioridad absoluta para los sindicatos peronistas, por lo que se debía adoptar una actitud moderada para inducir a Frondizi a cumplir con la prometeda restitución. En 1959 y 1960 las 62 Organizaciones rechazaron esta posición. Se argumentó que aceptar la devolución de la CGT en los términos de Frondizi se limitaría a embarcar más aún a los sindicatos en compromisos y negociaciones y otorgaría credibilidad a un gobierno ilegítimo. Sin embargo, cuando en fecha avanzada de 1960 Frondizi propuso celebrar conversaciones para fundar una comisión de gremialistas peronistas y no peronistas que prepararía un congreso de la CGT, en la práctica les resultó imposible a los líderes peronistas ignorar la invitación. Una CGT recuperada significaría obviamente un paso adelante en materia de organización y unidad de la clase trabajadora, aun cuando fuera también un paso hacia la integración de los sindicatos peronistas a un statu quo que excluía el retorno directo de Perón o del peronismo al poder.⁶²

Sin embargo, aunque la lógica del integracionismo fuera irrefutable, en la práctica no fue aceptada con facilidad. Ello se debió ante todo a la aspereza misma de los conflictos de 1959, la dureza de las derrotas y la represión que las siguió. Los proyectos integracionistas de Frondizi fueron aplicados a continuación de un plan de estabilización que había rebajado radicalmente los niveles de vida y que había sido respaldado por la represión en manos del Estado y los empresarios. Participar en negociaciones y compromisos y defender lo que

en último término parecía estar en juego en el sistema, inevitablemente suponía archivar hasta un futuro distante y nebuloso las principales aspiraciones subyacentes en la lucha de los trabajadores desde 1955, ante todo, el retorno de Perón. En verdad el objetivo abiertamente declarado de la política de Frondizi era ni más ni menos que divorciar a Perón del movimiento peronista y en especial de su ala sindical. De este modo los intereses institucionales de los líderes gremiales prevalecerían sobre los intereses políticos, de índole más general, del movimiento peronista. Tal había sido el conflicto de intereses francamente planteado por Cardozo en el quinto congreso de su sindicato y que había emergido, también, en los primeros meses del gobierno frondicista.

La oposición a la lógica del integracionismo se basó en el terreno donde se sentía fuerte: la moralidad y los valores que habían formado parte de la resistencia a Aramburu y a Frondizi y que constituían, según hemos visto, un legado ideológico decisivo de esa experiencia. Los argumentos de Cardozo fueron condenados por considerárselos una traición al heroísmo y el sufrimiento de toda la clase obrera y de los activistas en particular, así como una deslealtad personal a Perón. El principal mal del integracionismo consistía entonces en la cobardía personal y en la traición a que arrastraba a ciertos líderes. En la asamblea que las 62 Organizaciones realizaron en mayo de 1960, el comité coordinador presentó un documento donde se analizaba la situación general del movimiento y entre otros conceptos se expresaba:

"[...] hemos visto a compañeros que por intereses mezquinos o debilidad de espíritu abandonan la lucha en pro de la unidad de los trabajadores [...] recogiendo dentro del capuchón de sus gremios en tareas meramente administrativas, que les permitirá seguir al frente del gremio pero jamás conduciendo a los trabajadores [...] no solamente se es traidor cuando se comete un acto determinado de la entrega al enemigo o adversario, sino cuando por razones de ambición y comodidad se trata de defender con sistemas la posición retratada no confesando la verdad de una cobardía para enfrentar junto con toda la clase trabajadora a nuestros enemigos declarados que son: el Poder Ejecutivo y las fuerzas del capital".⁶²

El documento, escrito en gran medida bajo la influencia del sector más militante del peronismo sindical, apuntaba claramente a un fenómeno importante —la desmoralización de cierto nivel de líderes y activistas—, pero no acertaba a encontrar las raíces de ese fenómeno en las derrotas de 1959 y

en los problemas generales que enfrentaba el movimiento sindical. En cambio depositaba firmemente la responsabilidad en las cualidades morales personales:

"Cuando vemos a las patronales reaccionarias unidas en una sola política de destruir organizaciones obreras, corresponde mirar dentro de nosotros mismos y comprender que más que el avance de la reacción, se nota el retroceso de timorales y pusilánimes."

La índole de la línea intransigente, que había de ser llamada "línea dura", saltó a la vista en esa declaración. En particular se advierte de manera clara su actitud fundamentalmente moral. Reconociendo los signos de creciente desmoralización y tendencia al compromiso, esos militantes consideraron que el problema era esencialmente de valores como la firmeza, la vacilación, la cobardía y la deshonestidad. Como solución proponían poner el énfasis en las virtudes, igualmente subjetivas, del temple, la intransigencia y la lealtad, de cumplir la palabra, dada "a los que han luchado" y ser leales a Perón.

No se debe subestimar el poder de esa actitud. Por lo menos proporcionaba una norma de conducta emocionalmente satisfactoria en tiempos difíciles. La línea dura consistió formalmente en una mayoría que prevaleció en el seno de las 62 Organizaciones durante todo el gobierno de Frondizi, dirigida por Jorge Di Pascuale, Sebastián Borro, Juan Raechini y Juan Jonsch. No puede decirse que existiera realmente una "línea blanda", pocos líderes sindicales podían exponerse a concordar públicamente con Cardozo. Pero en definitiva la moralidad no era un escudo suficiente, ni una base factible para una estrategia sindical específica, por más que pudiera ofrecer un fundamento válido para las acciones de los individuos. En un tiempo había parecido existir la posibilidad de elaborar dentro del peronismo una ideología de línea radicalizada, que podría haber expresado en términos formales la militancia y el sentimiento de conflicto de clases que impregnaron ese período. La verdad es que el potencial de esa ideología figuró en los elementos del contradiálogo nacidos en el período 1955-58. Pero la coyuntura institucional general, así como las derrotas y la desmovilización de 1959 y después, conspiraron igualmente contra esa evolución. En último término la "línea dura" se convirtió en un estado de ánimo, una actitud, una "estructura de sentimiento", más que en una posición política e ideológica articulada. Para muchos militantes esto no pareció constituir una desventaja y, por cierto, la moralidad, el temple

y "la palabra cumplida" dieron a un núcleo militante del sindicalismo peronista la capacidad para sobrevivir al abandono de las esperanzas y a las desilusiones de los años siguientes. A otros, el creciente poder de la cúpula sindical y la lógica del compromiso los llevó a ponerse de acuerdo con esa cúpula, o a buscar una alternativa coherente de ideología y organización en las teorías del "foquismo" y la guerrilla.

NOTAS

- ¹ *Línea Dura*. 25 de junio de 1958.
- ² En julio se rehusaron a intervenir en una campaña contra la negativa de Frondizi a nacionalizar las compañías de servicios públicos DINIE y CADE de propiedad extranjera. En agosto transaron frente a una huelga del personal médico de las obras sociales. Además se negaron a proclamar una huelga para el 17 de octubre.
- ³ Clarín. 8 de noviembre de 1958.
- ⁴ *Palabra Obrera*, 20 de noviembre de 1958.
- ⁵ *Qué*, 25 de noviembre de 1958.
- ⁶ *Línea Dura*, 4 de noviembre de 1958.
- ⁷ Acerca de las ideas económicas de Frondizi, véase Rogelio Frigerio: "Morfología del subdesarrollo". *Introducción a los problemas nacionales*. Buenos Aires, 1965. Véase también Clarence Zuvekas: "Argentine Economic Policy 1958-62: the Frondizi government's development plan". *Inter-American Economic Affairs*, vol. 22, n° 1, 1968, págs. 45-75.
- ⁸ Esos contratos habían representado parte de la apertura del régimen de Perón, en sus últimos años, al capital extranjero. Las críticas formuladas por Arturo Frondizi están en su libro *Petróleo y política*, 3ª ed., Buenos Aires, 1960.
- ⁹ Durante la campaña electoral, Frondizi siguió atacando a la intervención extranjera en la industria del petróleo. En vista del poder simbólico emotivo de ese tema, los desarrollistas eran reacios a extender a esta área su realismo de nuevo cuño en materia de capital extranjero. Sin embargo, no existía ninguna razón lógica por la cual el petróleo debiera ser excluido de ese análisis. Un cambio similar se operó en el pensamiento frondicista acerca de la reforma agraria. Por influencia de Frigerio, la actitud ante ese punto pasó de una exigencia de cambio en la estructura de la propiedad agraria a un énfasis sobre el mejoramiento técnico. Tales cambios provocaron creciente fricción en el seno de la UCRP. Al dividirse el partido radical, Frondizi había atraído consigo a un considerable número de jóvenes militantes que tomaron en serio las líneas más extremas de la plataforma de la UCRP. Véase Ismael Vinas: *Orden y progreso: análisis del frondicismo*. Buenos Aires, 1960, págs. 173 y sigs.

- ¹⁰ Juan José Real: *30 años de historia argentina*, Buenos Aires, 1962, pág. 172.
- ¹¹ *Ibid.*, pág. 172.
- ¹² Gómez Morales, ministro de Economía, estimó que hacían falta más de 100 millones de dólares en inversiones extranjeras para atender los objetivos de expansión de la siderurgia y 200 millones para la producción de petróleo. Los contratos con la Fiat, la Kaiser y la Standard Oil reflejaron esa preocupación, tal como la reflejó la amistosísima recepción brindada a Milton Eisenhower, hermano del presidente de Estados Unidos, cuando visitó la Argentina, en forma oficial, en 1953.
- ¹³ En su libro *La fuerza es el derecho de las bestias*, Montevideo, 1957, Perón defendió los contratos y denunció como "nacionalistas de opereta" a quienes se oponían a toda clase de inversiones extranjeras.
- ¹⁴ El decreto 14.780 otorgó a los inversores extranjeros los mismos derechos que a los internos, así como permitió remitir libremente las ganancias al exterior. Otras medidas incluían deducciones impositivas de hasta el 100 por ciento en nuevas inversiones en maquinaria y equipo de transporte.
- ¹⁵ Véase Zuvekas: "Economic growth and income distribution in post-war Argentina"; también Mallon y Sourrouille: *Economic Policy Making*, pág. 72.
- ¹⁶ Zuvekas: "Argentine economic policy, 1958-1962".
- ¹⁷ Ministerio de Trabajo: *Conflictos de trabajo*.
- ¹⁸ En los últimos meses de 1958 los peronistas se impulsaron en los sindicatos de textiles, telefónicos y comunicaciones, metalúrgicos, frigoríficos, procesamiento de alimentos, transporte, portuarios, luz y fuerza y zapateros.
- ¹⁹ Cifras tomadas de *Mayoría*, 20 de noviembre de 1958. Corresponde decir que resulta difícil ser exacto con las cifras de las elecciones sindicales en la Argentina. Sin embargo, éstas me parecen aproximadamente correctas y en la prensa no peronista se profirieron escasas acusaciones de fraude.
- ²⁰ Ministerio de Trabajo: *Conflictos de trabajo*, cuadro 25. De acuerdo con la International Labour Organisation ésta fue también la cifra más alta de huelgas que se registró en el mundo en 1959.
- ²¹ El mejor relato de las negociaciones entre el sindicato y Frondizi sobre esta cuestión es la entrevista con Sebastián Borro. En *Lucha*, 2ª época, febrero de 1974. Borro confirmó los detalles en su entrevista conmigo, Buenos Aires, enero de 1974.
- ²² Una exposición sobre la forma en que se gestó esa huelga hay en *Mayoría*, 29 de enero de 1959.
- ²³ *Palabra Obrera*, 29 de enero de 1959.
- ²⁴ *Mayoría*, 29 de enero de 1959.
- ²⁵ Informe publicado por el Comando Nacional Peronista, grupo clandestino, en *El Soberano*, 2ª época, 9 de marzo de 1959.
- ²⁶ Entrevista con Tito Dragovitch, Buenos Aires, 10 de setiembre

de 1976. Dragovich era un militante del sindicato de obreros del aceite comestible, que tenía su sede central en Avellaneda.

²⁷ Entrevista con Alberto Belloni. Buenos Aires, enero de 1974.

²⁸ El nuevo comité estaba formado por Castillo, de la Regional San Martín de la CGT; Jonsch (telefónicos), Poccione (trabajadores del cuero), Racchini (del vidrio), García (del caucho), Orellano (molineros), Domínguez (Chaco), Dolan (Santiago del Estero) y Gazzera (fidecos). Crónicas de la reunión se publicaron en *Clarín*, 30 de enero de 1959, y *Palabra Obrera*, 4 de febrero de 1959.

²⁹ *Palabra Obrera*, 4 de febrero de 1959.

³⁰ *Pueblo Unido*, 12 de marzo de 1959.

³¹ *Ibid.*

³² Documentos del Plenario Nacional de las 62 Organizaciones. Buenos Aires, diciembre de 1959, mimeografiado.

³³ *Ibid.*

³⁴ Entrevista con Sebastián Borro.

³⁵ AOT, 19 de setiembre de 1959.

³⁶ *Mayoría*, 29 de setiembre de 1959.

³⁷ Ministerio de Trabajo: *Conflictos de trabajo*.

³⁸ Puente pronunció su discurso ante el Circulo Argentino de Estudios sobre Organización Industrial, y su texto fue incluido en los Documentos del Plenario Nacional de las 62 Organizaciones. Buenos Aires, mayo de 1960. Una de las principales peticiones que formularon las 62 en ese tiempo fue la destitución de Puente.

³⁹ Walsh: *¿Quién mató a Rosendo?*, pág. 20.

⁴⁰ *La Democracia*, 22 de mayo de 1960.

⁴¹ Entrevista con Alberto Belloni. Buenos Aires, enero de 1974.

⁴² Entrevista con Jorge Di Pascuale. *En Lucha*, 2ª época, febrero de 1974.

⁴³ Entrevista con Herminio Alonso. Buenos Aires, diciembre de 1976.

⁴⁴ *Palabra Obrera*, 12 de abril de 1960.

⁴⁵ *Palabra Obrera*, 2 de febrero de 1961.

⁴⁶ *Palabra Obrera*, 1º de setiembre de 1960.

⁴⁷ *Palabra Obrera*, 11 de mayo de 1960.

⁴⁸ Entrevista con Alberto Bordaberry. Buenos Aires, octubre de 1976.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Walsh: *¿Quién mató a Rosendo?*, pág. 37.

⁵¹ *Ibid.*, pág. 36.

⁵² *Ibid.*, pág. 37.

⁵³ Citado en *Palabra Obrera*, 12 de enero de 1961.

⁵⁴ *Palabra Obrera*, 13 de abril de 1961.

⁵⁵ *Palabra Obrera*, 20 de setiembre de 1961.

⁵⁶ Entrevista con Alberto Belloni.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Entrevista con Sebastián Borro.

⁶⁰ Perón-Cooke. *Correspondencia*, vol. 2, pág. 147.

⁶¹ *El Trabajador de la Carne*, agosto de 1960.

⁶² Entrevista con Jorge Di Pascuale. Buenos Aires, enero de 1974. Di Pascuale me confirmó el dilema en que se encontraban los activistas de línea dura. Reconocían todo lo que significaba aceptar de vuelta la CGT en los términos de Frondizi, pero no podían ignorar las oportunidades brindadas por éste.

⁶³ Documentos del Plenario Nacional de las 62 Organizaciones. Buenos Aires, mayo de 1960.

"Al encarar el problema de las relaciones laborales, encontré anarquía, abusos y extralimitaciones de todo orden de los obreros. Los empresarios habían perdido el comando de las fábricas; todo lo disponían las comisiones internas; mandaban los que tenían que obedecer [...] los empresarios deben retomar el control de las fábricas."¹

Puente no se quedó corto al exponer los resultados de la firme política gubernamental y empresaria con que fue enfrentado aquel problema. Acerca de una empresa textil donde había autorizado el despido en masa de los delegados, Puente afirmó:

"La producción aumentó después de eso en un 30%, y hoy la fábrica es un paraíso. Hace poco inauguró una nueva y moderna máquina y la empresa se reequipó."²

En los convenios firmados de 1960 en adelante esas áreas de disputa fueron precisamente aquellas en que se introdujeron las principales innovaciones: nuevas cláusulas relativas a racionalización e incentivos, supresión de muchas cláusulas existentes que "obstaculizaban la propiedad", y definición y limitación de los poderes de las comisiones internas. Precisamente, la prolongada lucha en torno de los nuevos convenios, en 1959 y 1960, estaba centrada alrededor de la decisión de las empresas de imponer la aceptación de nuevas estipulaciones en esa esfera. Sólo después de las derrotas gremiales de 1959 y 1960 estuvieron dispuestos los empleadores a considerar la renovación de los convenios en escala total.

La industria textil actuó como piedra de toque en esa lucha. Desde el comienzo de las negociaciones por el nuevo convenio, en julio de 1959, los empleadores habían dejado en claro su posición. Su principal organismo, la Federación de la Industria Textil Argentina (FITA), en su primera respuesta al pedido gremial de aumento de salarios y actualización de otras cláusulas había declarado que

"la continuación de las discusiones queda totalmente dependiente de la aprobación de parte del sector laboral de cláusulas sobre racionalización de la producción".³

A lo largo de todas las negociaciones los industriales se aferraron a esa posición. En setiembre el sindicato deploró que

6

Corolario del pragmatismo institucional: activistas, comandos y elecciones

"A todos nosotros que íbamos a hacer la revolución peronista en aquel momento, nos faltaba una política verdaderamente revolucionaria: teníamos, por supuesto, un profundo fervor peronista y un sentimiento innato más bien que una convicción. Carecíamos de una formación revolucionaria. Hacíamos todo bajo la influencia, de algo que venía de nuestras entrañas y no de nuestras cabezas."

Militante peronista anónimo, 1973

PRODUCTIVIDAD, RACIONALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO BAJO FRONDIZI

La modernización de la industria argentina basada en la creación de una adecuada manufactura de bienes de capital y la producción de bienes de consumo intermedios, proceso proclamado por la propaganda desarrollista, suponía la implantación efectiva de acuerdos de racionalización del trabajo que permitieran el uso eficaz de gran parte de la maquinaria importada y la intensificación de la producción de las plantas existentes. Todo lo cual tenía a su vez, como premisa, el control efectivo del poder de las comisiones internas. En su discurso ante los industriales asistentes a un seminario sobre relaciones industriales, el subsecretario de Trabajo, Galileo Puente, definió el problema en conocidos términos:

"la posición empresarial continúa siendo absolutamente intransigente ya que solamente aceptando cláusulas de racionalización se aviene a otorgar un aumento írisorio".⁴

Al cabo de semanas de una huelga desmoralizadora, en noviembre de 1959 se reanudaron las conversaciones, de nuevo interrumpidas ante la negativa de la parte patronal a modificar sus exigencias de control del funcionamiento de las comisiones internas. Al promediar 1960 el sindicato se vio obligado a reanudar el trabajo. Si bien las firmas pequeñas de la industria habían concluido un nuevo convenio, las grandes plantas que dominaban la industria y se agrupaban en la FITA no cejaban en su actitud. El 19 de enero, en una última tentativa, la Asociación Obrera Textil ordenó el trabajo a reglamento en las 54 principales plantas del país. La respuesta de los empleadores fue inmediata. Alpagatas y Sudantex, las empresas que fijaban la marcha de la industria, respaldadas por el doctor Puente, efectuaron despidos en masa que incluyeron virtualmente a todas las comisiones internas de las plantas. Al cabo de 72 horas el sindicato se batió en retirada y suspendió el trabajo a reglamento. En Alpagatas todos los trabajadores, que para entonces ya habían sido suspendidos, ocuparon la planta, pero la policía los desalojó inmediatamente. A principios de febrero tanto Alpagatas como Sudantex iniciaron la toma selectiva de trabajadores.⁵ Había sido quebrada realmente la columna vertebral de la resistencia de los trabajadores textiles a la racionalización.

Aunque en teoría la dirigencia sindical denunciaba los planes de racionalización, en la práctica del taller y la planta la batalla estaba perdida y quedaba poco para oponer a esos planes. Un militante de los textiles lo explicó así:

"Es cierto que la comisión directiva y la parlanta nacional han declarado reiteradamente que no van a firmar ningún convenio sobre la base de la racionalización. Pero en la práctica estas intenciones quedan como meras declaraciones, ya que al irse debilitando la organización interna la patronal aplica sus normas a gusto y paladar".⁶

Otro militante explicó:

"Hay varias maneras de conseguir lo que quieren: o comprando a los delegados con una buena indemnización o simplemente cierran la fábrica, como fue el caso de Picaluga y Mariatana, y cuando reabren comienzan con un nuevo sistema de producción".⁷

Lo que significaba en realidad la racionalización en la industria textil puede ser claramente entendido a juzgar por el caso de Alpagatas. Con más de 10.000 empleados, era por gran diferencia la más importante planta textil del país y dominaba el sector obrero de Barracas, en la Capital Federal. Lo que sucediera en Alpagatas era en gran medida el campo de pruebas de lo que podía ocurrir en el resto de la manufactura textil. Una vez reabierta la planta en febrero de 1960, empezaron a realizarse allí estudios de movimiento-tiempo, efectuados por "los técnicos en racionalización", según los llamaban los trabajadores.

Esos técnicos empezaron a aparecer en el lugar mismo de trabajo. El *Alpagatero*, periódico editado por los militantes para las bases, resumió así el impacto que la nueva política tuvo en los meses siguientes:

"Los patrones sostienen que cuando se hace una modificación que disminuye la tarea del obrero es necesario aumentar la tarea para mantener su ritmo de trabajo a un nivel constante. Es lo que está pasando en Alpagatas en cualquier sección en la cual instalan nuevas máquinas. Tomamos un ejemplo: en sección A5 [...] este año han instalado nuevas máquinas que no necesitan el tremendo esfuerzo físico exigido por las viejas máquinas [...] el trabajo es mucho menos pesado pero la patronal en vez de 75, 91 o 98 docenas de pares que hacían con las viejas máquinas, ahora exige un promedio de 316 docenas. Así que no hay disminución del esfuerzo físico, más bien hay un mayor agotamiento".⁸

Junto con los estudios de movimiento-tiempo hubo otras innovaciones. Se intentó mejorar las relaciones personales, para lo cual se distribuyeron manuales sobre el tema a los supervisores, donde se les aconsejaba "prevenir a los obreros de antemano sobre los cambios a introducirse" y "persuadirlos de aceptar los cambios". También se aportó música para mejorar el ambiente del sitio de trabajo.⁹ No todo el aumento de la producción se debió a la racionalización en el sentido estricto del término. Una parte considerable parece haberse derivado del mayor rendimiento de máquinas existentes. En la sección de cardas de Alpagatas, por ejemplo, cada obrero había estado a cargo de 20 cardas en 1948 y de 30 en 1958, y después de 1960 el número se elevó a 60. En la sección de sisal los estudios de movimiento-tiempo llevaron a la conclusión de que en vez de 15 obreros por turno eran suficientes 11. Cuatro trabajadores fueron eliminados de cada

turno. Tampoco este cambio fue acompañado por la adopción de nueva maquinaria.¹¹

Los militantes que había en la planta no tardaron en señalar el significado de esas políticas. Los operarios comunistas, por ejemplo, sostuvieron:

"el aumento en productividad es, pues, el resultado de distintos factores: un aumento en el esfuerzo físico del trabajador, racionalización de la organización de la fuerza del trabajo, transformación de la maquinaria, junto con la inauguración de esquemas de relaciones humanas y la represión del sindicato".¹²

El reconocimiento oficial de esta realidad en un nivel nacional sobrevino al firmarse finalmente el convenio, a principios de 1961. Su artículo 3 afirmaba:

"Las normas contenidas en el presente artículo, aplicables a los planes de productividad con nuevas modalidades de trabajo no se interpretarán como prohibiendo o limitando a los empleadores en el ejercicio de sus poderes de dirección y organización que les son propios [...] los empleadores dirigirán y organizarán la labor en sus establecimientos en la forma que consideren mejor. Contempla la debida coordinación de elementos materiales y mano de obra, con el fin de lograr niveles de producción óptimos."¹³

Alvaro Alsogaray, ministro de Economía, felicitó al sindicato por "ser realista y firmar el convenio", y el propio sindicato proclamó que había obtenido lo mejor posible de una mala situación. Los opositores internos del gremio formularon críticas que sin duda se hacían eco de los sentimientos de muchos trabajadores textiles:

"El convenio autoriza los cambios de secciones, de trabajo, la rebaja de categoría y además el aumento de máquinas sin que cobremos un solo centavo por el aumento de producción."¹⁴

Un proceso idéntico se verificaba al mismo tiempo en la industria metalúrgica. El contrato de 1959 había consistido simplemente en un aumento de emergencia. Pero también en esta industria la creciente desmoralización y el fatalismo de las bases y los militantes bajo la amenaza de desempleo y ante el fracaso de las acciones en masa, se operó una introducción de facto de los sistemas de racionalización. Inicialmente los trabajadores les opusieron considerable resistencia, hasta tal punto que a principios de 1960 se produjo casi un abandono

masivo por los trabajadores, de los planes de incentiación. Los obreros rechazaron la tentativa de los empleadores de modificar unilateralmente las tasas salariales y resolvieron "trabajar normalmente". La represalia patronal consistió en despidos en masa y lockouts. Como consecuencia de la recesión económica el sindicato se encontró en malas condiciones para negociar, y para julio de 1960 había firmado un acuerdo, negociado en pocos días, sin hacer ni una sola huelga.

Las concesiones contenidas en términos de planes de racionalización eran totales, hasta el punto de superar las del convenio con los textiles. El artículo 83 establecía lisa y llanamente:

"Los sistemas de premios o cualquier otra forma de incentiva-
ción no constituyen materia propia de la convención colectiva [...] la UOM y/o sus delegados en los distintos establecimientos no podrán oponerse a la revisión de los sistemas vigentes cuando la incidencia que en ellos pueden ejercer los salarios, los métodos de trabajo, la renovación y modernización de las máquinas y/o cambios técnicos [...] los haga antieconómicos o desnaturalice el superior propósito de incentivar razonablemente la producción que debe presidirlos."¹⁵

Esta cláusula representaba virtualmente una carta blanca otorgada a la empresa en la esfera de las relaciones de producción: el sindicato abdicaba de su derecho a intervenir en la determinación del número de hombres por tarea, la rapidez, el control de calidad o las disposiciones sobre turnos. En los años siguientes se concluyeron convenios similares prácticamente en todas las industrias.

El efecto acumulativo de esas cláusulas consistió en empeorar considerablemente las condiciones de trabajo en muchas industrias. Los "obstáculos a la productividad" —uno de los principales motivos de queja de los empleadores desde la época de Perón— se eliminaban ahora al por mayor. La ventaja más importante conquistada por los empleadores era la relativa a la movilidad dentro de las plantas. Desde 1946-48, los convenios laborales habían incluido clasificaciones de trabajo fijas y escalas salariales correspondientes a esas descripciones específicas de tareas. Casi todos los contratos contenían además garantías de estabilidad salarial en caso de modificarse dichas clasificaciones y, en general, cláusulas que limitaban la movilidad en el proceso de producción. Todo ello tendía a disuadir a los empleadores de reducir los niveles de personal, reducción que era uno de los principales objetivos

de la racionalización. Las categorías laborales proporcionaban a los trabajadores las bases legales para costosas disputas sobre demarcación de tareas cuando recurrían a las descripciones de éstas para oponerse a nuevas disposiciones sobre producción. La nueva flexibilidad con que contaron los empresarios desde 1960 en lo relativo a movilidad del trabajo dentro de las plantas les permitió desviarse efectivamente de las categorías laborales existentes y, en la práctica, crear otras nuevas sobre una base de planta por planta y sin ninguna modificación, formalmente negociada en el nivel nacional, de las descripciones de las tareas.

Subyacente en el interés de los empleadores y el Estado por la creciente racionalización y la supresión de los "obstáculos a la productividad" se encontraba, desde los últimos años del gobierno de Perón, una preocupación fundamental por la autoridad que tenían las comisiones internas en el lugar de trabajo. Desde José Gelbard hasta Galileo Puentes la consigna había sido la misma: para que la empresa pudiera reafirmar su control de la producción era preciso doblegar el poder de los obreros en el lugar de trabajo. Después de las derrotas de 1959, los sindicatos aceptaron limitaciones formales de la organización de los trabajadores en el taller o la planta y el control de esa organización, y tales limitaciones fueron incorporadas a los convenios colectivos. En la práctica esto significó muchas veces una formalidad, pues las comisiones internas se encontraban ya considerablemente desorganizadas debido a la represión empresarial y estatal y al aumento del desempleo. La industria metalúrgica abrió el camino en la imposición de restricciones a las comisiones. Durante la huelga de 1959, la organización patronal, Federación Argentina de la Industria Metalúrgica, publicó un proyecto de regulación de las comisiones. Esas proposiciones mostraron claramente la índole y la amplitud de la preocupación patronal. Las principales proposiciones eran las siguientes: un delegado no podría presentar proposición alguna a la gerencia si no había acudido antes a su superior y esperado cinco días; un delegado debía tener por lo menos 25 años de edad, 2 de experiencia en la planta y 4 de afiliación al sindicato, así como certificado de buena conducta; los delegados no estarían autorizados a oponerse a las órdenes de la gerencia en lo concerniente al manejo de la producción; durante las horas de trabajo no podrían celebrarse reuniones sindicales en la planta, y los delegados no tendrían permiso para salir de su sección sin autorización por escrito del jefe de ésta.¹⁶

El contrato de emergencia que puso fin a la huelga de 1959 no se refería al problema de las comisiones internas; en cambio el convenio de julio de 1960 contenía la mayor parte de las proposiciones patronales originales. El artículo 82 detallaba la proporción de delegados a trabajadores que debía haber en una planta, los requisitos que un delegado debía satisfacer en edad y experiencia, el procedimiento que la comisión interna debía emplear en sus tratos con los empleadores y los sectores específicos por los que correspondía que se interesara un delegado en la planta. Finalmente, se estipulaban límites rigurosos a la facultad del delegado para moverse dentro de la fábrica.¹⁷ En la mayor parte de los convenios concluidos en otras industrias durante los años siguientes figuraron restricciones similares.

Los resultados de este proceso pronto se tornaron patentes en términos económicos. Fuese porque despejaban el terreno para la implantación de nueva tecnología o porque permitían intensificar la explotación de la planta existente mediante nuevos esquemas de empleo de la mano de obra e intensidad del trabajo, los convenios firmados después de 1959 tuvieron un acentuado efecto sobre la productividad industrial.¹⁸ Sin embargo hubo también otros efectos, menos evidentes, relativos al proceso de declinación de la militancia y al incremento del poder y la autoerancia de la jefatura sindical. Las cláusulas contenidas en los convenios de 1960 en adelante daban a los empleadores, según hemos visto, mano libre en lo concerniente a disposiciones sobre producción y sistemas de trabajo. Como consecuencia, toda una serie de cuestiones en torno de las cuales podía estructurarse el interés de las bases se encontraron legalmente excluidas de la esfera de actividad legítima de las comisiones internas. La organización gremial en el sitio de trabajo necesitaba basarse en los puntos que eran de interés inmediato para el trabajador en su tarea. La fuerza alcanzada por las comisiones internas durante la Resistencia se había basado precisamente en el hecho de que las bases podían verlas como el único medio viable para defender las condiciones de trabajo. Toda esa área de actividad se encontraba ahora suprimida. Asuntos en torno de los cuales los delegados y las comisiones antes podían negociar —y acrecentar su poder al hacerlo— eran ahora sacados de la esfera de acción legítima de las comisiones. Tomemos un ejemplo típico: los procedimientos por los motivos de fuerza. El convenio firmado con los textiles en 1961 sacaba específicamente de las manos de la comisión interna el

tema de la insatisfacción de los trabajadores con los nuevos esquemas de trabajo basados en los estudios sobre movimiento-tiempo. La resolución de esas protestas era puesta primero en manos de una sección especial del comité negociador nacional y, más allá de esta instancia, en las del Ministerio de Trabajo. Lo cual limitaba considerablemente el alcance de la actividad potencial de las comisiones internas.

En consecuencia, las posibilidades de que esas comisiones desempeñaran un papel dominante en la organización y expresión de las aspiraciones de los obreros dentro de las fábricas habían empezado a tornarse muy sombrías a comienzos de la década 1960-61. A esto se sumaba la circunstancia de que el principal tipo de plan de racionalización elegido involucraba una u otra forma de pago por resultados. Los sistemas destajistas de pago por resultado llegaron a ser en algunos casos, como en la industria mecánica británica después de la Segunda Guerra Mundial, la base de una poderosa organización sindical en el plano de los obreros. En cambio en la Argentina el posible aspecto positivo de esos sistemas estaba en la realidad excluido, puesto que el contexto mismo donde se los debía aplicar ahora era incumbencia exclusiva de la empresa. Más aún, en muchos casos se consideró que la fijación de tasas para las bonificaciones y otras tasas relativas al trabajo eran ahora prerrogativa de la empresa. En la industria metalúrgica, por ejemplo, el artículo 83 del convenio empezaba por afirmar que "el sistema de bonificaciones, o cualquier otra forma de incentivos, no constituye una cuestión concerniente a este contrato", lo cual fue entendido habitualmente en el sentido de que concedía a los empleadores la facultad de fijar de modo unilateral la tarifa del trabajo. El empleo por los delegados de la tarifa por tarea como instrumento de negociación con la empresa acerca de cambios de los planes de producción tales como aceleración del trabajo, distribución de turnos y movilidad de los obreros, así como la estructuración de una fuerte organización de las bases en torno de ese poder de negociación, se habían tornado simplemente imposibles. Lo cual dejó tan sólo como saldo los efectos negativos y divisores de los sistemas de pago por resultados. En consecuencia, así como la aplicación de los nuevos sistemas de trabajo y el control de las comisiones internas se basaba en las derrotas concretas de 1959 y 1960, y en la consiguiente desmoralización y desmovilización de la militancia en las bases, las cláusulas de racionalización sirvieron, por su propia índole, para consolidar y perpetuar aquel

fenómeno, para confirmar la declinación de la organización militante en el lugar de trabajo y la creciente apatía de las bases.

Ese proceso benefició visiblemente a la jerarquía sindical. En muchas formas, la aplicación de la ofensiva de la productividad simbolizaba con la mayor claridad posible la atracción que el "integracionismo" ejercía sobre la cúpula sindical peronista. A cambio del control de las comisiones internas y la aceptación de la racionalización, los líderes gremiales obtenían, desde su punto de vista, beneficios concretos. El reconocimiento formal de la función del gremialismo "responsable" no fue el menor de ellos. Lo cual fue simbolizado por las muy activas negociaciones que empezaron a efectuarse en las oficinas del Ministerio de Trabajo cada vez que se avecinaba la conclusión de un convenio importante. También lo confirmaron las previsiones de los convenios. Por primera vez desde principios de la década 1950-60 se vio a la jefatura sindical lograr una renovación efectiva de los convenios. Las cláusulas sobre cuestiones tales como beneficios por maternidad, asignaciones familiares, licencias por casamiento, asignaciones por antigüedad, todo lo cual estaba congelado desde comienzos de aquella década, fueron actualizadas. Por lo tanto, en la aceptación de la racionalización se operó un canje. Los convenios fortalecieron considerablemente las debilitadas finanzas de los gremios. Por ejemplo, el sindicato textil obtuvo, en las provisiones del contrato de 1961, una retención de 150 pesos sobre los salarios de cada obrero textil.¹⁹

En consecuencia, las facultades para negociar y para administrar que los gremios poseían no fueron debilitadas por la racionalización. La ofensiva de la productividad apuntaba fundamentalmente al poder en el lugar de trabajo mismo, no a los sindicatos en sí. Más aún, la propia cúpula sindical tenía interés cada vez mayor, según hemos mostrado, en controlar ese poder de los militantes. La imposición del control por la empresa y la debilitación del poder de los delegados involucraba, para la cúpula, mayor facilidad en el control de sus propios afiliados. En rigor, al incluir por escrito el control de las comisiones internas en los convenios, los empleadores habían logrado identificar su preocupación por ese tema con la inquietud que éste les inspiraba también a los dirigentes gremiales. La carga de mantener bajo control a las comisiones fue firmemente depositada en los hombros de los dirigentes sindicales, como ejecutores de las responsabilidades asumidas por el lado gremial en los convenios. Para cumplir la palabra

dada a los empleadores y conservar su credibilidad como negociadores "responsables" debieron ser ellos quienes hicieron acatar las cláusulas del convenio.

Si bien la ofensiva de la productividad se dirigía a lograr el control y la eliminación de la autonomía de acción de las bases, este proceso no careció de cierta ambigüedad intrínseca. Los nuevos convenios otorgaron cierto lugar a los propios delegados en el aparato sindical emergente. Si se avenían a aceptar las cruciales restricciones impuestas a su actividad, se les concedían algunos derechos y cierto grado de reconocimiento: eran formalmente admitidos por la empresa como representantes sindicales. Por añadidura, debemos tener en cuenta la lógica de la situación que las bases peronistas enfrentaban después de las derrotas de 1959, así como el concomitante peso del realismo pragmático que tanto poder ejerció en favor de la aceptación del "integracionismo". En definitiva también hubo, por parte de la masa obrera, un importante factor de aceptación de las cláusulas de productividad y limitación de las facultades sindicales en el lugar de trabajo. Para 1960, los trabajadores en general estaban dispuestos a aceptar las cláusulas de racionalización a cambio de aumentos salariales. El espectro del desempleo y la drástica caída de los salarios en 1959, asociada al fracaso de la acción militante cuando se trató de obtener aumentos salariales decorosos, significó que el ofrecimiento de un aumento en dinero y la renovación de las cláusulas sobre beneficios marginales a cambio de los convenios sobre racionalización, les pareció a la mayoría de los trabajadores la única salida práctica para resarcirse de la declinación de sus niveles de vida.

LOS GRUPOS CLANDESTINOS: SEGUNDA ETAPA

A medida que el espacio disponible para la actividad militante independiente se restringió cada vez más, otro tanto sucedió con las perspectivas de acción efectiva abiertas a los grupos clandestinos. Durante los meses iniciales del gobierno de Frondizi se ordenó a las formaciones especiales suspender sus operaciones. Formalmente al menos, participaron en las *tentativas emprendidas en esos meses para reconstituir el ala política del movimiento peronista*. Estuvieron representadas en el Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo después de fundarse éste en octubre de 1958. Al intensificarse en 1959 el conflicto entre el gobierno y los sindicatos y eclipsarse

toda posibilidad de expresión política legal del peronismo, las formaciones especiales reanudaron la actividad.

Durante 1959 los estallidos de bombas aumentaron sin cesar al ahondarse el enfrentamiento entre el gobierno y la clase trabajadora. Reflorecieron los comandos en Buenos Aires y el interior, y se procuró conferir a este resurgimiento de la actividad una estructura organizativa mejor que la existente hasta el momento. Se crearon varios organismos nuevos de coordinación. Se constituyó una Central de Operaciones de la Resistencia (COR), dirigida por el general (R) Miguel Iniguez. A cargo de cumplir las órdenes emanadas del COR estaba la Agrupación Peronista de la Resistencia Insurreccional (APRI). Bajo su mando había, al menos en teoría, cierto número de comandos locales que operaban principalmente en Buenos Aires y en medida menor en las provincias. Para facilitar las comunicaciones entre los distintos organismos y asegurar una eficaz cadena de mando existía además un Comando Nacional de Comunicaciones, dirigido por el teniente (R) Eloy Prieto.

Es difícil establecer qué grado de eficacia alcanzó la nueva estructura en lo relativo a coordinación. Como siempre que se trata de analizar la actividad clandestina, hay que moverse con cautela entre la realidad y la ficción, el deseo subjetivo y el hecho objetivo. Aunque se evitó el caos inicial de 1955-56, no corresponde exagerar la eficacia de la reestructuración. La dificultad de evaluar esa eficiencia se origina, en gran medida, en las fuentes disponibles. Por el lado del gobierno y las fuerzas de seguridad, existía una obvia tendencia a exagerar la amplitud de la planificación general de la actividad subversiva. Cada acción suya era presentada como parte de un complot coherente y de gran escala encaminado a destruir el statu quo. Esto fue particularmente cierto en relación con las fuerzas armadas después de que se hicieron cargo de la seguridad al aplicarse, en marzo de 1960, el Plan Contintes. Para justificar los nuevos poderes que acababan de asumir, sin duda exageraron la eficacia y el grado de planificación de la Resistencia peronista. Tendieron a ver en cada acción terrorista una línea continua de responsabilidad que se extendía desde la persona de Perón hasta el comando de resistencia local, pasando a través del Consejo Coordinador.²⁰ Por el otro lado, y por motivos igualmente notorios, los propios peronistas se inclinaron a exagerar la eficiencia de su organización, y los títulos formales de organismos como el COR parecieron dar testimonio de una precisión y centralización de operaciones de nivel militar.

Sin embargo, parece ser claro que muchas acciones resultaron de iniciativas de grupos muy localizados. Incluso las fuerzas de seguridad, en algún momento, admitieron tanto como lo siguiente:

"Si bien existe un comando organizador de los actos de terrorismo y sabotaje a realizar, muchos fueron llevados a cabo por células e individuos aislados que actuaban en forma paralela e independiente."²¹

Es también significativo que Juan Carlos Brid, destacado participante en varias de las principales acciones de ese tiempo, no mencione en sus memorias de esos años la mano directiva del COR ni de ningún otro comando supremo.²² En parte, las iniciativas independientes y localizadas fueron consecuencia de la relativa autonomía otorgada a las células en cualquier organización clandestina preocupada por su seguridad. Pero también influyeron otros factores. Organismos como el COR y el APRI se hallaban formados por oficiales militares en retiro, eliminados de las fuerzas armadas en las purgas antiperonistas de la era posterior a 1955. Con frecuencia había recelos mutuos entre éstos y otros militantes de la Resistencia. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba los militares retirados tenían una organización reservada exclusivamente para ellos.²³

La medida en la cual esta renovada actividad clandestina respondió a un plan general urdido por Perón es un punto discutible. En 1960 circularon instrucciones de las que se dijo que provenían de Perón. Contemplaban una escalada de etapas a lo largo de las cuales la Resistencia tornaría gradualmente ingobernable el país, que culminaría en

"la realización de la gran insurrección en que los grupos clandestinos constituirán el núcleo alrededor del que se agruparán las fuerzas militares, al mismo tiempo que los sindicatos paralizarán al país."²⁴

Es cuestionable que Perón realmente creyera en la posibilidad de llegar a esa última etapa. Sin embargo, en vista de la represión abiertamente antiperonista que se cumplía en ese momento y de la evidente exclusión de toda posibilidad de retorno personal de Perón a la Argentina o de legalización del peronismo como movimiento político, Perón tenía poco que perder si adoptaba esa postura insurgente. En vista del virulento antiperonismo de los militares a cargo del Plan Conintes, de poco habría servido adoptar una actitud legalista y

moderada. En cambio, una actitud militante le permitía subrayar su importancia como factor de perturbación y socavar la posición de quienes hubieran optado, dentro del movimiento, por un compromiso.

Las acciones ejecutadas en 1960 representaron por cierto el pico de la actividad de las formaciones especiales durante la Resistencia. Un vistazo a algunas de las principales acciones puede demostrar el alcance de esa actividad. El 15 de febrero se hizo estallar un depósito de la Shell Mex en la ciudad de Córdoba, con destrucción de más de 3 millones de litros de petróleo. El monto de los daños fue estimado en 7 millones de pesos y hubo 13 muertos. Un mes después, el 1 de marzo, explotó la planta de almacenamiento de la compañía estatal de gas en Mar del Plata, con pérdida de 1400 cilindros de gas y daños por valor de 10 millones de pesos. El mismo día, en Buenos Aires, una explosión destruyó por completo la casa del mayor Cabrera, del Servicio de Inteligencia del ejército. El 26 de mayo fue destruida en Mendoza la casa del general Labayru, comandante de la región andina. Al mismo tiempo se hizo volar en esa región un importante puente en la cordillera de los Andes.²⁵ Estas acciones fueron perpetradas contra un fondo de atentados con bombas e incendios de menor escala.

Los efectos de estas acciones hablan de un grado de profesionalismo sin duda mayor que el existente antes de 1959. Durante el régimen de Aramburu no se habían cumplido acciones de semejante alcance. Ahora no se empleaban con frecuencia los antiguos e improvisados "caños" de 1956-57, sino cargas de dinamita comercial junto con mecanismos de detonación mucho más perfectos. Estos procedimientos exigían una estructura de apoyo altamente organizada, puesto que la mayor parte de la gelinita debía ser robada de minas y canteras distantes de Buenos Aires y llevadas a esta ciudad, donde se preparaban los artefactos explosivos en casas que ofrecían seguridad a los terroristas. El robo de los explosivos constituyó una función importante de los comandos de provincia. En Mendoza, a principios de 1960, un comando dirigido por el oficial retirado Ciro Ahumada robó más de 40 kilos de gelinita en una incursión contra una mina de Huemul. Posteriormente se estableció que gran parte del explosivo había sido utilizado en operaciones consumadas en Buenos Aires.²⁶ No obstante el mayor alcance de las acciones, no efectuaron tentativas para entablar lucha directamente con las fuerzas de seguridad, así fuera en escala limitada. Docu-

mentos hallados en poder de José Normando Castro, uno de los principales organizadores en Buenos Aires, incluían planos detallados de los cuarteles de Instrucción de la Policía Federal y de otros edificios policiales. Esto podría indicar que se tramaban acciones contra la policía, pero en las principales áreas urbanas no hubo ningún enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad.²⁷

Pero a pesar de todo el profesionalismo de las organizaciones clandestinas, sus actividades nunca llegaron a plantear una amenaza seria a la estabilidad del statu quo. En realidad, al promediar 1960 la represión ejercida dentro del marco del Plan Conintes había desgastado efectivamente gran parte de la estructura de comandos. El Conintes fue puesto rigurosamente en vigencia en marzo de 1960. Hasta ese momento la actividad terrorista había sido investigada por la policía y los militantes detenidos puestos a disposición de la justicia. El decreto 2628 modificó el cuadro al someter a las fuerzas policiales de la Capital Federal y de las provincias a la autoridad de las fuerzas armadas, que ahora procedieron a dividir el país en cierto número de zonas de defensa contra la subversión. El decreto 2639, del 16 de marzo, puso bajo jurisdicción militar a todos los involucrados en la actividad terrorista y estableció consejos de guerra especiales para juzgarlos de acuerdo con la justicia militar. Se calcula que en virtud de estas disposiciones fueron detenidas alrededor de 2000 personas, tal vez 500 de las cuales fueron condenadas por las comisiones especiales.²⁸ Es posible que muchas de ellas no hubieran tenido intervención directa en tareas clandestinas, pues el Conintes fue utilizado indiscriminadamente también contra los activistas sindicales. Lo cierto fue que hacia mediados de 1960 el Plan Conintes había cumplido su función.

El último acto de los grupos clandestinos fue un golpe militar intentado el 30 de noviembre de 1960. Bajo la dirección general del COR se formularon planes para la toma de varias instalaciones militares decisivas. Esto daría la señal para un levantamiento generalizado, que sería acompañado por una huelga general. El alzamiento apenas si fue puesto en marcha, y Rosario fue uno de los pocos lugares donde ocurrió algo parecido a un conflicto armado. Fracasada la toma de los primeros puntos decisivos, el resto de la sublevación falló. La consecuencia consistió en que muchos de los activistas que habían logrado evadir la red tendida por el Plan Conintes ahora fueron detenidos. Este conato de alzamiento fue el

último de una tradicional línea de golpes por peronistas y militares, iniciada con el levantamiento del general Valle en junio de 1956. La acción fue planificada y controlada por el ex personal militar centrado alrededor de Iníguez en el COR y partía de la base de que sería posible convencer a suficientes oficiales en actividad de que se jugaran al bando rebelde. No hubo distribución previa de armas a los comandos civiles que esperaban, para actuar, el rendimiento de esas guarniciones. El papel de los activistas no militares debía ser rigurosamente secundario, puesto que sólo iban a ser armados cuando y donde los oficiales militares retirados lo consideraran oportuno.

¿Qué relación existía entre estas formaciones especiales y los dirigentes y bases sindicales peronistas? El término "Resistencia", tal como lo utilizaron los peronistas en las décadas 1950-60 y siguiente, tendió a ser un vocablo difuso que abarcaba una amplia gama de actividades distintas, a la vez que borraba las distinciones entre esas diferentes actividades para fusionarlas en una simple y vaga imagen que fue adoptada en la cultura popular peronista. En rigor, sin embargo, la creciente diferenciación observada en el período anterior a 1958 entre activistas sindicales y grupos clandestinos se acentuó más aún en este segundo período. En parte ello se debió a las exigencias de seguridad impuestas por una organización más rigurosa de los grupos clandestinos. Era demasiado riesgoso tener activistas que a la vez fuesen abiertamente militantes gremiales, y además la actividad clandestina exigía en general la dedicación exclusiva de los activistas. Pero en parte se debió también a la cambiante idea que los sindicalistas peronistas de base iban formándose sobre la pertinencia que tenía para ellos, como gremialistas, la actividad clandestina. Proscripto el peronismo de los sindicatos y desencadenada la represión en gran escala, esa pertinencia había sido fácil de advertir tanto en lo emocional como en lo práctico. Ahora, en cambio, el enfoque del "integracionismo", bastante más sutil, tornaba borrosa la idea. Como consecuencia, las formaciones especiales no se salvaron de la desmovilización general y la creciente apatía derivadas de las derrotas de 1959 y 1960. Sus posibilidades de reclutar militantes clandestinos en las filas obreras estaban condenadas a mermar. Para adaptar la ya trillada metáfora de Mao, el mar de la clase trabajadora, donde hubieran debido proponerse nadar, en 1960 se estaba secando.

Naturalmente, existieron nexos entre ambas áreas. Las huelgas más largas de 1959 y 1960 fueron acompañadas por

una sostenida campaña de estallidos de bombas y sabotajes. De acuerdo con cálculos oficiales, durante la huelga general de dos días declarada en apoyo de los metalúrgicos en septiembre de 1959 hubo 106 actos de terrorismo tan sólo en Buenos Aires.²⁹ Brid recuerda que la voladura de la planta de almacenamiento de gas de Mar del Plata respondió, al menos en parte, a un pedido de ayuda formulado por los obreros de Gas del Estado, entonces en huelga.³⁰ El fallido golpe de noviembre de 1960 fue revelado a muchos dirigentes sindicales peronistas, algunos de los cuales prometieron una huelga general si la insurrección daba signos de triunfar. En la noche del golpe, los locales gremiales fueron usados como puntos de reunión para activistas que esperaban la señal para actuar. En Mendoza, por ejemplo, tanto el edificio de la UOM como la sede local de la CGT sirvieron para ese fin.³¹

Sin embargo, la creciente divergencia entre ambas áreas de acción se tornó patente en el creciente número de jóvenes y estudiantes peronistas que formaban parte de los comandos. Estos tendían a reclutar en esos sectores más que entre los jóvenes que se habían destacado en la militancia sindical en el período anterior. Los gremialistas peronistas que aún permanecían activos en las tareas clandestinas eran los pertenecientes a la antigua CGT Auténtica. Muchos de ellos eran, a esa altura de las cosas, más bien revolucionarios profesionales que dirigentes gremiales. Incluidos a menudo en listas negras como consecuencia de su activismo en los primeros tiempos siguientes a 1955, o por sus posiciones durante el régimen de Perón, habían llegado a ser, con mayor frecuencia por necesidad que por elección, activistas clandestinos con dedicación exclusiva, que tenían escaso o ningún contacto directo con el gremialismo diario. En la UOM había, por ejemplo, hombres como Benito Moya y Armando Cabo que, mientras desempeñaban funciones con dedicación exclusiva en los comandos, estaban al mismo tiempo a sueldo del sindicato y eran amigos cercanos de Augusto Vandor, líder de la UOM. Otros, como Avelino Fernández, aún tomaban parte activa en las tareas del gremio, pero llegado el caso también actuaban como intermediarios entre Vandor y las formaciones especiales. Los líderes sindicales adoptaron una actitud cada vez más pragmática frente a su colaboración con las actividades clandestinas. Aunque habitualmente permitían el empleo de fondos o locales gremiales, evitaban contactos directos o compromisos más estrechos.

A medida que la Resistencia fue desgastada por la re-

presión, la desmoralización y la desertión, fue necesario pagar un precio por la consagración de esos sindicalistas durante tan largo tiempo a las actividades clandestinas. No fue raro que algunos de ellos pasaran a ser guardaespaldas a sueldo, o elementos de choque que imponían las decisiones de sus compañeros en los círculos directivos gremiales. A medida que las oportunidades de corrupción aumentaron, que las finanzas sindicales mejoraron y que, particularmente en sindicatos como la UOM, la línea divisoria entre el hampa y las operaciones financieras del sindicato se tornó borrosa, la familiaridad de esos hombres con las armas y su disposición a emplearlas, junto con cierto carisma derivado de sus pasadas acciones, fueron eficazmente utilizadas por los líderes. Desclasados en la práctica por sus años de actividad clandestina, y librados a sus propios medios al retirarse la marca de la Resistencia, encontraron como parte de la emergente jerarquía sindical peronista un papel preferible a intentar el retorno a la fábrica o al taller. Armando Cabo, prominente líder metalúrgico antes de 1955, estrechamente vinculado con la proyectada milicia sindical que al parecer había propuesto Evita, y sin duda alguna hombre de considerable coraje personal durante los años de la Resistencia a Aramburu, había de convertirse, desde comienzos de la década 1960-70, en uno de los principales hombres que imponían en la UOM la línea de Vandor. Hubo muchos otros casos así. Los escalones más bajos de la "burocracia sindical" estaban poblados en gran medida por ex militantes de los grupos clandestinos.

El contexto político e ideológico en que se desarrolló la segunda fase de la actividad clandestina fue a la vez ambiguo y limitado. Se tornaba más evidente la influencia de la Revolución cubana. En esos años surgieron las primeras formaciones guerrilleras, el grupo Uturuncu en Tucumán y la Unión de Guerrilleros Andinos (UGA) en Mendoza. Ambos fueron rápidamente aplastados por los militares antes de que pudieran iniciar efectivamente operaciones.³² Al adoptar la Revolución cubana, en esos años, una posición de extrema izquierda, tuvo impacto cada vez mayor sobre los activistas argentinos, tanto peronistas como no peronistas. Cuando el ejército reducía "focos" guerrilleros de una u otra línea, el "manual de guerra de guerrillas" de Guevara figuraba entre los documentos capturados.³³ Al mismo tiempo se produjo una pérdida de confianza en los alzamientos militares, en la búsqueda de jefes militares fieles a su "auténtica" vocación. Algunos grupos clandestinos incluso rechazaron la idea de

que pudiera persuadirse a ciertos sectores de las fuerzas armadas a encabezar una insurrección popular.

Por ejemplo, el Comando Nacional Peronista había sostenido en 1959 que el verdadero problema que el peronismo debía resolver era "la falta de un liderazgo político revolucionario del movimiento".³⁴ Esas tendencias fueron encarnadas por John William Cooke. Según lo demuestra claramente su correspondencia con Perón, Cooke desdenaba desde largo tiempo atrás a los presuntos salvadores militares. En 1960 escribía en Cuba, donde luchó junto a las milicias en Bahía Cochinos y donde se hizo ardiente campeón de la guerra de guerrillas. Es posible que haya intervenido en la creación de la UCA y el movimiento Utrunco.³⁵ Cooke intentó situar su apología de la guerra de guerrillas en la perspectiva, más amplia, de identificar al peronismo con las luchas de liberación nacional en el Tercer Mundo. Como parte de ese esquema, insistió cada vez más en la necesidad de convertir al peronismo en un partido revolucionario de ideología adecuada, nientemente definida, en vez de la lealtad generalizada a un líder, sentimiento que cumplía el papel de ideología en las filas del peronismo.

Pero esta evolución debe ser vista en su perspectiva correcta. Si bien la creciente atracción ejercida por la estrategia guerrillera era considerable, sólo tuvo escaso impacto en la mayoría de los militantes de la Resistencia peronista en aquel momento. Existía una admiración general por los "muchachos" de la sierra, y constata que hubo colectas en su favor en fábricas de Buenos Aires.³⁶ Pero la guerrilla fue fundamentalmente apoyada por los sectores juveniles del peronismo y la izquierda no peronista, donde se reclutaron sus militantes. En su mayor parte provinieron de la esfera universitaria de la Capital Federal y otros grandes centros de estudios terciarios. De esos sectores provino también gran parte del apoyo logístico a los "focos" cuya creación se intentó en Tucumán y Mendoza.³⁷ Las fuerzas de seguridad comprobaron que la mayoría de los combatientes capturados o muertos tenían entre 16 y 20 años de edad.³⁸ La mayoría de los activistas de los grupos clandestinos aún tendían a esperar, quizá con convicción cada vez menor, que alguna figura militar en retiro encabezara el "golpe", en vez de identificarse ellos mismos con una estrategia de guerrilla inspirada por Cuba. En aquel momento los militantes peronistas miraban por cierto con recelo a Castro. Durante la visita del jefe cubano a Buenos Aires en 1959, quienes más lo habían festejado eran "señoras

gordas" del Barrio Norte y sobre todo había recibido elogios de la prensa de la izquierda argentina tradicional.

Análogamente, la creciente identificación del peronismo con los movimientos de liberación del Tercer Mundo era en gran medida una tendencia minoritaria. Aunque entre los activistas había sin duda cierta discusión sobre los maulinas de Kena y la lucha de los argelinos contra Francia, rara vez se llevaba ese debate hasta sus últimas consecuencias, y no se elaboró claramente ninguna posición ideológica. Ya hemos comentado las dificultades en que se veían los militantes peronistas cuando se trataba de formular una crítica ideológica formal del desarrollismo, o de proponer una alternativa ideológica adecuada para sustituir la experiencia de la lucha de clases. Otro tanto puede decirse sobre los activistas de los comandos, a pesar de todo su compromiso con las tareas clandestinas. En definitiva, la ideología política de muchos pareció haberse reducido a una lealtad personal a Perón. Para estos activistas la insuficiencia de una filosofía formalmente elaborada no era compensada por la energía obtenida de la continua ratificación de valores y experiencias de solidaria lucha en común, puesto que se encontraban al margen incluso de la escasa lucha sindical que hubo en los últimos años del gobierno frondista.

En consecuencia, Cooke fue en gran medida una excepción, una voz solitaria que hablaba a un auditorio muy restringido dentro del peronismo. Sus cartas a Perón reflejan su creciente aislamiento; llegan a ser un monólogo, una letanía optimista donde Cooke exhortaba a Perón a establecer su exilio en Cuba y comprometer al peronismo con el estilo cubano de liberación del Tercer Mundo. Al intensificarse su apología de la experiencia cubana, otro tanto sucedió con la frialdad y formalidad de las contestaciones de Perón. Así también, alrededor de 1961 el Comando Nacional Peronista sólo ejercía una influencia mínima dentro del peronismo. Fracasada la sublevación de noviembre de 1960 y triunfante el Plan Comites, muchos activistas de los comandos abandonaron esa tarea o transaron con el aparato formal del movimiento. Las ideas de personas como Cooke se mantuvieron vivas en grupos muy pequeños, principalmente conectados con los sectores juvenil y estudiantil.

EL CEB0 DE LA POLÍTICA: LA ELECCIÓN DE MARZO DE 1962

El éxito del Plan Conintes, que borró toda perspectiva insurreccional para el peronismo, y la desmovilización de la lucha sindical después de los puntos culminantes que había alcanzado en 1959, aumentaron la atracción ejercida por la opción "pragmática" sobre los gremios peronistas y fortalecieron las posibilidades de Frondizi de "integrarlos" a un nuevo statu quo. Ciertamente parecía imperar un claro clima de pragmatismo. Por ejemplo, las 62 Organizaciones se avinieron a compartir el poder con los no peronistas en el comité organizador provisorial creado por Frondizi como primer paso hacia la convocatoria de una conferencia que reorganizara la CGT. Dicho comité, conocido como Comisión de los Veinte, consistía en diez dirigentes gremiales peronistas y diez independientes. Frondizi prometió autorizar la reunión del congreso de la CGT para diciembre de 1961. Para Frondizi era visiblemente arriesgado permitir la creación de una nueva central obrera, y en efecto la Comisión de los Veinte organizó una huelga general contra la propuesta racionalización del servicio ferroviario y contra el veto por el presidente de una nueva ley que habría mejorado la indemnización por despido. De cualquier manera, esas actividades gremiales se ajustaban más estrechamente a lo que el gobierno consideraba una oposición "legal", y quebrada ya la resistencia de la clase trabajadora carecieron del potencial explosivo de las luchas de 1959. El gobierno empezó también a relajar algunas de las restricciones más severas del plan de estabilización y permitió el desarrollo de tratativas empleador-obrero más parecidas a negociaciones colectivas libres. Las huelgas dejaron de ser declaradas automáticamente ilegales y los sindicatos lograron recobrar algo, si bien no todo, del terreno perdido en 1959 y 1960. Los propagandistas del gobierno, incluida la prensa más directamente desarrollista, empezaron a hablar con confianza de la nueva "etapa legal" en que entraba el país.

Otros factores parecieron fortalecer esta nueva confianza. En abril, Frondizi se sintió lo bastante fuerte como para destituir al comandante en jefe del ejército, Toranzo Montero, y en mayo Alvaro Alsogaray debió abandonar el Ministerio de Economía. La suerte de la Unión Cívica Radical Intransigente también pareció mejorar en lo político. En 1961 ganó elecciones en Catamarca y Santa Fe, en tanto que los conservadores triunfaron en Mendoza. En febrero de 1961, en elecciones para

senador realizadas en la Capital Federal, Alfredo L. Palacios, candidato de una fracción socialista, triunfó por 308.000 votos contra 232.000 sufragios en blanco. Esto pareció indicar que la cohesión de la fuerza electoral peronista era socavada.

Con esto coincidió el surgimiento de partidos neoperonistas. Dirigidos principalmente por figuras del aparato político peronista previo a 1955, esos partidos habían recibido de Frondizi autorización para actuar. En muchas provincias se centraban en torno de un caudillo local que había controlado el aparato provincial del partido peronista antes de setiembre de 1955. Si bien proclamaban su obediencia general a los principios justicialistas, no se consideraban obligados a seguir los dictados de Perón en lo referente a estrategia y tácticas en la Argentina. Quienes adoptaron esa línea fueron estimulados por el gobierno como forma "aceptable" del peronismo. Para 1961 obtenían un número no desdeñable de los sufragios peronistas.

La piedra de toque acerca de la efectividad real de ese anhelado "estado legal" habían de ser las elecciones de marzo de 1962, donde se pondrían en juego las principales gubernaciones provinciales. En el círculo de asesores presidenciales y de la UCRI en general se desarrolló un intenso debate sobre la sensatez de permitir la participación directa del peronismo en esos comicios. La decisión de Frondizi de permitir a los peronistas presentar sus propios candidatos era para el gobierno una opción tentadora, pero arriesgada. Si se demostraba que al peronismo no le iba tan bien como se suponía que podía irle, se tendría la prueba concreta de la eficacia del "integracionismo" como estrategia para controlar al peronismo. Se aliviaría gran parte de la presión de los militares sobre Frondizi, al demostrarles que el aguijón político del peronismo podía ser limado mucho más eficazmente mediante su política de concesiones controladas y aceptación de una fuerte organización gremial, que mediante el retorno a la política de franca represión preconizada por la mayoría de los sectores militares. Desde el punto de vista de Frondizi, lo ideal era que el peronismo insistiera en votar en blanco o, de no suceder así, que dividiera su caudal entre una amplia gama de candidatos neoperonistas. En caso de que los peronistas se presentaran por sí mismos en los comicios, Frondizi calculaba que también así podría la UCRI salir victoriosa por ser la única fuerza antiperonista viable. En diciembre de 1961, las elecciones de gobernador realizadas en Santa Fe parecieron confirmar esos cálculos. Ganó la UCRI, derrotando a una amalgama de fuerzas

neoperonistas que habían disfrutado del visio bueno peronista oficial. Tras estos comicios un diario de dimensión nacional llegó a decir que

"el peronismo en la actualidad ha dejado de ocupar el primer lugar y por el momento no es el enemigo que muchos creían".³⁹

Dentro del peronismo la situación era compleja. Hubo un reconocimiento general de que el voto en blanco ya no era la táctica aconsejable. En una conferencia de prensa efectuada en junio de 1961, Iturbide, jefe del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, anunció en una conferencia de prensa que "el peronismo está ahora en la línea de la legalidad".⁴⁰ Para muchos sectores del peronismo, el abandono del voto en blanco como manera de repudiar lo que consideraban un gobierno ilegítimo y de afirmar su intransigente oposición a ese gobierno no era un paso fácil de dar. Sin embargo, en el curso de 1961 la mayoría de ellos llegaron a compartir el criterio expuesto por un dirigente obrero anónimo en el sentido de que

"En el pasado las demás organizaciones no salieron de la clásica fórmula del voto en blanco como repudio, como sanción al gobierno, motivos que pueden tener su explicación en el campo de la moral pero no significan nada desde el punto de vista político."⁴¹

En setiembre de 1961, Américo Barrios, estrecho colaborador de Perón, asumió la dirección del periódico *Recuperación y*, bajo el título "El tremendo poder de la legalidad", empezó a preconizar la activa participación de los peronistas en las elecciones venideras. En ese momento, al parecer, la actitud del propio Perón era la de favorecer la abstención con voto positivo, o sea, dejar a los peronistas en libertad de votar por otros partidos sin presentar candidatos propios.⁴² Cuando Perón hizo saber, a mediados de enero de 1962, que descabía compartir con Andrés Framini la fórmula para la gobernación de Buenos Aires, en general se supuso que era una maniobra para sabotear el creciente movimiento que surgía, en el seno del peronismo, en favor de candidatos de esa línea, puesto que Perón tenía que tener clara conciencia de que para los militantes su candidatura era inaceptable. Esta impresión tendió a confirmarse a comienzos de febrero, cuando desde Madrid llegó una carta donde Perón afirmaba:

"La situación actual en la que nos quieren colocar es un callejón sin salida. La única alternativa es declarar la abstención [i.e.] el gobierno no va a dar soluciones electorales y no debemos perder el tiempo espcrándolas."⁴³

Paradójicamente, el ala política del peronismo favorecía en general esta posición, pues tenía cada vez más perder, frente al ala sindical, cualquier lucha que se entablara dentro del peronismo por las listas de candidatos. Por añadidura, les preocupaba la posibilidad de que un triunfo electoral peronista donde prevaleciera el sector gremial provocara una intervención militar. Preferían servirse del disfraz de neoperonismo para penetrar gradualmente en las posiciones electorales de las provincias. Es muy probable que la oposición de Perón mismo a que el movimiento presentara sus propios candidatos se basara en cálculos similares. Una buena demostración de fuerza en una campaña electoral respaldada por los gremios daría a éstos un poder de negociación en la política argentina que hubiese llegado a ser, hasta cierto punto, independiente del control del líder. Desde el principio, las 62 Organizaciones se habían pronunciado de todo corazón en favor de intervenir en las elecciones con candidatos peronistas. También habían dejado en claro que no estaban dispuestas a aceptar listas de candidatos dominadas por las figuras del ala política. El 10 de enero se celebró una reunión convocada por la CGT Autónoma y las 62 Organizaciones, a la que asistieron 230 delegados de 57 zonas de la provincia de Buenos Aires. Unánimemente aprobaron que se designara candidato peronista a la gobernación provincial a un sindicalista. Buenos Aires fue dividida en 7 zonas, cada una de las cuales realizaría reuniones, bajo el patrocinio de las 62, con el fin de elegir candidatos para los comicios. A la vez la conferencia emitió una declaración donde se oponía a la candidatura de Atilio Bramuglia, ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Perón y a quien se mencionaba como posible candidato de las fuerzas neoperonistas.⁴⁴

Dolados del único aparato eficaz dentro del peronismo, y respaldados por su sistema financiero propio, los sindicatos lograron imponer su voluntad. En Buenos Aires, la lista de candidatos establecida contó con seis sindicalistas; un candidato por el ala femenina, uno por el Partido Laborista, uno por la Unión Popular y uno por el Partido Justicialista, más dos que serían designados por el propio Perón. En la Capital Federal misma, las 62 Organizaciones anunciaron su lista de

candidatos antes de concluir acuerdo formal alguno con otros sectores. En ella figuraban Sebastián Borro, Jorge Di Pascuale, Rolando García (de los obreros del caucho), Eustaquio Tolosa (portuario) y Paulino Niembro (UOM). Como concesión se aceptó incluir a último momento a un representante de los grupos políticos.⁴⁵ Incluso después de publicarse la carta de Perón en febrero, Andrés Framini, candidato de las 62 a la gobernación de Buenos Aires, prosiguió su campaña. Una delegación constituida por Vandor, José Alonso (del vestido), Roberto García y Amado Olmos voló inmediatamente a Madrid y el 17 de febrero volvió para decir que Perón había aceptado ratificar la posición concurrentista.

Varias razones determinaron a los dirigentes gremiales a participar en la campaña electoral. En parte esa decisión reflejó el creciente sentimiento de los peronistas de base en favor de la votación por los candidatos propios como medio de protestar contra el gobierno de Frondizi, sentimiento intensificado al ahondarse la crisis económica evidente desde fines de 1961. La profundidad de ese sentimiento fue ilustrada por el fervor popular que rodeó a la campaña. Más allá de este motivo, se puede tomar nota de la afirmación de Miguel Gazzera en el sentido de que la idea inicial de presentar candidaturas por separado había provenido de Amado Olmos y de que Vandor la había retomado con la finalidad específica de obligar a Frondizi a dejar el poder.⁴⁶ Al parecer, esto sería una supersimplificación. La "línea dura", que aún dominaba en las reuniones de las 62, sin duda alguna consideraba las elecciones como un posible medio para derribar a Frondizi; en las palabras de Jorge Di Pascuale, una victoria peronista sería "un hecho más" al que Frondizi debería hacer frente. Que provocara o no su caída no era algo por lo que hubiese que preocuparse. Incluso es posible que algunos representantes de la "línea dura" celebraran esa posibilidad como manera de contrarrestar las debilitantes tentaciones del integracionismo.⁴⁷ Un sentimiento más general, articulado por Olmos y compartido por la mayoría de los líderes de las 62, incluso muchos de "línea dura", era el de que las elecciones ofrecían una ocasión para establecer el peso de los sindicatos tanto dentro del peronismo como dentro del sistema político argentino. Por cierto los peligros de esa táctica eran evidentes. Resultaba imposible no advertir que una fuerte organización sindical como base de la campaña peronista traía consigo una buena posibilidad de victoria en varias provincias, lo que bien podía tener graves consecuencias institucionales. Ese temor era

precisamente lo esgrimido por Frondizi para inclinar a los gremios peronistas contra la participación directa. Pero la mayoría de los jefes sindicales consideraron que se trataba de un riesgo digno de ser corrido, porque incluso si los militares intervenían, el peso ganado por los sindicatos gracias a las elecciones significaría que todo gobierno nuevo se vería obligado a tomarlos en cuenta. En último término, el peronismo y sus gremios habrían demostrado que eran la fuerza preponderante en la sociedad argentina y que la responsabilidad de negarles los derechos que les correspondían caería finc y directamente sobre los hombros de los militares.

La eficacia de la campaña sindical quedó demostrada por los resultados. El peronismo triunfó en ocho de las catorce elecciones de gobernadores provinciales, incluida la provincia de Buenos Aires. Frondizi inmediatamente anuló los comicios en esas provincias y las intervino. Pero las fuerzas armadas ya habían perdido toda confianza en él, y el 29 de marzo, al cabo de infructuosas negociaciones con Frondizi, el Presidente del Senado José María Guido prestó juramento como titular del Poder Ejecutivo, secundado por un gabinete eminentemente "gorila". Los sindicatos peronistas, después de una huelga de protesta, el 23 de marzo, contra la anulación de los comicios, adoptaron una actitud cautelosa.

Las elecciones de marzo demostraron el cambio de énfasis que se había operado dentro del gremialismo peronista. La transición desde los puntos culminantes de la Resistencia —las ásperas batallas de retaguardia de 1959, la campaña terrorista de 1959-60— hasta la organización de una campaña electoral y el regateo sobre candidatos y cargos implicaba un cambio profundo. Dentro del peronismo, los sindicatos habían impuesto indiscutiblemente sus propios términos a los restantes sectores del movimiento. La expresión política de la clase trabajadora peronista se encontraría en lo venidero muy ligada al movimiento sindical. Las raíces de este fenómeno pueden ser halladas en la formación original del peronismo como movimiento y en la fundación del Partido Laborista en la década 1940-50. Si bien Perón había creado un aparato político para reemplazar a los laboristas, la importancia de esa estructura como vehículo de movilización y expresión políticas siempre había estado en segundo plano en relación con el movimiento gremial. El impacto de la clase trabajadora y su influencia sobre el Estado habían sido asegurados primordialmente por los sindicatos y su íntima relación con Perón y Evita. Para la mayoría de los trabajadores peronistas el partido

tuvo escasa significación inmediata. La proscripción formal del peronismo como movimiento político después de 1955 y la intensidad de la resistencia dentro de las fábricas y los gremios no hicieron sino confirmarlo. Incluso ante la posibilidad de que se recreara legalmente un partido peronista durante los primeros y apacibles meses de la presidencia de Frondizi los sindicatos y la clase obrera demostraron escaso interés real por el establecimiento de un aparato político. Ahora en cambio, eliminadas por la derrota, la desmoralización y la racialización, otras opciones de militancia, la jerarquía sindical emergente podía volver su atención a la política y desarrollar su estilo, peculiarmente sindicalista, de hacer política y procurar el acceso al poder.

Todo esto, sin embargo, no se puso en evidencia inmediatamente. El golpe militar, la formación de un gabinete ministerial antiperonista de línea dura, la ya familiar retórica antisindicalista y antiperonista, parecieron anunciar un retorno a la situación previa a 1959. Gravitaba, por añadidura, el hecho de que formalmente los dirigentes de línea dura, como Di Pascuale y Borro, seguían siendo mayoría en la cúpula de las 62 Organizaciones. Tal como lo demostró la lista de los candidatos a diputados en las elecciones de la Capital Federal, todavía eran capaces de imponer sus candidatos en ese nivel. Sin embargo, este era un hecho engañoso, porque a esa altura de la situación reflejaba más bien su prestigio personal en el movimiento que un peso real dentro de los organismos que movían al peronismo. Quien emergió de la campaña electoral como figura realmente dominante fue Augusto Vandor. Como jefe de la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato industrial más poderoso del país, había sido el organizador básico de la campaña electoral. Tanto sus amigos como sus enemigos empleaban con frecuencia cada vez mayor el término "vandorismo". El hecho de que hubiese debido aceptar en la Capital Federal las candidaturas de los "duros", muchos de los cuales se sentían cada vez más recelosos de su poder y sus intenciones, no debe oscurecer su creciente influencia. Miguel Gazzera, que tenía estrecha amistad con Vandor, resumió acertadamente las elecciones y sus resultados:

"Vandor preparó todo un aparato deslizado a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y otros lugares, que se constituyó después en el andamiaje del vandorismo. Este aparato congregó las legiones de aspirantes a los cargos que originaban las elecciones, dinero y una prolusa publicidad [...] la caída de Frondizi ubicó a Vandor en la cúspide del poder político en el país."¹⁸

En los años que siguieron se tornaron patentes las consecuencias de esos hechos para los sindicatos peronistas y la clase trabajadora.

NOTAS

¹ Documentos del Plenario Nacional de las 62 Organizaciones, Buenos Aires, mayo de 1960.

² Ibid.

³ Documentación e Información Laboral, n° 1, marzo de 1960.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Palabra Obrera, 19 de febrero de 1960.

⁷ Ibid.

⁸ El Alpargatero, junio de 1960.

⁹ Ibid.

¹⁰ Sobre el debate acerca del alcance de la modernización de plantas bajo Frondizi véanse Zuvekas: "Argentine economic policy, 1958-1962", y Mallon y Sourrouille, *Economic Policy Making*.

¹¹ El Alpargatero, setiembre de 1960.

¹² Alpargatas al desnudo, junio de 1961. Publicado por el Centro Comunista de Barracas, Capital Federal. Un aviso de pedido de trabajadores publicado por la empresa en junio de 1960 contenía una admisión tácita de la importancia asignada al mayor esfuerzo físico. Advertía a los interesados lo siguiente: "Alpargatas necesita trabajadores de 21 a 35 años de edad, con un peso mínimo de 65 kilos. No presentarse si no se satisface esa necesidad". En *La Prensa*, 9 de junio de 1960.

¹³ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: *Convenión colectiva de trabajo de la industria textil*, 155/1960, Buenos Aires, 1960.

¹⁴ Palabra Obrera, 2 de marzo de 1961.

¹⁵ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, *Convenión colectiva de trabajo de la industria metalúrgica*, 55/1960 (Buenos Aires, 1960).

¹⁶ Palabra Obrera, 22 de octubre de 1959.

¹⁷ Ministerio de Trabajo: *Convenión colectiva de la industria metalúrgica*.

¹⁸ Tomando 1950 como base de 100, la productividad por hora trabajada en las industrias metalúrgica y textil aumentó de 114,1 en 1956, en el caso de la primera, a 150,3 en 1961; en la textil el crecimiento fue menos espectacular, pues pasó de 127,6 a 130,2. La industria manufacturera en general aumentó de 113,8 en 1956 a 141,4 en 1962. Véase CGE-Consejo Federal de Inversiones: *Programa Conjunto*, vol. 3, Buenos Aires, 1964, pág. 115.

¹⁹ AOT, 18 de enero de 1961.

²⁰ Una exposición típica de esta clase de pensamiento hay en Hamilton Alberto Díaz: *Curso de guerra contrarrevolucionaria: lucha*

contra el terrorismo. Servicio de Información del Ejército, Buenos Aires, Escuela Superior de Guerra, 19 de octubre de 1961. Se trató de una conferencia dictada a un grupo seleccionado de oficiales del ejército.

²¹ Ibid., pág. 14.

²² Juan Carlos Brid: "Quince años de resistencia", *Nuevo Hombre*, 12 de setiembre de 1971.

²³ Díaz: *Curso de guerra*, pág. 13.

²⁴ Directiva n° 1, febrero de 1960. Emitida presumiblemente por Perón, circuló bajo forma de volante.

²⁵ Esta lista ha sido compilada sobre la base de Díaz, *Curso de guerra*, y diarios de la época.

²⁶ Díaz: *Curso de guerra*, pág. 10.

²⁷ Ibid., pág. 14.

²⁸ Roberto Carré: "La Resistencia peronista".

²⁹ Díaz: *Curso de guerra*, pág. 14.

³⁰ Brid: "Quince años".

³¹ "Crónica por un resistente".

³² Véase Richard Gillespie: *Soldiers of Peron*, Oxford, 1983.

³³ Díaz: *Curso de guerra*, pág. 22.

³⁴ Véase *En Lucha*, 2ª época, junio de 1974.

³⁵ Véase Perón-Cooke, *Correspondencia*, vol. 2, Buenos Aires, 1973, págs. 372-73.

³⁶ Entrevista con Alberto Bordaberry. Buenos Aires, octubre de 1976.

³⁷ Entrevista con Daniel Hopén. Buenos Aires, marzo de 1974. Hopén había sido dirigente estudiantil en la Universidad de Buenos Aires e intervino en operaciones de apoyo.

³⁸ Díaz: *Curso de guerra*.

³⁹ *Noticias Gráficas*, 9 de enero de 1962.

⁴⁰ *La Nación*, 17 de junio de 1961.

⁴¹ *Palabra Obrera*, 16 de marzo de 1961.

⁴² Vicente Solano Lima afirmó, por ejemplo, que "Perón no quiso tomar parte en las elecciones. Prefirió apoyar a otro partido. Eligió al Partido Conservador Popular". *Cuestionario* n° 20, diciembre de 1974.

⁴³ *Noticias Gráficas*, 11 de febrero de 1962.

⁴⁴ *Noticias Gráficas*, 11 de enero de 1962.

⁴⁵ *Noticias Gráficas*, 13 de enero de 1962.

⁴⁶ Gazzera: "Nosotros los dirigentes", pág. 119.

⁴⁷ Entrevista con Jorge Di Pascuale. Buenos Aires, febrero de 1974.

⁴⁸ Gazzera: "Nosotros los dirigentes", pág. 120.

CUARTA PARTE

La era de Vandor, 1962-66

La burocracia sindical: poder y política en los sindicatos peronistas

"En la partitura peronista es necesario pedir la colaboración de las diferentes melodías. Así, no a Vander la conducción de las corrientes conservadoras, evolucionistas, las cinchas que el régimen está dispuesto a tolerar. Framini, en cambio, asume la conducción del extremo agresivo, revolucionario, en permanente ruptura con el sistema. Los dos vienen a corresponder a diferentes aspectos y corrientes que conforman el contenido nacional y cristiano de nuestras masas."

Juan D. Perón

EL VANDORISMO: ELEMENTOS DE UNA IMAGEN

A fines de noviembre de 1963 la gerencia de la fábrica metalúrgica TAMET, de Avellaneda, despidió a unos 20 mil-
tantes que pertenecían algunos a la agrupación sindical comunista y otros a la lista peronista disidente. La acción empresarial había sido preludeada por la expulsión de esos activistas de la UOM, por supuesta infracción de las normas sindicales. Una vez quitada la protección del gremio, el campo quedaba libre para la empresa. Todos los interesados sospecharon que el sindicato había obrado en colusión con la gerencia. Tal vez más significativa fuera la actitud de conformidad observada por la comisión interna en este proceso. En efecto, uno de los activistas despedidos era miembro destacado del cuerpo de delegados de la planta. Había sido expulsado del gremio por distribuir un volante de protesta contra los despidos iniciales sin aprobación oficial de la cúpula

del sindicato. De los 38 delegados que había en TAMET, sólo 14 concurrieron a la reunión que lo expulsó, y de ellos sólo la mitad votó por esa medida.¹ El episodio, escasamente excepcional, fue un testimonio elocuente de la medida alcanzada por la desmovilización y la desmoralización a que nos hemos referido antes en este libro. También ejemplificó un importante elemento del proceso de integración del aparato sindical al sistema político e institucional de la Argentina y su corolario de burocratización, así como el creciente empleo de métodos autocráticos para regular la vida interna de los gremios, proceso que llegó a su apogeo en el período 1962-66.

La figura que llegó a simbolizar ese proceso en las mentes de los militantes y en el público argentino fue Augusto Vandor, líder de los obreros metalúrgicos. Vandor personificó, en especial para sus adversarios dentro del movimiento peronista, el paso de éste y sus sindicatos, de una posición de franco antagonismo al statu quo posterior a 1955, a una actitud de aceptación de la necesidad de llegar a un acuerdo con esa situación y encontrar un espacio dentro de sus límites. El "vandorismo" llegó a ser sinónimo, tanto en el plano político como en el sindical, de negociación, pragmatismo y aceptación de los hechos crudos de la *realpolitik* que gobernaba a la Argentina desde 1955. En lo político, el vandorismo significó el empleo de la fuerza política y la representatividad que los sindicatos tenían como fuerza dominante del peronismo y que también tenían por ser el único sector legal del movimiento, para tratar y negociar con otros "factores de poder".

La imagen de poder e influencia dentro del sistema fue simbolizada, en el plano formal, por las frecuentes conversaciones entre el gobierno y líderes sindicales en torno de temas económicos y sociales, y, en el nivel informal, por el número no menor de consultas entre Vandor y otros sindicalistas con políticos, jefes empresariales, prelados y altos oficiales del ejército. La imagen del líder sindical Vandor, de camisa y sin corbata, en el momento de entrar en la Casa Rosada o el Ministerio de Trabajo, o de visita en el Ministerio de Defensa para celebrar consultas con jefes de las fuerzas armadas, llegó a ser un elemento dominante en la imaginaria social y política de la Argentina de ese tiempo y, puesta de relieve sin cesar por los medios de prensa, reforzó la visión de los sindicatos peronistas como parte fundamental, si bien conflictual, del sistema social y político. Fue una imagen que los dirigentes gremiales se apresuraron a adoptar. En parti-

cular, la CGT intentó fortalecer esa imagen tanto en el plano nacional como en el internacional. En esos años la CGT dio a conocer alto número de publicaciones y análisis y organizó varias conferencias sobre una variedad de temas de interés nacional. Se crearon un departamento de estadísticas y una comisión de asistencia jurídica. Además se restablecieron los nexos con organismos sindicales extranjeros.

El control de la CGT por los peronistas había sido asegurado en las negociaciones que se realizaron en noviembre y diciembre de 1962, previamente al congreso de enero de 1963, que al final materializó la reconstitución formal de la central obrera. Las 62 Organizaciones estaban en clara posición mayoritaria respecto de los gremios no peronistas. Controlaban todos los sindicatos industriales y todos menos uno de los comités regionales de la CGT.² Para 1962, el grupo militante antiperonista -los 32 sindicatos democráticos- virtualmente había desaparecido, y la agrupación comunista, el MUCS, estaba restringida a unos pocos gremios. La mayor parte de los sindicatos antiperonistas -principalmente de empleados, no de obreros- que en 1957 habían formado los 32 sindicatos democráticos, ya se habían declarado independientes. Si bien carecían de una unidad tan coherente como la de las 62, compartían con éstas el reconocimiento básico de la realidad de la presencia gremial peronista y de la necesidad de concertar un acuerdo que les permitiera trabajar juntos.³ Las negociaciones que allanaron el camino hacia el congreso de enero representaban un acuerdo entre el sector vandorista del peronismo y los independientes. Si bien en términos generales se llegó a un acuerdo en el sentido de que ambos sectores tuviesen representaciones iguales en el comité central, Vandor insistió con éxito en que el secretario general fuese un peronista. Además, los independientes cedieron también los decisivos puestos de secretario y prosecretario del interior y también el de asuntos sindicales, a cambio de cargos menores como los de secretario general adjunto, finanzas y bienestar social. El secretario general, elegido en el congreso de enero con la bendición de Vandor, fue José Alonso, dirigente de los trabajadores del vestido. El nuevo organismo afirmó representar aproximadamente a 2.567.000 afiliados.⁴

Con mayor fundamento aún, la base de poder de Vandor fuera del gremio metalúrgico residía en su control de las 62 Organizaciones. Desde las elecciones de marzo de 1962 en adelante Vandor fue cada vez más la figura dominante en las 62, y para 1963 los líderes más intransigentes de la línea dura

-DI Pascuale, Borro y Jonsch- habían renunciado o habían sido apartados del comité coordinador. En cada sindicato, la dominación por la nueva jerarquía peronista emergente se consolidó a medida que continuaba el proceso de desmovilización de las bases y el sacrificio de activistas. Durante la crisis económica de 1962-63 se asistió a la culminación de este proceso. En junio de 1962 habían sido suspendidos o despedidos más de 40.000 obreros metalúrgicos -de los que 20.000 pertenecían a la Capital Federal y Avellaneda- al entrar la economía argentina en una de sus más severas crisis cíclicas. En la industria textil la situación era más descomulgada aún. Los empleadores y líderes sindicales aprovecharon a menudo esta situación, como en el caso de TAMET, para librarse de muchos activistas conocidos que habían sobrevivido a batallas anteriores. También llegaron a ser sinónimos de vanderismo el implacable control de todo disenso interno por la "burocracia sindical" y el empleo de matones para intimidar a los posibles opositores. Las reuniones planarias de las 62 Organizaciones, que pocos años atrás habían sido teatro de innumerables manifestaciones de desacuerdo por parte de las bases, ya no eran en ningún sentido real un foro para la expresión de esos puntos de vista. Se habían convertido simplemente en parte del aparato del poder a disposición de la jefatura sindical. Más aún, la barra era ahora un instrumento de control directo utilizado por los líderes para intimidar a todo el que pretendiera expresar críticas en esas reuniones.⁵

Asegurado su sostén en las 62 Organizaciones y confirmada su posición dominante dentro de la CGT, la jefatura sindical peronista estaba preparada para hacer sentir su peso tanto en el terreno social como en el político. En lo referente a la situación social y económica de los trabajadores, era sin duda alguna necesaria una acción decisiva. Para 1962 la economía argentina había entrado en una profunda crisis. El salto industrial hacia la producción de bienes de consumo duraderos y equipos de capital, línea central de la política desarrollista desde Perón hasta Frondizi, había avanzado mucho: entre 1954 y 1965 la producción argentina de acero se multiplicaría por siete, y la de autos pasaría de 6000 vehículos en 1955 a más de 200.000 en 1965. Sin embargo, ya en 1962 empezó a verse claramente que el proceso de sustitución de importaciones tenía sus límites. El mercado argentino era demasiado pequeño para proporcionar un estímulo continuo a las nuevas y dinámicas ramas de la industria.

Además, la producción de bienes duraderos en petroquímica, automóviles y artefactos eléctricos exigía grandes inversiones de capital, que debían provenir en gran medida del exterior, e importación de equipo industrial tecnológicamente más avanzado.⁶ En esa situación, el intento de seguir expandiendo la industrialización condujo a aumentar el déficit de la balanza de pagos, que sólo podía ser atendido en el corto plazo mediante préstamos extranjeros, mientras se seguían depoliando esperanzas en la expansión de las importaciones de los nuevos artículos industriales. El cuello de botella de las divisas extranjeras tuvo inevitablemente efectos inflacionarios. A medida que el déficit empujó los gobiernos argentinos se vieron forzados a volver a las tradicionales exportaciones agropecuarias para pagar los intereses de la deuda externa y mantener los insumos industriales. Con el fin de acrecentar el valor de esas exportaciones en un momento en que sus precios en el mercado mundial tendían a declinar, la Argentina recurrió a sucesivas devaluaciones. Estas alimentaron la espiral inflacionaria, sobre todo después de que Frondizi, en 1959, abandonó los controles cambiarios. Tras alcanzar un pico del 113 por ciento en 1959, la inflación se mantuvo entre el 25 y el 30 por ciento durante los gobiernos de Guido e Illia.

En 1962 el gobierno de Guido respondió a la creciente crisis de la balanza de pagos y la espiral inflacionaria adoptando un plan de emergencia, patrocinado por el FMI, muy similar al aplicado por Frondizi en 1959. El objetivo era restringir la producción industrial mediante la limitación del crédito público, y la contracción del mercado interno, para lo que se recurriría a la limitación de los salarios y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Al mismo tiempo, una nueva devaluación intentó estimular nuevas exportaciones. Para la clase trabajadora el resultado fue inmediato y drástico: una recesión industrial que aumentó espectacularmente el desempleo en sectores como los textiles y la metalurgia, así como nuevos niveles de alta inflación que inevitablemente gravitó en forma negativa sobre el salario real.⁷

La respuesta inicial de la cúpula sindical a la crisis fue dada en sordina, lo que se debió en gran parte a la inestabilidad institucional de la segunda mitad de 1962, en que distintas facciones de las fuerzas armadas se disputaban el predominio en el gobierno, sobre el que ambas descaban influir. Resuelto el conflicto con el triunfo de la facción más moderada, favorable a la continuación del gobierno civil y el retorno de la CGT, la cúpula sindical se sintió lo bastante

confiada como para iniciar una campaña para la solución de las dificultades económicas y sociales de sus afiliados. La primera etapa de esa campaña culminó en mayo de 1963 con una Semana de Protesta contra las políticas económicas del gobierno de Guido, campaña cuyo punto más alto fue una huelga general de 24 horas. Al mejorar la situación económica en la parte final de 1963 y avanzado 1964, la CGT intensificó su actividad en procura de recobrar el terreno perdido. Sus presiones sobre el gobierno radical, encabezado por Arturo Illia, condujeron a la aplicación de la segunda etapa del Plan de Lucha, en junio y julio de 1964. El plan consistía en una serie de ocupaciones de fábricas en escalada, que terminarían por extenderse a toda la industria argentina. El principal abogado de esta táctica en los cuerpos directivos de la CGT fue Vandor, y la industria metalúrgica abrió la marcha en las ocupaciones. Cuidadosamente planificadas y ejecutadas bajo el firme control del aparato sindical, las ocupaciones constituyeron una impresionante demostración de organización y disciplina. El plan se cumplió durante cinco semanas y, según la CGT, fueron ocupadas más de 11.000 plantas, con intervención de más de 3.900.000 obreros.⁸

También en el campo político los dirigentes sindicales explotaron cada vez más su papel como agentes y corredores del electorado peronista. En julio de 1963 se realizaron elecciones presidenciales, donde las 62 Organizaciones fueron la principal fuerza propulsora de la campaña en favor de Vicente Solano Lima, candidato del Frente Nacional y Popular de Peronistas, frondistas y conservadores populares. Ese frente fue finalmente proscripto por efecto de presiones militares, y fue elegido Arturo Illia, candidato del radicalismo, con apenas el 20 por ciento del voto popular. En las elecciones parlamentarias de marzo de 1965 triunfó un poderoso bloque de diputados peronistas cuyas candidaturas habían sido presentadas por la Unión Popular. La campaña fue realizada y financiada principalmente por las 62 Organizaciones, y resultaron elegidos muchos candidatos sindicales. El jefe del bloque parlamentario peronista fue Paulino Niembro, íntimo compañero de Vandor en la UOM.

De todo ello, en consecuencia, resulta un cuadro donde la jefatura sindical parece estar en la cúspide de su poder. La imagen responde a una curiosa amalgama de factores, que van desde un gangsterismo semiorganizado que, según lo señala un autor, puede "traer a la memoria a los gangsters del sindicalismo norteamericano como Jimmy Hoffa", hasta el

más alto nivel de las maniobras y negociaciones políticas. Si bien para muchos militantes esta cúpula sindical fue simbolizada por episodios como el de TAMET, que dejó muchos damnificados, para el público argentino, y ciertamente para las fuerzas sociales y políticas rivales, Vandor y sus camaradas sindicales estaban asociados también a la movilización masiva encarnada por las ocupaciones de fábricas. Para comprender la ambivalencia de esta imagen, es decir, la complejidad del fenómeno, debemos examinar con mayor detalle los elementos que contribuyeron al poder de esta cúpula.

IMPORTANTES FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL PODER DE LA CÚPULA SINDICAL

La base estructural del poder institucional de los sindicatos se encuentra en la ley 14.455, o Ley de Asociaciones Profesionales, aprobada por Frondizi en 1958. Fundamentalmente la ley restablecía el sistema, creado por Perón, del sindicato único, es decir el reconocimiento legal de un solo sindicato dotado de derechos de negociación en cada industria, fuese en el plano local o en el nacional. Dentro de este contexto general, la ley diferenciaba entre tres niveles de organización y estructura gremiales. Existían sindicatos de primer grado, que en cada provincia y en la Capital Federal organizaban a los trabajadores del mismo oficio o área de la industria; también se reconocía una segunda categoría que comprendía las federaciones que agrupaban a sindicatos de primer grado pertenecientes a distintas provincias; y finalmente había un tercer nivel de organización, correspondiente a la confederación que reunía a las federaciones. El punto importante que se debe subrayar, en lo que concierne al poder de los dirigentes sindicales, reside en que si bien la ley laboral argentina permitía tanto una estructura federativa como la estructura, más centralizada y concentrada, de los sindicatos de primer grado, lo que prevalecía en los sindicatos más grandes e importantes del país era la estructura no federativa. Los sindicatos de los metalúrgicos, los ferroviarios, los textiles y los de la construcción, así como los principales gremios de empleados de oficina, tenían por igual estructuras altamente centralizadas que concentraban el poder en una dirección central elegida en el plano nacional. En esos sindicatos de primer grado, el control ejercido por la dirección central sobre las actividades de las ramas y secciones era, en términos

formales, poco menos que total. En la Asociación Obrera Textil, por ejemplo, la dirección central estaba facultada, por el artículo 53 de los estatutos, a intervenir cualquier sección que incurriera en actos de indisciplina o cometiera irregularidades. Por añadidura, las comisiones internas que dirigían esas secciones, tal como se los recordaba el artículo 55, actuaban sólo como representantes directos de la dirección central y sus facultades estaban limitadas en la consiguiente medida.¹⁰

También se debe tener en cuenta que si bien había muchas federaciones que representaban a sindicatos locales en alguna industria determinada, esto no era de ningún modo sinónimo de verdadera libertad respecto del control central. La mayor parte de las federaciones tenían sus sedes en Buenos Aires y estaban inevitablemente dominadas por el sindicato de la Capital Federal. La concentración de sindicatos de primer grado en la Capital Federal era del 42,9 por ciento, y la de federaciones llegaba al 86,6 por ciento.¹¹ Además, muchas federaciones disponían, por estatuto, de poder para castigar con severidad a los sindicatos que la formaban y limitar considerablemente su actividad autónoma. Por ejemplo, el artículo 59 de la federación de sindicatos petroleros disponía que éstos estaban

"obligados a la fiel observación del presente estatuto y al acatamiento de las resoluciones que adoptan los congresos, Comisión Directiva y Secretariado nacional".

El artículo 60 estipulaba que en ningún caso los sindicatos locales

"podrían plantear por sí, en el orden local, problemas de carácter general ni tomar posición sobre tales situaciones que pudiesen comprometer la opinión de la Federación".¹²

En consecuencia, la Ley de Asociaciones Profesionales no sólo garantizaba los derechos de negociación de los sindicatos sin temor de la posible competencia de sindicatos rivales, sino que también echaba las bases para una estructura sindical que contribuyó mucho a asegurar el control centralizado dentro de un gremio. La dirección del sindicato central derivaba asimismo importantes elementos de control de la aplicación de las cláusulas disciplinarias contenidas en todos los estatutos. En su mayor parte, los sindicatos tenían estatutos tan elásticos que cualquier afiliado, en algún momento,

podía ser acusado de transgredirlos. Abundaban las cláusulas que prohibían la "provocación de desórdenes", la "inconducta notoria" o incluso el "comportamiento incorrecto", más vaga aún. Habitualmente el consejo directivo de un sindicato estaba facultado para juzgar la infracción de esas cláusulas, y si bien era posible apelar de sus decisiones, también este procedimiento era en general controlado por la dirección central. Por ejemplo, el artículo 9 del estatuto de los metalúrgicos facultaba al Consejo Directivo a expulsar a un afiliado por simple decisión propia, sin que fuera necesario someterlo al juicio de una asamblea.

Este tipo de estructura, que prevaleció, tenía importantes consecuencias sobre el poder financiero de los dirigentes gremiales. Los recursos del sindicato provenían de diversas fuentes. Las dos principales eran la cuota sindical, aporte básico al gremio, y la cuota asistencial, también pagada por los afiliados y destinada al mantenimiento de los diversos servicios que los sindicatos ofrecían en sus obras sociales. En general esas cuotas eran estipuladas como porcentaje del salario mensual, usualmente el 1 por ciento, o como suma mensual fija, entre 50 y 100 pesos al promediar la década 1960-70.¹³ Además, los empleadores también pagaban cierto aporte a los fondos de las obras sociales, cantidad que variaba de un convenio a otro. En 1964, ese aporte empresarial contribuía con el 40,9 por ciento del total de los recursos de las obras sociales.¹⁴ Finalmente estaban las cuotas extraordinarias, la mayor parte de las cuales consistía en aquel porcentaje de cada nuevo aumento salarial que el sindicato estaba facultado a retener en el primer mes siguiente a la firma de un nuevo convenio. Esta retención se aplicaba tanto a los afiliados como a los no afiliados al sindicato.¹⁵ La Ley de Asociaciones Profesionales instituía un sistema de retención automática de esas diferentes cuotas por el empleador. Si se consideraba el tipo de estructura sindical que prevalecía, al que acabamos de referirnos, se advierte que ese sistema otorgaba términos simples significaba, por ejemplo, que en los principales sindicatos de trabajadores de la industria y el comercio textil de Rosario o al ferrocarril de Tucumán eran retenidas por sus empleadores y depositadas directamente en las respectivas cuentas bancarias de los sindicatos centrales, en Buenos Aires.

Las sumas puestas así a disposición de los dirigentes

sindicales eran altísimas. El Cuadro 2 ofrece una idea, en términos generales, de las cantidades que se ponían en juego en los principales sindicatos de las industrias manufactureras.

CUADRO 2

Ingresos sindicales, provenientes de los trabajadores, clasificados por rama de actividad económica, 1964

| Actividad económica | Total | Cuota sindical | Cuota asistencial |
|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Alimentación | 145.693 | 90.288 | 55.405 |
| Textil | 145.513 | 126.969 | 18.544 |
| Metales | 410.178 | 295.300 | 114.878 |
| Manufacturas | 984.795 | 687.311 | 297.484 |
| Total de todos los sindicatos | 2.080.072 | 1.384.461 | 695.611 |

Fuente: Censo de Asociaciones Profesionales, Ministerio de Trabajo, Buenos Aires, 1965, Cuadro 7.

A estas sumas, originadas en los afiliados, deben agregarse las que resultaban de los aportes empresariales a las obras sociales de los gremios. En 1963 esos aportes totalizaron 234 millones de pesos, y 464 millones en 1964.¹⁶ Desde luego, parte de esos ingresos se invertía de distinta manera y entraba a formar parte de los activos permanentes de los gremios. Así, el valor total de los activos en poder de los sindicatos de la industria manufacturera fue calculado en 1965 en 592.245 millones de pesos, y los activos totales de todos los sindicatos lo fueron en 4.201.041 millones.¹⁷

Esas elevadas sumas constituían por sí solas un importante factor explicatorio del gangsterismo y la violencia cada vez más asociados al gremialismo peronista, así como de la corrupción personal que con frecuencia marchaban de la mano con aquellas circunstancias. Abundaban historias, bien documentadas muchas de ellas, sobre el desvío parcial de esos fondos en beneficio privado de los dirigentes sindicales.¹⁸ Más importante, sin embargo, era el hecho de que esos caudales constituían la base de toda una gama de servicios sociales ofrecidos por los sindicatos a sus afiliados, lo que también, en

vista del concentrado centralismo de la mayoría de las estructuras sindicales, ponía una enorme fuente de favoritismo y presión en manos de los dirigentes centrales. No hay duda alguna de que esos dos aspectos estaban estrechamente relacionados entre sí. El Cuadro 3 ofrece una idea de la amplitud de esos servicios sociales en escala nacional.

CUADRO 3

Servicios sociales ofrecidos por los sindicatos

| | | | |
|-----------------------|-----|----------------------|-----|
| Bibliotecas | 194 | Gestión de pensiones | 235 |
| Cantinas | 38 | Hospitales | 13 |
| Campos recreativos | 64 | Proveedurías | 69 |
| Campos de deportes | 28 | Sanatorios | 122 |
| Cooperativas | 6 | Gestión de seguros | 75 |
| Capacitación sindical | 274 | Talleres | 15 |
| Escuelas | — | Otros | 127 |
| Farmacias | 67 | | |

Fuente: Censo de Asociaciones Profesionales, Ministerio de Trabajo, Buenos Aires, 1965, pág. 7.

Podemos apreciar mejor el significado de esas cifras si tomamos el caso de un importante sindicato industrial como la Asociación Obrera Textil (AOT). Sin ser en modo alguno el más rico de los grandes gremios, la AOT recibió, entre mayo de 1965 y mayo de 1966, 198 millones de pesos en concepto de cuotas sindicales básicas y más de 2 millones de pesos recaudados, de acuerdo con el convenio, sobre el último aumento salarial. A esto se agregaron más de 250 millones de pesos correspondientes a las cuotas asistenciales y los aportes de los empleadores a las obras sociales. La AOT se jactó en ese momento de tener inversiones por un valor neto de 154 millones de pesos.¹⁹ Los servicios sociales brindados mediante esos fondos eran considerables. En la Capital Federal los servicios médicos se centraban en el Sanatorio Primera Junta, con capacidad para atender hasta 100.000 familias por año, y en una clínica odontológica central. En los varios distritos del Gran Buenos Aires había 70 clínicas de un tipo u otro, y en los 24 distritos del sindicato en el interior del país existían alrededor de 64 servicios médicos y odontológicos. También se ofrecían facilidades turísticas a los afiliados. En 1966 la AOT contaba con dos hoteles y campamentos para veranear en Córdoba y con dos en Mar del Plata.²⁰

Estas sumas de dinero y los servicios que permitían

ofrecer tuvieron profundo efecto sobre la imagen de las funciones sindicales difundida por los líderes obreros y sobre la idea que las bases se hicieron del papel de sus gremios, punto sobre el cual volveremos en este apartado. De nuestro interés inmediato es importante subrayar que aquellas facilidades fueron también el suelo firme sobre el cual podían realizarse negociaciones entre distintos grupos de la burocracia. El sistema no sólo gravitaba por lo que representaba en términos monetarios, sino también por lo que representaba en cuanto a empleos, influencia y prestigio. El sistema de protecciones y prebendas de los sindicatos estaba construido sobre una compleja pirámide de intereses entrelazados tanto en el interior de los sindicatos como dentro del movimiento en general, pirámide cuya cúspide ocupaban los sindicatos más poderosos. Miguel Gazzera ha dado una imagen de lo que esto podía significar para un hombre de la estatura de Vandor:

"Zumbaban a su alrededor sin darle descanso [...] esperando sus favores para convertirse en dirigentes. Entonces eran sus amigos porque necesitaban inspectores de la Secretaría de Trabajo proclives a actitudes parciales o que la imprenta metalúrgica les confeccionara afiches para definir las elecciones. O que Vandor "persuadiera" a algún dirigente para que cediera el lugar al peticionante."²¹

Los métodos de persuasión podían variar y traducirse en la intimidación física de individuos o, en el caso de un sector sindical particularmente discolo, una demora en la construcción de una clínica o la supresión de una cuota destinada al lugar de vacaciones en Mar del Plata o Córdoba.

Más importante aún como factor de conservación del poder en un sindicato era la posibilidad que una cúpula tenía de controlar las elecciones, lo que le permitía interceptar el paso a cualquier oposición interna. La base legal de esta posibilidad también debe ser buscada en la ley 14.455. Invirtiendo las tentativas efectuadas por el gobierno de Aramburu para aplicar el principio de representación proporcional en la dirección de los gremios, la Ley de Asociaciones Profesionales reemplazó el sistema, establecido por Perón, de que la lista ganadora se adjudicara todos los cargos directivos. Aquella lista que más votos obtuviera asumía el control completo del gremio, aun cuando no obtuviera la mayoría de todos los votos emitidos. Salvo en circunstancias excepcionales y en algunos gremios, ninguna provisión disponía la representación de la minoría.

Más aún, no existía competencia electoral alguna entre

distintos individuos para cargos específicos. Cada lista consistía en una nómina completa de candidatos para todos los cargos, y los afiliados votaban por una u otra lista entera, no por candidatos individuales. Esto por sí mismo conducía a rodear los comicios de un clima de violencia, puesto que la lista de candidatos triunfante no sólo conquistaba los puestos en disputa, sino que una vez en el poder, sin oposición por la cual preocuparse, casi siempre instalaba a sus propios partidarios en todo el aparato administrativo del gremio. Esto era obviamente un ejemplo de los poderes de favoritismo mencionados, pero además agregaba otra dimensión al proceso electoral, porque aparte de los cargos directivos en disputa también se ponía en juego toda una red de oportunidades de empleo.

Por efecto del sistema, una vez elegido un grupo en la jefatura resultaba muy difícil desplazarlo, puesto que tenía exclusivamente en sus manos la organización de las elecciones siguientes. Se trataba ni más ni menos que de un sistema ideal para la autoperpetuación de una cúpula ya instalada. Esta disponía de una serie de maneras de asegurarse la perpetuidad. Fundamentalmente se podían poner obstáculos considerables en el camino de cualquier grupo que intentara presentar su lista de candidatos. Cada gremio tenía en vigencia requisitos específicos que una lista debía cumplir para poder presentarse. Era preciso que cierto número de afiliados al gremio la hubiera apoyado formalmente por escrito; el número exacto de firmas exigidas variaba, pero habitualmente oscilaba entre el 10 y el 30 por ciento del total de afiliados. Esto suponía un obstáculo considerable, no sólo por el número de firmas implicado sino también por algo más importante: en una creciente atmósfera de intolerancia de las cúpulas con la disensión interna, presentarse como patrocinante de una lista opositora significaba exponerse a represalias. Por añadidura, incluso si un grupo opositor reunía el número de firmas necesario, éstas podían ser objetadas por la comisión escrituradora, dominada por la dirección. Así podían eliminarse muchas firmas con sólo declarar que se trataba de afiliados desprestigiados en el sindicato. Como tener o no buen nombre en el sindicato era cosa determinada según criterios que dependían por completo de la comisión directiva existente, se trataba de un procedimiento muy difícil de impugnar. Además, los integrantes de una lista de candidatos debían cumplir una serie de requisitos, tales como cierta antigüedad y el ejercicio previo de alguna función sindical. Como lo probó el caso de

TAMET, los candidatos postulados en las listas opositoras estaban más expuestos a represalias que sus simples partidarios. Un procedimiento simple aplicado en Tamet consistía en que la gerencia despidiera de la empresa a los dirigentes opositores; antes de que hubieran cumplido en la planta el número de años de trabajo necesario para ser candidatos.

Esa posibilidad del grupo en el poder para dificultar la presentación de listas opositoras se tradujo en el alto número de elecciones gremiales en que hubo lista única. Cifras tomadas de un estudio oficial efectuado al promediar la década 1960-70 lo muestran muy claramente (véase el Cuadro 4).

CUADRO 4

Elecciones disputadas, en relación con el total de elecciones

| Elecciones | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Con lista única | 55.6 | 59.7 | 68.9 | 76.1 | 71.4 |
| Con oposición | 44.4 | 40.3 | 31.1 | 23.9 | 28.6 |
| M. de elecciones | 111 | 124 | 132 | 176 | 175 |

Fuente: El proceso político interno en los sindicatos en Argentina, Juan Carlos Torre, Documento de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, CIS, 1974, N° 89.

Otra arma decisiva en el arsenal de las direcciones consistió en su control de la junta electoral, que fiscalizaba el desarrollo de los comicios y el recuento de los votos. El empleo de métodos fraudulentos, que según señalamos empezó a hacerse más frecuente a principios de 1960-70, no perdió intensidad en los años siguientes. Es difícil establecer con exactitud su medida, pero las ocasiones fueron sin duda muchas y hubo suficientes casos demostrados de urnas desparecidas y listas adulteradas como para suponer que el fraude era común.²² En 1965 el Ministerio de Trabajo dejó sin efecto las elecciones efectuadas en el gremio textil por irregularidades cometidas durante su realización. En la resolución donde dispuso la nulidad de esos comicios el Ministerio detalló algunas de las prácticas ilícitas descubiertas por sus inspectores:

"[...] que está debidamente comprobada la adulteración de los padrones de numerosos establecimientos [...] uno de los ejemplos más claros es el caso del establecimiento Platex de Quilmes donde sobre 930 empadronados sólo reúnen las condiciones estatutarias 300

afiliados [...] que el padrón electoral en el que figuran más de cien mil afiliados fue entregado a las listas opositoras con sólo 24 horas de plazo para formular tachas, observaciones o impugnaciones [...] que a menos de 10 horas de la iniciación del comicio los apoderados opositores no conocían el diagrama que seguiría a través de las fábricas ciertas urnas volantes [...]".²³ Doc. e Información Laboral, N° 70, enero de 1966.

Por efecto de esos procedimientos era poco menos que imposible para una lista opositora, aun si lograba salvar las vallas previas a la presentación de su lista, desplazar al elenco directivo existente. Un estudio del problema ha calculado que entre 1957 y 1972, sobre 25 sindicatos con más de 25.000 afiliados, hubo sólo dos casos de derrota electoral de una lista propiciada por la cúpula.²⁴

Todos estos factores contribuyeron sin duda a dar a una dirección sindical una considerable base de poder. Sin embargo, es importante subrayar la *ambigüedad* de ese poder. El origen de esa ambigüedad se encuentra en el papel del Estado en los problemas laborales de la Argentina. Evidentemente, en la mayoría de los países urbanizados e industrializados es bastante común que exista una estrecha relación entre Estado y sindicatos. Pero en el caso de la Argentina el derecho laboral, y particularmente la ley 14.455, otorgaba al Estado poderes extraordinarios frente al movimiento gremial. La capacidad misma del sindicato para negociar colectivamente con los empleadores dependía de que se le otorgara la persona legal, es decir el reconocimiento de que era el único organismo habilitado para negociar en nombre de la parte obrera de determinada actividad industrial. Sin personería, el sindicato perdía su razón de ser. El derecho laboral, además, comprendía estipulaciones acerca de todas las áreas de la tarea gremial, desde la democracia interna y la realización de comicios hasta el mantenimiento correcto de libros donde se asentaba el manejo de los fondos. El secretario de Trabajo estaba facultado para supervisar todo el proceso electoral, verificar el padrón de volantes y designar inspectores que controlarían el acto comicial mismo. Tenía también amplios poderes para revisar todos los asuntos financieros, tales como destino de los fondos y manera de recaudárselos. La ley también regulaba la frecuencia de las asambleas generales, establecía las condiciones que debía poseer un delegado ante ellas y en qué auticipación debía notificarse su realización.

La forma en que cada gobierno utilizaba esas facultades variaba de un régimen a otro y constituía por sí misma tema

de negociaciones entre los gobiernos y los sindicatos. Podía tratarse de un uso flexible y negativo; por ejemplo, pasar por alto ciertos abusos cometidos por una cúpula gremial cuyos favores a un gobierno le convenía cultivar en un momento dado. Alternativamente, podía consistir en un empleo positivo y directo, con el fin de hostigar a un sindicato discolo cuyos dirigentes adoptaban medidas inconvenientes para la política de un gobierno. En vista del vasto campo comprendido por las disposiciones laborales, muy pocos sindicatos podían afirmar que cumplieran todas al pie de la letra, y un secretario de Trabajo podía habitualmente encontrar alguna infracción que permitiera presionar en algún momento sobre una dirección sindical determinada. En agosto de 1962, por ejemplo, una infracción bastante poco importante cometida por el gremio textil, entonces en primera fila de la oposición sindical al gobierno de Guido, impuso por los militares, sirvió de pretexto para que el gobierno le retirara la personería. Como consecuencia durante seis meses el sindicato se vio en la imposibilidad de iniciar negociaciones sobre un nuevo convenio salarial. Tampoco pudo recibir fondos, porque los empleadores, aunque todavía debieran, por ley, descontar de los salarios las cuotas sindicales, no tenían obligación de entregar esos fondos al gremio, puesto que sin personería éste no era el representante legalmente reconocido de los obreros textiles. Esto afectó tanto las obras sociales como la administración misma del gremio, incapacitado de pagar a su personal profesional. Por añadidura, las reclamaciones, que normalmente se dirigían al departamento de conciliación del Ministerio de Trabajo, ahora debieron ser presentadas ante la sección gremial del Ministerio de Justicia, donde su trámite y solución podían demorarse muchos meses.²⁵ Finalmente, el Ministerio de Trabajo estaba facultado para designar a un interventor, o sea, confiar el manejo del sindicato a un administrador designado por el gobierno.

El hecho de que parte tan considerable del funcionamiento normal de un sindicato estuviera sujeto a tan rigurosa supervisión potencial por parte del gobierno de turno condujo inevitablemente a una acentuada "politización" de las actividades sindicales en la Argentina. Debe comprenderse que ese proceso se operó en dos niveles. Ante todo, significaba que un dirigente sindical no podía descenderse de la índole del gobierno nacional, porque de ella dependía la posible amistad o enemistad del gobierno con él. El futuro institucional de su organización —la futura satisfacción de sus necesidades— es-

taban intrínsecamente ligados a sus relaciones con el Estado. Ese hecho mismo era a su vez un importante factor del proceso de "integración" que bosquejamos en un capítulo anterior, así como un poderoso argumento en favor de la adopción de un realismo pragmático dictado por el "sentido común" a la dirigencia sindical, más allá y por encima de sus propias convicciones ideológicas y puntos de vista personales. Sin embargo, debemos advertir que esto no se limitaba a significar vulnerabilidad para la cúpula sindical. Un gobierno decidido a llevar más allá de ese punto su supervisión legal de los gremios corría el riesgo de tropezar con la decisión de éstos de contribuir a su caída del poder. En marzo de 1966 el gobierno de Arturo Illia, radical, dictó el decreto 969, que modificaba la Ley de Asociaciones Profesionales. Ese decreto significó un ataque en gran escala contra los poderes de la dirigencia gremial, porque impuso rigurosas garantías de democracia interna, debilitó el poder financiero de las centrales obreras al disponer el depósito de las cuotas sindicales a nombre de las ramas sindicales locales y restringió la posibilidad de utilizar para fines abiertamente políticos los medios financieros y las instalaciones de los sindicatos. Frente a ese ataque estratégico a la estructura del poder sindical central —muy diferente del empleo *ad hoc* del poder gubernamental contra un sindicato particular con el cual siempre sería posible negociar alguna maniobra láctica—, los sindicatos peronistas devolvieron el golpe. Gran parte de sus negociaciones con los militares en la fase final del gobierno de Illia y su intransigencia frente a este gobierno deben ser vistas a esa luz.

En un plano más personal, esto también significaba que los individuos particulares que intervenían en el manejo de los organismos gubernamentales —en especial el Ministerio de Trabajo— habían llegado a tener importancia para los líderes gremiales. El proceso de "integración" como estrategia nacional se construyó sobre la trama de las relaciones personales entrelazadas entre dirigentes gremiales y funcionarios ministeriales en el período posterior a 1958. Desde luego, este hecho en sí mismo formó parte del proceso de corrupción de dirigentes sindicales que antes ostentaban posiciones militantes. Más precisamente, en un sistema donde el Estado tenía tan considerables poderes potenciales sobre la vida gremial, a los dirigentes sindicales les resultaba indispensable sentir que podían confiar en los burócratas ministeriales con quienes trataban, estar seguros de que hablaban el mismo lenguaje y compartían puntos de vista comunes sobre los

límites de las presiones y contrapresiones que los sindicatos y gobiernos podían ejercer entre sí. Para fomentar esa confianza era obviamente importante la continuidad de los funcionarios, y la ruptura de la continuidad establecida en el lapso 1958-63, ruptura que sobrevino al ocupar el poder los racionales bajo Illia, desempeñó sin duda un papel importante en el enfrentamiento entre el gobierno radical y los sindicatos peronistas en 1963-66. Los dirigentes gremiales que habían urdido nexos de contactos e influencias con funcionarios ministeriales que compartían con ellos una apreciación común de las "realidades" de la vida sindical, de la necesidad de manipular, controlar y transar, de pronto vieron que esa red personal era barrida y que sus "conexiones" y "entendimientos" normales no funcionaban con la misma flexibilidad que antes.

EL PAPEL POLÍTICO DE LOS SINDICATOS PERONISTAS, 1962-66

Los dirigentes gremiales peronistas no derivaban su poder sólo de sus facultades para negociar en nombre del poder laboral colectivo de los afiliados; también derivaron un poder considerable del papel político de los sindicatos como principal fuerza organizadora de todo el movimiento peronista, es decir, de lo que un autor llamó el "doble juego" de representar a la clase obrera en su lucha por mejoras económicas y al movimiento peronista en sus conflictos y maniobras con otras fuerzas políticas de la Argentina.²⁶ Las elecciones de marzo de 1962 habían formulado una advertencia no sólo acerca del papel dominante de los sindicatos en la organización real de una campaña electoral, sino también de su creciente influjo sobre la estrategia que el general Perón adoptaría ante otras fuerzas sociales y políticas. Las tensiones y conflictos que este papel generaba, tanto en el seno del movimiento peronista como en las relaciones con el propio Perón, se fueron tornando cada vez más patentes. En verdad, el leitmotiv subyacente en la a menudo bizantina historia del movimiento peronista en sus años debe ser buscado, por una parte, en la tentativa de la cúpula gremial peronista, centrada en torno de Vandor, por confirmar su dominio de todo el movimiento y por institucionalizar ese dominio en una expresión política aceptable por las restantes fuerzas del escenario político-social, y por otra parte en la decisión de Perón de contrarrestar ese implícito desafío a su propia posición como única autoridad última del movimiento.

Las enseñanzas que la dirección sindical centrada en torno de Vandor extrajo de las elecciones de marzo de 1962 fueron audazmente expresadas poco después en un editorial del periódico *Descartes*, dirigido por Miguel Gazzera y vocero de las 62 Organizaciones. Ese editorial afirmó sin medias tintas la posición dominante del sector gremial del peronismo:

"En los acontecimientos posteriores a las elecciones del 18 de marzo las 62 Organizaciones han desempeñado el más definitivo papel de liderazgo. Su posición ética y la lucha que han desarrollado han mostrado claramente el papel que desempeñan en los principales sucesos del país [...] es también de conocimiento público que fue la Mesa Coordinadora de las 62 que decidió comparecer a las urnas con candidatos propios. Los resultados han comprobado sin lugar a duda la visión política y la capacidad de los hombres que integran la Mesa Coordinadora [...] ante tal evidencia el general Perón ha decidido que la conducción integral del movimiento nacional debería pasar a las manos de los dirigentes sindicalistas [...]. Los hechos ya habían indicado esta decisión. Después de septiembre de 1955 fue el movimiento obrero el que adoptó las iniciativas de lucha contra el gobierno [...]. Augusto Vandor, ayudado por Miguel Gazzera, tendrá la enorme responsabilidad de asumir la conducción máxima del movimiento. En su figura quedará sintetizada la dominación adquirida por la dirección sindical en asuntos políticos."²⁷

Por el momento, empero, esto quedó más como una declaración de intenciones que como una realidad, y en septiembre de 1962 Perón designó a Raúl Matera su principal representante en la Argentina y jefe del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo. Matera no tenía historia anterior en el movimiento, e incluso parecería que esa falta total de toda corriente organizada propia dentro del peronismo, junto con la respetabilidad personal de Matera y sus contactos con los militares, fueron precisamente los factores que interesaron a Perón. Matera fue encargado ante todo de negociar la participación peronista en las elecciones presidenciales fijadas para julio de 1963. La fórmula resultante, constituida por un conservador popular, Vicente Solano Lima, y un frondicista, Sylvestre Begnis, y presentada por el Frente Nacional y Popular, recibió el apoyo de las 62 Organizaciones, que se dispusieron a llevar adelante la campaña en forma muy pausada a como lo habían hecho para los comicios de marzo de 1962. Las fuerzas armadas declararon que esa fórmula era inaceptable, y las 62, con la aprobación de Perón, se pronunciaron por el voto en blanco.

En octubre de 1963 Perón envió instrucciones en el sentido de que se reorganizara por completo el movimiento. La reorganización estaría a cargo de una Junta Reorganizadora formada por Andrés Framini, Hilda Pineda, Rubén Sosa y Julio Antún. No había duda de que se trataba de una medida contra el creciente influjo de Vandor en el movimiento. Framini era en ese instante el rival más importante de Vandor en la pugna por la jefatura del sector sindical, y Pineda y Sosa estaban asociados a la llamada "línea Villalón", contraria en la figura de Héctor Villalón e identificada con la línea que preconizaba la insurrección.²⁸ Este sector criticaba persistentemente a Vandor y a la principal corriente de la jefatura sindical por su inclinación al compromiso y a lo que a su juicio significaba un plan para integrar al peronismo al statu quo. La respuesta de Vandor no se demoró: una declaración de Sosa que criticaba a Vandor determinó que la UOM se retirara de todos los organismos representativos del peronismo. Frente a este verdadero boicot declarado por el más poderoso sindicato peronista, Perón dio marcha atrás y Sosa fue eliminado de la Junta.²⁹ La posición de Vandor se vio más fortalecida aún cuando poco después Alberto Iturbe, colaborador estrecho de Vandor, fue nombrado delegado personal de Perón. En enero de 1964 se confirmó la destitución efectiva de toda la Junta, cuando Perón creó una nueva comisión de siete miembros, presidida por Iturbe, a la que encomendó la reorganización del peronismo. Conocida como "heptavirato", esa comisión era de línea indiscutiblemente vandorista: la formaban Juana Matti, Andrés Framini, Carlos Gallo, Julio Antún, Jorge Alvarez, Miguel Gazzera y Delia D. de Parodi. De los siete, sólo Framini y Antún no respondían a Vandor.

Durante los seis meses siguientes la comisión llevó a cabo una campaña de inscripción que debía culminar en la elección de delegados ante un congreso cuya tarea consistiría en fundar un nuevo Partido Justicialista, el cual, según lo resuelto por Perón, sería el único organismo representativo del peronismo. Ese proceso fue en la práctica manejado por Vandor, gracias a su control de las 62 Organizaciones y el aparato de la UOM. La campaña de reclutamiento no fue un éxito desde el punto de vista numérico, pues en la Capital Federal sólo se afiliaron unas 33.000 personas, y en la provincia de Buenos Aires alrededor de 170.000. Pero esto mismo facilitó considerablemente a Vandor controlar la elección de delegados ante la convención, comito que se realizó en junio de 1964. Esa elección fue una pugna entre los candidatos leales a Vandor

y los leales a Framini. La superioridad de la organización de Vandor permitió a éste obtener una victoria bien definida. La mayoría de los delegados pertenecían a las 62 Organizaciones; en el área metropolitana de Buenos Aires hubo un 60-65 por ciento de delegados vandoristas, y en la provincia un 55 por ciento.³⁰ Las autoridades partidarias elegidas por la convención reflejaron cabalmente esta relación de poder.

La estrategia que seguiría en lo futuro el nuevo partido, dominado por el sector sindical, resultaba clara. El objetivo inmediato consistía en tomar parte en las elecciones parlamentarias parciales que iban a celebrarse en marzo de 1965. En el peronismo, los comicios se habían ajustado cuidadosamente al estatuto de los partidos políticos vigentes, con el fin de demostrar, como lo dijo un líder sindical, "que seguimos las reglas del juego".³¹ Esta orientación hacia los comicios fue reforzada por un aparente fracaso de la CGT, que no acertó a agregar, a las ocupaciones de fábricas producidas en junio, otras acciones dirigidas contra el gobierno. Análogamente, al fracasar en diciembre la muy proclamada Operación Retorno, cuyo objetivo era preparar el terreno para la vuelta de Perón, se consolidó el creciente consenso en el sentido de que la única estrategia viable para el peronismo se encontraba en la línea de la victoria electoral. Sólo faltaba elegir la bandera institucional que el peronismo enarbolaría para presentarse en los comicios.

La cuestión de la estrategia interesaba evidentemente a los grupos neoperonistas. Habían desobedecido la orden dada por Perón de votar en blanco en julio de 1963 y alcanzado algunos éxitos, tales como dos gobernaciones y varios escaños en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto se derivó en intensas fricciones con el sector sindical, que consideraba al ala neoperonista como una amenaza para la aspiración de los gremialistas de ser los árbitros políticos del peronismo. Los neoperonistas ofrecían al gobierno un canal alternativo para negociar con el peronismo. A principios de 1964, la decisión de reconstituir el Partido Justicialista debilitó mucho la posición de los neoperonistas, cuya perspectiva dependía de su capacidad para presentarse ante las autoridades como único cuerpo político moderado y legalmente constituido del peronismo. Por su parte, la jefatura sindical esperaba que el reconocimiento legal del Partido Justicialista le ahorrara la necesidad de negociar con los neoperonistas por el empleo de los rúbricos partidarios. Y a su vez los neoperonistas no obedieron las instrucciones de Perón en el sentido de que se

La respuesta de Perón a un hecho institucional que confirmaba claramente el dominio del movimiento por el sector sindical no se hizo esperar mucho. Aunque había consentido a la estrategia electoral, no podía permanecer indiferente al significado de la situación postelectoral en lo relativo al equilibrio de fuerzas dentro del peronismo y a su propia posición de autoridad. En julio de 1965 envió instrucciones donde se disponía la creación de un organismo de base más amplia, 19 miembros, donde al grupo dirigente actual se sumaban representantes de las fuerzas neoperonistas y de la juventud. El propósito de esta jugada era diluir el poder de los "cinco grandes" y los aliados de ellos que controlaban efectivamente la Mesa Analítica. Los vandoristas intentaron convencer a Perón de que su decisión era errónea, pero el líder permaneció inmovilable. A comienzos de setiembre, por lo tanto, convocaron a la Mesa y anunciaron la formación de un cuerpo nuevo y más amplio llamado Junta Coordinadora Nacional. Sin embargo, esa apertura era más aparente que real. El organismo consistía en representantes de los neoperonistas, el bloque parlamentario, las 62 y el Partido Justicialista, además de los cinco grandes. De modo que si bien había sido formalmente expandido, continuaba muy ligado a la jefatura vandorista, que aún lo dominaba.³⁴

La táctica negativa de los líderes sindicales que rodeaban a Vandor a diluir su poder en el seno de un cuerpo nacional más amplio inauguró un período, que había de durar seis meses, de lucha abierta entre esa cúpula y Perón, acompañado por los adictos más leales que tenía en la Argentina. Si bien el lenguaje de la disputa no se apartó de los términos típicamente opacos del discurso interno peronista —donde una y otra vez ambos bandos terminaban siempre por jurar su lealtad a Perón—, los problemas en discusión eran, por debajo de la superficie retórica, bastante claros.

La respuesta de Perón al reto lanzado por la jefatura sindical consistió en enviar a su mujer, Isabel, a la Argentina, con instrucciones de reorganizar el movimiento. A su llegada, Isabel inició conversaciones con varias figuras políticas y militares y empezó a congregarse a las fuerzas antivandoristas existentes en el seno del peronismo. Su presencia permitió a los vandoristas formular sus desacuerdos con Perón en términos de críticas a sus representantes en la Argentina, de modo que, ostensiblemente, no criticaban al rey sino a los consejeros del rey. Sin embargo, era imposible no advertir el desafío lanzado al propio Perón. No se trataba meramente de

integrar a la nueva estructura partidaria, por entender que el movimiento debía organizarse como federación de distintas agrupaciones.

Cuando en enero de 1965 la justicia electoral se negó a otorgar al Partido Justicialista la personería legal, se tornó inevitable alguna transacción. Se convino en que el peronismo utilizaría el rótulo de Unión Popular en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Chaco y San Juan. No hubo duda alguna, de cualquier modo, de que el Partido Justicialista dominaría la selección de los candidatos, especialmente en Buenos Aires. En las distintas secciones del partido se celebraron asambleas donde cada sección propuso tres candidatos: uno del ala sindical, uno de la rama femenina y un tercero del ala política. En Buenos Aires se confió a una comisión el escrutinio de las proposiciones para establecer el orden de los candidatos. Controlada esa comisión por gente de Vandor, los opositores fueron extirpados y las primeras posiciones en las listas fueron asignadas a las mujeres que seguían a Delia D. de Parodi y a los políticos y sindicalistas adictos a Vandor. En las listas de candidatos a diputados por la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires los primeros puestos fueron asignados respectivamente a Paulino Niembro y Gerónimo Izzeta, sindicalistas de confianza de Vandor.

Los comicios del 14 de marzo de 1965 representaron una sustancial victoria para el peronismo y, ante todo, para el sector sindical que respondía a Vandor. En la Cámara de Diputados de la Nación se constituyó un bloque peronista de 52 diputados, contra los 70 del radicalismo, y para las legislaturas provinciales fueron elegidos más de 150 peronistas. En total las listas peronistas oficiales recibieron 3.032.186 sufragios, contra los 318.197 de los neoperonistas.³⁵ Paulino Niembro presidió el bloque parlamentario peronista, lo que simbolizó el poder de los gremios y su dominio del movimiento. Este se confirmó en abril al crearse un nuevo organismo para dirigir al movimiento. Conocido como Mesa Analítica, consistía en los "cinco grandes" —Framini, Vandor, Iturbide, de Parodi y Lascano—, más tres representantes de las 62 y dos de la CGT.³⁶ La tarea del nuevo organismo consistía en determinar la prioridad de los proyectos que serían presentados al Congreso por el bloque peronista y en actuar como coordinador general de la actividad del bloque. Su función política sería consolidar la base electoral alcanzada en marzo y preparar al movimiento para las elecciones de 1967 y, más allá de esa fecha, para los comicios presidenciales de 1969.

su posición personal. Con ella estaba inextricablemente ligado el problema de la institucionalización legal del movimiento. El interés fundamental de la jefatura vandonista por este aspecto fue puesto en claro en una conferencia especial que las 62 Organizaciones realizaron en Avellaneda el 22 de octubre de 1965. En esa reunión, 100 delegados leales a Vador aprobaron una moción de repudio a

"los pactos entre quienes invocan una representatividad inexistente en el movimiento y los voceros del gobierno".³⁵

Si bien esto aparentaba, en la superficie, ser un ataque a los representantes de Isabel, que sostenían activas conversaciones con diversos voceros del gobierno y las fuerzas armadas, fundamentalmente suponía cuestionar la autoridad del propio Perón para llevar adelante negociaciones, en nombre del movimiento, por encima y más allá de las autoridades localmente elegidas. La conferencia de Avellaneda reafirmó

"su deseo de promover la institucionalización inmediata del movimiento".

lo cual asumiría la forma de un partido político legal organizado

"de abajo hacia arriba, en un limpio proceso democrático interno".³⁶

Resultaba claro que el papel de Perón, en un partido cuyos líderes fueran elegidos en convenciones nacionales, tendría que ser limitado, puesto que decisiones políticas cruciales, como la de negociar la participación del peronismo en las elecciones de 1967, inevitablemente escaparían de sus manos.

La disputa dividió de arriba abajo al peronismo. En el campo gremial, José Alonso y un grupo de otros dirigentes pusieron en tela de juicio el derecho de Vador a hablar en nombre de las 62 Organizaciones y, tras ser expulsados por disentir, formaron un organismo rival, las "62 Organizaciones de pie junto a Perón". A principios de 1966 celebraron en Tucumán la reunión en que se fundó la entidad, donde reunieron a una amplia gama de dirigentes gremiales, particularmente del interior del país y de la "línea dura" marginada por Vador desde 1962.³⁷ Vador conservó el control sobre la base de las 62 y, con ayuda de los comunistas y algunos independientes, desplazó a Alonso de la jefatura de la CGT. A continuación convocó a un congreso nacional de la central

obrero, que eligió un nuevo secretariado dirigido por Francisco Pérez, vandonista, del sindicato de Luz y Fuerza.

En la esfera política, Perón envió a fines de 1965 órdenes de que se disolviera la Junta Coordinadora Nacional y los vandonistas se sometieran al Comando Delegado Nacional, que acababa de crearse. Si bien no podían rehusarse a disolver la Junta, los vandonistas actuaron evasivamente cuando llegó la hora de sumarse a un nuevo organismo cuya composición iba a ser determinada por Isabel Perón. También lograron conservar el control de la mayor parte del aparato oficial del Partido Justicialista. El enfrentamiento decisivo entre ambos bandos se produjo con motivo de la elección de un diputado por Mendoza, en abril de 1966. El candidato del Partido Justicialista fue Alberto Serú García; Perón designó como su candidato propio a Enrique Corvalán Nanciaras. La jefatura partidaria vandonista argumentó que el candidato debía ser quienquiera que hubiese sido elegido democráticamente por el partido local. El simbolismo de su afirmación era obvio: por un lado Vador sostenía el derecho de la dirección local a determinar sus propias decisiones políticas, y por otro Perón insistía en su derecho a dictar tales decisiones. De la disputada elección entre ambos peronistas resultó una indiscutible victoria de Corvalán Nanciaras y, en definitiva, de Perón. Desde ese momento hasta el golpe militar de junio de 1966, que depuso al presidente Illia, Vador se concentró en gran medida en consolidar su base sindical y socavar la posición de las 62 Organizaciones rivales.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE HACER POLÍTICA

El papel de líder político podía convertir al dirigente gremial en figura nacional, solicitada por otras fuerzas sociales y políticas y dotada de poderes superiores a los que por tradición poseía un jefe sindical. Sin embargo, tal como permitiera verlo el caso que acabamos de relatar, tal situación no carecía de aspectos ambiguos. El poder que un dirigente peronista derivaba de su función política no era ilimitado.

Al jefe sindical el papel político podía convertirle en distintas formas. El hecho mismo de que fueran en la Argentina los encargados, día tras día, de manejar el movimiento y negociar en su nombre y de distribuir el favor político de Perón, y de que a la vez tuvieran en los sindicatos una base de poder relativamente libre del control directo de Perón,

contribuía a fortalecer la autoridad del dirigente gremial. Por añadidura, su posibilidad de movilizar a la clase trabajadora en nombre de Perón constituía una arma importante, útil para presionar a un gobierno con vistas a obtener ventajas económicas concretas. La sostenida movilización de la Semana de Protesta en 1963, el Plan de Lucha de 1964 y la movilización efectuada durante la visita oficial del general de Gaulle en 1965, permitieron obtener del gobierno radical concesiones concretas, como la Ley de Salario Mínimo.³⁸ Incluso toda la operación organizada por los sindicatos peronistas para el retorno de Perón a fines de 1964 puede ser vista también como una manera de mantener la presión del Plan de Lucha, donde el pedido político específico de que se permitiera volver a Perón pasaba a tener una importancia relativamente secundaria.

También ser los principales representantes políticos de Perón ante las bases agregaba cierta autoridad a los dirigentes gremiales, así como les daba una reserva básica de apoyo en caso de que un fracaso en el campo económico les redujera ese apoyo. Cada visita a Madrid o earla de Perón servía, llegado el caso, para compensar una huelga perdida o la conclusión de un convenio desventajoso. Evidentemente, esto podría ser considerado tan sólo como la faceta específicamente argentina de una práctica común a todas las dirigencias sindicales, o sea, una manera particular de convencer a las bases de que se había "redondeado" un buen trato. Podría decirse que su papel político ayudó a los dirigentes sindicales a conservar lo que un autor ha denominado la "ilusión de la conquista".³⁹ No se trata de un fenómeno simple, de una sola dirección. Aunque su autoridad política apuntalaba sus posiciones gremiales, también puede señalarse que su capacidad para movilizar a sus bases por motivos ostensiblemente salariales era utilizada por ellos como instrumento en sus maniobras políticas. Resulta claro, entonces, que si bien las ocupaciones de fábricas de 1964 respondieron a una genuina demanda de mejoras económicas y sociales, también tuvieron una dimensión política. El Plan de Lucha respondió al fin de demostrarles a los militares tanto la debilidad del gobierno de Illia como el poder de los sindicatos. En esa forma las fuerzas armadas serían persuadidas a ponerse de acuerdo con la cúpula gremial en caso de que proyectaran un golpe contra el gobierno radical, o bien a modificar las objeciones que tuvieron contra la participación electoral de los peronistas por entender que el proceso electoral absorbería y a la vez disiparía el poder de militancia social manifestado en las ocupaciones de fábricas.⁴⁰

Por otro lado, en un sentido general la movilización política podía dar, a una clase obrera preparada para la batalla, una esperanza y un sustituto asequible de las victorias en el campo económico. En el clima económico, casi siempre dificultoso, de ese período, los dirigentes sindicales subrayaban a menudo lo difícil que era obtener ventajas sólo en el terreno de las negociaciones colectivas y dirigían la atención de sus afiliados hacia la necesidad de buscar la solución de sus problemas en la esfera, más amplia, de la acción política. Le hablaban en carácter de dirigentes sindicales y en el de dirigentes políticos, y el segundo contribuía sin duda alguna a fortalecer al primero. En la situación de proseripción general en que estaba el peronismo desde 1955, la reconstitución paralela de un fuerte movimiento gremial hizo que la identidad política de los obreros fuera encarnada cada vez más por sus sindicatos, lo que contribuyó poderosamente a que los dirigentes sindicales lograran mantener su fuerza en situaciones que, en otros sentidos, les eran altamente desfavorables.

Sin embargo, también era evidente que el poder político de los gremios tenía sus límites. Ante todo porque en un marco institucional dominado por la dicotomía Perón/anti-Perón siempre se llegaba a un punto donde los sindicatos ya no podían llevar más adelante, como instrumento de negociación, la amenaza de movilizar a las masas peronistas, participar en las elecciones y demás, sin que las fuerzas armadas dieran un paso al frente y acabaran, así sólo fuera por un tiempo, con el proceso de amenaza y contraamenaza. La experiencia del régimen de Frondizi ilustró muy bien los límites y peligros del juego político desde el punto de vista de los sindicatos. Durante cuatro años Frondizi utilizó la amenaza de que si los gremios presionaban demasiado, atacaban con demasiada frecuencia o tomaban parte en las elecciones, habría contra su gobierno un golpe militar que conduciría a un gobierno mucho más antisindicalista. La amenaza, naturalmente, era de doble filo, y gran parte del *modus vivendi* entre Frondizi y los gremios peronistas se fundó en el reconocimiento de ese hecho. Las consecuencias de la participación peronista en las elecciones de marzo de 1962 probaron que Frondizi había estado en lo cierto, puesto que el gobierno de Guido resultó ser mucho más refractario a la presión sindical. Análogamente, el éxito peronista en las elecciones de 1965, orquestado por el sector gremial, y su probable victoria en los comicios de 1967, fueron importantes elementos de

cálculo en las mentes de quienes consumaron el golpe militar de junio de 1966. Se trataba, en suma, de un juego imposible, que los sindicatos no podían ganar por el hecho mismo de que constituían la principal expresión política de Perón.⁴¹

También es importante comprender que su poder de negociación política provenía más de su posición como representantes de Perón ante las masas que del poder de negociación que por su propia cuenta recibían de la ómbita sindical y que aquella capacidad, en último término, dependía del prestigio personal de Perón. Esto significaba sin duda una fuente de poder, pero también de fundamental debilidad, porque su principal carta de negociación, en último término, escapaba de su control. El uso de la "camiseta" peronista les concedía un sustancial margen de maniobra y cierta independencia en sus relaciones con Perón y con los gobiernos, pero no equivalía a la posibilidad de negociar políticamente desde una posición de fuerza genuina y puramente sindical.

Perón otorgó por cierto a la cúpula gremial una considerable libertad de acción como representación política suya y muy rara vez interfirió en sus tratos específicamente sindicales. En parte, esa renuencia a interferir se debió a su propio realismo. Desde su exilio en Madrid no podía alentar la esperanza de controlar a diario los detalles de lo que sucedía en la Argentina. El mismo lo dijo así en una entrevista:

"Tengo que actuar un poco como el Padre Eterno, bendiciendo 'urbí et orbi', pero dejando que la Providencia haga su trabajo, sin aparecer mucho. Creo que la fuerza del Padre Eterno reside en que no aparece mucho. Si viéramos a Dios todos los días, terminaríamos perdiéndole el respeto. Y más aún, no estaríamos lejos de que apareciera algún loco que quisiera reemplazarlo."⁴²

Además, Perón tenía conciencia del poder de la cúpula sindical, de su capacidad para controlar la maquinaria gremial y de los peligros potenciales que encerraba lo que desde su punto de vista era la "columna vertebral" del movimiento. Su prolongado conflicto con Vandor a fines de 1965 y comienzos de 1966 demostró los riesgos que suponía desafiar a un dirigente de sólidas bases como Vandor y los daños que podían causarse al movimiento. Había delicados problemas implícitos en un conflicto de esa índole. Así lo explicó Perón en una carta donde se refirió a los motivos por los que no había doblegado antes la independencia de Vandor:

La era de Vandor: 1962-66

247

"Si la UOM, como organización peronista, nombra a su secretario general, no podemos hacer otra cosa que aceptarlo, especialmente cuando es el caso de Vandor que siempre ha sido peronista. Obrar de otra forma implicaría la expulsión del sindicato del peronismo, que sería inconcebible porque los metalúrgicos son todos peronistas. Como usted puede ver el problema desde el punto de vista de la conducción del movimiento, no es tan sencillo como parece."⁴³

Por añadidura, Perón era muy cauteloso cuando se trataba de tomar partido por una u otra ala del movimiento. Tal actitud reflejaba su pragmático realismo, pero también su conciencia de la contradictoria amalgama de fuerzas que se sumaban en la constitución del peronismo, diversidad donde él veía una de las fuerzas de su movimiento. Prefería actuar como árbitro final del conflicto e intervenir sólo como último recurso en favor de uno u otro lado.

De cualquier modo, lo cierto era que si bien usar la "camiseta" confería a la cúpula gremial un considerable espacio de maniobra, así como un razonable grado de independencia en sus relaciones con Perón y con los gobiernos, esto no era igual a operar desde una posición de fuerza sindical autónoma. Al parecer, cierta vez, Vandor observó que "si abandonara la camiseta, perdería el sindicato en una semana", lo que constituyó un reconocimiento realista de ese hecho.⁴⁴ Cuando la independencia de los dirigentes sindicales se acentuaba demasiado y éstos empezaban a usar sus poderes en formas que Perón reprochaba, él no dejaba de recordarle la índole relativa de ese poder. Perón y los jefes sindicales se encontraban, pues, atrapados en una suerte de círculo vicioso. En vista de la situación imperante después de 1955, Perón se veía obligado a confiar primordialmente en los sindicatos como sus principales instrumentos de negociar y afirmar las reelaciones, peronistas en el sistema político. Pero el éxito logrado por los sindicatos en esa función, la confianza en sí mismos que derivaron de ella y el impulso que dio a su base organizativa, inevitablemente planteaban un reto implícito a la capacidad del propio Perón para determinar la suerte última del movimiento.

Uno de los resultados de tal situación fue el frecuente fenómeno de que, forzado Perón por las circunstancias a utilizar y promover la rama sindical del movimiento, cuando ésta parecía a punto de alcanzar alguna expresión formal él se volviera deliberadamente contra ella y provocara su deposición. A menudo se recibió la impresión de que el éxito mismo

NOTAS

¹ El Popular, 4 de diciembre de 1963.

² Los comités regionales de la CGT fueron devueltos por Frondizi en 1958 como primer paso en el proceso de normalización de la central obrera.

³ Los principales sindicatos independientes eran los gráficos, La Fraternidad (conductores de locomotoras), los empleados de comercio, los marinos mercantes, los empleados municipales, los papeleros y los viajantes de comercio.

⁴ Detalles del congreso hay en *Documentación e Información Laboral, Informe Especial*, n° 1/2, 25 de febrero de 1963.

⁵ Entrevista con Alberto Bordaberry, octubre de 1976. Bordaberry recordó que José Rucci, uno de los lugartenientes de Vandor y activista de la Resistencia, organizaba a la barra en las reuniones de las 62. Si la barra se desempeñaba bien —es decir, si había logrado impedir que se oyeran las voces de los opositores—, después de las asambleas Rucci les distribuía dinero para que fueran a comer.

⁶ Véase Carlos Díaz Alejandro: *Essays on the Economic History of the Argentine Republic*, New Haven, 1970, págs. 218 y sigs. (hay trad. cast.).

⁷ El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) estimó que el desempleo había aumentado del 2,7 por ciento en 1960 al 7,5 por ciento en 1964. Entre 1961 y 1963 la producción manufacturera declinó un 10 por ciento. Si bien las cifras de la CGT sobre la tendencia de los salarios reales difería en alguna medida de las dadas por el gobierno, incluso la mejor imagen pintada por éste admitía un estancamiento de los salarios reales entre 1960 y 1964. Véase CGT: La CGT y el Plan de Lucha, cuarta etapa, Buenos Aires, noviembre de 1984, pág. 22.

⁸ CGT: *Occupación por 3.913.000 trabajadores de 11.000 establecimientos*, Buenos Aires, junio de 1964. Un estudio general del Plan de Lucha hay en Guy Bourdè: "Les occupations des usines en Argentine", *Le Mouvement Social*, abril-junio de 1978.

⁹ François Gêze y Alain Labrousse: *Argentine: révolution et contre-révolution*, Paris, 1975, pág. 153.

¹⁰ *Estatuto de la Asociación Obrera Textil*, Buenos Aires, 14 de diciembre de 1966.

¹¹ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: *Censo nacional de asociaciones profesionales*, Buenos Aires, 1965, cuadro 16, pág. 24.

¹² *Estatuto del Sindicato Unido de Petroleros del Estado*, Buenos Aires, 1965.

¹³ Véase Ministerio de Trabajo, Censo, cuadro 13, pág. 21.

¹⁴ *Ibid.*, cuadro 12, pág. 21.

¹⁵ Es importante distinguir entre la cuota sindical y asistencial y la cuota extraordinaria. Como el artículo 2 de la ley 14.455 estableció el principio del derecho a elegir ser o no ser afiliado a un

logrado por los sindicatos al desarrollarse como principales representantes políticos de Perón los condenaba a su fracaso final en esa órbita. También en esto encontramos la caótica organización y el eclecticismo del peronismo. Este había de seguir siendo esencialmente, sobre todo después de que Vandor no acertara a impartirle alguna forma institucional coherente de base gremial, una suerte de federación desarticulada de distintos grupos leales a Perón. Esa parece haber sido por cierto la intención del propio Perón. A pesar de todas sus reiteradas declaraciones en el sentido de que era preciso ordenar el movimiento, su organización en los únicos términos realmente imaginables, es decir basada en los sindicatos y dominada por éstos, era precisamente lo que él más temía. Si se deja de lado su retórica formal, Perón pareció haber concebido el movimiento ideal en términos de un estado semiformal, casi coloidal, capaz de desafiar constantemente la estabilidad argentina, de impedir una institucionalización pacífica que excluyera al peronismo, de alcanzar una expresión organizativa concreta para esta o aquella necesidad táctica, pero sin alcanzar nunca una estructura permanente. Este concepto tácito pero fundamental parece haber tenido vigencia desde la época inmediatamente posterior a 1955. Mas allá de esa parafernalia de términos de organización que pueden encontrarse en los documentos de ese tiempo, la idea que el propio Perón parece haber tenido de las formas de lucha de su movimiento se presenta como una curiosa suerte de semi-anarquía. En su correspondencia con Cooke constantemente vemos a Perón referirse a miríadas de distintas acciones por distintos grupos, cada uno de los cuales participaría en la "gimnasia revolucionaria" que de alguna manera metafísica socavaría la voluntad de la "tiranía" de seguir gobernando, y grupos que, unificados sólo por una común lealtad a él, realizarían la anhelada "insurrección nacional". Las formas organizativas que adoptaría ese proceso quedaban indefinidas. El significado que esa actitud tenía para la cúpula sindical se tornó perfectamente claro al ser derrotado el candidato vanderista en las elecciones de Mendoza. Todos los planes que Vandor pudiera haber tenido de crear un partido de base sindical con Perón como simple mascarón de proa debieron ser definitivamente abandonados después de ese desastre.

sindicato, ningún no afiliado a un sindicato tenía la obligación de pagar cuotas sindicales básicas. Empero, el artículo 8 de la ley 14.250 estableció el derecho de los sindicatos a negociar con los empleadores la retención de las cuotas extraordinarias que debían ser especificadas en los convenios colectivos firmados cada dos años. Estas cuotas tenían vigencia tanto para los afiliados como para los no afiliados. Sin embargo, debían resultar de una negociación con los empleadores y no constituían un derecho de funcionamiento automático. La razón básica legal de esta disposición residía en el hecho de que según la ley todos los salarios y condiciones que negociara el sindicato eran aplicables tanto a los afiliados como a los no afiliados, por lo que el sindicato tenía derecho a ser recompensado, por sus esfuerzos, por todos los beneficiarios de los contratos que negociara. La confusión sobre este punto tenía cierto asidero en la vaguedad misma del artículo 33 de la ley 14.455, que otorgaba a los sindicatos el derecho a recibir las cuotas retenidas por los empleadores sobre los salarios obreros sin especificar si esto debía incluir a los no afiliados. La Resolución 253/60, dictada el 12 de mayo de 1960, acabó con esta confusión y subrayó el carácter no compulsivo de las cuotas sindicales y asistenciales.

¹⁶ Ministerio de Trabajo. Censo, pág. 6.

¹⁷ *Ibid.*, cuadro 2, pág. 12.

¹⁸ Véase Jorge Correa: *Los jerarcas sindicales*. Buenos Aires, 1972, donde se presentan los casos más conocidos.

¹⁹ *Memoria y Balance*. XI Congreso Nacional de la AOT. 22, 23 y 24 de marzo de 1968.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Gazzera: "Nosotros los dirigentes", pág. 116.

²² Véase en Correa: *Los jerarcas sindicales*, págs. 84-90, la documentación de los casos más patentes.

²³ Documentación e Información Laboral, n° 70, enero de 1966.

²⁴ Torre: *El proceso político interno*, pág. 13. Según lo señala Torre, en vista de que las elecciones se celebraban cada dos años en un período de 15 años había 175 elecciones en esos grupos.

²⁵ Véase AOT, julio de 1963; también *Primera Plana*, 27 de noviembre de 1962.

²⁶ Roberto Carré: "Sindicalismo de participación, sindicalismo de liberación", apéndice, sin publicación, de *Sindicatos y poder*. Buenos Aires, 1967.

²⁷ Descartes, 18 de abril de 1962.

²⁸ Villalón era un activista político de origen oscuro sobre cuyos antecedentes no se conocía mucho. Se rumoreaba que tenía buenos contactos con los cubanos, de los que había recibido una concesión para importar cigarrillos de La Habana. No tenía historia alguna en el movimiento peronista tradicional.

²⁹ *Primera Plana*, 19 de noviembre de 1963.

³⁰ *Primera Plana*, 7 de julio de 1964.

³¹ *Ibid.*

³² Véase *Primera Plana*, 23 de marzo de 1965.

³³ *Primera Plana*, 6 de abril de 1965. Todas estas figuras, salvo Framini, eran vandonistas. Lascano era el jefe visible del Partido Justicialista. José Alonso lo era de la CGT, además de ser uno de los delegados de ésta ante el organismo, y aunque no se inclinara decididamente por Vandor, debía al apoyo de éste su posición en la CGT.

³⁴ *Primera Plana*, 7 de setiembre de 1965.

³⁵ *Primera Plana*, 9 de noviembre de 1965.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Desde el punto de vista numérico ambas 62 Organizaciones eran bastante iguales, porque los vandonistas contaban con unos 233 delegados, y las 62 de pie con aproximadamente 225. Pero los vandonistas estaban en ventaja en los sindicatos peronistas que no se habían pronunciado por un bando o el otro.

³⁸ Véase Bourdieu: "Les occupations des usines".

³⁹ V. L. Allen: *The Sociology of Industrial Relations*. Londres, 1971, pág. 53.

⁴⁰ Acerca de las especulaciones que había tras el Plan de Lucha, véase Documentación e Información Laboral, Informe Especial, n° 7, mayo de 1964. Vandor utilizaba a la CGT y las 62 Organizaciones para seguir una línea dura y mantener las huelgas y el conflicto social, a la vez que negociaba la plena aceptación del peronismo en el sistema político.

⁴¹ "Juego imposible" es la expresión que Guillermo O'Donnell emplea en *Un juego imposible: competiciones y coaliciones entre partidos políticos en Argentina*, 1955-66, Documento de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1972.

⁴² Entrevista con Enrique Pavón Pereyra, 1968, publicada por *Siete Días*, n° 312, 1973.

⁴³ Carta a Antonio Caparrós, julio de 1969. Archivos del autor.

⁴⁴ Citado en Walsh: ¿Quién mató a Rosendo?, pág. 171. El peso de la condena personal de Perón era considerable. El peso que tal condena suponía incluso para un jefe sindical que contaba con recursos independientes como Vandor, puede ser juzgado por este hecho: cuando *Primera Plana* tituló un artículo "La gran carrera: Perón o Vandor", Vandor sacó inmediatamente en los diarios solicitadas a toda página donde respondía: "Vandor contesta: Perón".

8

Ideología y política en los sindicatos peronistas:
distintas corrientes dentro del movimiento

"Mientras el peronismo no se estructure como un partido revolucionario, esto es, con una política revolucionaria entendida como la unidad de la teoría, la práctica y el método organizacional, continuará siendo dominado por el espontaneísmo, por la yuxtaposición de tácticas que no son integradas en una estrategia, por callejones sin salida en que burócratas sucesivos le han llevado, dirigentes que no pueden concebir otra solución que no sea frentes electorales o golpes militares. Sin embargo, el golpismo y los frentes electorales implican la renuncia de la toma de poder."

John William Cooke

LA BASE COMÚN

Hemos analizado ya, en parte anterior de este libro, el proceso por el cual conceptos decisivos de la ideología peronista formal sobrevivieron en el período posterior a 1955. Hemos puesto de relieve la coexistencia, en principio antagónica, de esos preceptos con nociones y valores que emergieron del conflicto de clases y de la amarga experiencia por la que los trabajadores peronistas y, en particular, un importante estrato de militantes pasaron en el lapso 1955-60. Al darse vuelta la marea contra esa experiencia militante, se produjo en torno de la línea central del movimiento sindical peronista algo así como una fusión de supuestos acerca de los

cuales había una especie de acuerdo tácito. Los conceptos rectores de este otro programa ideológico y práctico atenuaban muchas de las tensiones y conflictos ideológicos del período anterior y abrían ampliamente el camino hacia un acuerdo entre las facciones rivales en que se dividía el movimiento. En verdad, la hegemonía del vandorismo en el seno del movimiento gremial se basó en medida considerable en la capacidad de esa línea para articular tal consenso. Quienes heredaron las tendencias más extremistas presentes en la Resistencia habían de verse cada vez más restringidos a posiciones marginales en el movimiento laboral, pero ni siquiera ellos, según veremos, habían de negar muchas de las nociones básicas y formales de la ortodoxia peronista.

Un documento emitido por las 62 Organizaciones en agosto de 1963 resumió admirablemente los principales elementos económicos y sociales comunes a la diversidad de programas y declaraciones ya dados por el movimiento gremial peronista al promediar la década 1960-70. Las demandas económicas incluían: una política de pleno empleo y alto consumo; control de los costos, con fijación de precios máximos y límites de las ganancias; estimulación de la actividad privada del capital nacional; nacionalización de los depósitos bancarios e interrupción de las relaciones con el FMI; aplicación de medidas monetarias y crediticias especialmente dirigidas a estimular la producción y reactivar la economía; rigurosos controles cambiarios para eliminar la importación de bienes innecesarios o capaces de competir con la industria argentina. Además el documento pedía: una política de comercio exterior que asegurara la intervención estatal necesaria para diversificar las exportaciones; cancelación de todos los contratos petroleros con empresas extranjeras; reforma agraria para eliminar los latifundios; nacionalización del transporte, de todos los medios de comunicación, de las industrias básicas y de todas las restantes que "pudieran posibilitar la formación de monopolios"; denuncia de todos los acuerdos que otorgan privilegios al capital extranjero e institución de controles sobre la repatriación de ganancias. Además se otorgaba prioridad a la inversión social en viviendas, en educación y en socialización de la medicina. Estas demandas económicas eran entendidas como parte de:

"Una política económica y social que efectuará los cambios estructurales necesarios para devolver al país su independencia económica, su soberanía política y justicia social."¹

Los presupuestos ideológicos de esas proposiciones económicas eran claros. Ante todo, el contexto fundamental en el cual se las debía satisfacer no era específicamente anticapitalista. Más aún, en los diversos programas expuestos por los sindicatos peronistas en esos años se advertía una constante preocupación por el desarrollo de la industria privada; la prueba de ello está en las citadas demandas de las 62 Organizaciones. Había, sin embargo, dos importantes salvedades. La industria debía ser propiedad del capital privado argentino. El punto 11 del plan de las 62 estipulaba que

"debemos estimular el capital nacional privado para obtener y consolidar un capital nativo que permita el desarrollo de todas las posibilidades internas y que permitirá liberarnos en el más corto lapso posible de la colaboración del capital extranjero".²

En segundo término, esa industria debía estar sujeta a las limitaciones impuestas por el bien nacional y debía reconocer sus responsabilidades sociales con otros sectores de la comunidad nacional. En consecuencia, por ejemplo, la fijación de precios máximos y el control de las ganancias se basaban en el razonamiento de que

"en esta manera las actividades privadas no se convertirán en monopolios y las ganancias no superarán las exigencias del bien común y el interés del pueblo y del país".³

Análogamente, la nacionalización era entendida como

"una manera de asegurar que el capital privado tome en cuenta los intereses generales de la nación e impulse el bienestar del pueblo".⁴

Esos supuestos ideológicos gemelos se originan indiscutiblemente en la retórica, generada por el Estado, de la época peronista. Se encontraron presentes también después de 1955 y subsiguieron, según hemos visto, en la búsqueda de una estrategia de "genuino" desarrollo económico supervisado por el Estado y en la creencia en las virtudes de esa estrategia.

También estaba clara la filosofía social implícita en esas exigencias económicas. Fundamentalmente, el movimiento gremial peronista se aferraba a la creencia de que las políticas económicas necesarias para introducir un cambio en las estructuras de la economía argentina podían llevarse a cabo dentro de un contexto de consenso de clases. Los sindicatos subrayaron persistentemente su oposición al concepto de lucha de clases. En un nivel general, esa creencia se reflejaba en la

búsqueda de aliados con los que fuese posible constituir una alianza multiclassista que ofreciera las bases políticas para la aplicación de la estrategia económica que hemos bosquejado. Una clara expresión de esto fue, al promediar la década 1960-70, la búsqueda de una base común con las organizaciones de empleadores, en especial la Confederación General Económica (CGE).

La CGE reunía a los industriales más pequeños -asentados en muchos casos en el interior del país-, basados en capital nacional y dependientes del mercado interno. Si bien entre la CGE y los sindicatos había frecuentes disputas, los contactos entre ambos sectores se estrechaban ante los aspectos críticos del ciclo económico. En lo más hondo de la depresión de 1962-63 la CGE comprobó que compartía la preocupación de los gremios por la necesidad de reactivar la economía. Porque atendían al mercado interno y porque se habían desarrollado en gran medida gracias a la protección arancelaria, no podían menos que simpatizar con las exigencias sindicales de mayor capacidad de consumo, mejores facilidades de crédito y mayor discriminación arancelaria, así como compartían la preocupación general de los gremios por el efecto de los monopolios y del capital extranjero sobre la industria argentina.⁵ De acuerdo con esa línea, la CGT procuró interesar a otros sectores en las varias etapas del Plan de Lucha contra el gobierno de Illia. Al prepararse la huelga general del 31 de mayo -la Semana de Protesta- se realizaron conversaciones con las entidades patronales, otras asociaciones profesionales y una reunión general de partidos políticos. Una de las principales consignas de la CGT exhortaba a los empleadores a

"acompañar a sus trabajadores en las acciones contra los parásitos del país".⁶

Se consideraba que sólo aquellos sectores parasitarios conectados estrechamente con el capital extranjero y la "oligarquía" local estaban más allá del alcance del consenso que se procuraba.

Más específicamente, el énfasis sobre el consenso de clases era transferido al ámbito de la empresa capitalista misma. Así como la nación era entendida en cuanto comunidad de intereses que en definitiva no antagonizaban entre sí, así también lo era la compañía privada. Pero si bien mantuvieron su compromiso formal con la creencia en los beneficios del capital privado, a la vez consideraban necesario limitar

esas ganancias en homenaje al bien común y tanto mediante la intervención mediadora del Estado como mediante un cambio de la naturaleza y el concepto de empresa. En 1965 la CGT dio a conocer un documento donde enunciaba explícitamente esas ideas:

"Fue el capitalismo liberal tradicional que creó el mito de que la empresa es propiedad exclusiva del capital [...] es necesario reconocer legalmente que la empresa es una unidad de producción, es decir una comunidad de personas asociadas en conjunto para una meta común, y cuyos beneficios son propiedad del capital y del trabajo."⁷

Este reconocimiento de la función social del capital había de expresarse en términos prácticos bajo forma de la "cogestión", o sea la participación del trabajador en el nivel empresarial. En las principales declaraciones de política de esos años, formuladas por las distintas tendencias del sindicalismo peronista, la cogestión aparece en el primer plano de las demandas. El documento emitido por las 62 Organizaciones en 1963 dio mucho relieve a ese pedido. Sin embargo, la jefatura sindical subrayó la indole no conflictiva de la coparticipación. Paulino Niembro, presidente del bloque parlamentario peronista y destacado dirigente metalúrgico, interrogado por un periodista sobre cómo reconciliaba la función social de la propiedad con la libre empresa, contestó:

"[...] es preciso erradicar la imagen del dueño de la fábrica como el patrón. El dueño es un dirigente en la misma manera en que los sindicalistas lo son: la empresa es un bien común que debe estar al servicio de la sociedad. De modo que la cogestión es necesaria para evitar la apropiación excesiva del lucro. Esto no significa, sin embargo, que los empresarios han perdido el control de sus fábricas."⁸

Este énfasis sobre la empresa como comunidad de intereses fue continuamente reiterado como razón fundamental de las actividades sindicales peronistas. Incluso aquellas acciones que más directamente desafiaban tanto al Estado como a los empleadores eran justificadas por esa razón esencial de carácter no conflictivo. Así fue cómo a mediados de 1962, en lo más hondo de la depresión, cuando en la industria metalúrgica se desencadenó una ola de ocupaciones de plantas en protesta contra los cierres de fábricas y los despidos, al disponer la UOM que las plantas ocupadas siguieran trabajando con los obreros despedidos a cargo de sus máquinas, ese

organismo sindical se preocupó por explicar claramente la acción:

"los metalúrgicos no están propiciando soluciones extremistas o colectivistas, como algunos reclamaban, sino que están defendiendo algo que consideran propio: la empresa como una comunidad de intereses."⁹

En forma similar, la CGT se esforzó por explicar al público que las ocupaciones masivas de fábricas de 1964 no tenían por fin poner en marcha su expropiación y el despojamiento de sus legítimos propietarios, sino simplemente demostrar que

"aunque las fábricas son propiedad de sus dueños, también pertenecen al país, y por consiguiente a los trabajadores, puesto que deben cumplir una función social".¹⁰

Otro elemento decisivo de la ideología sindical peronista formal era el supuesto común a los dirigentes y a las bases de que la función del gremio iba más allá del proceso básico de negociar salarios. Este concepto ampliado de la función sindical constituyó un tema importante sobre el que se basó gran parte del debate interno del peronismo y entre los gremios peronistas y las autoridades estatales. En la era posterior a 1955 los líderes sindicales peronistas fomentaron deliberadamente, acerca de las funciones de los gremios, una imagen amplia basada en su previa experiencia con Perón, y esa imagen encontró entre los afiliados una respuesta ya preparada. ¿Qué significaban exactamente esas "funciones amplias"? En el período 1962-66 fue posible asistír, en el seno del gremialismo peronista, al desarrollo de dos corrientes generales de pensamiento distintas, que ponían el acento sobre aspectos diferentes de aquella cuestión.

Por una parte, en esos años se advirtió una clara tendencia a destacar la función social de los sindicatos, por encima de su función en la negociación salarial. Al aumentar los recursos financieros de los gremios después del convulso período 1955-60, y expandirse consiguientemente los servicios sociales que bosquejamos en el capítulo anterior, los dirigentes sindicales impulsaron con frecuencia la imagen de sus organizaciones como entidades fundamentalmente de servicio, que proporcionaban a sus miembros toda una gama de obras sociales. Los anuarios y almanaques de los principales sindicatos publicaron cada vez más detalles de sus servicios médicos, y gráficos demostrativos de la excelencia de sus

servicios odontológicos; se hubiera dicho que las emplomaduras y extracciones daban la medida de lo realizado por el gremio. Sin embargo, no hay razón alguna para subestimar la atracción ejercida por esa obra: en ausencia de servicios estatales comparables, los provistos por los sindicatos que iban del tratamiento médico hasta productos farmacéuticos a precios rebajados y, en algunos casos, viviendas construidas por el sindicato alcanzaban no poca importancia para el afiliado.

Con esa tendencia conocida otra que apuntaba al empleo de criterios comerciales para medir la eficacia sindical. En un discurso que pronunció en enero de 1966 al celebrarse la fundación de su gremio, Juan José Taccone, líder del sindicato de Luz y Fuerza, contrastó la debilidad que éste presentaba en 1944 con su vigor veintidós años después:

"Hoy en cambio tenemos una organización con un capital real de más de 1.500 millones, un movimiento económico anual de más de 2.000 millones, un convenio de trabajo con participación en el directorio [...] campos de recreo, hoteles, departamentos."¹¹

Pocos años antes, Pedro Gornis, jefe de los petroleros estatales, había declarado sin ambages durante una entrevista:

"Tenemos el concepto moderno de que las organizaciones valen en relación a su capacidad económica."¹²

Tanto aquel sindicato como éste operaban en sectores económicos privilegiados, dependientes del Estado, y la mayoría de los sindicatos no podían emular sus realizaciones en cuanto a los servicios provistos, pero no por ello es menos cierto que esa imagen de las funciones del gremio se difundía cada vez más en los sindicatos, tanto peronistas como no peronistas.

La otra corriente principal de pensamiento a que nos referimos antes estaba asociada específicamente a los sindicatos peronistas y apuntaba a definir en los más amplios términos políticos y sociales las metas y las funciones de los sindicatos. En diciembre de 1961, al hablar ante el octavo congreso nacional del sindicato de textiles, Andrés Framini ofreció una clara definición de esa fundamental convicción ideológica:

"El sindicato también sirve para otras cosas de mucha importancia que se trasuntan mucho más allá de la lucha diaria que realizamos dentro del gremialismo [...] y todos están convencidos de que para conseguir ese objetivo no lo podremos hacer si no apuntamos mucho más arriba porque de lo contrario no conseguiremos nada, y si lo conseguimos, va a ser en forma circunstancial."¹³

Es verdad que en las modernas sociedades industriales los sindicatos tienden, como parte normal de sus funciones, a involucrarse en una serie de cuestiones mucho más amplia que la negociación sobre salarios y condiciones de trabajo. Además es costumbre de los sindicatos dar a conocer sus puntos de vista acerca de las cuestiones económicas y sociales en general, así como influir en lo posible sobre todo el contexto en que se negocian aquellos temas. Tal ha sido especialmente el caso cuando la situación económica es desfavorable para las tratativas de carácter rutinario. También es cierto que, según hemos visto, el papel específicamente político de los sindicatos peronistas podía ser utilizado para fines no políticos; por ejemplo, servir a los dirigentes para "convenecer" a las bases de las ventajas de un convenio. En consecuencia, podría argüirse que había poco que fuese específicamente "ideológico" en la insistencia de los sindicatos peronistas en favor de una función gremial más amplia. Por ejemplo, podría aducirse que la necesidad de los sindicatos de mirar más allá de las necesidades económicas constituía un fenómeno evolutivo natural en una sociedad industrial compleja, así como un elemento esencial del bagaje retórico de todo dirigente gremial. A la luz de estas consideraciones podría argumentarse, entonces, que no cabe asignar mucho peso ideológico a episodios que constituirían una evolución principalmente funcional. Sin embargo, parece ser claro que lo distintivo del caso peronista fue la insistencia con que lo subrayó el papel político de los sindicatos y se negó, conscientemente, la validez de una concepción puramente "comercial" del sindicalismo.¹⁴ Si se toma en cuenta que en 1964 el boletín informativo semanal de la CGT afirmaba:

"Es indudable que el objetivo principal de una organización sindical es el cambio de la estructura social, política y económica", se advierte con claridad que se proclamaba más que un simple derecho a dar a conocer las opiniones gremiales sobre problemáticas generales de la política nacional.¹⁵

Ciertamente, tanto los sindicatos no peronistas como las

EL PROYECTO VANDORISTA

Como líder de los obreros metalúrgicos y figura dominante dentro del aparato sindical peronista, Augusto Vandor suscitó en el seno del peronismo reacciones extremas que oscilaban entre la hagiografía en un polo y la demonología en el otro.¹⁶ Las imágenes asociadas a estos diferentes enfoques difieren desde luego entre sí: el líder y mártir de una es contrarrestado por el corruptor y gangster de la otra. En estas circunstancias es muy difícil abrirse paso entre ellas y llegar aunque sea a un juicio aproximadamente objetivo sobre los fines del vandorismo.

En parte esa dificultad se limita a reflejar el hecho de que el vandorismo, como corriente dentro del peronismo, no era claramente definible en cuanto movimiento doctrinario y teórico, fácil de diferenciar de otras tendencias. En parte también se origina en el esencial pragmatismo de la mayoría de los dirigentes. Vandor era un maestro de la *realpolitik* en el escenario argentino y un entendido en los métodos apropiados para controlar un movimiento sindical. En este sentido, era el arquitecto del caudillo gremial, confiado en su capacidad para negociar con políticos, jefes militares y empleadores y a cuyo juicio los principios doctrinarios eran de segunda importancia en el torbellino diario de las cuestiones gremiales. Miguel Gazzera, íntimo colaborador suyo, nos ha dejado una habil descripción de Vandor. No era, dice,

"un líder de barricada, menos aún un caudillo clasista [...] todos sus actos se generaban en una sólida practicidad. Intuición y decisión".¹⁷

Gazzera añade:

"Vandor se interesaba más por los detalles que conformaba la oportunidad que por las líneas de largo plazo [...] por otra parte nunca conducía el tema hacia profundidades que desconocía, y si alguien pretendía llevarlo en esa dirección su respuesta práctica y firme lo disuadía con su falta de interés por el buceo".¹⁸

Ese pragmatismo y esa falta de interés por las discusiones ideológicas traen problemas al que investiga la cuestión sindical en ese tiempo. Vandor actuaba en el ámbito del entendimiento personal, el trato cerrado con un whisky en el ministerio, o el acuerdo alcanzado en una mesa de café. Esto significa por definición que las acciones específicas no eran

autoridades antiperonistas, tenían conocimiento de la amplitud de las reclamaciones peronistas en estas materias. El escollo con que siempre tropezó en esos años la unidad sindical peronistas/no peronistas consistió precisamente en el rechazo por los gremios independientes de las vastas exigencias políticas y sociales formuladas por aquéllos. Por ejemplo, los independientes se rehusaron a continuar con el Plan de Lucha después de que Illia accedió a la mayoría de las demandas económicas iniciales de la CGT. A su juicio, la afirmación peronista de que el objetivo fundamental de dicho Plan era ejercer presión en favor de una reestructuración social y política más profunda no tenía validez. Análogamente, desde 1955 siempre hubo una constante polémica acerca de ese punto entre los sindicatos peronistas y el Estado. Todo ministro de Trabajo o de Economía de los gobiernos posteriores a 1955 consideró necesario afirmar que los gremios debían confinar su actividad al campo no político. En cambio, la prensa peronista abordó con frecuencia el mismo tema para sostener lo opuesto. La polémica culminó, al menos en sus términos legales, cuando el gobierno radical dio el decreto 969, que reglamentaba la Ley de Asociaciones Profesionales. El artículo 2 del decreto prohibía a los gremios "todo acto de proselitismo o propaganda ideológica". La respuesta consistió en argumentar que el interés por los problemas políticos e ideológicos de carácter amplio no era un estrecho interés partidario. Los peronistas afirmaron reflejar la legítima preocupación de los trabajadores argentinos por una sociedad más justa y una nación soberana, interés que hallaba su expresión ideológica y política en su adhesión al peronismo y a su principal voz institucional, los sindicatos de esa línea.

No obstante el consenso ideológico general existente dentro de la principal corriente sindical peronista e incluso dentro del sector disidente, el movimiento gremial no era un cuerpo homogéneo que actuara al unísono en respuesta concordante a un conjunto de principios ideológicos comunes. Aun dentro de la corriente principal había divergencias de opinión acerca de las maneras de alcanzar sus aspiraciones ideológicas generales. La cuestión de cuáles eran exactamente las tácticas y formas políticas más acertadas seguía provocando acalorados debates y se centraba principalmente en torno del problema de como debían interpretar los sindicatos la función política que se adjudicaban frente al Estado, a otras fuerzas sociales y, por cierto, frente al movimiento peronista mismo.

respaldadas por bosquejos netos de posiciones ideológicas o siquiera por expresiones de razonamiento táctico. No existen en verdad documentos reveladores de cuál era el pensamiento más íntimo de Vandor, sobre el cual pudiera estructurarse alguna explicación de sus propósitos generales. En vista de ello resulta tentador concordar con Amado Olmos, jefe del sindicato del personal no médico de hospitales y servicios de salud, durante largo tiempo amigo íntimo de Vandor y considerado por muchos la eminencia gris del vandonismo en su momento de esplendor. Dijo Olmos:

"el vandonismo exhibe una brecha imposible de cerrar: su falta de ideología. Así Vandor obra a merced del aventurerismo, del oportunismo político".¹⁹

Sin embargo, resultaría excesivo aceptar esa evaluación al pie de la letra. Ante todo, porque el pragmatismo y el oportunismo son ideológicos en sí mismos: la negación consciente de toda ideología es parte de la filosofía del sentido común tan cara a los pragmáticos, sean dirigentes sindicales o no. En segundo lugar, porque existen algunas declaraciones de intenciones y principios formuladas por Vandor y ciertamente muchas otras que efectuaron sus más locuaces acólitos. Las escasas pruebas escritas con que contamos sugieren que las opiniones personales de Vandor eran fundamentalmente irreflexivas: coinciden en forma precisa con los presupuestos ideológicos que hemos bosquejado poco antes.²⁰ En lo que se refiere a las consecuencias políticas concretas de esta posición para los sindicatos peronistas dependemos de las pruebas que han quedado de la práctica sindical concreta, así como de las justificaciones de esas prácticas por algunos de los principales sindicatos enrolados en la línea vandonista.

El examen de esos elementos demuestra que hubo cierta coherencia, es decir un proyecto subyacente, en la actividad vandonista. Se trató de la creación de un movimiento político de base sindical, cuyos rasgos generales hemos descrito en el capítulo anterior. Fundamentalmente, no pasaba de ser una elaboración conceptual de la posición de facto en que los gremios se encontraron a sí mismos después de 1955. Era la expresión del deseo de la mayoría de los líderes sindicales de establecerse como principal fuerza política representativa de los trabajadores argentinos, posición que debía ser negociada con otras fuerzas políticas y sociales. En este sentido, el vandonismo representaba la tentativa, ejecutada por esa cúpula sindical, de consolidarse e institucionalizar el poder

político acumulado en manos de ellos gracias a su posición como representantes de la mayoría de los trabajadores organizados y gracias a su papel como principal expresión legitimada del peronismo. En tanto que en 1958 habían delegado ese poder en un forastero, Arturo Frondizi, y después frente a su "traición" habían mantenido una actitud de voto en blanco, a partir de 1962 se mostraron resueltos a construir, toda vez que les fuera posible, su propio aparato político, basado en su control del movimiento gremial, y en esa forma entenderse directamente con otras fuerzas sociales y políticas.

A menudo se describió ese proyecto como el intento de crear un "partido obrero", es decir un partido político de la clase trabajadora íntimamente conectado con los sindicatos y modelado con arreglo a las líneas de los clásicos partidos socialdemócratas de tipo laborista. No hay duda de que ese proyecto tenía raíces históricas en el peronismo, sobre todo bajo forma del Partido Laborista constituido en 1945. Esta concepción, tal como se presentó al promediar la década 1960-70, fue asociada sobre todo a los nombres de Olmos y Gazzera. Sin embargo, es importante aclarar qué entendía el vandonismo por esa posición. Olmos, en una entrevista que sostuvo poco antes de su muerte, producida en 1968, después de su ruptura con Vandor, fue interrogado acerca de su "entusiasma defensa de 'un partido obrero, un partido clasista'". Olmos consideró necesario corregir la idea de su interlocutor:

"Yo en la conferencia en el año 59 en el gremio de Tabaco en Flores, manifestaba justamente todo lo contrario. Exigía si la hegemonía en la conducción táctica del Movimiento Peronista y demostraba toda una trayectoria de acciones políticas por el movimiento obrero. Quedaba así establecido que éste era la gran fuerza, la base y lo único que había sustentado al Peronismo en los momentos aciagos y en aquel tiempo entendía que esta hegemonía debía ser ejercida por los dirigentes de los sindicatos [...]. Esto, repito, no significa excluir a las otras fuerzas, pues de ser así se negaría totalmente la esencia del Peronismo."²¹

De estas palabras se desprenden dos rasgos fundamentales del proyecto vandonista. En primer término, el ideal político y el modelo social propugnados por Vandor y la cúpula sindical seguían siendo los derivados de la experiencia peronista 1946-55. La insistencia de Olmos en el sentido de que la hegemonía sindical no implicaba una concepción "clasista" del movimiento indicaba claramente su compromiso con la idea de que el peronismo era una alianza multiclassista cuyo

objetivo político último consistía en la formación de una amplia coalición con los otros "factores de poder" de la vida nacional: la iglesia, los empleadores dolados de conciencia social y nacional, y las fuerzas armadas.²² Los conceptos de autonomía y actividad independiente de la clase trabajadora, que habían formado parte del discurso militante durante la Resistencia, habían sido borrados en gran medida de esta idea de hegemonía sindical dentro del movimiento peronista. En una conferencia que dio a dirigentes gremiales en 1966, Olmos se refirió nostálgicamente a la era anterior a 1955, durante la cual se había asistido al "gran abrazo fraternal entre las fuerzas armadas y el pueblo" en interés de la nación y de la justicia social.²³ Esa unidad, afirmó Olmos, debía ser recreada.

En segundo lugar, resulta claro que para el vanguardismo la cuestión fundamental en juego era el equilibrio interno de fuerzas dentro del peronismo. Un tema constante de la propaganda sindical peronista en esos años consistió en poner de relieve, según vimos, el peso social y político de los sindicatos en un marco social amplio. Esto suponía, como lo dejan en claro las afirmaciones de Olmos, una exigencia de hegemonía dentro del movimiento, tanto sobre los neoperonistas como sobre el ala política oficial. Pero lo que también implicaba era una pretensión de relativa independencia respecto del propio Perón. Si realmente eran la "columna vertebral" del movimiento, como el propio Perón se complacía en decir, entonces debían tener la libertad necesaria para determinar sus tácticas en la Argentina, para negociar su propio destino. En el punto culminante de la disputa con Perón e Isabel en 1965 y 1966, el poderoso sindicato de Luz y Fuerza, vanguardista, publicó en su revista un editorial que sintetizaba esa aspiración:

"La condición primera para que el justicialismo avance en el panorama nacional es la de que el movimiento obrero, esa masa vital de su estructura, no quede subalternamente rezagado a modo de 'furgón de cola' del movimiento [...] no es posible mantener el manejo del movimiento en forma unipersonal, la clave es la formación de un verdadero equipo de conducción, integrado por figuras realmente representativas y que fundamentalmente trabajen con mentalidad de equipo; este organismo debe planificar la acción interna."²⁴

Ese había sido precisamente, pocos meses antes, el mensaje del congreso de Avellaneda y era la causa básica del conflicto con Perón en aquel momento.

Dentro de ese marco general, la cuestión de las tácticas políticas que debían seguirse era flexible. En lo relativo a

métodos y formas políticas, el vanguardismo era esencialmente agnóstico y oportunista. Ese era el nivel donde el pragmatismo de Vandor tenía su oportunidad de triunfar. En general era evidente que sus partidarios preferían sacar ventaja, si se presentaba la oportunidad, del sistema de partido político legal para obtener sus fines políticos. En 1965, un descolante vocero del vanguardismo subrayó que si bien los sindicatos debían mantener abiertas sus opciones en todo cuanto se refiriese a las formas de lucha,

"en general debemos evitar el tremendismo guerrillista y el colaboracionismo y llegar al triunfo mediante sucesivas confrontaciones electorales".²⁵

Por cierto a veces los vanguardistas no ahoraban declaraciones sobre el fundamental papel representativo que los sindicatos desempeñaban en el sistema político y la forma en que serían capaces de revigorizar un sistema liberal exhausto. Ese tono se manifestó sobre todo a continuación de las elecciones de 1965. Inmediatamente después de ellas, un editorial del periódico de los obreros petroleros elogió con entusiasmo la elección de candidatos sindicales. Esos comicios, dijo, habían demostrado que

"la expresión orgánica de la masa, los sindicalistas y éstos rompiendo todos los esquemas han revolucionado el sistema electoral y representativo".²⁶

Esa preferencia por la política electoral era lógica. Los líderes gremiales comprendían cabalmente que su capacidad para ganar poder e influencia en el sistema político provenía de su capacidad para movilizar a sus bases, en términos políticos en cuanto ellos eran los delegados de Perón en la Argentina y, en términos más puramente sindicales, en cuanto organizadores de la masa laboral. La base decisiva de su poder de negociación se encontraba en la presión que podían ejercer mediante esa capacidad representativa y de movilización. Por definición, un sistema electoral pluralista les dejaba el mayor margen posible para ejercer ese poder de negociación. Les complacía declarar a los periodistas que tenían la opción táctica de alcanzar el poder mediante elecciones o bien, si sus éxitos electorales provocaban una reacción militar, de encabezar una resistencia popular contra la dictadura castrense.²⁷ Sin embargo, no se hacían ilusiones acerca de las dificultades que los regímenes militares les planteaban en materia de negocia-

ción y presión políticas. Negociar con los militares tendía a ser un proceso unilateral, y por su experiencia personal desde 1955 la mayor parte de los dirigentes gremiales sabían lo que podía depararles, en materia de comodidades y prestigio, la resistencia popular a los regímenes militares.

Sin embargo, esa tendencia general no debe impedirnos ver dos importantes circunstancias que contribuían a definir la situación. Ante todo, los dirigentes obreros, conscientes de la *realpolitik* de la Argentina posterior a 1955, no podían menos que tomar en cuenta la posibilidad, incluso la probabilidad, de una intervención militar. Vando recibía regularmente a visitantes militares en la sede central de los meliurísticos, como lo hacía José Alonso en la CGT. Interrogado sobre los rumores de que los peronistas sostenían negociaciones con el ejército acerca de un posible golpe contra el gobierno radical, un dirigente gremial explicó:

"Nosotros tenemos el deber de especular con esas situaciones, son datos de la realidad que no podemos eludir, pero de ninguna manera propiciamos el golpe de estado."²⁸

De modo que si bien podían especular acerca de la insatisfacción militar, no tomaban la iniciativa de conversar sobre el posible derrocamiento del sistema partidario democrático.

Más aún, si bien era cierto que la política electoral y el sistema pluralista constituían una opción atractiva, no por ello dejaban de ser precisamente eso, una opción entre varias. El hecho mismo de ser dirigentes gremiales dotados de una base fuera del sistema político los liberaba de comprometerse con la política electoral o depositar sus esperanzas en ella, a diferencia de lo que sucedía con los grupos políticos tradicionales. En parte era ese hecho lo que nutría los recelos que el vandomismo inspiró, en el lapso 1962-66, a los neoperonistas y al ala política del justicialismo. En cuanto políticos, sus futuras posibilidades estaban subordinadas por completo a la continuación de un sistema electoral pluralista y a la aceptación del peronismo como un legítimo contendiente en el seno de ese sistema. En cambio, los dirigentes sindicales podían enfrentar con ecuanimidad mucho mayor la posibilidad de una interferencia militar.

También debe tomarse en cuenta el hecho de que, dada la índole del "juego político" en la Argentina de esos años, con sus implícitas limitaciones en cuanto a aceptación del poder y la influencia del peronismo, las ganancias políticas que

podían obtener los sindicatos eran particularmente magras. Participar en el sistema de partidos, si bien constituía sin duda una fuente de poder para los líderes gremiales, por otro lado no podía dejar de debilitarlos, y a principios de 1966 ganaba terreno en la principal corriente de la cúpula vandomista una sensación de desilusión. Dos factores acentuaban ese sentimiento. En primer término, el decreto 969, dado por el gobierno radical, cuyas cláusulas combatían específicamente la actividad política de los dirigentes gremiales y prescribían el control interno de sus sindicatos mediante cláusulas que imponían la democracia interna y otorgaban autonomía financiera a las ramas locales, disposiciones que parecían simbolizar tanto las limitaciones como los enervantes efectos del compromiso con la política. En segundo lugar, la victoria del candidato personal de Perón en los comicios de Mendoza, episodio que perturbó los planes políticos de Vando y de gran parte de la cúpula gremial local, subrayó en los más enfáticos términos las limitaciones a que estaba sujeta su actividad política independiente. Las fervientes esperanzas que habían alimentado tan solo doce meses atrás acerca de su capacidad para utilizar en ventaja propia el sistema político se desvanecieron. No hay dudas de que desde las elecciones de Mendoza hasta el golpe castrense de junio de 1966, la cúpula vandomista contempló con creciente interés una intervención militar que pusiera fin a ese "juego imposible". Y la respuesta peronista a ese golpe fue, por cierto, uniformemente cálida. Fue, según el periódico de los petroleros:

"El fin de un régimen donde la ficción, las palabras vacías, la inacción y el lento pero seguro derrumbe de la República eran las características definitorias y naturales de un sistema que ya desde hace muchos años ha dejado de ser eficaz."²⁹

El contraste con el elusivo elogio que el mismo periódico había tributado 18 meses atrás a la intervención gremial en los comicios de 1965, aporte que había revitalizado, según ese gremio, al decrepito régimen liberal, demostró ahora su desencanto fundamental frente a las formas políticas y la genuina desilusión que sin duda experimentaban.

JOSÉ ALONSO Y LAS ILUSIONES NEOCORPORATIVISTAS

Desde 1963 en adelante José Alonso, secretario general de la CGT, y un grupo de ideólogos y asesores empezaron a

publicar una serie de documentos donde analizaban la necesidad del "cambio de estructuras" que hacía falta en la Argentina para que este país alcanzara realmente el desarrollo y la justicia social. Los documentos tenían por principal objeto forjar la imagen de una central obrera técnicamente idónea, que miraba adelante y era capaz de discutir responsable y científicamente el futuro de la nación. Desde el punto de vista económico, ofrecían poco que los distinguiera de la filosofía desarrollista y peronista en general. Políticamente, empero, se referían una y otra vez a las condiciones políticas previamente necesarias para que pudieran operarse los cambios económicos y sociales ambicionados.

La exposición más clara de estas ideas se encontró en un documento titulado *La CGT en marcha hacia el cambio de estructuras*, publicado en enero de 1965. Tras analizar la situación económica y social, el trabajo dirigía su atención al escenario político. En lo relativo a los partidos existentes, llegaba a la conclusión de que no existían en la Argentina, ni cualitativa ni cuantitativamente, partidos políticos que pudieran aducir representatividad. Por eso -agregaba- era inadmisibles que los partidos fueran considerados el único canal de expresión de la vida política. En el plano político -concluía- los grandes movimientos populares no tienen posibilidades de expresión real.³⁰

A esa forma de representación limitada el documento contraponía la legítima representación que los grupos sociales pueden adquirir por sí mismos cuando los organismos institucionales que deberían cumplir esa función no lo hacen adecuadamente. Rechazados los partidos políticos, entonces, por ser inadecuados cuerpos representativos, esa función pasa a ser asumida naturalmente por organismos como la CGT. A continuación el trabajo demostraba estadísticamente la mayor representatividad de la central obrera en comparación con los partidos políticos si se la juzgaba por el número de afiliados. El crucial problema que el documento abordaba después era el de la manera de institucionalizar esa función representativa y asegurar al grupo social el sitio correspondiente en las deliberaciones del Estado. La cuestión se resolvía preconizando la necesidad de crear un organismo específico con participación de los sindicatos, y poder de decisión en el más alto nivel del Estado.³¹

Sólo sobre la base de esa fórmula institucional podía efectuarse un genuino esfuerzo hacia los cambios económicos y sociales necesarios.

Lo que este análisis implicaba en términos políticos, aparte de una crítica de la eficacia de las formas representativas liberales, no estaba muy bien explicado. En el documento que acabamos de examinar se dice con bastante claridad que los nuevos organismos representativos tienen por fin complementar a los partidos políticos antes que reemplazarlos. Sin embargo, en otros documentos se ofrece un análisis más cabalmente corporativista. Por ejemplo, en un trabajo de 1966 encontramos el siguiente análisis:

"la participación en las soluciones generales de las auténticas y representativas fuerzas dinámicas del quehacer nacional es vital; en el ámbito laboral las entidades empresarias y las fuerzas de trabajo, las instituciones de la cultura y el arte, los sectores de la técnica y la ciencia nacional. Todas esas fuerzas, a través de genuinas representaciones y en posesión de sus legítimos intereses, deberán integrar un organismo, actuando junto al gobierno y proponiendo soluciones en el justo equilibrio que requiere la gran solución nacional [...] este organismo tendrá que ser estructurado por equipos de actividades específicas en la base, que investiguen y analicen los problemas de cada sector para luego en un órgano de cúspide, integrado por representantes de todos los equipos, estudiar las soluciones parciales a la luz de la solución del todo".³²

Aquí se torna evidente una juiciosa mezcla de neorporativismo y tecnocraticismo, no menos que una negación de la legitimidad de los partidos tradicionales. Ese tono había estado por cierto implícito en mucha ideología desarrollista, que ponía persistentemente el énfasis sobre la necesidad de tomar en cuenta factores de poder tales como las fuerzas armadas, la iglesia y las organizaciones patronales. Si bien la forma política específica de organización de esos "factores de poder" había sido presentada en general como un "frente nacional y popular" que participaría en el proceso electoral, poner el énfasis sobre fuerzas decisivas ajenas a los partidos políticos -las fuerzas dinámicas- podía evidentemente reflejar la idea de una solución más corporativista.

No obstante la clara atracción que las soluciones y formas corporativistas ejercían sobre los consejeros que rodeaban a Alonso en la CGT, los contornos de las nuevas formas de participación deseadas se mantuvieron en general muy vagos. Por momentos verdaderamente parció que la crítica del sistema partidario liberal conducía a una suerte de quietismo político, al abandono de toda clase de actividad en ese terreno. En 1964, el propio Alonso escribió que existían tres maneras

de llegar al poder que permitirían a los sindicatos acceder a él compartiéndolo o bien alcanzar todo el poder para ellos. Uno consistía en la competición política, el otro en la acción revolucionaria violenta y el tercero en lo que denominó "socialismo múltiple". Alonso rechazó las dos primeras alternativas y optó en cambio por el camino de la transformación pacífica, que sería consumada a través de las obras sociales, que denominaba "sindicalismo múltiple".

Este gremialismo se basaba en la premisa de que un sindicato debe interesarse en todos los aspectos de la vida de sus miembros y atender una vasta gama de necesidades sociales. Alonso pasó a referirse a los "edificios propios, capaces de cubrir una completa actividad sindical, [...] concretar un campo de recreo donde haya un vasto lugar para esparcimiento [...] un lugar al aire libre, capaz de brindar un día alegre y sano para el afiliado y su familia [...] donde también haya actividad deportiva [...] la edificación de barrios obreros". Concluía con una pregunta y una afirmación:

"¿No es una buena manera de demostrar lo bueno de un sindicato? ¿No es una buena manera de realizar la transformación social? Si todo esto se hiciera por parte de todas las organizaciones obreras la suma de ella inevitablemente nos daría el gobierno sindical que tanto reclamamos."³³

Esta concepción, que llevaba hasta sus últimas consecuencias lógicas la idea de la función del servicio social cumplido por el sindicato, también resolvía explícitamente el problema del poder estatal y político. Se hubiera dicho que, a juicio de Alonso, la creación por los sindicatos de lo que virtualmente era un Estado dentro del Estado llevaría inexorablemente, por la fuerza del ejemplo, a un cambio fundamental en las relaciones de poder político. Lo que los sindicatos necesitaban para lograrlo era simplemente dedicarse a desarrollar sus servicios sociales.

Con mayor frecuencia, sin embargo, la crítica del liberalismo político condujo a volver la mirada, al menos implícitamente, hacia los militares como medio de lograr concretamente formas "adecuadas" de participación política. Esto debía lograrse como socios iguales en un nuevo pacto sindical-militar que derribaría al decadente régimen liberal, o bien como acólitos entusiastas de un golpe militar. Alonso, cuyas buenas relaciones con los círculos castrenses nadie ignoraba, fue uno de los primeros en celebrar en junio de 1966 el golpe de Onganía.

Entre Alonso y el sector vandortista que dominaba el movimiento gremial no había desacuerdos ideológicos fundamentales. Las diferencias existentes se relacionaban en gran medida con tácticas y ambiciones personales. Según hemos señalado, los vandortistas eran muy capaces, cuando la situación lo exigía, de fustigar la decadencia y falta de credibilidad representativa de los organismos políticos liberales. También ellos podían pronunciarse en favor de proyectos militares neocorporativistas. A la luz de esta circunstancia, por cierto resulta tentador ver esa fuerte corriente subterránea de corporativismo del gremialismo peronista como una lógica consecuencia de los elementos semifascistas presentes en la filosofía peronista inicial, capaces siempre de manifestarse a la luz en el sindicalismo peronista. Sin embargo, aunque en el peronismo inicial podía advertirse alguna influencia del corporativismo y el fascismo europeos, no se justifica buscar en un pecado original del peronismo la explicación de esas corrientes neocorporativistas.

En primer término, si bien el antiliberalismo y el antipolitismo constituyeron un fuerte elemento de la ideología peronista, es necesario entender con claridad qué significaba realmente ese elemento. Aunque el propio Perón y otros ideólogos de su línea intentaron a veces otorgarle a esa actitud un contenido teórico profundo, en el peronismo posterior a 1955 ese elemento significó en general un rechazo de la estructura política antidemocrática existente antes que un rechazo de la política pluralista como tal. Amado Olmos, en la conferencia a dirigentes gremiales que ya hemos mencionado, atacó con vehemencia a quienes apelaban a la fórmula de los "factores de poder" para justificar el rechazo del proceso democrático como tal:

"En la Argentina las formas de la democracia representativa sirvieron, siempre que funcionaron sin fraude, para llevar al poder a los representantes del pueblo. Y sólo con fraude y violencia pudieron negar esta realidad".³⁴

Una estructura política que marginaba o, en el mejor de los casos, restringía la expresión de la mayoría de la clase trabajadora no podía menos que tener una legitimidad limitada. Si a esto agregamos la realidad de un poderoso aparato sindical dotado de funciones tanto políticas como económicas, no hace falta buscar alguna presunta adhesión original a ideas fascistas para explicar las tendencias neocorporativistas. Incluso Alonso, caso único por la coherencia y profundidad de su

adopción del neocorporativismo, tomó sus ideas principalmente de los ideólogos comunitarios social-católicos antes que de cualquier teoría fascista anterior a 1955.³⁵

Los vandonistas se opusieron en la CGT a esa línea de Alonso no tanto por desacuerdo ideológico cuanto por consideraciones tácticas. En un momento en que estaban empeñados en construir un partido político independiente del control directo de Perón y capaz de conquistar progresivamente influencia mediante contiendas electorales, las jeremiadas de Alonso contra la totalidad del sistema político hacían sonar una nota discordante. En enero de 1965, al ser presentado al Comité Nacional de la CGT, para su aprobación por este cuerpo, el documento *La CGT en marcha hacia el cambio de estructuras*, Alonso lo defendió afirmando que en ese texto la CGT mostraba que desempeñaba un papel que ningún partido político era capaz de cumplir. A lo cual Vandon respondió que el secretario general de la CGT parecía haber olvidado que el Partido Justicialista había presentado un programa completo. Asimismo, logró que se aplazara la consideración de la propuesta de Alonso.³⁶ Durante toda la campaña electoral de 1965, Alonso continuó insistiendo, mediante declaraciones y documentos de la CGT, en la futilidad de las elecciones y en que la política tradicional no podía resolver ninguno de los problemas nacionales. Por debajo de este desacuerdo se encontraba la cuestión de quién iba a negociar con el apoyo del peso electoral peronista. Alonso, cuya base personal estaba en el débil gremio del vestido, se vio cada vez más marginado después de que el Plan de Lucha se agotara, a la vez que Vandon, gracias a su control de las 62 Organizaciones, acrecentó su influencia política después de las elecciones de 1965. El énfasis puesto por Alonso en la mayor representatividad de los sindicatos en general y de la CGT en particular había sido, en parte, una tentativa por modificar en su favor ese equilibrio interno del poder.

LA IZQUIERDA PERONISTA: DUROS Y GUERRILLEROS

Más allá de esos sectores de la principal corriente sindical peronista se encontraban aquellos que habían formado el núcleo de la línea dura en el período anterior a 1962 y de los que se decía, con frecuencia cada vez mayor, que formaban parte de la izquierda peronista. Debilitados por la represión, el agotamiento y la deserción, hacia 1963 los duros se veían

cada vez más marginados tanto dentro de sus sindicatos particulares como en las 62 Organizaciones. En junio de 1963 realizaron en Rosario una reunión plenaria nacional de la línea dura, y en octubre del mismo año todavía eran capaces de reunir a unos 300 activistas de la Capital Federal en el local del sindicato de cortadores de cuero.³⁷ Pero la realidad era que desde el punto de vista de la organización constituían una fuerza declinante. Hacia 1963, la mayoría de sus líderes habían sido expulsados de las 62, Sebastián Borro, por ejemplo, había sido obligado a renunciar por entenderse que como no trabajaba en la industria de la carne desde 1959 ya no era formalmente un sindicalista y no se lo podía elegir, en consecuencia, para integrar las 62.³⁸ El caso de Borro no difería de los casos de muchos dirigentes "duros". Hacia mediados de la década 1960-70 muchos de ellos no desempeñaban función gremial alguna. Si bien disfrutaban a menudo de considerable prestigio personal gracias a su pasado, contaban en las organizaciones con escasa base desde la cual pudieran oponerse a la dominación del movimiento por los vandonistas. Conseraban en la órbita gremial una influencia confinada a unos pocos sindicatos pequeños, como los trabajadores de la industria farmacéutica, los telefónicos, los obreros de la construcción naval y los cortadores de cuero, así como a cierto número de sindicatos pequeños del interior. Aunque en general se consideraba que el sindicato de textiles pertenecía a la línea dura, Framini y quienes lo acompañaban en la jefatura del gremio eran cada vez más reacios a comprometerse abiertamente. Además se efectuaron algunos intentos de reunir a grupos disidentes que estaban tanto en los sindicatos como al margen de éstos. En 1964 se constituyó una Confederación de Agrupaciones Peronistas Ortodoxas dirigida por Jorge Di Pascuale, pero su repercusión en el movimiento sindical fue escasa.³⁹

La medida en la cual este núcleo de "duros" podía diferenciarse en función de una ideología formal de las corrientes que dominaban el gremialismo peronista era limitada. Tal como en la era de Frondizi, la línea dura seguía sustentándose sobre su capital moral, la "estructura de sentimiento" característica de los años de la Resistencia, sus pequeños actos de heroísmo cotidiano, sus cautiverios, sus martirios. Cada vez más se definió a sí misma como defensora de los valores de la Resistencia y adversaria de aquellos a quienes consideraba la principal amenaza contra dichos valores, o sea la burocracia sindical. La oposición a Vandon y al vandonismo

llegó a ser un principio fundamental. Los duros vieron en el vandomismo una tracción a los sacrificios hechos en la era de la Resistencia anterior a 1962, a las posibilidades que habían existido entonces y a la experiencia comunitaria del "pueblo peronista". El vandomismo abandonaba una posición de intransigencia principista; corrompido por el cebo del poder político y gremial, aceptaba transar con un régimen fundamentalmente ilegítimo y antipopular. El epitome de esa tracción consistía en el proyecto de la jefatura vandomista de convertir al peronismo en un partido político de base sindical que funcionara dentro del sistema. Para los duros esto significaba la aceptación de un sistema que apuntaba a excluir al peronismo y al propio Perón del poder político. El precio que debía pagarse por la participación de los gremios en el sistema sólo podía consistir en el abandono de la auténtica misión del peronismo.

A esa participación en el sistema político los duros contrapusieron la conservación de la "genuina" esencia del movimiento peronista, de sus valores "reales" tales como los había encarnado la Resistencia al régimen militar posterior a 1955. Marcelo Repezza, miembro del comité ejecutivo del grupo Peronismo de Acción Revolucionaria, con base en Córdoba, al comentar las elecciones presidenciales de julio de 1963 sostuvo:

"Decimos que no se debe participar pues hacerlo sería desconocer el auténtico sentir revolucionario de nuestro movimiento [...] no se puede echar por la borda una experiencia de 8 años de lucha permanente y constante por conquistar el poder para el pueblo."⁴⁰

Precisamente, los duros tomaron posición sobre la base del rechazo de una realidad que parecía "hacer a un lado" esa experiencia de solidaridad, heroísmo y sufrimiento.

Parte intrínseca de esa actitud fue una lealtad inamovible y básica a Perón. Más aun, la existencia misma de una corriente de "izquierda" claramente definida durante ese período dependió decisivamente del propio Perón y sus necesidades tácticas. Los duros lograron organizarse con la mayor eficacia posible, durante este período, en el espacio que les dejó la decisión de Perón de actuar contra una importante corriente que le disputaba el control del movimiento, o bien su necesidad de conferir al peronismo una postura radical que fortaleciera su posición para negociar en alguna coyuntura específica. Esa línea dura era en consecuencia, en gran medida, su criatura, tan fuerte y tan definida como el quera que fuese.

Para los duros, Perón era el árbitro final de la "verdadera" esencia del peronismo y de sus necesidades tácticas y estratégicas. Lo cual se manifestó claramente en la reacción de los duros ante la tentativa de la cúpula vandomista por dar al conjunto del movimiento una estructura institucionalizada, formalmente democrática. Durante los primeros meses del gobierno de Frondizi, la mayor parte de los sindicalistas peronistas habían demostrado, en el mejor de los casos, sólo un tibio interés por la reconstrucción del peronismo como movimiento político. Al promediar la década 1960-70, cuando tal formalización sólo podía ser dominada por la burocracia sindical, esa falta de interés se transformó, en el caso de los duros, en manifiesta hostilidad a la simple idea. En octubre de 1963, al realizarse en la Capital Federal una reunión de activistas, uno de los oradores, al referirse a la Junta Reorganizadora recientemente creada por Perón, expuso claramente aquella actitud:

"Si aquí lo que se persigue es organizar un partido democrático con autoridades elegidas democráticamente estamos seguros de que esa no es la posición de Perón."⁴¹

Para los duros, la falta de una estructura formal de partido político constituía una virtud, puesto que facilitaba el mantenimiento del nexo esencial entre el líder y su pueblo. Esto a su vez reflejaba una laguna más profunda en el centro del sindicalismo peronista más extremado. Su sindicalismo militante, lo que hemos definido como compromiso obrerista en el momento en que se manifestó en la era de la Resistencia, se abstuvo de abordar el problema del poder estatal y las formas de organización política de la clase trabajadora. Se podría aducir que esa carencia se remontaba, históricamente, al fracaso del proyecto laborista original en los primeros años del régimen peronista. Si bien, como hemos visto, hubo elementos del peronismo obrero que empezaron a plantear cuestiones de autonomía y organización política de la clase trabajadora durante el período de la Resistencia, esos proyectos en gran medida nacieron muertos. Por su parte los duros, como herederos de esa tradición, llenaron ciertamente aquel vacío exaltando el fundamental eje "líder-masas" en torno del cual debía organizarse la clase trabajadora. Esto invocaba ciertas nociones decisivas de la cultura obrera peronista. En ella ocupaba un lugar importante el simbólico encuentro entre el líder y su pueblo el 17 de octubre, sin ayuda de estructura política alguna, como lo ocupaba la figura de Evita, otro

símbolo del excepcional diálogo entre los trabajadores y el Estado, encarnado por las figuras de Perón y Evita. Para los duros, recrear esa singular relación significaba tanto una solución del problema del poder estatal y las formas políticas como una garantía de defensa contra las corruptoras pretensiones de la cúpula sindical.

En el período 1962-66 se tornó claro que esa actitud significaba, además, poner el destino de la organización en gran medida en manos de Perón. Por ejemplo, así como respondieron al "giro a la izquierda" dispuesto por Perón a mediados de 1962 para oponerse frontalmente al gobierno de Guido, quedaron sumidos en la perplejidad y la incertidumbre cuando el líder les ordenó apoyar al conservador popular Vicente Solano Lima en las elecciones realizadas nueve meses después.⁴² En forma similar, Perón hizo resurgir momentáneamente la izquierda al promediar 1964, cuando alentó la formación del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP). El programa presentado en la conferencia en que se lo fundó fue en varios sentidos el más extremista de todos los adoptados por el movimiento. Afirmó que "el pueblo debe oponerse al ejército de ocupación del régimen con sus propias fuerzas armadas y milicias obreras, las que le permitirán la conquista del poder". El MRP se puso a la tarea de "construir la estructura y desarrollar la conducción revolucionaria centralizada".⁴³

Sin embargo, a pesar de todo su extremismo programático, el MRP tenía escasa sustancia que respaldara su retórica revolucionaria. Estimulado inicialmente por Perón, consistió en una desdichada amalgama de duros sindicales, algunos sectores juveniles comandados por Gustavo Rearte, y elementos de la "línea Villalón", quien se había definido a sí mismo como castrista y partidario de la insurrección. El factor unificante de esta inverosímil alianza consistía en la oposición a Vandor y la lealtad a Perón. Framini aceptó la jefatura de la nueva organización, aunque al parecer intervino poco en su gestación. El rápido eclipse del MRP se debió a la falta de apoyo por parte de Perón. Si bien crear un grupo opositor leal a él y de línea extremista constituía una útil arma táctica en momentos en que el poder y la independencia de la jefatura gremial parecían amenazar su propia posición, Perón quería que ese grupo no pasara de ser un instrumento de presión táctica. Crear algo similar a una corriente "revolucionaria" dominante habría sido contrario a toda su concepción de lo que el movimiento peronista tenía que ser. A su juicio, una de

las fuerzas de éste debía residir en su capacidad para cobijar todo, a la manera de un paraguas, de modo que a él le fuera posible utilizar una u otra de sus distintas alas: en este contexto, la resurrección de la "izquierda" en tal o cual momento dado podía no ser más que un recurso táctico.

A fines de 1965, Perón apeló de nuevo a la "izquierda" como parte de su campaña contra Vandor. Los "izquierdistas" emergieron de la tiniebla para sumarse a la derecha del movimiento obrero dirigida por Alonso y constituir las "62 Organizaciones de Pie junto a Perón". La única base de esta alianza con una figura que los duros habían considerado un conspicuo "traidor" a la verdadera esencia del peronismo consistía en la lealtad a Perón, como lo dejaba perfectamente en claro el nombre de la nueva organización.

Muchos militantes que pertenecieron a la corriente de "izquierda" se contentaron con verse a esa luz, es decir, como opción táctica a disposición de Perón. Sebastián Borro, que tomó parte en la conferencia donde se fundó el MRP, declaró posteriormente que

"ofreceremos a Perón la opción revolucionaria sí, como parece probable, las negociaciones con el gobierno andan mal".⁴⁴

Se tornan patente la pobreza de las ambiciones típicas de la izquierda y su limitada estimación de sus perspectivas propias, tan patente como lo era la tragedia personal de una generación de militantes simbolizada por la frase de Sebastián Borro. En su caso, una trayectoria personal que había incluido la cárcel en la época de Aramburu y la jefatura de la ocupación del Frigorífico Lisandro de la Torre terminaba en la farsa del MRP, y todo en nombre a la lealtad a un hombre. Tal vez esa trayectoria pueda ser toniada como el poco apropiado epitafio de toda una generación de militantes.

En materia de ideología formal esa izquierda elaboró muy poco por lo cual pueda distinguirse. El Programa de Huerta Grande, dado a conocer cuando culminaba el "giro a la izquierda" impuesto por Perón, contenía poco que lo diferenciara de los programas de otras tendencias del movimiento. También su estrategia política estaba, en general, mal definida. En su reunión plenaria de Rosario, la línea dura había proclamado el "abstencionismo revolucionario" frente a las elecciones.⁴⁵ Los duros rechazaban la estrategia de participación postulada por la burocracia sindical y ofrecían lo que Borro denominaba "posibilidad revolucionaria". Sin embargo, no estaba nada claro lo que significaba esa "posibilidad". En un sentido, toda la

dinámica de la Resistencia y la regresión siguiente a 1955 había contribuido a esa carencia de definición ideológica formal. Ya hemos comentado cómo la experiencia de la Resistencia tendió a ser encarnada por un característico conjunto de valores y estructuras de sentimiento en vez de conducir a la elaboración de una ideología extremista distintiva. El peronismo, dentro de la dicotomía Perón/anti-Perón que prevalecía en el contexto político y revolucionario, era por sí mismo izquierdista y adversario de las instituciones consagradas, así como revolucionario, y la lealtad al líder exiliado y vilipendiado pareció a menudo bastar como definición de una estrategia política. De allí también la indole de la terminología en que la izquierda peronista definió a sus enemigos y se caracterizó a sí misma. Su vocabulario político era esencialmente moral. La burocracia sindical había "traicionado" las rectas luchas contra los gobiernos antiperonistas, la derecha consistía en aquellos que habían corrompido y traicionado la esencia del peronismo y, en último término, quienes habían traicionado al propio Perón. Conceptos como los de "leales", "traidores", "duros", "blandos", "fe", "lealtad", "intransigencia", que constituían el núcleo tradicional de la terminología de los duros, se referían en definitiva a cualidades morales y valores éticos antes que a programas políticos y preceptos ideológicos. En cuanto tales, constituían a la vez un obstáculo y una ayuda para los sectores disidentes del sindicalismo peronista. Por un lado, la carencia de una ideología y una línea política definidas y distintivas los dejaba inermes ante la abrumadora lógica práctica de la principal corriente gremialista, y también los dejaba mucho más sujetos a los caprichos tácticos de Perón. Por otro lado, su afirmación de la vigencia de esos valores, así como la experiencia histórica de la cual se derivaban, encontraba eco en un notorio sentimiento de los militantes y, presumiblemente, de las bases. Era el sentimiento y la certidumbre de que, cualquiera que pudiese ser la inevitable necesidad de transar, no por ello el peronismo como movimiento social y expresión de la clase trabajadora era algo distinto. En este sentido, la "izquierda" del sindicalismo peronista vino a representar la "conciencia" del movimiento, una voz que conservaba significado para muchos militantes y aun para otros, a pesar de los compromisos personales y las acomodaciones a que debieran avenirse. Si bien en muchos sentidos compartían con la "burocracia" dominante el mismo lenguaje formal de disensión y crítica, esa retórica cuyos principales blancos eran la "oligarquía" y las "clases parásitas" asociadas al "imperio-

lismo", la insistencia de la izquierda en definirse a sí misma en función de los valores y la experiencia originados en la lucha de clases, el sufrimiento y la solidaridad, empapó ese lenguaje de un tono y de significados radicalmente distintos. Estaban también quienes intentaban ir más allá de esa intransigencia moral y refirmar bajo una luz más drástica aún la indole y las necesidades del peronismo. John William Cooke, por ejemplo, criticó en sus escritos de esos años la naturaleza irreflexiva de la lealtad personal a Perón que caracterizaba a gran parte de la posición "izquierdista". En una carta a Perón denunció muy claramente lo que denominaba el fetichismo "del líder" y la sustitución del análisis concreto de hechos por lo que calificaba de "fanatismos tribales".⁴⁶ En otra carta a Perón agregaba:

"En vez de posiciones concretas frente a una historia igualmente concreta, fórmulas generales (todos queremos ser libres, soberanos y que haya justicia social) pero eso es retórica si no se traduce en enunciados y propósitos que son los del peronismo."⁴⁷

Cooke intentó ofrecer un análisis de la burocracia política y sindical que dominaba al peronismo. En sus escritos se distanció del moralismo de conceptos como los de "leales" y "traidores" y sugirió que la raíz de la burocracia se encontraba en la indole del peronismo en cuanto alianza policlasista. A su juicio, combatir esa burocracia sólo sería posible transformando, en vez de retraerse a una refirmación de los valores tradicionales del peronismo. En esa forma, Cooke enfrentó muy directamente el problema del poder político. Definió la tarea de un peronismo de izquierda -lo que él llamaba un peronismo revolucionario- como la creación de un partido de vanguardia que procuraba reconciliar la política del peronismo con el papel que, objetivamente, le asignaba el enfrentamiento de las fuerzas sociales en la vida diaria de los trabajadores.

"Peronismo como movimiento de masas es y siempre ha sido superior a Peronismo como estructura para las masas; por esta razón el espontaneísmo siempre ha dominado la acción planificada de las masas."⁴⁸

Cooke puso de relieve el papel del peronismo como movimiento antimperialista. Definió a la Argentina como un país semicolonial, explotado y dominado por el capital extranjero, principalmente norteamericano. Como tal, sus inte-

reses fundamentales coincidían con los de otras naciones que luchaban contra el imperialismo. En cuanto expresión de la lucha antimperialista argentina, el peronismo debía buscar sus aliados naturales en otros movimientos antimperialistas. A juicio de Cooke, el resultado final de esta lucha antimperialista sería, en la Argentina, la creación de una forma nacional de socialismo. Cooke rechazó específicamente el concepto, perteneciente al peronismo tradicional, de una tercera posición entre el comunismo soviético y el capitalismo occidental. No sin recomendar una actitud vigilante con la URSS y los partidos satélites de esa potencia en otros países, Cooke insistió ante Perón en que, en último término, en la lucha mundial sólo existían dos bandos —el capitalista/imperialista y el socialista/antimperialista— y en que Perón no debía vacilar en comprometer al peronismo con el segundo.

En este punto se pone en evidencia el influjo de la experiencia cubana de Cooke. El concepto de un partido político de vanguardia, que en ese tiempo empezó a debatirse cada vez más en ciertos círculos del movimiento peronista, respondía a un origen en gran medida castrista. Con esto se relacionaba íntimamente la atracción cada vez mayor que ejercían las ideas de guerra de guerrilla, derivadas en medida no menor de la experiencia cubana. Al promediar la década 1960-70, el "foquismo" era poco menos que un lugar común en ciertos círculos peronistas. Cooke vivió en Cuba durante varios años al iniciarse y promediar la década 1960-70 y, en cierto sentido, su campaña por el foquismo fue el producto mental directo de un militante aislado, sin contacto con la corriente central del movimiento obrero y sus luchas cotidianas. Pero ese aislamiento no debe ser entendido en términos puramente personales ni geográficos. La atracción que la estrategia guerrillera ejerció en ese momento sobre los militantes que se encontraban en la Argentina debe ser vista fundamentalmente como resultado del proceso de desmovilización del movimiento de masas en los primeros años de 1960-70, del consiguiente dominio ejercido por una burocracia sindical acomodaticia y de la marginación, que ese proceso trajo consigo, de los activistas y líderes más militantes.

Muchos de esos militantes no podían menos que sentirse atraídos por el foquismo. En primer término, el énfasis que la teoría de la guerrilla ponía en la victoria de la voluntad subjetiva sobre las condiciones objetivas tenía que atraer a los activistas como medio de lanzar un desafío a una realidad de desmovilización y aislamiento. En segundo lugar, la idea de

una elite entregada a una acción independiente, pero ejecutada en nombre de las masas, a las que galvanizaría con su conflicto con las autoridades opresoras, encontró fácilmente eco en militantes cada vez más desconectados de toda posibilidad de intervenir en forma que tuviese algún sentido en las luchas de las masas: es decir, en activistas sin campo alguno donde desarrollar actividades que tuvieran validez. Tercero, la teoría de la guerrilla aportó una solución convincente del problema de lo que había marchado mal en el movimiento: explicó por qué la Resistencia y la militancia de los trabajadores peronistas no habían bastado para abrir una brecha. La respuesta fue que había faltado disciplina y había faltado una vanguardia armada.

En términos absolutos, el número de militantes sindicales que siguió el camino de Cooke fue pequeño. Algunas figuras de la línea dura se movieron en esa dirección, y tendió a presentarse una separación entre los duros más tradicionales y los que ahora se definían como peronistas "revolucionarios". En tanto que algunas figuras gremiales, como Jorge Di Pascuale y Gustavo Rearte, líder de los obreros de la industria farmacéutica y de la Juventud Revolucionaria Peronista, recibieron entrenamiento en Cuba, la mayor parte de los duros tradicionales optaron por esperar y, según lo dijo Sebastián Borro, "tener fe en Perón".⁴⁸ En cambio, la estrategia guerrillera tuvo impacto especialmente fuerte en una generación más joven de militantes políticos. Para ellos la guerrilla actuó como una variable explicativa decisiva, cuya ausencia había condenado al fracaso luchas anteriores. En tanto que Cooke se esforzó por encontrarle sitio al foquismo en el contexto de un peronismo transformado en partido de masas revolucionario, la mayoría de los militantes más jóvenes que empezaron a adoptar esa doctrina en aquellos años, y cuyo número aumentó considerablemente durante el régimen militar de 1966-73, la concibieron como un medio y un fin en sí misma. A esa joven generación la realidad del peronismo al promediar la década 1960-70 le parecía bastante clara: era un movimiento que incorporaba las tendencias antimperialistas y anticapitalistas de las masas argentinas, pero movimiento dominado por una burocracia sindical que había sumergido profundamente y sofocado esos anhelos. Para esos militantes la guerra de guerrillas, la lucha armada en todas sus muchas variantes ideológicas, ofrecía la solución. Implicaba un desmantamiento efectivo de la lucha sindical, por entenderse que el poder de la burocracia gremial era absoluto, y no obstante

la constante evocación de la figura de la clase obrera significaba, en definitiva, un rechazo elitista de la historia de la clase trabajadora peronista con toda su complejidad y sus contradicciones. Esta joven generación echó al olvido incluso la tentativa de Cooke por encontrar una explicación política e ideológica más profunda del fracaso de la Resistencia; en efecto, para estos jóvenes todo se redujo a un problema de potencia de fuego y voluntad de poder individual. Los resultados de esta herencia se tornaron trágicamente patentes en la Argentina posterior a 1973.

NOTAS

¹ Justicialismo, octubre de 1963. El documento fue emitido por la Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones el 23 de agosto de 1963.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Véase, por ejemplo, el programa de la CGE para noviembre de 1962. Propone un nuevo impulso expansionista basado en la provisión de nuevos créditos por el Estado, lo cual estaba en abierto contraste con la inquietud, más ortodoxa, que los déficit presupuestarios y el control de la inflación inspiraban al organismo tradicional de la gran industria, la Unión Industrial Argentina. Véase *Primera Plana*, 13 de noviembre de 1962.

⁶ CGT: *El porqué de la Semana de Protesta*, mayo de 1963.

⁷ CGT: *La CGT en marcha hacia un cambio de estructuras*, enero de 1965, pág. 25.

⁸ *Primera Plana*, 11 de marzo de 1965.

⁹ *Documentación e Información Laboral*, n° 29, julio de 1962.

¹⁰ CGT: *La CGT convoca al pueblo a Cabildo Abierto*, tercera etapa del Plan de Lucha, julio de 1964.

¹¹ *Dinamís*, 13 de enero de 1966.

¹² *Palabra Argentina*, 4 de febrero de 1960.

¹³ AOT, diciembre de 1961.

¹⁴ "Sindicalismo comercial" fue el término acuñado por R. F. Hoxie en *Trade Unionism in the United States*, Nueva York, 1923, para referirse a la dedicación exclusiva a la negociación colectiva, en torno del precio del trabajo en el mercado laboral. Rechazaba específicamente la validez de la intervención en actividades políticas o sociales; por ejemplo, la provisión de servicios sociales.

¹⁵ CGT: *Boletín Informativo Semanal de la CGT*, n° 64, junio de 1964.

¹⁶ Un ejemplo de la primera reacción hay en Ricardo Otero: *Augusto Vandor*, Buenos Aires, 1970. Otero, que había sido una

figura relativamente menor en el aparato de la UOM, llegó a ministro de Trabajo en 1973. En cuanto al enfoque demonológico, virtualmente puede representarlo cualquier expresión de la prensa peronista de izquierda. Sin embargo, véanse en particular el número de *La Causa Peronista* del 3 de septiembre de 1974 y el número de *El Descamisado* del 10 de febrero de 1974. Este último describe la "elección" de Vandor en 1969, asesinado que a juicio de la guerrilla peronista debía ser el exorcismo que el peronismo necesitaba para purgarse de su principal fuente de corrupción moral y degeneración ideológica.

¹⁷ Gazzera: "Nosotros los dirigentes", pág. 113.

¹⁸ Ibid., pág. 114.

¹⁹ Walsh: ¿Quién mató a Rosendo?, pág. 175.

²⁰ Ibid., págs. 175-79.

²¹ *Primera Plana*, 19 de diciembre de 1967.

²² El término "clasista" fue utilizado en general por los peronistas para referirse a la concepción marxista de la política y la sociedad. Ponia el énfasis en la lucha de clases y en la organización de la clase trabajadora en su propio partido independiente para alcanzar sus objetivos específicos de clase.

²³ Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA): *Curso de capacitación sindical*, 25 de noviembre de 1966.

²⁴ *Dinamís*, 13 de enero de 1966.

²⁵ *Petróleo Argentino*, noviembre/diciembre de 1965.

²⁶ Ibid., mayo/junio de 1965.

²⁷ Véase *Primera Plana*, 5 de febrero de 1964.

²⁸ Ibid., 11 de mayo de 1965.

²⁹ *Petróleo Argentino*, junio/julio de 1966.

³⁰ CGT: *La CGT en marcha*, pág. 65.

³¹ Ibid., pág. 71.

³² *Dinamís*, 14 de julio de 1966.

³³ CGT: *Boletín Informativo Semanal*, n° 64, 7 de junio de 1964.

³⁴ ATSA: *Curso de capacitación sindical*, pág. 17.

³⁵ Esto me fue confirmado por Enrique Micó, sucesor de Alonso como dirigente de los trabajadores del vestido, en una entrevista efectuada en febrero de 1974. En más de una oportunidad fue comentado el origen católico de algunos elementos decisivos de la ideología peronista, e incluso el propio Perón lo hizo.

³⁶ *Documentación e Información Laboral*, n° 60, febrero de 1965.

³⁷ *Primera Plana*, 8 de octubre de 1963.

³⁸ Entrevista con Sebastián Borro, Buenos Aires, febrero de 1974.

³⁹ Entrevista con Jorge Di Pascuale, Buenos Aires, febrero de 1974.

⁴⁰ *Compañero*, 21 de junio de 1963.

⁴¹ *Primera Plana*, 8 de octubre de 1963.

⁴² Fue durante el "giro a la izquierda" cuando Franchi se convirtió en el más prominente de los "duros" y pronunció una serie de discursos que sonaban a revolucionarios, donde sostuvo que "dentro del sistema capitalista no hay solución". En parte, el giro de

Perón fue simbolizado por una actitud simpática con la izquierda no peronista, en especial el partido Comunista y el partido Socialista de Vanguardia. También se destacaron algunas declaraciones de simpatía para Castro y el Tercer Mundo en general. Era el período en que Cooke urgía a Perón a instalar su base en Cuba.

⁴³ Acerca del programa del MRP véase "Peronismo: el exilio (1955-73)", *Cuadernos de Marcha*, n° 71, Montevideo, 1973.

⁴⁴ *Primera Plana*, 11 de agosto de 1964. Detalles de la conferencia del MRP, así como una crítica posterior por parte de uno de sus principales participantes, Gustavo Rearte, hay en *En Lucha*, órgano del Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, n° 13, diciembre de 1973.

⁴⁵ *Compañero*, 21 de junio de 1963.

⁴⁶ Perón-Cooke, *Correspondencia*, vol. 2, pág. 189.

⁴⁷ *Ibid.*, pág. 190.

⁴⁸ "A los compañeros de la carne. Agrupación Blanca y Negra, Rosario", carta de Cooke, 1965, mimeografiada, en los archivos del autor.

⁴⁹ Entrevista con Jorge Di Pascuale, Buenos Aires, febrero de 1974, entrevista con Sebastián Borro, Buenos Aires, febrero de 1974. Cuando le pregunté a Borro cómo había podido aceptar tantas derrotas y retrocesos, se limitó a encogerse de hombros y a decir: "Hay que tener fe en Perón y el pueblo".

QUINTA PARTE

Los trabajadores y la Revolución Argentina: de Onganía a la vuelta de Perón, 1966-73

Los dirigentes sindicales peronistas
son asediados: nuevos actores y nuevos desafíos.

"Durante la dictadura había claramente una relación de fuerzas favorables para la lucha. Todo el mundo, los partidos políticos de la clase media y el movimiento obrero cordobés estaban en la oposición al gobierno. Todo lo que venía del gobierno era rechazado, por lo tanto había que combatir para cambiarlo. Había una gran lucha en la que se mezclaba todo un sector mayoritario de la población [...] por lo tanto si nosotros éramos golpeados teníamos la simpatía, el apoyo de toda la población. Estábamos todos juntos contra la dictadura [...]. Por lo tanto todo lo que se hiciera para crear un clima, una contrapropuesta contra la postura del gobierno era correcto y todos nos apoyaban desde distintos puntos de vista y sin distinciones partidarias."

Militante del sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba, 1973.

LA REVOLUCIÓN ARGENTINA Y LA CRISIS DE LA DIRIGENCIA SINDICAL

No obstante la cautela y las reservas que expresó públicamente, la cúpula sindical peronista apenas si pudo disimular su satisfacción con el curso de los acontecimientos que llevaron a la destitución de Arturo Illia. Dirigentes de un movimiento gremial que afirmaba tener más de dos millones de afiliados, bajo la jefatura de Vandor habían elaborado una

estrategia conducente a su reaparición en el escenario argentino como fuerza social y política de indiscutible peso, una fuerza con la que todo aspirante al poder político se vería obligado a negociar. Los acontecimientos producidos en el primer mes del régimen presidido por el general Juan Carlos Onganía parecieron testimoniar el éxito de esa estrategia y dar la razón a los optimistas cálculos de los líderes gremiales. Se designó titular de la cartera de Trabajo a una figura aparentemente simpática y se dejaron sin efecto muchas de las medidas del gobierno radical que tendían a debilitar el poder de la dirección sindical. Para simbolizar la nueva era que nacía en las relaciones Estado/sindicatos, Augusto Vandor firmó en la Casa Rosada, rodeado por dignatarios del flamante régimen militar, el nuevo convenio de los metalúrgicos con los empleadores.

Dentro del movimiento gremial y dentro del peronismo la posición de la cúpula sindical permaneció en gran medida intacta. Si bien sus recientes desacuerdos con Perón habían demostrado la falta de sensatez que suponía desafiar directamente el poder político del caudillo exiliado, la oposición surgida con este motivo antes del golpe de junio de 1966 no había logrado poner en apuros al vandomismo. La izquierda peronista era una fuerza marginal y los militantes de la generación de la Resistencia se encontraban aislados y dispersos. Vandor y sus acólitos tenían indiscutible dominio sobre una clase trabajadora altamente organizada que había demostrado su capacidad para movilizaciones masivas y disciplinadas, pero cuyas acciones eran controladas con rigor creciente por la cúpula, que dejaba escaso margen a la activa participación de las masas, propia de una era anterior.

El tácito apoyo que la dirigencia sindical dio al golpe de junio de 1966 se basó en una profunda antipatía al gobierno de Illia, al que los gremialistas consideraban tanto carente de legitimidad como adverso a las necesidades de los trabajadores. Por añadidura, simpatizaban con figuras militares que aparentemente compartían sus análisis de las soluciones necesarias para los problemas argentinos. Sus frecuentes contactos con las figuras que movieron los hilos del golpe en los meses anteriores a junio, junto con el peso de la presencia sindical en el país, parecieron asegurarles un acceso privilegiado a las nuevas autoridades públicas. Por añadidura, un régimen militar sería capaz —según razonaron los dirigentes gremiales— de reducir seriamente la capacidad de Perón para maniobrar políticamente y ejercer su autoridad dentro del

movimiento a expensas de ellos. A pesar de toda su apariencia razonable, pronto se demostró que esos cálculos eran ilusorios.¹ En el lapso de un año el movimiento gremial se encontraba desorganizado, frente a un fuerte régimen autoritario resuelto a imponer la racionalización de la economía argentina y a modernizar el Estado.

Este enfrentamiento con el régimen de Onganía había de sumir a la jerarquía sindical en una crisis cada vez más honda que culminó en los años siguientes a 1969, aun cuando los militares se retractaron de las políticas que desencadenaron la crisis en el lapso 1966-69. La crisis de la dirigencia gremial se caracterizó por cierto número de rasgos: un creciente problema de credibilidad con sus bases en momentos de agudo conflicto social; la aparición dentro de los sindicatos de un poderoso movimiento opositor que cuestionó profundamente las estructuras gremiales existentes; un problema cada vez más grave de divisiones internas entre los gremialistas, y finalmente un peligro, que se acentuaba, de quedar aislados dentro de un peronismo resurgente a medida de que su tradicional dominio dentro del movimiento era desafiado por nuevos actores.

La causa inmediata de esta crisis se encontró en la línea política del nuevo régimen militar. Por una parte suspendió toda actividad y organización políticas, en la esperanza de abolir así el complejo sistema de negociación mediante el cual grupos sociales rivales intentaban imponer en el plano del Estado las reclamaciones de sus volantes. A juicio de los ideólogos de la Revolución Argentina esto inevitablemente conducía, en una sociedad como la de este país, donde los grupos sociales tenían un alto grado de organización y movilidad, a un sistema muy frágil que condenaba a las autoridades a interminables rondas de negociaciones y a una política económica vacilante. La condición de cumplimiento indispensable para la eficaz aplicación de su política económica debía ser entonces descargar al Estado de esas obligaciones suspendiendo el funcionamiento de partidos políticos pluralistas. A todo eso, uno de los principales elementos de poder de la jefatura sindical peronista, tal como había emergido después de 1958, era precisamente su capacidad para participar en un sistema que obligaba a los gobiernos y a los grupos políticos a negociar para obtener el apoyo o la neutralidad de los sindicatos. Una de las premisas básicas de la estrategia de Vandor había sido la de aplicar con eficacia la presión gremial peronista dentro de un sistema caracterizado

por la presencia de gobiernos débiles y adversarios políticos divididos. En este sentido, resulta claro que el entusiasmo de los dirigentes sindicales por la deposición del gobierno de Illia constituyó un grueso error de cálculo. Al despojar a los grupos sociales de la posibilidad de negociar políticamente, Onganía echó las bases para la constitución de un Estado controlado por una élite militar y económica, que no estaba en la obligación de atender a otros grupos de interés.²

El objetivo primordial del sistema fue llevar adelante el plan económico formulado —finalmente— a principios de 1967 y adjudicado al ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena. El principal blanco al que apuntaba la nueva autoridad estatal así inmunizada contra la política, eran la clase trabajadora y el movimiento gremial. El plan económico de Krieger Vasena no suponía algo totalmente nuevo. Representaba una continuación lógica de las estrategias desarrollistas para modernizar la economía argentina. La modernización y la racionalización conducirían a la creación de un sector de la economía dominante y dinámico, basado en aquellas industrias establecidas en la primera ola desarrollista de fines de la década 1950-60 y comienzos de la siguiente y donde prevalecería el capital extranjero. Sobre la base de este moderno sector fabricante de bienes de consumo duraderos y bienes de capital modernos, la Argentina podría competir en el mercado mundial como exportadora de ciertos productos manufacturados.

El desarrollo de ese sector dinámico sería logrado mediante una sustancial redistribución de los ingresos en detrimento de los asalariados y del sector agrario y en beneficio de los empleadores urbanos. Lo cual sería alcanzado mediante un riguroso control estatal de los salarios y la reorientación por el Estado de los recursos generados por las exportaciones agrarias. Se estableció un riguroso plan de estabilización monetaria consistente en controles salariales, restricción fiscal, reducción del crédito y una devaluación del peso. Además de ayudar al logro de los cambios deseados en cuanto a distribución de la renta, esto controlaría la inflación y conduciría a una predictibilidad de los costos indispensable para las empresas modernas. El plan de Krieger Vasena proponía asimismo erradicar las áreas de la economía consideradas irracionales e improductivas. Un importante objetivo de la racionalización era el sector estatal, en especial el transporte, pero también y en general la burocracia gubernamental y las economías regionales subsidiadas. Otro claro objetivo eran las empresas nacionales medianas que habían utilizado su

acceso a las facetas políticas del Estado para obtener protección económica. La suspensión por Onganía del "juego político" contrajo drásticamente la posibilidad de recurrir al favor del Estado para obtener exenciones impositivas, líneas de crédito, contratos oficiales, protecciones arancelarias y concesiones monopólicas. El resultado lógico de esta política tenía que ser una intensa concentración de recursos económicos en el polo dinámico de la economía argentina.³

Al imponer estrictos límites a los aumentos salariales y diferir la realización normal de negociaciones colectivas, y suspender a la vez el funcionamiento del sistema político, el régimen militar logró socavar las dos fuentes básicas del poder de negociación de los sindicatos en la Argentina. El control salarial y la veda de política democrática no eran mayormente nuevos; lo que sí era nuevo, al menos en la historia argentina más reciente, era la existencia de un régimen autoritario que hubiese concentrado y centralizado el poder estatal y estuviera resuelto a utilizar inequívocamente el poder del Estado contra los sindicatos y la clase trabajadora.

La determinación del nuevo régimen de controlar, y si era necesario reprimir, al movimiento laboral se hizo patente antes incluso de que se formulara el plan de Krieger Vasena. En octubre de 1966 el gobierno anunció un régimen de trabajo totalmente nuevo para los puertos argentinos, donde se abolian muchas ventajas laborales cuya obtención se remontaba a 1946. Cuando el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) declaró una huelga de protesta, fue inmediatamente intervenido. Al mismo tiempo el gobierno inició la aplicación unilateral de esquemas de racionalización en los ferrocarriles y en la industria azucarera del Noroeste del país. En respuesta a tales medidas y al plan de Krieger Vasena, la CGT anunció un plan de lucha que culminaría, si no se obtenían concesiones, en una huelga general. El gobierno contestó implantando de nuevo el decreto 969 del gobierno radical, que establecía un control estricto del funcionamiento gremial; además las autoridades suspendieron sus conversaciones con la CGT y prohibieron todas las reuniones públicas. Cuando la CGT, ante la intransigencia del gobierno, declaró con renuencia una huelga general para el 1º de marzo de 1967, la respuesta de Onganía consistió en suprimir la personería jurídica de los sindicatos metalúrgico, textil, telefónico, de la industria farmacéutica y de los obreros azucareros tucumánicos. El 15 de marzo fue intervenido el principal gremio ferroviario, la Unión Ferroviaria, y sus dirigentes despedidos de

sus puestos en los ferrocarrillos. Se congelaron los salarios por 18 meses y se dejó sin efecto la ley 14.250 de negociaciones colectivas. Frente a semejante desastre la CGT designó a una comisión encargada de reanudar las conversaciones con las autoridades. La respuesta fue el silencio. En consecuencia, el dilema ante el cual el régimen ponía a la cúpula sindical era claro: por una parte, si se resistía a la política gubernamental su existencia como institución podía correr peligro y, por otra parte, los dirigentes se exponían a perder crédito ante sus afiliados a medida que éstos experimentarían los impactos de la política oficial.

La primera manifestación de la crisis que esta situación causó en el seno de la cúpula gremial peronista se produjo en el congreso convocado para normalizar la CGT, en marzo de 1968. El congreso eligió nuevo secretario general a Raimundo Ongaro, dirigente del sindicato de gráficos de Buenos Aires. Una notoria mayoría de los dirigentes sindicales presentes criticaron la incapacidad de los dirigentes anteriores para resistir a las políticas del régimen y preconizaron una actitud de franca resistencia al gobierno, en los planos tanto político como gremial. Esta actitud fue encabezada por muchos de aquellos sindicatos sobre los que más habían hecho impacto las medidas económicas y que habían sido intervenidos. Vandor y sus aliados se retiraron de ese cuerpo, que asumió el nombre de CGT Paseo Colón o CGT de los Argentinos, y fundaron una central rival, la CGT Azopardo. Aunque se oponían a la política del gobierno, los vandoristas postularon una estrategia cautelosa orientada a recuperar la energía sindical y permanecer abiertos al diálogo con el gobierno. Éste se rehusó a reconocer a uno y otro organismo central y estimuló el surgimiento, entre los líderes, de una tendencia que proponía cooperar sin ambages con el régimen. Conocidos como participacionistas, o más formalmente como Nueva Corriente de Opinión, estos dirigentes aceptaron la retórica corporativista del gobierno sobre la necesidad de que los sindicatos conciliaran una firme alianza con el Estado.

Si bien las preferencias ideológicas individuales de los líderes intervinieron en la elección de la central a la que apoyaron, la existencia misma de esas distintas corrientes reflejó en lo esencial diferentes respuestas lógicas a la situación que los gremios enfrentaron después de 1966. Los que más habían sido golpeados por la política económica y los que habían sido intervenidos por el Estado se sintieron atraídos inicialmente por una actitud de franca oposición. El fracaso

del Plan de Lucha de 1967 había probado que la tradicional política sindical de movillar y negociar ya era impracticable. Para algunos sindicatos, a los que les quedaba poco que perder en términos institucionales, la oposición frontal al régimen parecía una opción lógica. Esta actitud podía legitimarse, dentro de la cultura política peronista, presentándose como la encarnación de la tradicional oposición a los regímenes militares "gorilas". En los casos de muchos gremios pequeños de posición habitualmente vulnerable en el mercado laboral, una vez fracasada la estrategia vandorista en la que habían confiado, la opción de hacerse un nido en el nuevo régimen y lograr mediante la colaboración con el Estado y su protección lo que las negociaciones ya no podían reportarles, parecía una alternativa igualmente lógica. Además, en la historia y la ideología peronistas podían encontrarse antecedentes de esa alianza con militares. Según vimos en el capítulo precedente, en los años anteriores había surgido en la CGT una influyente línea de opinión que preconizaba una estrategia sindical neocorporativista.

En cuanto a la principal corriente de sindicatos peronistas agrupados en torno de Vandor, la necesidad de opciones tan drásticas como las mencionadas no parecía tan clara. La historia reciente mostraba que los regímenes militares, tarde o temprano, debían llegar a un acuerdo con el movimiento gremial. Para este sector, en consecuencia, la mejor estrategia parecía consistir en la tradicional, o sea, oponerse en general a la política del gobierno manteniendo sin embargo abiertas líneas de comunicación por las que pudiera llegarse a eventuales transacciones. En el corto plazo, esto significaba guardar cierta compostura y no proporeionar al régimen pretextos para debilitar más al gremialismo. Tal estrategia pragmática no carecía de coherencia con el tono general de desmovilización de los trabajadores que siguió al fracaso de las tentativas por resistir al régimen de Onganía durante sus nueve primeros meses.

Ese movimiento gremial debilitado y dividido fue una condición fundamental para el logro de la paz social que impulsó el régimen de Onganía en los tres años siguientes al golpe de junio. Para asegurarse mejor esa tranquilidad social el régimen agilizó y concentró los poderes represivos del Estado. Para el gremialismo los efectos de esa política fueron palpables: las huelgas se transformaron en luchas contra el Estado, y de ellas, por lo tanto, debían encargarse las fuerzas armadas. En esas circunstancias, no pudo existir, como es

lógico, ninguna oposición nacional coherente a la política laboral del gobierno. Pero las pretensiones de Onganía fueron mucho más allá, pues intentó controlar o eliminar grandes áreas de la vida social y política. Las universidades, por ejemplo, y todas las cuestiones educacionales pasaron a depender directamente del Poder Ejecutivo; intervinieron las universidades, el Estado impuso nuevas materias de estudio. Se reformó el Código Penal para facilitar la lucha contra la "subversión", lo que incrementó en gran medida las facultades de la policía, que además recibió en algunos casos autoridad judicial. El poder del Estado central fue expandido mediante la creación de cierto número de organismos a cargo de cuestiones de seguridad y de economía, responsables directamente ante el Poder Ejecutivo.⁴

Si bien durante los tres primeros años el gobierno de Onganía alcanzó éxitos considerables en cuanto a tranquilidad sindical y sofocación de la oposición social, bajo la superficie no dejaron de generarse diversas tensiones. La política económica de Krieger Vasena perjudicó a muchos sectores. Los comerciantes pequeños y medianos, los empresarios regionales, los propietarios rurales y los asalariados urbanos formaron parte de un vasto espectro social que vio deteriorarse sus posiciones, aunque no siempre en términos absolutos, por lo menos en relación con las fortunas de los grandes intereses industriales y financieros del sector moderno de la economía.⁵

A la insatisfacción de esos grupos económicos se sumó en 1969 una oposición civil generalizada al autoritarismo del régimen de Onganía. La suspensión por los militares de la vigencia de los canales e instituciones normales de la sociedad civil y política les enajenó la buena voluntad de amplios sectores de la sociedad argentina. En sus primeros años el nuevo régimen logró controlar esa oposición democrática, tal como controló la oposición sindical. Más aún, los ideólogos de la Revolución Argentina habían previsto la insatisfacción causada por el plan económico y por la dislocación de las instituciones sociales y políticas tradicionales. En consecuencia, promulgaron que una vez reconstruida con éxito, aunque no sin sacrificio, la economía durante el período que llamaron "el tiempo económico", esos sectores sociales y políticos tendrían mayor participación en los tiempos "social" y "político" de la Revolución. Esos calmos pronósticos acerca de cómo se manipularían lo social y lo político se habían trizas en mayo de 1969, al combinarse el descontento general y las tensiones de la sociedad civil en una ola de desobediencia social generalizada.

Esta erupción tuvo por escenarios las principales ciudades del interior, particularmente Córdoba. A principios de mayo de 1969 los estudiantes universitarios de Corrientes, La Plata, Rosario y Córdoba chocaron violentamente con la policía en el curso de una serie de manifestaciones. Si bien el motivo visible de la protesta estudiantil fue el aumento de los precios en los comedores universitarios, las universidades ya eran desde principios del año focos de una creciente oposición al gobierno de Onganía. En los choques de mayo las delegaciones regionales locales de la CGT y los sindicatos locales declararon su solidaridad con los estudiantes. En Rosario los conflictos alcanzaron tal intensidad que el ejército declaró la ciudad "zona de guerra" y estableció cortes marciales para juzgar a los civiles. El impacto nacional de esos episodios fue inmediato. Las dos CGT proclamaron para el 30 de mayo una huelga general de 24 horas en protesta contra la represión oficial y la política económica. Fue, en más de dos años, el primer signo de movilización sindical organizada en escala nacional.

En Córdoba estos hechos provocaron un eco particularmente intenso. A la inquietud estudiantil, de indudable importancia en tan importante centro universitario, se agregaron la presencia de un gobernador particularmente impopular impuesto por el gobierno nacional y un movimiento sindical local ya movilizado por específicas razones propias. Desde principios de 1969 el gremialismo de Córdoba estaba en campaña por la abolición de los "descuentos zonales", que permitían a los empleadores cordobeses pagar salarios inferiores en un 11 por ciento a los pagados en Buenos Aires por el mismo trabajo. En mayo las autoridades nacionales abolieron también el sábado inglés, práctica por la cual los obreros trabajaban el sábado medio día que cobraban como día entero. Por efecto del sábado inglés los obreros trabajaban en Córdoba 44 horas por semana, en comparación con las 48 que se trabajaban en el resto del país. El 14 de mayo, los obreros de las plantas automovilísticas IKA-Renault, principal empresa de la ciudad, declararon una huelga de protesta de 48 horas. En el momento en que la asamblea se disolvía, los concurrentes fueron violentamente atacados por la policía, lo cual provocó en toda la ciudad un paro de 48 horas que expresaba la protesta contra muchos motivos de queja: política, salarial del gobierno, "descuentos zonales", abolición del sábado inglés y aumento de las metas de producción en las plantas automovilísticas. Movilizadas las bases y en vista del creciente descontento popular contra las autoridades locales,

los sindicatos cordobeses proclamaron una huelga general de 48 horas que debía iniciarse el 29 de mayo, es decir la víspera de la proyectada huelga nacional.

En la mañana del 29 se produjeron choques entre los estudiantes y la policía en el barrio Clínicas, principal sector estudiantil de la ciudad. Al intervenir en las refriegas los obreros en huelga, encabezados por los trabajadores del transporte y los de Luz y Fuerza, los choques se propagaron a toda la zona céntrica y empezaron a surgir barricadas. A mediodía una columna de más de 4000 obreros de las plantas Renault, situadas en la periferia de la ciudad, llegaron al centro, aislaron a la fuerza policial y la obligaron a retirarse. A las 13 los obreros y estudiantes ya controlaban una área de 150 manzanas en el centro de la ciudad. Por la tarde, el ejército inició la operación de recuperar esa zona y al caer la noche los manifestantes se habían retirado a los suburbios, donde atacaron comisarias y otros símbolos de la autoridad. Mientras tanto, francotiradores disparaban contra las tropas, retardando su avance por la ciudad. El "Cordobazo" terminó el sábado 31, con un saldo de unas 300 personas detenidas por los militares, tal vez alrededor de 30 muertos y no menos de 500 heridos.⁶

En términos nacionales, el Cordobazo significó el principio del final de la Revolución Argentina. Ante todo, y más inmediatamente, destruyó la imagen de invencibilidad del régimen y puso fin a la desmoralizadora apatía y a la sensación de impotencia cívica inculcadas por tres años de "paz" impuesta por los militares. El restablecimiento del orden por el ejército se logró gracias al espectáculo que dieron los soldados enfrentando directamente a sus conciudadanos en las calles de la tercera ciudad del país. Los altos oficiales de las fuerzas armadas empezaron a considerar cada vez más excesivo el costo social que se pagaba, en términos de oposición engendrada, por llevar a la práctica las políticas de Onganía. Krieger Vasena y todo el gabinete renunciaron casi al instante de los acontecimientos. El Cordobazo demostró también la desavenencia que separaba a grandes sectores de la sociedad argentina y un Estado cada vez más aislado, arrogante y carente de legitimidad. Los peligros de esa desavenencia quedaron simbolizados por la devastación del sector céntrico de Córdoba.

Para las fuerzas armadas lo más inquietante tal vez fueron la impredecibilidad, la ferocidad y la indole descontrolada de la conmoción. Si bien los hechos ocurrieron formalmente

en el marco de los llamamientos lanzados por los sindicalistas y los partidos políticos opositores, la movilización misma desbordó los canales normales de la protesta y la oposición. La experiencia de los años siguientes demostraría con más contundencia aún las dificultades que suponía canalizar e institucionalizar esa protesta. Frente a esa situación, las fuerzas armadas emprendieron en el período 1969-73 una búsqueda, que se fue acelerando lentamente, de una solución política que aplacara la intranquilidad desencadenada por ellas mismas. Para la cúpula sindical, las implicaciones del Cordobazo no fueron menos ominosas. Tomados de sorpresa por los acontecimientos, intentaron sacar ventaja de la conmoción y también de la incertidumbre del régimen para ponerse a la cabeza de la movilización y restablecer así su crédito, y también su poder de negociación con las autoridades en un nivel nacional. Pero en los años siguientes al Cordobazo se asistió a una intensificación de la crisis del liderazgo sindical peronista, al ser desafiada su posición por nuevos actores y corrientes.

NUEVOS ACTORES: LA REBELIÓN DE LAS BASES

La ola de protestas obreras que se inició en 1969 y creció en los años siguientes se relacionó con factores estructurales de largo plazo que desde tiempo atrás socavaban el poder de la cúpula y facilitaban el surgimiento de nuevas fuerzas opositoras dentro del movimiento gremial. El foco de esas nuevas fuerzas residía en las industrias establecidas por Frondizi, en especial la producción de automotores, la siderurgia y la petroquímica. Geográficamente estaban centradas en Córdoba, en el cinturón industrial que bordeaba el río Paraná desde el sur de Rosario, y en los suburbios constituyentes del Gran Buenos Aires. En el período 1969-73 los movimientos de protesta militante emergieron principalmente en Córdoba y en el cinturón industrial del Paraná. La aparición en esos nuevos sectores industriales de trabajadores que osaban desafiar tanto al gobierno como a los líderes gremiales provocó honda sorpresa a éstos y aquél.

Durante cerca de una década desde la creación de las nuevas industrias, su fuerza laboral se había mantenido tranquila, en gran medida al margen de los torbellinos de la principal corriente sindical. Esto se originaba en una diversidad de factores. Las empresas, muchas de ellas multinacionales, que operaban en esos sectores podían y preferían pagar salarios superiores al término medio y mantener así una mano de obra apropiadamente entrenada y dócil. Por otra

parte, y en general, existía además mayor estabilidad de ocupación en esos sectores que en otros más tradicionales de la economía.⁷ Por añadidura, esas compañías habían adoptado una política laboral que trajo consigo amplios cambios en la estructura de las negociaciones colectivas en la Argentina.

Insistieron en obtener, y al fin obtuvieron, primero de Frondizi y después de Illia, dos innovaciones decisivas. La primera consistió en recibir del gobierno permisos para establecer, en ciertos casos, sindicatos por empresa, algo insólito en la estructura gremial peronista tradicional. Por ejemplo, las cuatro plantas Fiat establecidas en la Argentina, tres de las cuales estaban en Córdoba, y la restante en Buenos Aires, tenían cada una por separado sindicatos inspirados por la empresa.⁸ Análogamente, la gigantesca compañía petroquímica PASA, fundada en 1958 en San Lorenzo, suburbio situado al norte de Rosario, creó su propio sindicato de planta, al que Frondizi otorgó la personería gremial que lo habilitaba para negociar convenios. Allí donde no se consideró factible crear sindicatos por planta, como en el resto de la industria automovilística, se otorgó autoridad sindical a gremios más débiles ya existentes. En el renglón de los automotores, por ejemplo, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), pequeño gremio constituido en gran medida por mecánicos de garage, recibió derechos de organización gremial a pesar de las reclamaciones de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Esta política facilitó a las empresas aislar a la nueva fuerza laboral del movimiento sindical nacional y aplicar nuevos estilos de relaciones laborales basados en el paternalismo empresarial, los beneficios sociales y las facilidades para el tiempo libre. Ese método pareció tener éxito. Los obreros de esas plantas no desempeñaron papel alguno en el restablecimiento de la CGT en 1963, como tampoco en las ocupaciones de fábricas al consumarse el Plan de Lucha de 1964.

La otra innovación de la política laboral, relacionada con la primera, fue la insistencia de las empresas establecidas en esos nuevos sectores en el sentido de negociar en el nivel de cada firma. En el período 1958-66, distintos titulares del Ministerio de Trabajo autorizaron un número cada vez mayor de esos "convenios por empresa", lo cual socavó el sistema de contratos por industria, de alcance nacional, estipulado en la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas. Además, esos convenios no estaban limitados al sector nuevo y dinámico. Las firmas más modernas de las industrias tradicionales, como las

textiles, ya insistían en esa clase de trato a principios de la década 1960-70. Presionaban en ese sentido porque les permitía negociar salarios y condiciones de trabajo de acuerdo con sus niveles particulares de productividad y sus necesidades de producción. Cuestiones tales como los sistemas de pago y las especificaciones de trabajo podían ser fijadas de acuerdo con los requisitos especiales de cada firma, en vez de quedar sujetos a una negociación realizada en la escala de toda la industria, caso en el cual sobre los convenios finales venía a gravitar una amplia diversidad de presiones políticas e institucionales. Por añadidura, los empleadores consideraban que ese tipo de negociación descentralizada acabaría inevitablemente por fragmentar las negociaciones salariales y por obstaculizar una actitud unificada de los obreros en lo relativo a salarios y condiciones de trabajo.

Lo cierto fue que la negociación colectiva pero descentralizada contribuyó inicialmente a crear una fuerza laboral débil en el sector dinámico de la economía argentina. Además debilitó el poder de la estructura gremial nacional, puesto que alzó el centro de la negociación salarial, en áreas cruciales de la economía, del plano nacional, para llevarlo al plano de las empresas. Aunque en algunas líneas fabriles, como la textil, el sindicato nacional seguía negociando esos contratos locales, en el gran número de los sectores industriales nuevos los tradicionales sindicatos nacionales, en su mayor parte peronistas, no estaban representados. El impacto que esta transformación de la estructura de las negociaciones tenía que tener sobre la cúpula sindical nacional no fue ajeno a los deseos ni del Estado ni de los empleadores. Ciertamente, el gobierno de Illia respondió a la hostilidad de los gremios peronistas estimulando precisamente las tendencias que hemos descrito y lanzando un riguroso programa de supervisión gubernamental de las cuestiones sindicales, que se proponía promover una mayor autonomía del gremialismo local y debilitar la garrra de la cúpula. En consecuencia, la jefatura gremial precipitada en la crisis por el gobierno de Onganía ya había visto, en años anteriores, debilitarse su posición en el sistema de negociaciones colectivas, así como amenazado su control del aparato gremial.

Después de 1969, asimismo, empezó a manifestarse claramente otra consecuencia, tampoco deliberada, de esa política. El desplazamiento de las negociaciones sobre salarios y condiciones de trabajo del nivel nacional al de empresa contribuyó a reavivar las secciones y sindicatos locales en las

industrias interesadas. La negociación por planta a la larga fortaleció la iniciativa y la capacidad de las bases para actuar y presionar tanto sobre los empleadores como sobre los dirigentes gremiales. El hecho de que las condiciones laborales y los salarios fueran determinados en el nivel de la planta proporcionó un apoyo a la actividad de las bases, que antes no tenían oportunidad de actuar puesto que las resoluciones se adoptaban en el nivel nacional y luego eran meramente transmitidas a las unidades locales. Esto significó que los trabajadores del automotor, por ejemplo, podían creer razonablemente en sus posibilidades de influir incluso decisivamente sobre asuntos de considerable importancia para su vida laboral: su propia actividad y sus opciones podrían tener impacto sobre sus condiciones de trabajo. Según vimos antes en este libro, la ausencia de tales centros de actividad después de las derrotas de la era de Frondizi causó en parte la desmovilización de las bases en los sindicatos peronistas durante buena parte de la década 1960-70.

También la política de Krieger Vasena ayudó a quebrar la pasividad de los trabajadores de esas industrias. Los controles salariales estrictos gravitaron sobre los niveles, relativamente privilegiados, de sus salarios. Si bien éstos siguieron siendo más altos que los vigentes en las industrias más tradicionales, sus pérdidas fueron mayores en comparación con las experimentadas por los obreros no tan bien pagados.⁹ Al mismo tiempo pasaron a primer plano las quejas gremiales relacionadas con las técnicas modernas de producción, a medida que las firmas incrementaron la velocidad de ésta y aplicaron planes de racionalización. Todos estos factores se combinaron en el período siguiente al Cordobazo y crearon las condiciones apropiadas para que las bases obreras desafiaron primero a sus propios empleadores y dirigentes gremiales, después al aparato sindical nacional y finalmente al régimen militar mismo.

En 1970, más de 5000 operarios de la Fiat derrocaron a los aquiescentes dirigentes de sus sindicatos de empresa y eligieron a nuevos dirigentes de línea intransigente. En el mismo año también los trabajadores de PASA se rebelaron contra sus propios jefes, designados por la empresa, y eligieron en las bases mismas a los nuevos delegados de su sindicato. En el gremio más importante del nuevo sector industrial, el SMATA, que en 1970 contaba con más de 30.000 afiliados, la cúpula nacional se encontraba bajo presión desde antes del Cordobazo. Delegados pertenecientes a la oposición y surgidos de las bases controlaban muchas de las principales

firmas, como la Chrysler, la Peugeot y la Citroën. En 1972 los militantes de la oposición obtuvieron el control de la rama de Córdoba, que comprendía alrededor de 7000 trabajadores de la IKA-Renault. Muchos otros obreros del sector moderno siguieron la misma actitud en esos años.

La capacidad que la oposición surgió de las bases tenía para desafiar con éxito a los dirigentes existentes fue facilitada por la particular índole de esos sindicatos en lo que se refiere al control interno que podían ejercer sobre sus afiliados. Si bien la política laboral de las empresas del sector dinámico lograba aislar en gran medida a los trabajadores de cada firma de los tradicionales sindicatos de envergadura nacional, también tuvo como consecuencia que, al ser destrozado el período de docilidad, esas empresas se encontraron con sindicatos propensos incapaces de controlar a las bases rebeldes, pues no disponían del aparato de control interno de los sindicatos peronistas tradicionales como la UOM, los textiles y la construcción.

Este fue evidentemente el caso de los sindicatos de empresa como el de la Fiat. También aquí la política adoptada por la compañía a fines de 1950 se volvió contra ella misma después de 1969. La eliminación de los sindicatos nacionales, así como el restringido alcance de los sindicatos de empresa, resultaron ser muy ventajosos para la oposición de las bases. Era mucho más fácil desafiar a una dirigencia gremial limitada a una sola compañía y carente de un poderoso aparato de control interno que imponerse a una jerarquía sindical nacional como la de la UOM. Ni siquiera en sindicatos nacionales como el SMATA existía la "maquinaria" de control fundada largo tiempo atrás en los gremios tradicionales. Los nuevos gremios eran en efecto recién llegados que se habían constituido al promediar la década 1960-70. La armonía general de las relaciones laborales en el sector moderno había tornado innecesaria la estructuración de esa maquinaria. Por añadidura, los trabajadores tanto de sindicatos de empresa como de ramas locales rebeldes contra sus líderes nacionales, como en los casos del SMATA y el gremio de Luz y Fuerza en Córdoba, eran ayudados por disposiciones del derecho laboral que les otorgaban el control de sus propias finanzas y considerable autonomía organizativa. Sindicatos nacionales como el SMATA y el de Luz y Fuerza respondían a una estructura federativa antes que a la estructura altamente concentrada característica de los gremios de las industrias tradicionales como la metalúrgica y la textil. En aquellos organismos la capacidad de la autoridad central para dominar a las ramas locales estaba seriamente limitada.

La oposición laboral que surgió después de 1969 se confirió esencialmente al interior del país. En Buenos Aires el movimiento gremial, tanto en el sector moderno como en el tradicional, se mantuvo antes de 1973 en gran medida al margen de la conmoción reinante en el interior. En parte ello puede explicarse por factores ya mencionados. En Buenos Aires los mecanismos tradicionales de represión y cooptación permanecieron en gran medida intactos, y las oportunidades de afirmar la autonomía local en la organización eran mucho menores. El tamaño mismo y la extensión del cinturón industrial metropolitano daban a la burocracia sindical muy amplio margen para maniobrar y atomizar a la oposición. Esto a su vez se relacionaba con lo que un autor ha denominado el clima laboral radicalmente distinto que imperaba en el interior.¹⁰ En los marcos urbanos del interior donde se habían instalado industrias nuevas el conflicto social generado por la vida fabril se prolongaba en el exterior de la planta y era reforzado por pautas de segregación social y espacial. La oposición social emergente de esas industrias modernas no era desdibujada por un amplio marco urbano, sino, por lo contrario, visiblemente subrayada. La estrecha proximidad física entre el lugar de trabajo y el de vivienda —particularmente en muchas de las ciudades del interior donde había una sola industria— también contribuía a fortalecer la solidaridad interna de las comunidades obreras.

En Buenos Aires la fábrica no ocupaba un sitio tan central, pues formaba parte de una vasta estructura urbana donde se diluían tanto los contrastes como las solidaridades que se generaban en los lugares de trabajo. Esto se reflejaba claramente en el inferior nivel de solidaridad comunitaria prestada a las movilizaciones particulares de la clase trabajadora. Los motivos de queja y reclamo y la conciencia colectiva formados en el punto mismo de producción se diluían en el conglomerado urbano de la metrópolis. Esto significa que si bien las fuerzas de oposición surgentes podían encontrar eco en Buenos Aires, allí no lograban inspirar las actitudes de desafío a los empleadores o a los dirigentes sindicales que asumían en el interior la forma de una protesta comunitaria generalizada. En la industria automovilística, por ejemplo, los grupos opositores existentes en las plantas de Buenos Aires dirigieron muchas huelgas. Pero no fueron capaces de desafiar a sus empleadores o a sus dirigentes gremiales en la forma en que pudieron hacerlo en Córdoba los obreros de la Renault o la Fiat.¹¹

CLASISMO Y SINDICALISMO DE LIBERACIÓN: SIGNIFICADO Y LÍMITES DE LA NUEVA OPOSICIÓN SINDICAL

La ola de militancia que batió las ciudades del interior en los años siguientes a 1969 contribuyó a desestabilizar tanto a gobiernos como a liderazgos sindicales establecidos. El centro de esa militancia permaneció en Córdoba, si bien sus ramificaciones se extendieron mucho más allá. En Córdoba la vanguardia del movimiento fue desempeñada por el gremio de Luz y Fuerza, dirigido por Agustín Tosco; por los sindicatos SITRAC y SITRAM, pertenecientes a las dos principales plantas de la Fiat, y por los obreros de la planta IKA-Renault.¹² De cualquier modo, las actividades de esos trabajadores tuvieron amplia repercusión urbana y su influencia se transmitió a los obreros de otros puntos del interior, que emprendieron acciones similares.

Una de las características distintivas de esta militancia residió en la frecuencia con que apeló a la acción directa y a la adopción de otras tácticas no convencionales de movilización laboral. Los denominados "paros activos" llegaron a ser la forma más común de lucha sindical en Córdoba. En 1971 la CGT de Córdoba desencadenó alrededor de doce paros activos. Los conflictos incluyeron también a menudo ocupaciones de plantas y toma de rehencos entre los miembros de la gerencia. La modalidad del paro activo suponía la política consciente de romper con la pasividad asociada a las tradicionales protestas obreras. Implicaba, por ejemplo, la tentativa de involucrar diariamente a la fuerza laboral en manifestaciones callejeras que procuraban llevar el conflicto laboral al marco amplio de la comunidad. Esas formas de actividad culminaron en marzo de 1971 con la conmoción que sacudió a toda la ciudad de Córdoba, y pasó a conocerse como "el Viborazo".¹³

Si bien las formas de actividad sindical adoptadas por estos trabajadores representaban un distanciamiento radical respecto de prácticas laborales más tradicionales, la característica más importante de esta ola de militancia fue su índole antiburocrática. Ante todo se definió a sí misma en función de su oposición a los modelos existentes de dirigencia sindical y a las formas de gobierno interno de los gremios. Ya hemos visto que, en efecto, los orígenes de muchos de esos movimientos se encontraban precisamente en ese cuestionamiento de las jefaturas gremiales existentes. La situación típica en que se presentaban tenía por punto de partida un planteamiento di-

rígido a la dirección de la empresa, por lo general en torno de problemas laborales, que después se ampliaba rápidamente al carácter de cuestionamiento de los líderes existentes, a los que se consideraba identificados demasiado estrechamente con las empresas. En esas experiencias se originó un ataque de carácter más general contra la burocracia sindical. Según las palabras de Agustín Tosco, un

"burocrata es aquel que sin vocación, sin ideales, se convierte en un típico administrador de un cargo sindical, lo usa para su satisfacción personal y en definitiva desde allí comienza a 'mandar' sobre sus compañeros".¹⁴

En cambio, los nuevos militantes ofrecían una "dirección honesta". Esto suponía probidad personal y compromiso con la democracia interna por parte de los nuevos dirigentes militantes. La importancia que estas cuestiones tenían para los trabajadores y el apoyo que éstos ofrecieron a los dirigentes sensibles a ese factor fueron claramente articulados por un obrero de la electricidad que habló en Córdoba en apoyo de Agustín Tosco:

"El gremio ve que su dinero se traduce en obras, que Tosco no pone la mano en la lata, no saca para él y la gente se siente segura porque los dirigentes le cumplen, no como en otros sindicatos donde entregan huelgas y se venden a la patronal y viven con un lujo de potentados, la casa en la sierra, los autos, las mujeres [...]. Aquí se consulta al gremio en las asambleas y no hay matones como en la UOM donde lo echan a uno si se quiere oponer a la burocracia".¹⁵

En esos años la cuestión de la "dirección honesta" llegó a ser un constante tema de protesta gremial y contribuyó a otorgar a esa protesta su naturaleza antiburocrática. Ni el tema ni el propósito eran nuevos en el movimiento sindical argentino. Según lo hemos relatado, surgieron durante el período de la Resistencia y llegaron a formar parte de los puntos de la crítica que la izquierda dirigía al vanderismo. Sin embargo, nunca había tenido antes tanta importancia central, tan clara y concretamente formulada. "Dirección honesta" significaba ante todo democracia y prontitud de respuesta a las necesidades de las bases. Los militantes adoptaron una política deliberada para evitar la formación de burocracias profesionales del tradicional estilo peronista. Se puso el acento en la necesidad de que el dirigente se hubiera abierto camino desde abajo. En las elecciones realizadas en el SMATA de

Córdoba en marzo de 1972, en que cayó derribada la cúpula local existente, 30 de los 45 candidatos eran delegados de taller.¹⁶ Una política común en esos cuerpos directivos era la rotación. En el SMATA de Córdoba, por ejemplo, periódicamente los dirigentes volvían a ocupar sus puestos de trabajo en las plantas y otros militantes los reemplazaban en sus funciones sindicales.¹⁷

También se prestaba mucha atención al constante contacto con los afiliados y se tomaban medidas para limitar la autonomía de los organismos directivos. Es muy posible que gran parte del interés por la democracia interna haya sido de origen generacional. Muchos de esos militantes eran jóvenes y no tenían mayor experiencia, a diferencia de los trabajadores de mayor edad, acerca de los efectos desmoralizadores de la burocracia gremial. La edad media de los dirigentes elegidos en el SMATA de Córdoba en 1972 era de 30 años, y gran parte de la formación de esa nueva generación en la práctica sindical se había producido después de 1966.¹⁸

También los problemas en torno de los cuales se centran el interés y la actividad sindicales eran característicamente distintos. Los nuevos líderes del moderno sector industrial dirigieron gran parte de su atención al problema de la calidad del trabajo dentro de las plantas. Se enfrentaron con los planes de racionalización orientados a intensificar la producción y cuestionaron las prerrogativas y la autoridad de la empresa en el proceso laboral. Los aumentos de velocidad de las líneas de trabajo habían sido constante motivo de descontento de los trabajadores de la IKA-Renault a fines de la década 1960-70, y la insistencia de los directivos en su derecho a determinar unilateralmente las velocidades de producción había constituido una de las principales causas de la rebelión de los trabajadores de la Fiat en 1970. Una vez establecido su control de los gremios, los nuevos militantes se dispusieron a enfrentar a las empresas en torno de estas cuestiones. Por ejemplo, en las negociaciones que sostuvieron con la Fiat en julio de 1971 el SITRAC y el SITRAM pidieron la abolición del sistema de incentivos de la empresa, argumentando que permitía a la compañía pagar bajos salarios básicos e intensificar la explotación aumentando constantemente las metas de producción y las velocidades de línea. Sostuvieron que las bonificaciones debían ser incorporadas a los salarios básicos y que el aumento de la producción debía originarse en la renovación de la tecnología y no del mayor esfuerzo. Además propusieron una reducción del número de

categorías laborales, con el fin de crear una fuerza laboral más unificada, y pidieron la participación de los trabajadores en la fijación de los objetivos de producción.¹⁹

La resurrección, en esta nueva ola de protestas gremiales, de temas relacionados con las condiciones de trabajo y la autoridad de la empresa, representó la primera vez en casi una década que se planteaban esos temas en el movimiento obrero. Hemos documentado, en un capítulo anterior, la forma en que las derrotas de la era de Frondizi habían antiquado un amplio sector de las conquistas logradas por los sindicalistas sobre las condiciones logradas en el lugar de trabajo. En la década 1960-70, a medida que las comisiones internas se debilitaron y que una cúpula sindical, ahora económicamente a la defensiva, se interesó sobre todo por proteger los salarios, la cuestión de las condiciones de trabajo se desvaneció de los programas de lucha en el plano nacional. No se debe subestimar el impacto que este redescubrimiento del problema tuvo sobre la oposición gremial a fines de la década 1960-70 y comienzos de la siguiente. Asociado al énfasis puesto sobre la democracia interna, ayuda a definir en términos concretos y en toda su amplitud el significado de la interrupción de la militancia en esos años. Un obrero de la Fiat, que trabajaba en la planta Matelfer de Córdoba, fue bastante explícito sobre el significado de esa experiencia:

"Aquellos quince meses de democracia sindical han dejado una experiencia enorme no sólo a los trabajadores de FIAT [...] con Sitrac-Sitram demostramos lo que somos capaces de hacer por el mejoramiento de nuestras condiciones de vida y de trabajo cuando nos organizamos y las direcciones que elegimos cumplen auténticamente el mandato de las bases [...] conseguimos aumentos salariales, ascensos de categorías, mejoras en el comedor, en la atención médica, paramos los despidos arbitrarios. Pero todavía más importante que todo esto es que cambió totalmente la vida en la fábrica. Los delegados nos defendían de los jefes frente a todos los problemas que surgían en el trabajo, controlamos los ritmos de producción que antes eran terribles. En fin, eliminamos el clima opresivo que se vivía en la fábrica y pudimos reivindicar nuestros derechos como seres humanos."²⁰

En un sentido más general, los dirigentes que pasaron a primer plano en el sector industrial moderno en el período 1969-73 también procuraron encuadrar su protesta gremial en términos más amplios de carácter ideológico. Conceptos como el de "clasismo" y "sindicalismo de liberación" implicaban, en el plano ideológico de los dirigentes, una identificación del

movimiento obrero con la supresión del capitalismo y la creación de una sociedad socialista. Emitido en mayo de 1971, el programa de SITRAC y SITRAM postulaba una nacionalización masiva de la producción y el control de la industria por los obreros. Como resulta obvio, esto suponía definir en términos muy amplios la función del sindicalismo. Agustín Tosco rechazó persistentemente una definición de la acción gremial en términos puramente económicos:

"El sindicalista debe luchar con todas sus convicciones, todas sus fuerzas [...] para cambiar el sistema [...]. El dirigente sindical debe saber que pese a una 'buena economía' si no hay una justa distribución de la riqueza la explotación prosigue. Y por lo tanto debe luchar por la liberación social. El dirigente debe saber que jamás habrá buenos convenios de trabajo con una economía del país supeditada a los monopolios. Y por lo tanto debe luchar por la liberación nacional."²¹

Un dirigente de SITRAC-SITRAM afirmó que:

"quienes sostienen una orientación sindical clasista son perfectamente conscientes de la incompatibilidad natural entre sus propios intereses de clase y los de la clase dominante."²²

Una de las principales misiones del sindicato consistía precisamente en inculcar esas convicciones a las bases. El gremialismo tenía pues entre manos la vital tarea de formar la conciencia de la clase trabajadora y prepararla así para lo que en definitiva sería una batalla política contra los empleadores y el Estado.

Resulta evidente que el "clasismo" tenía en potencia un significado profundo para la burocracia sindical peronista, los empleadores argentinos y, en último término, el propio Estado. Desde el punto de vista de la cúpula sindical, el énfasis rigurosamente antiburocrático puesto por los nuevos dirigentes sobre la democracia interna y la participación de las bases planteaba una clara amenaza como influencia y ejemplo. Mostraba a los trabajadores, enfrentados al espectáculo de un liderazgo sindical tradicional en crisis, un modelo alternativo viable de acción gremial. Para los empleadores, el cuestionamiento de las condiciones de trabajo por los nuevos dirigentes representaba un desafío directo a la autoridad patronal dentro de las fábricas. Tanto para los sindicatos tradicionales como para los empleadores, la afirmación por el clasismo de la irreconciliable naturaleza de los intereses de clase suponía

una constante batalla entre ambos y la negación de un común terreno de acuerdo, tan indispensable para aquel sindicalismo como para los empresarios. No menos clara era la amenaza planteada a los militares. El movimiento había demostrado repetidas veces su capacidad para alterar el orden público mucho más allá de las puertas de la fábrica. Su capacidad para articular un vasto espectro de reivindicaciones sociales y políticas, sus aspiraciones a redefinir el papel del sindicalismo, y finalmente su capacidad para adoptar formas extremas de actividad, representaba para la estabilidad política una fuerte amenaza que el Estado argentino no podía permitirse ignorar.

Sin embargo, no menos claro resultaba que este movimiento de oposición padecía de limitaciones y contradicciones internas. Desde luego, el hecho de que no lograra convertirse en una fuerza genuinamente nacional y expandir su influencia hasta Buenos Aires demostró ser una considerable debilidad. También fue importante en este sentido el peso de la represión estatal. Por ejemplo, en octubre de 1971 el gobierno nacional disolvió los sindicatos SITRAC y SITRAM y encarceló a sus dirigentes. Muchos otros militantes padecieron los efectos de la represión gubernamental y empresarial al mismo tiempo que se adoptaron medidas oficiales para contener y aislar al movimiento. Y al relativo éxito que logró el Estado en esos aspectos después de 1971 contribuyeron las debilidades que presentaba ese movimiento sindical opositor.

La debilidad fundamental radicó en el proyecto político asociado al clasismo, es decir las exigencias de carácter más amplio, formuladas por los militantes, acerca del propósito último que perseguía el movimiento antiburocrático, propósito que sus bases no compartieron necesariamente en toda su extensión. Para la mayor parte de las bases, el rasgo principal del nuevo movimiento no residía en la teoría del "sindicalismo de liberación" ni en la meta de la sociedad socialista, sino más bien en una combatividad del sindicato y en una "dirección honesta" que se tradujeran en cambios reales en su vida de trabajo. Un militante de la planta de la Chrysler de Buenos Aires se expresó con no poca franqueza al considerar este punto:

"La base está con quienes la defienden. En el caso de Chrysler la base sabía o al menos sospechaba cuál era nuestra línea política [...]. A la gente le importaba poco lo que éramos, si éramos guerrilleros o comunistas, lo que si le importaba era que nosotros la defendíamos, y por eso ellos nos defendían a nosotros [...] la base no

responde a una ideología, responde a las direcciones honestas, y nada más."²³

A continuación del Cordobazo, la crisis tanto del régimen militar como de la cúpula sindical, sumada a la creciente agitación de las bases, sobre todo en el interior, proporcionaron un espacio donde los activistas políticos de extrema izquierda pudieron moverse y alcanzar, en importantes sectores de la clase trabajadora, una influencia que les era negada desde hacía 30 años. Maoístas, peronistas revolucionarios, comunistas y una variedad de grupos marxistas de la nueva izquierda alcanzaron, en el lapso 1969-73, considerable influjo en el movimiento de oposición interna de las filas sindicales. Muchos de los grupos dirigentes que surgieron consistían en coaliciones de tendencias de izquierda que asistían al parecer por primera vez en la Argentina, a la aparición de un nuevo proletariado no dominado ni manipulado por el peronismo y su burocracia sindical. La rebelión de las bases del interior pareció anunciar el advenimiento de una vanguardia proletaria capaz de lanzar un ataque tanto económico como político contra el capitalismo.

La coyuntura nacional específica posterior al Cordobazo ofrecía ciertamente bases para esas esperanzas. Los activistas de izquierda actuaban con ímpetu febril. La capacidad de la clase obrera para desafiar y socavar al régimen parecía evidente por sí misma. El Cordobazo había eliminado a Onganía del poder, y el Viborazo había hecho otro tanto con su sucesor, Levingston. Al mismo tiempo, el régimen militar y la amplia oposición generada por éste habían simplificado radicalmente la actividad política y social. La oposición a los militares abarcaba un gran frente donde tenían cabida muchas tendencias políticas. En las filas obreras, la oposición a la política económica y a la cruda represión desencadenadas por el régimen parecía una estrategia suficiente, y quienes más persistente y valientemente la llevaron adelante se rodearon de un prestigio y un apoyo de amplia base, independientes en gran medida de un compromiso con los detalles de una ideología política de extrema izquierda. En la situación creada por las acciones del régimen, la línea entre la actividad sindical y la política, siempre borrosa en la Argentina, desapareció cuando la nueva fuerza sindical opositora expresó el rechazo general de la Revolución Argentina por las masas trabajadoras.

Esto no significa sugerir que los activistas marxistas superpusieran sus puntos de vista ideológicos a una base

desinteresada por ellos. La protesta obrera de esos días se originaba en auténticas movilizaciones de las bases y no era obra de agitadores externos, como lo pretendían tanto el régimen como la cúpula gremial. Los grupos izquierdistas contribuyeron a aportar nexos entre la agitación en las fábricas y la comunidad que las rodeaba. Además, propiciaron a muchos de los nuevos activistas obreros surgidos de esta movilización una identidad política más amplia, en un momento en que muchos de ellos buscaban una alternativa que no consistiera en la simple militancia sindical ni en un peronismo tradicional que estaba cada vez más a la defensiva. Militantes como René Salamancá, líder del SMATTA en Córdoba, y Carlos Masera, figura destacada de SITRAC-SITRAM, adoptaron una explícita actitud marxista tanto debido a la ayuda que los grupos extremistas brindaban dentro de las plantas como debido a que les ofrecían una visión amplia de transformación social. Esa visión había sido hasta el momento monopolio del peronismo, y uno de los legados duraderos del clasismo consistió en ampliar, al menos parcialmente, el espectro de las ideologías políticas disponibles en el discurso de la clase trabajadora.

Sin embargo, corresponde subrayar que esto sólo fue una brecha parcial en el monopolio peronista. Los trabajadores de esos sindicatos se mantuvieron, en una mayoría abrumadora, leales al peronismo, y si bien ese peronismo de los obreros se abrió a una diversidad de ideas y contradiscursos de corte nuevo, en el sentido político más inmediato su apoyo a los nuevos dirigentes no se basó en la identificación política. Un militante del sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba explicó el apoyo de sus compañeros a Tosco, quien no era peronista, en los siguientes términos:

"La mayoría del gremio es peronista, pero volaron a Tosco como dirigente sindical. Lo conocemos por más de 15 años, es honesto, capaz, probado en la lucha contra la patronal."²⁴

Esto significa que la estrategia adoptada por la oposición gremial militante fue de carácter precario. Lograron movilizar a sus bases y adoptar un papel político que desafiaba al régimen y preconizaba una revolución socialista. Pero esa movilización se basó en gran medida en una lealtad a la combatividad y la honestidad de los líderes antes que en factores específicamente ideológicos. En tales circunstancias, la prédica dirigida a la conciencia de clase tuvo muy limitado éxito. Durante la mayor parte de ese período la discrepancia

entre las pretensiones políticas de los dirigentes militantes y la lealtad de las bases fue acallada. Pero cuando el régimen empezó, en 1971, ahora bajo la presidencia del general Lanusse, a moderar su línea y preparar el retorno a la actividad política tradicional, el conflicto potencial se tornó evidente. La reaparición de una opción creíble para la clase trabajadora, opción encarnada por el resurgimiento de la actividad política peronista, y el posible retorno del propio Perón expusieron bien a las claras los límites de la radicalización política.

Dentro de ese movimiento de oposición sindical algunas corrientes tenían conciencia de la debilidad de su posición. Tosco, del sindicato de Luz y Fuerza, conocía con claridad el problema, lo tenía presente y lamentaba la apatía de las bases ante las amplias cuestiones de carácter revolucionario. También tenía conciencia de la necesidad de no ofender la predisposición peronista de la mayoría de los integrantes de su sindicato. En cambio, muchos de los nuevos militantes tomaron al pie de la letra la realidad de la protesta obrera y el conflicto social y concluyeron de buena fe que ese proceso iba a traducirse en una maduración política de la clase trabajadora. Extrayendo del Cordobazo su legado de elemental conmoción social, glorificaron la espontaneidad y el potencial explosivo de las masas. En esta forma se propusieron resolver el dilema que suponía la distancia entre su propia ideología revolucionaria y el verdadero estado político de la clase obrera.

Era inevitable que esta actitud aislara finalmente a la nueva ola de militantes. Lo cual se tornó patente sobre todo en su relación con los activistas peronistas, que para 1971 seguían la orden de Perón en el sentido de que el movimiento se unificara bajo la dirección de la cúpula, lo que evitaría divisiones internas que obstaculizarían las negociaciones del líder con el régimen. Esto significó que se volvió difícil de lograr la unidad militante en la acción característica de los años anteriores. Tal hecho se reflejó ampliamente en el fracaso experimentado por los militantes clasistas cuando quisieron formalizar esa unidad en el Plenario Nacional de Sindicatos Combativos. Grupos Clasistas y Obreros Revolucionarios, efectuado en agosto de 1971, como se reflejó también en la falta de respuesta ante la trifulca de SITRAC-SITRAM en octubre del mismo año. Y aun así, cuando la clase trabajadora esperaba cada vez más, en 1971, el retorno electoral del peronismo como solución de sus problemas, la oposición de extrema izquierda lanzó su consigna: "Ni golpe ni elección: ¡revolución!"²⁵

CONTINÚA LA CRISIS DE LOS DIRIGENTES SINDICALES; DEL CORDOBAZO A LA VUELTA DE PERÓN

En el período 1969-1973 se asistió al desmantelamiento gradual de la Revolución Argentina, que culminó con el retorno del peronismo al poder político en las elecciones de marzo de 1973. En los años siguientes al Cordobazo las altas esferas militares intentaron, con distintos grados de éxito, ponerle otra vez la tapa a la Caja de Pandora de connotaciones sociales y políticas destapada por los episodios de Córdoba. La primera baja de esa política fue el propio Onganía, quien, poco dispuesto a entrar en transacciones, fue destituido en junio de 1970. Lo sucedió el general Levingston, bajo cuyo gobierno se dieron algunos pasos hacia el retorno a la normalidad institucional. En julio de 1970 fue normalizada la CGT, con elección de nuevas autoridades. Levingston, sin embargo, vaciló en efectuar otras concesiones importantes a la oposición. El aislamiento de su gobierno se tornó más patente a medida que continuó el descontento popular, acompañado por una serie de acciones guerrilleras cada vez más osadas. En marzo de 1971, toda la ciudad de Córdoba fue sacudida por una nueva conmoción. Provocado por la presencia de un gobernador impopular y designado por los militares, este segundo Cordobazo involucró la misma alianza *ad hoc* entre obreros, estudiantes y vastos sectores de la población. Pero esta vez se agregaron la función de liderazgo cumplida por los sindicatos SITRAC-SITRAM, extremistas, y la intervención de grupos de guerrilleros, sobre cuya acción se informó ampliamente. El Viborazo tuvo fuerte impacto sobre las altas esferas militares. A fines de marzo Levingston fue sumariamente destituido y reemplazado por el jefe de la Junta de Comandantes, general Alejandro Lanusse.

Alarmados por lo que consideraban una creciente amenaza de desintegración y caos social, preocupados por el efecto desmoralizador derivado de emplear a las fuerzas armadas en el papel de policía contra los civiles, los comandantes militares consideraron imperativo desmantelar, en forma regulada, los aspectos más chocantes de la Revolución Argentina y preparar el terreno para una transición ordenada hacia un gobierno civil. El Gran Acuerdo Nacional (GAN), puesto en marcha por Lanusse, comprendía ese plan. Proponía restablecer las tradicionales instituciones de la vida cívica y política con el fin de desactivar la convulsión social que cundía en la Argentina

y canalizarla por vías aceptables. En julio de 1971 se dejó sin efecto el decreto de proscripción de los partidos políticos dictado por Onganía en 1966 y se prometió la realización de elecciones. Se entablaron serias conversaciones entre las principales fuerzas políticas y los jefes de las fuerzas armadas, con el fin de echar las bases del proyectado consenso nacional. Sin duda alguna, éste debería incluir el reconocimiento del peronismo como fuerza política. Lanusse y los altos mandos comprendieron que cualquier intento de institucionalizar y contener el descontento popular causado por ellos estaría condenado al fracaso si no contaba al menos con el apoyo fácil del peronismo. Rompiendo espectacularmente con el tradicional antiperonismo de las fuerzas armadas, Lanusse inició conversaciones con figuras peronistas. Incluso se formularon insinuaciones sobre el posible retorno del propio Perón. Al mismo tiempo, Lanusse prosiguió con la práctica, iniciada bajo Levingston, de desarticular aquellos aspectos de la política económica de Krieger Vasena que habían irritado a importantes sectores empresariales.

La solución política concreta contemplada al principio por los militares como resultado del Gran Acuerdo Nacional involucraba la legitimación electoral de un candidato respaldado por los militares, el propio Lanusse, en los comicios prometedos para 1973. Según ese razonamiento, tal candidato sería aceptado por los peronistas y los radicales como precio necesario de la transición hacia la democracia. Desde luego, este apoyo tendría que ser obtenido a cambio de concesiones programáticas y garantías políticas. La base social de esta solución sería provista gracias al apoyo de los sindicatos peronistas. La jefatura sindical sería atraída por la oferta de una estrecha conexión con una figura militar simpática. Tras el trauma causado por el régimen de Onganía, y frente al ataque continuo de las nuevas fuerzas opositoras que actuaban en el frente gremial interno, los sindicatos celebrarían la ocasión ofrecida por un Estado que solicitaba su apoyo para restituirles su vigor y su credibilidad como principal factor de poder en la Argentina. Esas aspiraciones populistas de Lanusse serían apuntaladas por un resuelto esfuerzo orientado a ampliar el apoyo popular gracias a medidas de bienestar social. A la vez que se seguía ese camino moderado, se emprendería la represión de todas las fuerzas "subversivas", tratarase de sindicalistas de izquierda, como de guerrilleros.

La línea seguida por Lanusse alcanzó un éxito parcial. La reconstitución de los partidos políticos y la reapertura de la

opción cívica, que culminaría en las elecciones de 1973, logró contener a la oposición izquierdista dentro de los límites. Se evitó la repetición del Vitorazo. Sin embargo, los términos finales de la solución que emergió durante 1972 difirieron considerablemente de la contemplada al principio por los proyectistas del Gran Acuerdo Nacional y representó una derrota al menos parcial de sus planes.

Varios factores socavaron el éxito del GAN. Por un lado, el propio Perón contrarrestó astutamente uno de sus principales objetivos: el de que la incorporación del peronismo a la nueva apertura institucional sirviera a la vez para disminuir la autoridad del propio Perón y su papel en el cumplimiento del acuerdo. Perón logró aprovechar el nuevo panorama para restablecer su propia preeminencia. Rehusándose a comprometerse personalmente con el esquema militar, mantuvo abiertas sus líneas de comunicación con otras fuerzas políticas. La coalición llamada la Hora del Pueblo le permitió estar en contacto con el Partido Radical y con una amplia gama de fuerzas democráticas que abogaban por un retorno directo a la democracia electoral. En marzo de 1972 el peronismo había creado su propio frente electoral, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), y afirmado su decisión de intervenir en los comicios por derecho propio. El éxito logrado por Perón fue una consecuencia lógica de la reapertura de los partidos políticos. Perón, como árbitro último del destino de los partidos peronistas, inexorablemente adquirió poder a medida que otros actores de la política negociaron con él para obtener su apoyo y sus votos en las elecciones venideras.

La hábil maniobra mediante la cual Perón aventajó a Lanusse fue facilitada además por la crisis social y cívica que seguía desgarrando a la sociedad argentina. Si bien después de 1971 el régimen logró en alguna medida reprimir y controlar la rebelión sindical en el interior, a la vez que la perspectiva electoral de 1973 contribuía a aliviar las inquietudes democráticas de grandes sectores de la sociedad argentina, en cambio la movilización de considerables segmentos de la clase media urbana, en especial de sus jóvenes, prosiguió sin disminuir. Hijos del autoritarismo insensible e ineluctable de Onganía, su rebelión estalló en 1969 y continuó en los años siguientes, en una sociedad que parecía ofrecerles cada vez menos oportunidades económicas. El alcance de ese movimiento superó su ámbito universitario inicial. Esos jóvenes de clase media adoptaron una ideología antiliberalista de extrema izquierda y se dirigieron cada vez más hacia el pero-

nismo o hacia los grupos guerrilleros para vehicular sus aspiraciones. Sin duda alguna, el renaciente sistema de partidos políticos tradicionales no era capaz de asimilar con facilidad a esa juventud rebelde.

Ese fenómeno fue espectacularmente simbolizado por la intensidad, cada vez mayor, de las actividades guerrilleras. En 1970 operaban en la Argentina cuatro principales grupos guerrilleros: las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros. Entre 1970 y 1973, estos grupos y cierto número de imitadores menores se embarcaron en una ola de acciones que comprendían ataques directos e instalaciones militares, secuestros y asesinatos de industriales y figuras políticas, espectaculares robos y asaltos de bancos y asesinato de militares de alta graduación.²⁶ A menudo esas acciones encontraban apoyo explícito entre los jóvenes que en ese momento afluían al movimiento peronista. La amenaza que esa actividad suponía para la estabilidad política y social modificó gradualmente los términos de las negociaciones entre Perón y los militares. Hacia 1972, Perón y el peronismo eran vistos por muchos miembros de las fuerzas armadas como la única esperanza viable de restablecer el orden social y contrarrestar la amenaza planteada por los jóvenes y los militantes sindicales de extrema izquierda. En febrero de 1972 se produjo en Mendoza una revuelta, que abarcó toda la ciudad, de estilo muy similar al del Cordobazo. Esto convenció a los militares de que tenían mucho más que perder que Perón si la solución política seguía demorándose. Cuando Perón por fin aceptó, a fines de 1972, la única condición que los militares insistían en imponer —la proscripción de su propia candidatura personal—, quedó abierto el camino para el retorno del peronismo al poder.

Por fin, además, la suposición del régimen de que sería capaz de enrolar en su favor a una proporción significativa de la jefatura sindical resultó ser demasiado optimista. La crisis provocada por el gobierno de Onganía no podía resolverse por decreto. Como en el caso de los partidos políticos, el simple acto de permitir la resurrección del movimiento gremial no podía deshacer el daño infligido a su credibilidad y a su moral. ¿Sería la cúpula sindical capaz de dirigir y canalizar una protesta social surgida al margen de su control y con independencia de su voluntad? La moderada política económica adoptada por los sucesores de Onganía, junto con el retorno de algún espacio para la negociación colectiva, contenía la

promesa de cierta rehabilitación para la dirección sindical. Pero ésta no fue capaz de obtener del régimen concesiones que le bastaran para recobrar el terreno perdido. Si bien la política económica seguida bajo Lanusse introdujo en el plano salarial una flexibilidad suficiente como para prevenir una intranquilidad explosiva, las autoridades no deseaban reimplantar las negociaciones colectivas sin restricciones, y dar así a los dirigentes sindicales los instrumentos que les permitieran reafirmar su indiscutida hegemonía sobre las bases y enmarcar a sus gremios en el camino de transacción contemplado en el GAN. Esto significaba que si bien la jefatura sindical peronista poseía capacidad como para mantener su control del aparato gremial nacional centrado en Buenos Aires, ya no disfrutaba de la capacidad para movilizar y conducir a sus afiliados en la impresionante forma en que lo había hecho durante el apogeo del vandomismo.

Desde el punto de vista del cálculo que hacían los militares, había algo todavía más importante aún: la posición de la cúpula sindical dentro del peronismo estaba sometida a un bloqueo cada vez más activo, amenaza que se originaba en dos fuentes. Ante todo era consecuencia de la rehabilitación del sistema y los actores políticos tradicionales. La reanudación de la actividad política de línea clásica perturbó seriamente y separó a muchos dirigentes sindicales. Ya hemos visto hasta qué punto fueron de resultado ambiguo, incluso bajo la dirección de un táctico tan astuto como Vandor, las incursiones sindicales en la esfera política al promediar la década 1960-70. Después de asesinado Vandor, y en vista de las crecientes incertidumbres que acompañaron los comienzos de la década 1970-80, las perspectivas sindicales en una restauración de la política democrática parecían por lo menos lóbregas. La cúpula sindical sabía que toda apertura tendería a fortalecer la posición de Perón y a debilitar la suya propia, lo cual era particularmente cierto en un contexto que prometía la legalización formal del peronismo político e incluso el posible retorno del máximo líder. Los jefes gremiales también tenían conciencia de la desconfianza y el resentimiento que ahora ellos les inspiraban a Perón y sus allegados.

A la vez que muchos de los líderes peronistas, por lo tanto, se sentían preocupados por las maniobras de Perón, se encontraban incapaces, por efecto de sus debilitadas posiciones, de adoptar una respuesta unificada. Una facción, encabezada por el secretario general de la CGT, José Rucci, adoptó una actitud de completa obediencia a las tácticas de

Perón, subordinando abiertamente a la CGT a las necesidades de sus negociaciones con el régimen y con los partidos. En julio de 1971, sin embargo, un grupo de alrededor de 60 sindicatos peronistas, muchos de los cuales habían estado antes en la corriente "participacionista", emitieron una declaración pública donde denunciaron a los partidos políticos tradicionales, atacaron la creciente actividad política de la CGT y exhortaron a consumir una "revolución dentro de la revolución" con el fin de restablecer a la Revolución Argentina en su genuino camino corporativista. La mayoría de los dirigentes sindicales estimaron que semejante ataque a las tácticas de Perón, tan poco disimulado, no era sensato, especialmente porque todo indicaba, en 1972, que el país marchaba hacia las elecciones. Lo que más les preocupaba era la posibilidad de afirmar sus derechos a la parte que les tocara en el botín que pudiera ofrecer un resurgimiento político del peronismo.

El hecho de que la jefatura sindical se mostrara tan pesimista acerca de sus perspectivas en un peronismo revitalizado reflejaba su preocupación por la creciente influencia de las fuerzas nuevas en el seno del movimiento. Se sentía cada vez más aislada y atacada por una corriente izquierdista que surgía dentro del peronismo. Esta izquierda difería considerablemente de la tradicional izquierda gremial de comienzos de 1960-70. Los tradicionales "duros" del sindicalismo, enroldados ahora en el Peronismo Combativo, todavía constituían una fuerza importante en la CGT y en los organismos directivos de las 62 Organizaciones. Pero su influencia se confinaba a la ejercida en cierto número de pequeños sindicatos. La CGT de los Argentinos, que por breve tiempo había prometido ejercer una influencia real en favor de aquella tradición, para 1969 ya había desaparecido como fuerza efectiva. El peronismo revolucionario, centrado en organizaciones como el Peronismo de Base, ejercía un influjo considerable en las bases, particularmente en el interior y desde 1970. Se mostraba activo en el seno de las nuevas corrientes de oposición sindical y adoptaba posturas similares a las de otras corrientes "clásicas". Pero también su gravitación era de orden limitado.

A la cúpula sindical le preocupaban mucho más la Juventus Peronista y los grupos guerrilleros, en especial los Montoneros. Formulaban una amenaza tanto física como política. A partir del asesinato de Augusto Vandor, en julio de 1969, y continuando con el asesinato de José Alonso un año después,

la guerrilla peronista emprendió una campaña de eliminación física selectiva de los dirigentes gremiales. En los años siguientes al Cordobazo, las organizaciones juveniles del peronismo y en menor medida los grupos guerrilleros empezaron a recibir en sus filas a muchos jóvenes, salidos principalmente de la clase media, que abrazaban un antimperalismo extremista inspirado en una amplia gama de figuras nacionalistas del Tercer Mundo. Identificando al peronismo con un movimiento de liberación nacional, declararon que su objetivo era el establecimiento de una forma nacional de socialismo. La estrategia que había de llevar a ese objetivo consistía en la lucha armada. Proclamaron que el principal obstáculo que se oponía a la búsqueda de ese objetivo por el peronismo era la burocracia sindical. Para estos jóvenes recién llegados al movimiento, la burocracia era una casta corrupta que tenía por función reprimir y manipular a las masas peronistas y desviarlas de la lucha por la creación de una nueva Argentina. En cuanto tal la burocracia era objetivamente una aliada de la oligarquía y el imperialismo, que debía ser físicamente eliminada del peronismo, o bien superada por la incorporación al movimiento de nueva sangre revolucionaria que maduraría en el liderazgo del futuro.

En consecuencia, la amenaza que esos sectores formulan a la burocracia sindical no era simplemente física. Era ante todo ideológica y política. En ningún momento, en los años 1969-73, estos jóvenes constituyeron una amenaza institucional para los jefes sindicales, como llegaron a hacerlo los insurgentes sindicales del interior. Más aún, no efectuaron tentativa alguna por crear una organización específicamente obrera que compitese con los sindicatos. Se suponía que la clase trabajadora era por sí misma revolucionaria y que, una vez suprimida la burocracia, los trabajadores restablecerían su genuina relación con el líder revolucionario, Perón, y con la nueva jefatura revolucionaria del peronismo. La juventud peronista y los grupos guerrilleros representaron ante todo un desafío a la trayectoria entera del movimiento gremial dentro del peronismo y una afirmación propia de la identidad que asignaban al peronismo como movimiento. El nacionalismo reformista con el que habían identificado al peronismo, y el pragmatismo y el espíritu de transacción que el peronismo había llegado a implicar después de 1955, eran ahora atacados en función de una cruzada moral lanzada por recién llegados carentes de toda posición tradicional en el movimiento. Esos advenedizos ahora procuraban redefinir al peronismo en tér-

minos de un credo revolucionario que para los dirigentes gremiales sólo podía tener escaso significado. Por añadidura, parte fundamental de esa redefinición involucraba negar la legitimidad de la presencia misma de la jefatura sindical en el seno del nuevo movimiento peronista que los jóvenes extremistas contemplaban forjar.

En tiempos más tranquilos, esas amenazas lanzadas desde afuera de los sindicatos contra las posiciones que los dirigentes tenían tradicionalmente en ellos habrían sido pasadas por alto. Pero en los años de movilización en masa e intenso conflicto social, a los que se sumaba la afluencia de sectores extremistas interior del peronismo, era preciso tomarlas en serio. Sin duda alguna, la reapertura del sistema político tornaba a la cúpula sindical más vulnerable al ataque desde el exterior del campo estrictamente gremial. Y Perón no hizo nada por apacar esos temores. Advirtió que los sectores juveniles del movimiento reflejaban claramente la actual actitud popular de resentimiento y esperanza de renovación en forma mucho más auténtica que como podía reflejarla una jefatura gremial insegura. Eran capaces de organizar la movilización popular posibilitada por la repartición de la política de masas. Y además eran para Perón un valioso instrumento de negociación, un recordatorio de la capacidad de desestabilización que podía tener el peronismo si no se lo reintegraba a la sociedad argentina.

En el curso de 1972 Perón recibió con frecuencia a los dirigentes de la Juventud Peronista y en sus comentarios públicos abundaron los elogios a los "muchachos" y las críticas a la burocracia sindical. Los Montoneros fueron reconocidos como "formaciones especiales" del movimiento. Tomando al pie de la letra las seguridades, ofrecidas por Perón, en el sentido de que la juventud heredaría el movimiento, los líderes de la JP y los Montoneros optaron por ignorar las diferencias que podían surgir entre sus estrategias y las de Perón. En vista de la euforia generalizada que invadió al movimiento a medida que se desarrollaba la campaña electoral, los signos ya existentes de que Perón se disponía a entrar en transacciones y compromisos fueron interpretados como jugadas maestras por parte del veterano líder. Para los dirigentes sindicales, la temible influencia de los nuevos pretendientes se manifestó en forma bastante palpable. A principios de 1972, la elección de sus candidatos por el FREJULI recordó claramente a la cúpula sindical el escaso peso que ahora tenía en el movimiento. A diferencia de lo acontecido en

1962 y 1965, años en que impusieron sus candidatos a su antojo, ahora se vieron forzados a aceptar una proporción igual de candidatos con otros sectores del peronismo. No se ofreció a una figura gremial ni una sola candidatura a gobernación provincial; lo más que los sindicalistas alcanzaron fue las candidaturas a algunas vicegubernaciones en varias provincias. Tampoco se los consultó sobre la designación por Perón de Héctor Cámpora como candidato del peronismo a la presidencia. Tal vez el presagio más sombrío lo dieron los sectores juveniles, que al fijar todo el tono de la campaña electoral y organizarla lograron movilizar a vastos sectores de la población y eligieron como blancos favoritos de su creación a los militares y a la burocracia sindical. En consecuencia, los líderes gremiales consideraron con escaso entusiasmo los resultados de las elecciones del 11 de marzo, que otorgaron al peronismo una clara e imprevista victoria. Al cabo de 18 años de apoyar la recuperación del poder estatal por el peronismo, la realidad que enfrentaron al asumir Cámpora la presidencia el 25 de mayo les ofrecía escasos motivos de optimismo y seguridad.

El 3 de octubre de 1973, Juan Perón se encontraba en el balcón del edificio de la CGT, en el sector céntrico de Buenos Aires. Lo rodeaba la elite de la cúpula sindical peronista; allí estaban Lorenzo Miguel, Adelino Romero, Casildo Herrerías y otros. Desde el medio día y durante la mayor parte de la tarde, Perón saludó con los brazos alzados a una procesión de trabajadores que parecía interminable, acercados allí en ómnibus fletados por sus sindicatos y que desfilaban vocando el nombre del líder y cantando *Los muchachos peronistas*. Al avanzar la tarde, un creciente ruido empezó a dominar el sector adyacente y a apagar el sonido de los altavoces que transmitían himnos y marchas peronistas por la red oficial de parlantes. Al acercarse a la bajada de la Avenida Belgrano, donde se cruza con Paseo Colón, a unos 500 metros del edificio de la CGT, los observadores descubrieron la fuente de ese ruido. Desde lo alto de la bajada se veía una masa de gente que parecía interminable, cubría todo el ancho de la avenida y se extendía hasta donde la vista podía llegar. Frente a la masa se alzaban tres grandes carteles. Uno llevaba la leyenda "Montoneros-FAR", el otro "Juventud Peronista", y el tercero proclamaba "Perón en el poder para el Socialismo

Nacional". En los manifestantes prevalecía una mayoría abrumadora de jóvenes, y durante horas esperaron mientras caía el sol en una perfecta tarde de primavera. Finalmente, también a esos cientos de nubes se les permitió, de mala gana, desfilan frente a la CGT. El homenaje que tributaron fue algo distinto: los cánticos no pertenecían al repertorio tradicional del peronismo y más bien había gritos en favor de la "Patria Socialista". Pero en el momento en que la mayoría de ellos pasaron frente al balcón, Perón había partido de allí largo tiempo atrás.

Es difícil no advertir el simbolismo inherente al episodio. Por primera vez en 18 años Perón recibía el tradicional homenaje rodeado por los líderes del movimiento gremial en el edificio de éste. Sin embargo, obviamente había en juego mucho más. El notorio gesto de apoyo que Perón ofreció a la cúpula sindical y el no menos evidente desaire inferido a los sectores extremistas del peronismo simbolizaban el espectacular vucio de las fortunas de ambos bajo el nuevo gobierno. La euforia de los días siguientes a la asunción del poder por Héctor Cámpora se desvanecía rápidamente. La renuncia de Cámpora, la creciente campaña en los días que siguieron a su renuncia contra los "infiltrados" en el movimiento, el papel desempeñado por los sindicatos en la campaña electoral que llevó a Perón a la presidencia en setiembre de 1973, todo anunciaba un desplazamiento de la influencia dentro del peronismo. El sentimiento popular de esperanza y renovación presente en los seis primeros meses de 1973 había sido palpable. Se reflejó de manera patente en la multitud que atacó, el día que Cámpora asumió la presidencia, la cárcel de Villa Devoto y liberó a los presos políticos cautivos allí. También se hizo evidente en la accentuada democratización del aparato estatal durante el breve gobierno de Cámpora. La juventud peronista de esa era se sintió arrastrada por la sensación de que participaba en la proclamada "reconstrucción nacional".

Lo cierto es que —pensadas después las cosas— la opción de Perón por la burocracia sindical y no por los sectores extremistas de su movimiento parece predecible y coherente por supuesto con toda su estrategia general. La piedra angular de ésta consistía en el "Pacto Social". Se trataba, esencialmente, de un acuerdo entre empleadores y sindicatos para congelar precios y salarios. Supervisado por el Estado como parte de un plan general de reconstrucción nacional, el acuerdo tuvo la fuerza compulsiva de la ley. Formaba parte de un proyecto más amplio encaminado a lograr la paz social y la conciliación

política. En este último nivel, Perón llegó a una serie de acuerdos con el Partido Radical para prevenir las batallas entre bloques partidarios en el Congreso Nacional recientemente elegido. En lo social, las principales instituciones de los empleadores y los sindicatos del país recibieron acceso privilegiado al plano estatal. El presidente de la Confederación General Económica (CGE), José Gelbard, recibió la cartera de Economía, y también la CGT entró a formar parte de la administración de la política gubernamental. En el espacio libre que esto iba a dejarle, Perón pensaba reorientar la economía argentina hacia una nueva era de crecimiento basado en el surgimiento del país como exportador industrial. Ello estimularía las inversiones tanto locales como exteriores que generarían la modernización necesaria para competir en el mercado mundial. Sobre la base de esta economía renovada, se podría contemplar una nueva etapa de redistribución de la renta.²⁷

El éxito de esa estrategia dependía de varios sectores. En primer término, el peso del prestigio personal de Perón y su respaldo del plan era decisivo para otorgarle legitimidad e inspirar respeto por el proyecto. En segundo lugar, éste dependía de la capacidad de instituciones claves, como la CGE y los sindicatos, para traducir los compromisos formales al activo acatamiento por parte de sus miembros. Finalmente, mucho estaba en función de un contexto económico internacional que tornara factibles esos planes para la Argentina. En relación con ese contexto, era lógico que Perón optara por la burocracia sindical y no por los sectores izquierdistas juveniles. En definitiva, tanto su visión de la futura sociedad argentina como las necesidades de sus proyectos inmediatos apuntaban a la rehabilitación de la cúpula sindical.

Las consecuencias de su elección para la JP y los Montoneros no tardaron en hacerse sentir. En el lapso de un año fueron sometidos a una humillante obediencia o debieron refugiarse en la clandestinidad. Cada vez más marginados y puestos a la defensiva aún antes de la muerte de Perón en julio de 1974, muchos se embarcaron abietamente en la oposición armada a Isabel, heredera y viuda del líder. Al mismo tiempo, la posición de la cúpula sindical fue inmensurablemente fortalecida, en términos formales, tanto en el seno del movimiento peronista como en la clase obrera. Bañados en la llamante luz de la bendición impartida por Perón, y concluido su aislamiento, los líderes sindicales pasaron a ser, irónicamente, los principales exponentes del

"verticalismo", el rígido sistema de respeto por la autoridad jerárquica dentro del movimiento. Para fines de 1974 habían expulsado a sus jóvenes adversarios de la corriente principal del movimiento. Además habían logrado, con ayuda de la extrema derecha peronista, en pleno surgimiento, eliminar a todas las figuras del ala política del peronismo que habían manifestado simpatía por los sectores de izquierda. Aún antes de morir Perón, los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza fueron obligados a renunciar. En Buenos Aires el nuevo gobernador fue Víctor Calabró, dirigente metalúrgico. Entre julio y octubre de 1974 la burocracia sindical ajustó cuentas también con la oposición "clasista". Se valió de los muy amplios poderes que le otorgó una nueva Ley de Asociaciones Profesionales dictada en noviembre de 1973 y apeló al terrorismo semioficial contra el gremialismo disidente. En rápida sucesión, los líderes militantes del SMATA de Córdoba, del gremio gráfico de Buenos Aires y finalmente del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba fueron destituidos legalmente de sus cargos y a continuación puestos fuera de la ley.

Sin embargo, la posición de la cúpula sindical peronista era en realidad más frágil que lo sugerido por esas apartencias. Sus integrantes habían superado el aislamiento de los primeros años de la década 1970-80 y se habían establecido como legítimos interlocutores del gobierno, sobre un pie de igualdad con los empleadores y los partidos políticos. Pero el precio exigido fue muy alto, pues consistía en adherir al Pacto Social, con todas las limitaciones que esto significaba para su cualidad de voceros de la clase obrera en el terreno económico. El riesgo habría sido menor si el Pacto Social hubiese sido respetado y sus resultados económicos los previstos. Pero en definitiva ni la CGT ni la CGE tenían la credibilidad necesaria como para imponer a sus seguidores el cumplimiento del pacto.²⁸

La victoria electoral y las expectativas que había generado provocaron una ola de rebeliones fabriles que por primera vez invadieron todo el cinturón industrial del Gran Buenos Aires. Si bien el prestigio de Perón impidió un rechazo explícito de los controles salariales estipulados en el Pacto, los trabajadores encontraron mil maneras de trasladar la victoria política en las urnas a ventajas propias en el lugar de trabajo. Las condiciones de éste y las de sanidad y seguridad, los salarios atrasados, la reclasificación de las tareas y la cuestión de designar nuevas y auténticas direcciones de planta, se plantearon como problemas a medida que innumerables que-

jas acumuladas en el período anterior a 1973 empezaron a ventilarse. En consecuencia, a despecho de una política oficial de consenso y conciliación en el plano político, en términos sociales se presentó una intensificación del conflicto de clases.²⁹

Esta situación inevitablemente perturbó a la cúpula sindical, responsable de imponer el cumplimiento de una impopular congelación de salarios de la que grandes sectores de sus bases hacían caso omiso. Y por su parte los empleadores no facilitaron la tarea de los sindicalistas. La CGE fue igualmente ineficaz para imponer la restricción de precios. Hacia fines de 1973 los empresarios subían extraoficialmente los precios, mientras cundían el acaparamiento y el mercado negro. La situación económica internacional complicó más aún los problemas económicos del régimen peronista. El Pacto Social coincidió con una contracción del mercado mundial y un salto de la inflación internacional desencadenado por el aumento del precio del petróleo. Los costos de las importaciones industriales argentinas subieron drásticamente. Los empresarios proclamaron su necesidad de trasladar esos aumentos a los precios. A principios de 1974 empezó a hacerse sentir en la balanza de pagos y en la inflación el impacto de esta situación, reflejada también en la falta de confianza de los empresarios, reacios a invertir en nuevas plantas.

Los dirigentes gremiales procuraron minimizar los costos que suponía para ellos su nuevo papel de copatrocinantes del control salarial y la armonía social. Muerto Perón, presionaron sobre Isabel para que restableciera la libertad de negociaciones colectivas. También lograron derrotar a sus adversarios dentro del movimiento peronista y dentro de la esfera sindical. Las razones que explicaron ese éxito fueron varias. Muy simplemente, les fue posible utilizar los enormes recursos del Estado para aislar y aterrorizar a sus posibles rivales. Todo análisis de ese período que se abstenga de tomar suficientemente en cuenta el intenso e incontenible impacto de la represión tanto oficial como parapolicial pasa por alto un componente crucial de la experiencia diaria de los militantes políticos y gremiales, particularmente después de morir Perón. Los peligros personales involucrados en la actividad militante llegaron a ser aterradores.

Pero tal vez más decisivo aún haya sido el hecho de que la izquierda, tanto peronista como no peronista, se encontró políticamente aislada dentro de la clase obrera. En el caso de la JP y las formaciones guerrilleras, ese aislamiento pareció a

veces poco menos que deliberado. Declarar la guerra a la sucesora de Perón involucraba desdeñar los millones de votos emitidos por los trabajadores peronistas menos de un año atrás. Cualquiera que haya sido el colapso final de su gobierno, no hay duda de que para los trabajadores peronistas todavía disfrutaba, por lo menos hasta junio de 1975, de una considerable legitimidad política residual. En consecuencia, tanto la guerrilla peronista como la no peronista estaban condenadas a librar una batalla trágica y desigual, aisladas casi por completo de la clase trabajadora, que constituía el tema central de su retórica. Cada vez más, hacia 1975, se vieron empujadas en una sangrienta lucha que estremeció profundamente a la sociedad civil argentina y tuvo poco que ver con la clase trabajadora. El macabro ojo por ojo de la escalada de asesinatos tuvo profundo impacto sobre los militantes de base, que desprovistos del beneficio de una infraestructura clandestina resultaron ser los blancos predilectos de los escuadrones de la muerte derechistas.

Para la oposición sindical interna, es decir la "clasista", la situación fue más compleja, si bien en definitiva no fue personalmente menos trágica. La disociación entre el plano de la lucha social y el plano de la lealtad política en las bases peronistas, que se había notado antes de 1973, se convirtió en factor crítico en los años posteriores e influyó profundamente sobre el desarrollo del movimiento sindical opositor. Bajo el régimen militar, la discrepancia entre la ideología política de un Agustín Tosco o un René Salamancas y la línea política de sus bases, decididamente peronistas, no había tenido mayor importancia. Pero el advenimiento del nuevo gobierno peronista hizo de esa discrepancia un factor de confusión y derrotó las tentativas de dirigentes como aquéllos por fundar una alternativa política izquierdista del peronismo en el gobierno. Oponerse a la línea económica del gobierno peronista significaba un desafío político, y si bien los trabajadores hubieran estado dispuestos a seguir a los dirigentes de izquierda en el terreno estrictamente económico, esa actitud nunca se hubiera traducido en una transformación de sus convicciones peronistas. Más aún, incluso una lealtad exclusivamente gremial a esos líderes se tornaba ambivalente. A los trabajadores les resultaba ahora mucho más difícil defenderlos, puesto que el ataque provenía del Estado peronista por cuyo retorno la clase obrera había luchado desde 1955. En consecuencia, los llamamientos lanzados por el gobierno y por líderes sindicales basados en la ortodoxia y la lealtad eran a la vez confusio-

nistas y eficaces. De modo que la cúpula sindical terminó por beneficiarse gracias a la realidad de la identificación política de la clase trabajadora con el peronismo y a la legitimidad que esto les confería a esos dirigentes.

La incapacidad de la izquierda peronista y no peronista para construir un liderazgo alternativo viable abrió el camino al surgimiento de la burocracia sindical como fuerza dominante dentro del gobierno peronista en sus últimos 18 meses en el poder. Fue, sin embargo, una victoria a lo Pirro. Si bien pudieron repuntar y marginar a sus competidores dentro de la clase trabajadora y dentro del peronismo, no acertaron a restablecer su hegemonía sobre las bases ni a afirmar su credibilidad como factor de considerable poder en la sociedad argentina. En parte ello se debió a la feroz lucha que Isabel y su círculo personal emprendieron contra esos dirigentes sindicales para contrarrestar su influencia. Durante todo el gobierno de Isabel se vieron envueltos en una desgastadora batalla contra la presidenta y sus consuegros.

Y en parte esto se debió también a la situación económica, en rápido deterioro. Al desplomarse los últimos vestigios del Pacto Social y entrar la economía argentina en una recesión cada vez más profunda, acompañada por una vertiginosa espiral inflacionaria, resurgió en todo su vigor el descontento de las bases. En junio de 1975 ese descontento hizo erupción bajo forma de una masiva protesta popular contra el drástico plan de estabilización adoptado por el ministro de Economía, Celestino Rodrigo. El "Rodrigazo", que trajo como consecuencia una huelga general espontánea, ocupaciones de fábricas y manifestaciones que duraron cerca de un mes, fue un golpe aplastante para el gobierno de Isabel. Aunque la jefatura sindical se puso deliberadamente a la cabeza del movimiento y negoció la anulación de las medidas económicas y la renuncia de Rodrigo y José López Rega, el Rodrigazo puso también en evidencia lo precario de su propia posición. Capaz de derrotar a sus adversarios tanto de derecha como de izquierda, esa jefatura seguía siendo vulnerable a la impredecibilidad de las respuestas de los trabajadores a una economía en deterioro. Por añadidura, si bien estaban en condiciones de oponerse claramente a las medidas económicas, no tenían nada que ofrecer en materia de alternativas coherentes. A medida que la crisis económica se ahondó, y con una influencia sin discusión sobre el Estado después del Rodrigazo, la política de los líderes gremiales equivalió a un manejo *ad hoc* de la crisis, combinado con llamamientos al retorno a

medidas de reforma económica de línea obrerista que la situación de la Argentina tornaba patentemente imposibles de adoptar.

En esas circunstancias, la clase trabajadora argentina, desprovista de una dirección efectiva, esperó durante la larga agonía del gobierno de Isabel Perón. En las fábricas y barrios empezaron a surgir intentos de llenar el vacío creado por la imposición del peronismo y el aplastamiento de los movimientos opositores organizados. En la estela del Rodrigazo brotaron "comisiones coordinadoras", con el fin de atender la necesidad en que se encontraban, tanto los activistas como las bases, de estructuras capaces de reunir a los trabajadores para organizar la actividad y las conversaciones entre obreros de distintas industrias en una zona particular. Pero no llegaron a desarrollarse plenamente en el tiempo que tuvieron entre la movilización de junio y el golpe militar de marzo de 1976. El impacto de la crisis económica y la desmoralización inducida por el colapso del movimiento peronista se sumaron para determinar una actitud fatalista ante el golpe militar ramorreado desde largo tiempo atrás.

NOTAS

¹ Un examen de los cálculos que efectuaban los dirigentes sindicales sobre el golpe de junio hay en Carr: *Sindicatos y poder en la Argentina*, págs. 145-47.

² Véase Juan Carlos Portantiero: "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual", en Oscar Braun, comp.: *El capitalismo argentino en crisis*, Buenos Aires, 1973. Véase también Guillermo O'Donnell: *Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976*, CEDES, documento n° 5, Buenos Aires, 1976.

³ Acerca de la política económica de Onganía véase Oscar Braun: "Desarrollo del capitalismo monopolista en la Argentina", en Braun, comp.: *El capitalismo argentino*. Véase también Perala Ramos: *Etapas de acumulación*.

⁴ Un panorama general del régimen de Onganía hay en Gregorio Selser: *El Onganismo: la llanaban Revolución Argentina*, 2 vols., Buenos Aires, 1973.

⁵ Acerca del impacto de la política económica de Krieger Vasena sobre el salario real véase Perala Ramos: *Etapas de acumulación*.

⁶ No existe un estudio definitivo sobre los acontecimientos de Córdoba. Véanse al respecto Francisco Delich: *Crisis y protesta social: Córdoba, mayo 1969*, Buenos Aires, 1970, y Beba Ballvé y otros: *Lucha de calles, lucha de clases*, Buenos Aires, 1974.

⁷ Un análisis de las diferencias intersectoriales hay en Pablo

Gerchunoff y Juan Llach: "Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución del ingreso entre dos gobiernos peronistas, 1950-1972", *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 57, 1975, págs. 3-54.

⁸ Las cuatro plantas Fiat, todas creadas entre mediados y fines de la década 1950-60, eran la Fiat Concord, la Fiat Materfer y Grandes Motores Diesel, en Córdoba, y la Fiat Concord, en Buenos Aires. Al promediar la década 1960-70 las plantas cordobesas empleaban a un total de 5665 trabajadores. En "Informe preliminar sobre el conflicto en Fiat", *Pasado y Presente*, vol. II, n° 2, 1965.

⁹ Peralta Ramos: *Etapas de acumulación*, pág. 147.

¹⁰ Juan Carlos Torre: *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, Buenos Aires, 1983, pág. 86.

¹¹ Un análisis más detallado del surgimiento de la fuerza de trabajo automovilístico hay en Judith Evans y Daniel Janies: "Reflections on Argentine automobile Workers and their history", en Richard Kronish y Kenneth Menck, comps.: *The Political Economy of the Latin American Motor Vehicle Industry*, Cambridge, Massachusetts, 1984.

¹² SITRAC y SITRAM eran las siglas del Sindicato de Trabajadores de Concord y el Sindicato de Trabajadores de Materfer, respectivamente.

¹³ El "Viborazo" recibió esa denominación popular a raíz de la frase con que el gobernador de Córdoba, conservador de extrema derecha, designado por Levingston, se refirió al estado de agitación en esa provincia: "Confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba, por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza quiza Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo".

¹⁴ I. M. Roldán: *Sindicatos y protesta social en la Argentina: un estudio de caso. el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, 1969-1974*, Amsterdam, 1978, pág. 198.

¹⁵ *Ibid.*, pág. 274.

¹⁶ Entrevista con dirigentes del SMATA Córdoba, Córdoba, agosto de 1973.

¹⁷ *Intersindical*, n° 3, octubre de 1972. El caso era el mismo en el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

¹⁸ Entrevista con dirigentes del SMATA Córdoba.

¹⁹ *La Opinión*, 13 de julio de 1971.

²⁰ *¡Val!*, 29 de junio de 1973.

²¹ Roldán: *Sindicatos y protesta*, pág. 199.

²² *Los Libros*, n° 3, 1971. Véase también Elizabeth Jelin: "Spontaneité et Organisation dans le mouvement ouvrier: le cas de l'Argentine, du Brésil et du Mexique", *Sociologie du Travail*, vol. 18, n° 2, 1976, págs. 139-69.

²³ *Avanzada Socialista*, enero de 1972.

²⁴ Roldán: *Sindicatos y protesta*, pág. 273.

²⁵ Una interesante crítica de la oposición hay en *Pasado y Presente*, Nueva Serie, vol. I, n° 1, 1973.

²⁶ Richard Gillespie: *Soldiers of Peron*, Oxford, 1982, presenta un bosquejo general del desarrollo de la guerrilla en la Argentina. Hay versión castellana.

²⁷ Acerca de la economía del gobierno peronista de 1973-76 véanse Guido Di Tella: *Perón-Perón, 1973-1976*, Buenos Aires, 1983, y Adolfo Canitrot: "La viabilidad económica de la democracia: un análisis de la experiencia peronista, 1973-1976", *CEDES, Estudios Sociales*, n° 11, Buenos Aires, 1978.

²⁸ Una exposición sobre la compleja relación mutua entre los jefes sindicales y otras fuerzas durante este período hay en Torre: *Los sindicatos en el gobierno*.

²⁹ Véase Elizabeth Jelin: "Los conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976", *CEDES, Estudios Sociales*, n° 9, Buenos Aires, 1977.

10

Conclusión

"Desde luego, los términos del problema son claros: la clase se manifiesta no sólo como aparato institucionalizado, sino también como un conjunto [...] de grupos de acción directa y como un colectivo que recibe su estatuto del campo práctico-inerte (por intermedio y por efecto de las relaciones de producción) [...]. Y esos tres estatutos surgen en conexión práctica y dialéctica el uno con el otro, por obra de un proceso que se encuentra condicionado por la coyuntura histórica como totalidad. En realidad, el lenguaje siempre presenta a la clase en forma demastado simple, ya sea siempre unida y ordenada contra los explotadores, o temporariamente desmovilizada (habiéndolo recado totalmente en la existencia serial). ¿No es posible que estos conceptos imperfectos e incompletos sean un reflejo exacto de nuestra incapacidad para comprender esta única realidad triple de una clase que se desarrolla en la historia?"

Jean Paul Sartre, *Crítica de la razón dialéctica*, vol. I.

Durante las décadas siguientes a la caída de Juan Domingo Perón en 1955, se asistió a la reaparición del sindicalismo peronista como expresión dominante de la clase trabajadora argentina, así como a la confirmación del peronismo como principal línea política e ideológica de esa clase. Tras sobrevivir a un intento sistemático, en los años que siguieron inmediatamente a 1955, de desmantelar legalmente el movimiento sindical centralizado construido por Perón y erradicar

por la fuerza su influencia en la clase trabajadora, al promediar la década 1960-70 el movimiento gremial había emergido como organismo de considerable poder social y político. Junto con las fuerzas armadas, los sindicatos parecían ser por cierto los dos polos fundamentales en torno de los cuales giraba la sociedad argentina. Uno de los principales temas de este trabajo ha consistido en historiar esa transformación y tratar de comprender la naturaleza de ese movimiento gremial y sus dirigentes.

Si bien hemos bosquejado algunos de los componentes de una burocracia sindical firmemente implantada en el sistema, explicar el poder de ese liderazgo, su supervivencia, o la conservación de su capacidad para influir sobre las bases y dominarlas. Existen por supuesto al respecto varias interpretaciones, tanto desde el punto de vista académico como desde otros enfoques más públicos. No sería exagerado decir que la burocracia sindical, y en especial Vandor, simultáneamente fascinaron y repelieron a muchos observadores de la sociedad argentina. Los elementos aislados de una imagen general ofrecida por esos observadores parecen bastante evidentes por sí mismos y fueron reforzados por el cuadro que presentaron los medios de prensa. Matonismo, pistolismo, corrupción, fraude, colaboración con los empleadores, negociación con el Estado, pactos con las fuerzas armadas: todo fue estrechamente relacionado como si correspondiera intrínsecamente tanto a la imagen como a la interpretación del liderazgo. Esos elementos han adquirido el status de verdades poco menos que evidentes por sí mismas, hechos sociales que el sentido común confirma y cuyo simple relato evidencia una serie de connotaciones. Si bien esta interpretación acerca de la cúpula sindical ha existido en el discurso público, no menos evidente ha sido su presencia en las interpretaciones académicas más formales. La mayoría de esas interpretaciones sobre el desarrollo y la conducta de la actividad sindical pueden ser entendidas, sin mayor exageración, desde el punto de vista del paradigma de lo que Alvin Gouldner ha llamado "el pathos del pesimismo".¹

En su forma más simplista, ese paradigma supuso un marco explicativo centrado primordialmente en la existencia de fraude, corrupción y violencia como elementos claves. De esos recursos se sirvió el liderazgo sindical, para acumular y proteger su propio poder y sus riquezas, mediante la incorporación del sindicalismo peronista "al sistema" y, en defini-

tiva, su integración a las necesidades estratégicas del capitalismo internacional. Según esta perspectiva, los sindicatos llegaron a ser poco menos que servidores de la clase gobernante, y la dirección impuso esta condición de servidumbre a sus bases mediante una mezcla de violencia y fraude. A esta altura ya debe estar claro que este enfoque fue el que predominó en buena parte de la visión que tuvieron, acerca de Vandor y el vandonismo, el peronismo de izquierda y también la propia izquierda no peronista.² Hemos presentado este análisis en sus diversos grados de complejidad. En su faceta más cruda se lo puede leer en la prensa de la Juventud Peronista del período 1969-74, lapso en el cual la lucha contra los "traidores" pertenecientes a la burocracia sindical llegó a ser una obsesión tanto táctica como ideológica.

Inclusive, puede argumentarse que hasta un libro tan sutil y rico en matices psicológicos como *¿Quién mató a Rosendo?* de Rodolfo Walsh, se queda sin embargo, fundamentalmente, en ese paradigma simplista. Al centrar su análisis de Vandor en uno de los casos más notorios de gangsterismo sindical, Walsh inevitablemente hace de este el símbolo del significado más hondo que tuvo el vandonismo. Quien lee el libro ve a la cúpula sindical peronista a través del asesinato de Domingo Blajaquis y sus compañeros y también del asesinato de Rosendo García, protegido y presunto rival de Vandor, y así es como quiere el libro que se la vea. En el penúltimo capítulo, Walsh intenta ofrecer un contexto más amplio del tema, al detallar la pérdida de empleos en la industria metalúrgica y la disminución de la afiliación gremial, pero esto a su vez es atribuido a la "entrega" de Vandor a los patronos y al Estado y sirve para robustecer el mensaje principal de la obra. No es mi intención minimizar o negar la existencia ni el creciente uso de la violencia y la corrupción por parte de la cúpula sindical peronista. Pero resulta claro que esos factores no pueden ser tomados aisladamente; para que tengan alguna utilidad en el análisis explicativo de la naturaleza del poder de la cúpula sindical peronista se los debe ver como elementos de un proceso social e histórico más amplio.

Una versión más académica del enfoque "pesimista" —y de genealogía sociológica ciertamente más respetable— es la que se remonta intelectualmente a las obras de Robert Michels y, en definitiva, de Max Weber. Esta versión ha considerado el desarrollo de una burocracia y una oligarquía como una tendencia ineludible en el seno de las organizaciones gremiales; en las palabras de Michels existe una "ley de hierro

de la oligarquía".³ Con frecuencia se pone de relieve el efecto de asimilación que una sociedad avanzada ejerce sobre el dirigente gremial individual, como también se subraya el creciente dominio que las necesidades institucionales del sindicato tienen sobre los deseos, menos "racionales", de sus afiliados. Esto conduce a una situación donde, según el sociólogo José Luis de Imaz, "los criterios funcionales prevalecen sobre las pasiones ideológicas".⁴ Imaz vio este fenómeno como un reflejo de las crecientes aspiraciones de status, tanto de los líderes sindicales como de quienes los apoyan, en una sociedad de movilidad social, cada vez mayor. Aunque otros autores no han compartido en general con Imaz su aprobación de este proceso, la tendencia que dicho sociólogo describe no ha sido cuestionada. Otro sociólogo argentino, Francisco Dellich, ha expresado un veredicto que se sitúa más cerca del punto medio y puede ser considerado como representativo del consenso en esta materia:

"En Buenos Aires los sindicatos más importantes se han transformado en verdaderas máquinas de integración social y poleas de transmisión entre el poder político y las bases obreras. Una fronda de funcionarios, la prestación de servicios variados que comprenden salud, educación, tiempo libre y vivienda entre otros aspectos permite a los dirigentes una manipulación permanente de los dirigidos."⁵

Tal punto de vista es, visiblemente, una extensión lógica de anteriores caracterizaciones de la indole del sindicalismo en regímenes populistas. Ciertamente, sería difícil encontrar una aplicación más explícita del análisis general de Michels a un movimiento gremial moderno.

Evidentemente, en la realidad social argentina posterior a 1955 existió una base para los análisis de esta especie. Uno de los principales objetivos de este trabajo ha sido analizar el proceso de "integración", el creciente dominio de la "lógica del pragmatismo institucional" en los sindicatos peronistas. Muchos de los temas abordados en la extensa bibliografía sobre sociología de los sindicatos en Europa Occidental y los Estados Unidos, en particular relación con el aspecto de la incorporación, tienen pertinencia para el caso argentino.⁶ Resulta claro, por ejemplo, que el fenómeno descripto como "Influencias de la vida social" sobre los líderes sindicales desempeñó, según hemos visto, un papel importante también en la Argentina.⁷ La constante negociación con los empleadores y las conversaciones con altos funcionarios oficiales no pueden

menos que tener un efecto "corruptor", en el sentido de que promueven la tendencia a tomar en cuenta el punto de vista de los gerentes antes que el de los trabajadores, así como excitan los anhelos de status de los dirigentes gremiales. Esto puede ser apreciado en la adopción de nuevos estilos de vida: compra de automóviles de marca prestigiosa, departamentos en barrios lujosos e invitaciones a comidas elegantes, todo lo cual los aleja de los sentimientos e intereses de los afiliados que representaban.

Análogamente, al caso argentino pueden aplicarse en gran medida análisis sociológicos relativos a la función de integración general que cumplen los sindicatos en el capitalismo moderno.⁸ La cúpula sindical peronista cumplió un importante papel funcional en el proceso de reestructuración del capitalismo argentino en las décadas 1950-60 y siguiente. Se estima que la productividad media de la industria argentina aumentó alrededor del 62 por ciento entre 1953 y 1964.⁹ Cifras del CONADE, que toman el año 1960 como base de 100, muestran que para 1966 la productividad había subido a 118.¹⁰ En cambio, los salarios reales no recuperaron sus niveles anteriores: a 1959 sino hacia fines de la década 1960-70.¹¹ La resistencia opuesta por los trabajadores a la reducción del nivel de vida y la mayor explotación que se traducen en esas cifras se mantuvo sin embargo en niveles "aceptables", lo que se debió en medida no pequeña a la capacidad de la dirección sindical para controlar a sus bases. Los dirigentes gremiales cumplieron sin duda su papel de reguladores del conflicto social o, según la famosa frase de C. Wright Mills, de "ad-purga de activistas de las fábricas y sindicatos, consumada tras las derrotas de 1959 por los jefes sindicales, consumada colaboración de éstos en el control de las comisiones internas, adquiere su verdadero significado, como lo adquiere el descontrol de la función de brindar servicios sociales cumplida por los gremios. La oposición a la cúpula sindical peronista, fuese o por las formaciones juveniles y guerrilleras a fines de esa década y principios de la siguiente, tomó aquella realidad al pie de la letra y modeló sus tácticas de acuerdo con ese criterio.

Sin embargo, el análisis que hemos presentado aconseja cautela contra una aceptación demasiado fácil de esa realidad, que parece evidente por sí misma, de la incorporación de los sindicatos al sistema social y la colaboración de su jefatura.

Hemos sugerido, por ejemplo, que al analizar el proyecto integracionista de la cúpula sindical se deben dejar de lado las sutiles implicaciones morales tradicionalmente asociadas con el término "integracionismo" en el discurso peronista, pues de otro modo no será posible evaluar con acierto ese proceso y sus límites. Es necesario reconocer y comprender el sentimiento de afrenta moral y de traición experimentado por muchos militantes de la generación de la Resistencia y después de la Juventud Peronista, pero esto no debe cegarnos ante el hecho de que en la situación existente en la década 1960-70 la lógica del "pragmatismo institucional" era tan ineludible, para los conductores y para los conducidos, como la lógica de la racionalización.

En una situación general configurada por la ofensiva de los empleadores y el Estado, los afiliados gremiales esperaban que sus dirigentes aprovecharan cualquier impulso que se les ofreciera para mantener la organización y las condiciones básicas. Como lo demostró el "caso Cardozo", a pesar de todas las dificultades emocionales que les supusiera aceptar los conceptos de Cardozo en el sentido de que debían sacar ventaja de la legalidad, ni siquiera los sindicalistas peronistas más intransigentes habrían podido ofrecer una alternativa viable. En forma similar, aunque a los sociólogos les resulte fácil decir, en tono resignado, que los sindicatos eran sólo "máquinas de integración social" porque proporcionaban servicios médicos, educacionales, de recreo y de vivienda, lo cierto es que en una sociedad donde el Estado atendía muy pocas de esas necesidades básicas los trabajadores tendían, razonablemente, a recurrir a sus sindicatos para satisfacerlas. En este sentido, podría afirmarse no sin razón que gran parte de lo que se dice sobre la integración en el caso argentino no fue más que un resultado normal de la relación intrínsecamente estrecha entre los sindicatos y el capitalismo, fenómeno poco inesporado en una sociedad donde existía, como en la Argentina, tan alto nivel de industrialización y agremiación.

También es válido cuestionar si un análisis del desarrollo del sindicalismo peronista posterior a 1955, que se base en un énfasis poco menos que exclusivo en la integración al sistema, constituye una descripción exacta de la realidad. En vez de concordar con la imagen, al parecer evidente por sí misma, que suele elaborarse del vandonismo, considero más provechoso insistir en las limitaciones de la incorporación que poner de relieve su amplitud. Por ejemplo, en el plano de las relaciones

sindicato-empleador no se debe asignar demasiada importancia a las conversaciones entre la CGT y la CGE. Si bien constituyeron un importante objetivo programático, en realidad las relaciones entre gremios y empresarios no fueron tan armoniosas. Un autor que simpatizaba mucho con la armonía de clases describió en los siguientes términos las relaciones industriales en la Argentina de esos años:

"Si queremos encuadrar a la negociación colectiva en alguna de estas categorías (paz armada, armonía en el trabajo, cooperación entre el sindicato y el patrón) indudablemente deberíamos optar por la primera: paz armada. Nuestro sistema industrial no ha alcanzado el grado de madurez completo [...] necesario para estabilizar las relaciones entre capital y trabajo."¹³

Sin duda alguna, aquí tiene importancia el contexto económico general. Como estrategia viable, la integración depende crucialmente de la capacidad de una economía para proporcionar bienes en función de los salarios y las condiciones de trabajo. En una situación como la reinante en la Argentina después de 1955, con el deterioro tanto de los salarios como de esas condiciones, una dirección sindical tenía que oponerse, o al menos aparentar hacerlo, a la actitud empresarial y estatal en lo relativo a este asunto de vital importancia para las bases. Los "administradores del descontento" tenían que ser, como lo reconoce Wright Mills, los organizadores del descontento. Pero tampoco se trataba del temor de ser desbordados por bases insatisfechas con el desempeño de sus dirigentes. Por ejemplo, según hemos señalado, un dirigente como Vandor también necesitaba, desde el punto de vista de su capacidad de negociación con las empresas y otras fuerzas políticas, estar en condiciones de movilizar a sus huestes cuando lo necesitara. Por controlada y limitada que pudiera ser esa movilización, aun así era suficiente para tornar problemática la base de cualquier estrategia de incorporación.

Si bien es cierto que la cúpula sindical desempeñó un papel central en lo referente a confinar el descontento obrero dentro de parámetros limitados, aun así esto suponía un reformismo capaz todavía de engendrar acciones tan poco "incorporadas" al sistema como lo fueron las ocupaciones de fábricas del Plan de Lucha de 1964. Al analizar la discusión del tema de la "incorporación" en la bibliografía sociológica, un autor ha escrito que si un descontento, conflictos excesivos, son disrupturas para las relaciones y acuerdos establecidos, la excesiva pasividad es igualmente desagradable, al desposeer

a la institución sindical de su razón de ser básica. La tarea del sindicato oficial es mantener un delicado equilibrio entre ofensas, satisfacciones, entre activismo y aquiescencia.¹⁴

Se trata por supuesto de un proceso extremadamente ambivalente, y en principio arriesgado, si se lo mira desde el punto de vista de la jefatura sindical. Pero como esta ambivalencia constituía precisamente el núcleo del vandorismo, reconocerla como tal tiene que modificar cualquier tesis sobre la simple incorporación del sindicalismo al sistema.

De nuestro análisis se deriva, en el plano de las relaciones sindicato-Estado, una conclusión similar. Lo que más llama la atención acerca de las décadas que siguieron a la caída de Perón es el hecho de que, no obstante el peso notoriamente mayor de los sindicatos peronistas en el sistema sociopolítico, en realidad se manifestó también una notable escasez de expresiones formalizadas e institucionales de colaboración entre el Estado y los sindicatos. Este fue precisamente uno de los principales motivos de queja de los sindicatos, un punto importante de las comparaciones desfavorables con la era de Perón y uno de los que más persistentemente subrayó la propaganda de la CGT. Comparar este caso con el de otras naciones industrializadas que presentaban tasas similares de agremiación pone de relieve lo que hemos observado. Al evaluar el papel de los sindicatos en la sociedad británica después de la Segunda Guerra Mundial, un autor lo describe en los siguientes términos:

Los sindicatos han llegado a ser, en forma muy real, parte de las "instituciones consagradas". Su asociación con el gobierno y con los empleadores en una multitud de comisiones de toda clase, así como el derecho, que se les reconoce, a ser consultados sobre cualquier tema, les confiere una importante influencia en las deliberaciones nacionales. [...] Han llegado a formar parte del cuerpo del Estado en muchas de sus intrincadas ramificaciones.¹⁵

Basta mencionar esa situación de los gremios británicos para advertir inmediatamente la diferencia entre ellos y los sindicatos peronistas. En ningún sentido es posible, ni siquiera cuando culminó, hablar realmente del vandorismo como parte de las "instituciones consagradas", o verlo asociado con el gobierno y las empresas en "una multitud de comisiones" y como "parte del cuerpo del Estado". A pesar de todas las conversaciones con generales, de la camaradería en mangas de camisa con presidentes, la influencia de los sindicatos peronistas en los organismos deliberativos del país fue aceptada de mala

gana y limitada por la restringida tolerancia que se tenía con todo lo que fuera peronista y obrero. En definitiva, tomar un whisky con el secretario de Trabajo era un pobre sustituto de genuinas instituciones de integración. La ambigüedad que a menudo mencioné, en la parte final de este libro, en relación con el poder y la posición de la dirección sindical era, en consecuencia, tanto un factor de fuerza como en definitiva una fuente de debilidad y frustración.

El delgado filo que separa la integración y la oposición y sobre el cual camina todo dirigente gremial fue más afilado aún, en el caso de los dirigentes peronistas, por el magro alcance de las ganancias reales que podían obtenerse. Hubo frustración con un sistema que ofrecía la fachada y la posibilidad potencial de integración sin la sustancia: que ofrecía a esta dirección sindical cierta tolerancia con sus actividades políticas y económicas, mientras se aseguraba de que jamás pudiera aprovechar el poder que esa tolerancia concedía, y que los indujo a celebrar, al producirse el golpe militar de 1966, el fin de un juego que los debilitaba.

Sin embargo, apoyar el golpe de Onganía resultó ser un error crucial, pues eliminó incluso el limitado espacio de maniobra que había existido. En el "mundo feliz" de Onganía sólo había sitio para la franca oposición o la más completa subordinación. La sustancial ambivalencia característica del período anterior a 1966 quedó abolida, y con ella la fuente de la fuerza y la debilidad del vanguardismo. Su capacidad para negociar y llegado el caso movilizar, que constituía la parte vital de su relación con sus bases, se vio ahora socavada, lo que abrió la puerta a fuerzas nuevas, que años de desmovilización y aquiescencia habían mantenido en la retaguardia y ahora se disponían a desafiar, aunque incompletamente, a esa dirección.

De cualquier manera existe una razón más, a mi juicio más importante, que se desprende de este trabajo y que aconseja cautela en lo que concierne a aceptar sin reparo alguno el paradigma del integracionismo. Los elementos de poder del dirigente sindical, su empleo de medidas coercitivas de control interno, su adopción de un proyecto integracionista, deben ser situados en un contexto social más amplio para que tengan genuina utilidad analítica, y ese contexto no puede ser otro que la historia general y la experiencia de la clase trabajadora argentina, y en especial de sus bases, en la era posterior a 1955. El poder de la cúpula sindical peronista no puede ser entendido como algo distinto de esa historia: en definitiva debe verse como un desarrollo histórico específico

resultante de una experiencia general de clase relacionada a su vez con un proyecto particular de desarrollo económico y con las opciones y limitaciones que esto presentaba a los trabajadores organizados que negociaban en torno de sus condiciones materiales de trabajo y de vida. En este contexto la burocracia y las bases no son necesariamente polos opuestos sino que se relacionan estrechamente uno con el otro. Por ejemplo, de nuestro análisis del período de Frondizi se desprende claramente que si bien los dirigentes sindicales aplaudieron cada vez más a recursos tales como el fraude, la corrupción y la violencia para mantener el control interno de los gremios, pudieron utilizarlos gracias al consentimiento de las bases, en vez de imponerlos contra la voluntad de los obreros.

A esta luz debe ser vista la cuestión de las elecciones sindicales fraudulentas y la falta de participación de las bases. La estimación que efectúa Juan Carlos Torre de las tasas de participación electoral en los principales sindicatos muestran tanto, incluso en caso de creciente fraude por los dirigentes, insignificante de las bases. Algo de esto se debió, permitásenos sugerirlo, al reconocimiento por parte de ellas de que si bien la burocratización sindical podía representar la "santificación de la inercia" implícita en la consolidación de la cúpula gremial peronista, los sindicatos aun así representaban, según la frase de Sartre, "un esqueleto abstracto de la clase unida [...] una permanente invitación a la unidad", unidad representativa de un núcleo básico de la autoidentidad y la auto-defensa de la clase trabajadora en un ambiente que ella percibía claramente como cada vez más hostil e inseguro.¹⁷

En relación con esto, podemos sugerir que aquel reconocimiento suponía también el reflejo de una reserva de apoyo básica, arraigada en la experiencia obrera de desmovilización, resignación y aceptación del estilo vigente de dirección sindical. Sin embargo, esa resignación y esa aquiescencia no eran características absolutas y dadas en el sentido en que lo entienden Michels y Weber, es decir, en el sentido de que la apatía de las bases era el corolario inevitable del control oligárquico y la burocratización en las modernas organizaciones gremiales. En este trabajo hemos puesto el peso de nuestra argumentación en que esa aquiescencia fue un fenómeno relativo, resultante de la experiencia social concreta de los trabajadores en las derrotas de 1959 y 1960 y la consiguiente desmoralización, a lo que se sumaron los efectos

de la ofensiva económica: desemplico, racionalización y niveles salariales más bajos. De ello resultó, según hemos señalado, una creciente falta de confianza, durante gran parte de la década 1960-70, en la eficacia de la acción colectiva militante: los obreros procuraron una acomodación individual con fuerzas con las que no podían medirse eficazmente, o bien se dispusieron a crecer cada vez más en el poder de negociación formalizado de sus dirigentes sindicales.

Aunque así haya ocurrido tanto con los activistas como con las bases, el caso fue particularmente importante para los primeros. Entre los activistas hubo una adopción de actitudes más personal, más privadas: hacia principios y mediados de 1960-70, se alejaron de la actividad y el compromiso públicos. Cabe recordar que Jorge Di Pascuale habló de "los tiempos duros que desgastaban a mucha gente" y de cómo "la mayoría se separó de las posiciones combativas y se dedicó exclusivamente a sus propios asuntos".

También Alberto Belloni captó este proceso al describir las actitudes de sus antiguos compañeros activistas que "ahora empiezan a aislarse, a tratarme con sospecha" y de los cuales señaló que "estaban convirtiéndose en burócratas, aun en lo más pequeño". Esos antiguos activistas fueron quienes formaron los cimientos de las direcciones sindicales locales y quienes más de una vez vieron abrirse las puertas de las secciones sindicales nacionales. En consecuencia, una de las energías principales de la cúpula sindical peronista se originó en el hecho de que estuvo constituida en gran medida por activistas extraídos de la clase trabajadora, a los que utilizó como instrumentos de su propia dominación. Y aquellos militantes que se plantaron contra esta marca inevitablemente se encontraron aislados de sus propias bases, es decir, sus compañeros de fábrica. Jean-Paul Sartre ha captado la esencia del aislamiento del militante en este tipo de situación: "Es un dirigente cuando están en marcha; cuando se dispersan él no es nada [...] no puede realizar su ambición personal, si es que la tiene, salvo inspirando a las masas una confianza renovada día tras día; y sólo les inspirará confianza si accede a conducirla hacia donde están yendo".¹⁸ Los comienzos y mediados de 1960-70 no eran los tiempos más apropiados para inspirar confianza cotidiana a la clase trabajadora argentina, y militantes como José Vázquez, Domingo Blajaquis, Alberto Belloni y Raimundo Villafior habrían de sufrir profundamente por ese hecho.

También debemos preguntarnos en qué medida, en 1960-

70, existían condiciones objetivas para el desarrollo, dentro de los sindicatos, de una organización autónoma y alternativa formada por las bases. En un sentido general, resulta claro que el sistema de negociaciones colectivas en la Argentina tendía a ser adverso a la constitución de organizaciones de ese tipo, puesto que era enemigo de la intervención del trabajador de base en aquellas áreas que más directamente le interesaban. Las negociaciones se realizaban generalmente en el plano nacional, según hemos visto, entre los representantes del sindicato central y los de la federación de empleadores de una industria particular. Lo más que cualquier entidad sindical formada en una planta podía hacer era verificar el cumplimiento en ella del convenio central y nacional. Incluso las cuotas sindicales eran cobradas sin intervención gremial de orden local. En consecuencia, aun las organizaciones independientes, dotadas de funciones efectivas en el nivel local, habrían sido difíciles de mantener incluso en el mejor de los tiempos, por lo escaso de la actividad que hubiera podido centrarse en ellas. El florecimiento de organizaciones de planta durante la Resistencia se debió en parte al desmantelamiento, por el gobierno militar, de ese sistema centralizado. La reestructuración de un sistema centralizado después de 1958 fue acompañada por una serie de convenios impuestos luego de la derrota de la clase trabajadora. Según lo vimos en la Tercera Parte, esos contratos ampliaban considerablemente la libertad de acción de las empresas en lo relativo a sistemas de producción y de trabajo. Indicamos que al obrar así las empresas eliminaron toda una serie de temas en torno de los cuales hubieran podido estructurarse el interés del afiliado de base y su organización en ese nivel, como había sucedido por cierto en el período 1955-59. Sólo a fines de la década 1960-70 y principios de la siguiente fue superado el impacto desmovilizante de esa situación y volvió a surgir la oposición de las bases, sobre todo en las nuevas industrias modernas del interior. En la Quinta Parte hemos detallado las razones de esa reaparición y los límites del desafío que lanzó tanto a la cúpula sindical como al Estado.

Todo esto no puede ser pasado por alto en ningún examen de la apatía y la aquiescencia de las bases, pues estamos refiriéndonos a un sistema que tendía sin duda a promover la pasividad de las bases y sin embargo era independiente de las específicas maquinaciones antidemocráticas de los dirigentes gremiales peronistas. Según hemos señalado, los dirigentes advirtieron los beneficios para ambas partes que podían extraerse

de tal sistema, pero el desarrollo de éste no puede ser adjudicado lisa y llanamente a la "traición" de la cúpula. También es necesario remitirlo al contexto de la desmovilización y la desmoralización que describimos. Para muchos trabajadores argentinos, en 1962-63 la lógica de la racionalización y de los planes de incentivos tiene que haber parecido inabordable por falta de una alternativa de rechazo viable. En su mayoría parecieron aceptar, tal vez con renuencia, la venta de cualquier grado de control que tuvieran en el sitio de trabajo a cambio de los aumentos salariales conseguidos para ellos por los dirigentes.

Por lo tanto, la relación entre los líderes sindicales peronistas y sus bases fue ciertamente más compleja y simbólica que lo que el simple paradigma de integración, propuesto por los analistas y los medios de prensa, podría hacernos creer. El problema con esta imagen reside, me parece, en que crea dos abstracciones metafísicas, aparentemente polares pero en rigor corolario una de la otra: una clase trabajadora que siempre lucha y aspira a la acción colectiva independiente con prescindencia del contexto y la experiencia, y una burocracia que siempre traiciona y reprime esas luchas y aspiraciones.

Sospecho que tras esas abstracciones acecha una profunda preocupación relacionada con nociones acerca del status ontológico de la clase trabajadora. La historia de la clase trabajadora argentina ha sido frecuentemente repasada, analizada y usada para explicar una aparente ausencia: el hecho de que la clase trabajadora no haya actuado de acuerdo con el destino histórico que le estaba asignado. Las desviaciones del camino que concordaba con su esencia histórica adoptaron diversas formas, fuese en términos de su compromiso inicial con un régimen populista, o en términos del fracaso de la Resistencia en su lucha por romper el vínculo del compromiso populista y la constante lealtad a Perón durante el lapso 1955-73. En este sentido, la cúpula sindical proporcionó un conveniente *deus ex machina* a los intelectuales de izquierda decepcionados que procuraban explicar por qué la clase obrera no había estado a la altura de lo que se esperaba de ella, y también lo proporcionó a los extremistas que, dentro del peronismo, intentaban entender las razones por las cuales el peronismo no había logrado transformarse en un movimiento de liberación nacional y popular. Así, los apáticos trabajadores dominados por corruptos burocratas resultos a integrarlos al capitalismo argentino asociado al paradigma de la integración, son contrapuestos a trabajadores militantes por naturaleza propia

que procuraron superar ese dominio y modelar un excepcional socialismo argentino. Esta imagen "romántica", que implicó una suerte de glorificación de la presencia de las masas dentro del populismo, así como una estimación del potencial "revolucionario" de esos movimientos tan sólo porque involucraban a la "clase trabajadora", es a su manera la imagen especular del enfoque pesimista.

En vez de sustentarnos en uno de esos enfoques, en el presente estudio hemos procurado evitar una noción esencialista de la clase obrera. Al analizar el problema general de la sumisión de la clase trabajadora a una diversidad de burocracias estatales y sociales, Claude Lefort ha sostenido:

"El proletariado no es automáticamente revolucionario. En la medida en que su situación objetiva lo ata a una colectividad organizada, trata de pensar en su propia liberación en el contexto de una liberación social general. Pero como individuo el trabajador puede refusarse en cualquier momento a asumir el destino de su clase y tratar de encontrar una solución individual de sus problemas [...]."¹⁹

Este reconocimiento supone una comprensión del carácter complejo y polifacético de la acción y la conciencia de la clase obrera, así como una negación de la existencia de una índole única y esencial de esa clase.²⁰ Las implicaciones de esa comprensión son notorias en relación con la dada resistencia/integración, cuyos términos, aparentemente opuestos entre sí en forma radical, han dominado gran parte del análisis de la historia de la clase trabajadora argentina posterior a 1955. Nuestro trabajo ha documentado la notable capacidad de la clase trabajadora argentina para actuar por sí misma, para crear organizaciones en el plano de las bases y para organizar la resistencia contra la represión social y política; más aún, hemos sostenido que ese desarrollo del movimiento obrero y del peronismo después de 1955 sería un proceso incomprensible si no se tomara en cuenta la experiencia de la clase trabajadora. Sin embargo, de nuestro estudio también resulta claramente que esa vitalidad y resistencia no excluían la desmovilización, la pasividad y la aceptación de la necesidad, así fuera temporariamente, de alcanzar una integración al sistema según lo que dictaran las circunstancias y la experiencia.

La legitimidad de la dirección y la estructura sindicales se derivó de la capacidad para expresar y reflejar ambos aspectos de esa experiencia y esa conciencia de la clase obrera. Sin embargo, si bien esto era una fuente de legitimidad de la

burocracia, también era una posible fuente de inseguridad y fragilidad. Según vimos, la delgada línea que separaba las funciones de articular las demandas de sectores laborales movilizadas y de actuar como agentes de control social se vio con frecuencia sometida, por parte del Estado, a presiones cuyo control estaba más allá de la capacidad de la cúpula gremial. El período de la Revolución Argentina se caracterizó precisamente por tal crisis de la legitimidad, cuando surgieron sectores de la clase obrera que rompieron con su anterior pasividad y pasaron a diversas formas de acción. Empero, una vez más, al examinar ese punto, subrayamos la complejidad de esta crisis y los límites a que se sujetó el desafío de la izquierda a la legitimidad de la cúpula sindical.

Un análisis de este tipo resulta ser también significativo para nuestra comprensión de la relación entre la ideología peronista y la clase obrera. En términos generales, los elementos del discurso peronista han sido tomados al pie de la letra, como unívocos e inequívocos. Nociones como la de nacionalismo, armonía de clases, Estado paternalista y papel del líder han sido descriptos, y a continuación han recibido valores positivos o negativos, de acuerdo con las predilecciones ideológicas, ya reformistas, ya revolucionarias, del investigador. En consecuencia, rara vez se deja sitio en esos análisis a la posibilidad de que se asignaran distintos significados a los mismos elementos ideológicos, tomados uno por uno en sentido discreto. Sin duda alguna, el peronismo incluyó conceptos que funcionaron en favor de la reproducción de las relaciones sociales capitalistas que existían. La retórica formal del peronismo no vio la sociedad primordialmente en términos de clases. Uno de los conceptos esenciales de ese lenguaje fue el del "pueblo", o decisiva división de la sociedad entre "el pueblo" y "la oligarquía", donde ésta consistía en los corruptos, poco numerosos, que para sus propios fines egoístas explotaban a los muchos, "la nación". Con frecuencia se ha subrayado que ese concepto tenía significados reformistas, es decir, un potencial sesgo que, por ser ajeno a la división entre "clases", era apropiado para un movimiento encabezado por sectores disidentes de la élite que funcionarían principalmente como canal capaz de integrar las crecientes masas urbanas a una ciudadanía política más amplia, sin alterar fundamentalmente las relaciones de clase de esa sociedad.

Sin embargo, a partir de este trabajo también resulta claro que esas nociones coexistieron y se interrelacionaron con elementos que tornaban extremadamente problemática la

hegemonía ideológica capitalista. Hemos sostenido que esos elementos conceptuales a veces pudieron negar explícitamente los valores y las necesidades capitalistas y proponer una lectura diferente de la realidad, en el marco de un contradiscurso en formación. Hemos sugerido que esto pudo verse durante el período de la Resistencia. En otros momentos, y en coyunturas diferentes, fue más fácil encontrar esos elementos bajo la forma de tensiones, de supuestos implícitos en la práctica social, en valores condensados a partir de la "experiencia vivida" por la clase obrera. Para referirnos a esas tensiones hemos recurrido al término "estructuras de sentimiento", de Raymond Williams. También hemos sugerido que con frecuencia se presentó una mezcla compleja de esos dos procesos.

Admitir esa complejidad nos permite interpretar a una luz más sutil y cierta algunas de las consignas corrientes, de apariencia reformista, del peronismo. La creencia en la virtud intrínseca del "pueblo" abre paso a la pregunta de quiénes formaban parte de esa categoría, y según hemos comentado existió una tendencia, desde el comienzo de la era peronista, a transformar "el pueblo" en "el pueblo trabajador". Similamente, según hemos señalado, comprometerse con una creencia formal en la posibilidad última de un Estado "bondadoso", "benefactor", en el que pudiera cifrarse la justicia social, no excluía el reconocimiento del carácter opresivo del Estado existente. Para muchos trabajadores argentinos de ese período el propio Perón llegó a ser una figura mitológica, pero el mito tenía a la vez posibles cualidades regresivas y positivas. Finalmente, el nacionalismo de la clase trabajadora era en sí mismo un fenómeno complejo y paradójico. Al adoptar seriamente la clase trabajadora las nociones de nacionalismo económico en que se había embebido durante la era de Perón, al insistir en ellas y al considerarse la única fuerza social sinceramente consagrada a defender el interés nacional, dicha clase echó las bases para una serie de enfrentamientos con las fuerzas que gobernaron a la Argentina durante el período que transcurre entre la ocupación del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959 y el conflicto con los gobiernos militares del lapso 1966-73.

La idea nacionalista de comunidad nacional armoniosa y unida podía por sí sola llegar a constituir una fuente de antagonismo, puesto que incluía tanto un compromiso utópico con una sociedad basada en mayor justicia social y ausencia de conflicto de clases como un doloroso punto de comparación con la injusticia y la opresión cotidianas.²¹ Por consiguiente, no es necesario tomar exclusivamente al pie de la letra la

adhesión formal de los trabajadores argentinos a los principios de la ideología peronista tradicional. Esos principios eran mediados por la experiencia y la práctica de clase y reinterpretados a la luz de esa cambiante experiencia. El resultado consistió a menudo en una paradójica conciencia de clase obrera. La lealtad a un movimiento cuya ideología formal predicaba la virtud de la armonía de clases, la necesidad de subordinar los intereses de los trabajadores a los de la nación, y la importancia de obedecer con disciplina a un Estado paternalista, no eliminaron la posibilidad de resistencia de la clase obrera ni el surgimiento de una fuerte cultura de oposición entre los trabajadores. Ciertamente, esa conciencia era mucho más compleja que lo que podría indicar su simple caracterización como una suerte de "falsa conciencia" reformista. Por otro lado, ese espíritu de resistencia no podría ser reducido a una pristine e inequívoca ideología revolucionaria del conflicto de clases, inevitablemente contenida fuertes elementos que promovían la integración y la cooptación.

La estrecha atención con que hemos tratado de examinar en este trabajo la complejidad del proceso ideológico debería ayudarnos también a abordar mejor uno de los aparentes enigmas de la historia argentina moderna: la persistencia del dominio del peronismo sobre la clase trabajadora en cuanto actor político y social. Un tipo de explicación muy difundido ha sido el que pone el énfasis sobre la constante adhesión de los trabajadores a la ideología populista. Como estas máximas ideológicas fueron formuladas en su origen en una coyuntura económica que se alteró radicalmente en el período posterior a 1955 —coyuntura que había facilitado una redistribución de la renta con el patrocínio del Estado—, se ha supuesto que la clase trabajadora tiene que haber tenido una percepción insuficiente de esos cambios. Los asalariados siguieron abrazando esas máximas no obstante su falta de correspondencia con la realidad social. Así retornamos una vez más a una teoría del populismo de los trabajadores como forma de patología social, teoría que tanto prevaleció en los primeros análisis de la relación entre la clase obrera y el peronismo. La persistente adhesión de los trabajadores a esos principios habría implicado indiscutiblemente irracionalidad, emocionalismo y "falsa conciencia".

Sin embargo, según hemos argumentado, esa paradoja no parece serlo tanto cuando miramos más allá del brillo superficial de la ideología formal e identificamos la ambivalente manera en que los trabajadores fueron capaces, a veces, de refundir

principios tradicionales de la ideología peronista para expresar sus cambiantes necesidades y experiencia. Al buscar explicaciones del perdurable peso del peronismo en la clase trabajadora después de 1955 tal vez nos sea más provechoso poner el acento sobre la importancia y el significado que la primera experiencia peronista tuvo para los trabajadores. Es fácil olvidar la índole omnicomprensiva de esa experiencia. Es manera en que borró toda tradición y lealtad anteriores de la clase obrera. En la era de Perón se asistió a la formación de una poderosa tradición de la clase trabajadora y a una profunda refundición de la memoria histórica de los obreros argentinos. Su experiencia posterior a 1955 estaría encuadrada en los parámetros establecidos por esa memoria y esa tradición.

Cabe insistir, sin embargo, en que la penetrante perduración de esa tradición después de 1955 no debe ser meramente adjudicada a una irracional nostalgia. La memoria y la tradición no se osificaron, sino que más bien fueron reinventadas y necesidades. Esto fue posibilitado por la continua actualidad de lo más central de esa experiencia histórica. El peronismo no significó sólo salarios más altos; su significado histórico para los trabajadores fue encarnado también por una visión política que ampliaba el significado del concepto de ciudadanía, así como las relaciones entre los trabajadores y el Estado, incluía un componente social "herético", que se hacía eco de las exigencias, formuladas por los trabajadores, de mayor status social y dignidad dentro y fuera del sitio de trabajo, y que finalmente negaba las pretensiones sociales y culturales de la élite. Todos esos elementos recibieron su encarnación más concreta en el poder y el status, nuevos, conferidos al movimiento obrero. El relato del período siguiente a 1955 que este libro contiene ha puesto en claro que la esencia de esa experiencia histórica siguió teniendo importancia para los trabajadores argentinos. Las insistentes tentativas efectuadas por las fuerzas dominantes en la sociedad argentina, por sistema político, así como por atacar algunas ventajas económicas y sociales de orden fundamental logradas por los obreros, parecieron simbolizar su negativa a reconocer plenamente los derechos de la clase trabajadora puestos en juego en su adhesión original al peronismo.

En este contexto, puede decirse que la continua vitalidad demostrada por el peronismo en el período 1955-73 se debió, al menos en parte, a su capacidad para expresar esas

reclamaciones originales de la clase trabajadora y la cualidad "herética" que no habían dejado de poseer. John William Cooke se refirió con frecuencia al peronismo como el "hecho maldito" de la vida política argentina, que constantemente burlaba las tentativas de la élite gobernante para poner en pie estructuras que lo excluyeran. A todo esto, ¿cuál era la esencia de esa cualidad "maldita"? No se diría que haya residido en una forma particularmente extremista de ideología o de programa político, muchos de cuyos principios esenciales compartía en la década 1960-70 con otras fuerzas políticas, ni tampoco en la naturaleza revolucionaria de sus políticas cuando ocupó el gobierno. En parte se encontraba en su encarnación primordial en un fuerte movimiento sindical que, por "pragmática" que fuese su cúpula, representaba un considerable obstáculo en las necesidades del capitalismo argentino. Y en parte se encontraba también en la continua identificación, por ambivalente que fuera su estilo, con el legado del primer llamamiento, el "herético", del peronismo a los trabajadores.

Esto presentó considerables problemas a las fuerzas que, en el período 1955-73, rivalizaron con el peronismo por obtener el apoyo de los asalariados. Según hemos visto, la nueva ola de militantes "clasistas" que surgieron después de 1969 se vieron constantemente con ese problema. Los llamamientos lanzados por los izquierdistas después de 1955 cayeron en el terreno creado por la experiencia de la clase obrera anterior a 1955. Muchos elementos básicos de la retórica de izquierda habían encontrado ya eco en la experiencia peronista. Las credenciales contestatarias y opositoras del peronismo fueron reforzadas más aún en el período de la Resistencia, sin duda alguna de importancia decisiva en este proceso. En vista de tal situación, ¿qué necesidad tenía la clase obrera de adherirse a un izquierdismo más formal representado por los partidos de izquierda? En esa situación, también carecía de sentido esperar que los obreros abandonaran tranquilamente una tradición y una experiencia que, para mejor o para peor, eran las *de ellos*, no las de un partido político particular. Hacia fines de 1950-60 el peronismo había llegado a ser una suerte de lugar común proteico y maleable empleado para identificar a la clase trabajadora. Mientras realizaba la investigación necesaria para este libro constantemente me llamó la atención que los entrevistados, particularmente los militantes, dieran por sentada la identificación del activismo, la resistencia y la organización de los obreros con la condición de peronista. Esa sinonimia parece haber sido poco menos que una parte aceptada del

"sentido común" de la clase trabajadora en el período 1955-73.

Finalmente, creo que a esto se agregó que no se percibió al peronismo ante todo como doctrina política, como partido político sectario. En su búsqueda de justicia social y de reconocimiento de los derechos de los asalariados como ciudadanos y trabajadores, se lo vio más allá de la pequeñez de las luchas políticas. En un sistema donde la legitimidad de la tarea política era constantemente socavada por conmociones institucionales y restricciones de la posibilidad de expresión de los intereses de la clase trabajadora, esa visión del carácter apolítico del peronismo fue una gran ventaja. Osvaldo Soriano, en su sutil evocación de la tragedia del retorno de Perón en 1973, tal como la experimentó una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, captó con acierto ese elemento. Don Ignacio, el intendente de la ciudad, peronista de toda la vida, va un día a ocuparse de sus tareas en el edificio de la municipalidad y se encuentra con que sus rivales lo han denunciado por comunista. Y cuando informa a su asistente, Mateo, de las acusaciones lanzadas contra ellos, este último contesta:

"¿Bolches? ¿Cómo bolches? Pero si yo siempre fui peronista [...] nunca me metí en política."²²

NOTAS

¹ Alvin Gouldner: "Metaphysical pathos and the theory of bureaucracy", en I. A. Coser y B. Rosenberg, comps.: *Sociological Theory*, Nueva York, 1964, pág. 507.

² Véase por ejemplo Correa: *Los jerarcas sindicales*. Correa presenta un análisis efectuado desde el punto de vista del Partido Comunista y consagrado por entero a la corrupción, el fraude y la violencia de la jefatura peronista. La diferencia entre su análisis y el formulado por la izquierda peronista reside en que a juicio de Correa esas características eran en gran medida una consecuencia propia de la naturaleza del peronismo como movimiento y como ideología.

³ Robert Michels: *Political Parties*, Glencoe, 1958.

⁴ José Luis de Imaz: *Los que mandan*, Albany, 1976, pág. 220.

⁵ Delich: *Crisis y protesta social*, pág. 33.

⁶ Véase en Richard Hyman: *Marxism and the Sociology of Trade Unionism*, Londres, 1972, un resumen de esa bibliografía fundamentalmente "pesimista".

⁷ Véase V. L. Allen: *Militant Trade Unionism*, Londres, 1976, pág. 26.

⁸ Véase Hyman: *Marxism*, págs. 20-23.

- ⁹ Miguel Ángel García: *Peronismo: desarrollo económico y lucha de clases en Argentina*, pág. 125.
- ¹⁰ Sindicato de Luz y Fuerza: *Pautas para una política nacional*, Buenos Aires, 1970, pág. 34.
- ¹¹ Citado en Peralta Ramos: *Etapas de acumulación*, pág. 75.
- ¹² C. Wright Mills: *The New Men of Power*, Nueva York, 1948, pág. 7.
- ¹³ Rolondaro: *Realidad y Cambio*, pág. 388.
- ¹⁴ Hyman: *Marxism*, pág. 37.
- ¹⁵ E. L. Wigham: *What's wrong with British unions?*, Londres, 1961, pág. 11, citado en Hyman: *Marxism*, pág. 23.
- ¹⁶ Juan Carlos Torre: *El proceso político interno de los sindicatos argentinos*, Instituto Torcuato Di Tella, Documento de Trabajo n° 89, Buenos Aires, 1974, pág. 5.
- ¹⁷ Jean-Paul Sartre: *Critique of Dialectical Reason*, vol. I, Londres, 1976, pág. 683.
- ¹⁸ Jean-Paul Sartre: *The Communists and Peace*, Londres, 1969, pág. 194.
- ¹⁹ Claude Lefort: *¿Qué es la burocracia?*, París, 1970, pág. 95.
- ²⁰ Comprensión que se encuentra presente en Jean-Paul Sartre, en su *Critique of Dialectical Reason*, donde se interesa por el surgimiento y el juego recíproco del grupo fusionado, el grupo organizado y la institución, y el peligro, siempre presente, de recaer en la serialidad, la pasividad. También Sartre insiste en que la institucionalización de la praxis individual y el surgimiento de burocracia responden a necesidades tanto personales como de la organización y pueden, en principio, ser invertidos por el resurgimiento de la praxis individual. De ahí que: "La clase trabajadora no sea pura combatividad, ni pura dispersión pasiva, ni puro aparato institucionalizado". Sartre: *Critique*, pág. 690.
- ²¹ Véase la evaluación de Tom Nairn sobre la intrínseca dualidad del nacionalismo: "La tarea de una teoría del nacionalismo [...] tiene que consistir en abrazar ambos cuernos del dilema. Debe considerar el fenómeno en su totalidad, en una forma tal que le permita elevarse sobre los aspectos 'positivo' y 'negativo'. [...] Esas distinciones no suponen la existencia de dos clases de nacionalismo, la saludable y la morbosa. Lo importante es que, según puede demostrarse el análisis comparativo más elemental, todo nacionalismo es al mismo tiempo saludable y morboso. Desde el principio mismo en su código genético están inscriptos el progreso y el regreso". Tom Nairn: *The Break-up of Britain*, Londres, 1977, págs. 347-48.
- ²² Osvaldo Soriano: *No habrá más penas ni olvido*, Buenos Aires, 1984.

Bibliografía selecta

Diarios, periódicos y revistas

Las fechas se refieren en general a los años consultados y no son sinónimos de todo el tiempo durante el cual aparecieron las publicaciones en cuestión. La mayor parte de la prensa peronista en condiciones semiclandestinas, es decir, con muchas restricciones, de allí que la publicación fuese esporádica y no alcanzara a veces más que una o dos ediciones.

- Argentina en Marcha*, 1960, semanario frondista.
- Así*, 1970, revista semanal.
- Avanzada Socialista*, 1972-74, semanario del partido Socialista de los Trabajadores.
- Azul y Blanco*, 1956-58, semanario nacionalista y antiramburista.
- La Causa Peronista*, 1974, semanario de JP/Montoneros.
- Che*, 1961, semanario del partido Socialista de Vanguardia.
- Clarín*, diario nacional.
- Compañero*, 1963, peronista independiente de línea dura.
- Crisol del Litoral*, 1955, hoja informativa independiente, pro peronista, editada por activistas de base de Puerto General San Martín, Santa Fe.
- Critica*, diario nacional.
- El Cuarenta*, 1957, hoja informativa independiente, pro peronista, de la zona rosarina.
- Cuestionario*, 1974, revista semanal.
- La Democracia*, 1960, diario frondista.
- El Descamisado*, 1973-74, semanario de JP/Montoneros.

- Descartes, 1962, semanario peronista controlado por las 62 Organizaciones.
- En Lucha*, órgano del Movimiento Revolucionario 17 de octubre, 1974, peronista revolucionario.
- Frente Obrero, 1956, peronista.
- Intersindical*, 1972, pro comunista.
- Juancito, 1957, hoja informativa barrial, peronista, de Rosario.
- Justicialismo, 1963, semanario peronista, pro 62 Organizaciones.
- Línea Dura*, 1958, semanario peronista semi-oficial, dirigido por John William Cooke.
- Lucha Obrera*, 1955, trotskista/peronista.
- Mayoría, 1957-59, semanario pro frondista.
- Militancia, 1973-74, pro peronista revolucionario.
- La Nación*, diario nacional.
- The New York Times*, diario estadounidense.
- Noticias Gráficas, 1955-62, diario nacional.
- Nuestro Pueblo*, 1959-60, semanario pro frondista.
- Nueva Era*, 1955-58, periódico mensual del Partido Comunista argentino.
- Nuevo Hombre*, 1971, semanario pro guerrillero conectado con la izquierda católica.
- Palabra Argentina*, 1955-59, semanario pro peronista.
- Palabra Obrera*, 1958-63, trotskista, pro peronista.
- "Peronismo: el exilio, 1955-73", *Cuadernos de Marcha*, n° 71, 1973, número especial.
- El Popular*, 1963-64, semanario pro comunista.
- Primera Plana*: historia del peronismo, 1965-66.
- Pueblo Unido*, 1959, semanario peronista.
- Qué pasó en siete días (Qué)*, 1955-59, revista semanal pro frondista.
- La Razón*, diario nacional.
- Review of the River Plate*, revista semanal.
- Siete Días*, 1973, revista semanal.
- El Soberano, 1959, grupos clandestinos.
- Unidad Obrera*, 1956, trotskista, pro peronista.
- La Vanguardia*, 1955-57, diario del Partido Socialista.

- La Verdad*, 1955-56, trotskista, pro peronista.
- ¡Ya!*, 1973, pro Juventud Peronista.

Materiales sindicales

- Agrupación Obrera, "Obreros Argentinos", volante de las bases, sin fecha, archivo del autor.
- Agrupamiento Sindical Argentino, volante sin título ni fecha, archivo del autor.
- El Alpargatero*, 1960, periódico de las bases, planta textil de Alpargatas, Barracas, Buenos Aires.
- AOT, 1955-66, periódico de la Asociación Obrera Textil.
- Boletín de Huelga*, diciembre de 1956, Unión Obrera Metalúrgica.
- Confederación General del Trabajo, *Boletín Informativo Semanal*, 1963-66, dirigido por Luis Angelieri.
- CGT, 1955, periódico de la CGT bajo el régimen peronista. Tres números aparecidos en setiembre/octubre de 1955.
- El porqué de la Semana de Protesta*, mayo de 1963, folleto.
- La CGT convoca al pueblo a Cabildeo Abierto, tercera etapa del Plan de Lucha*, julio de 1964, folleto.
- La CGT y el Plan de Lucha*, cuarta etapa, noviembre de 1964, folleto.
- Ocupación por 3.913.000 trabajadores de 11.000 establecimientos*, junio de 1964, folleto.
- La CGT en marcha hacia un cambio de estructuras*, enero de 1965, folleto.
- Curso de capacitación sindical, 25 de noviembre de 1966, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).
- Dinamis*, 1965-66, revista del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza.
- Documentación e Información Laboral*, 1960-66, boletín mensual de temas gremiales, dirigido por Leonardo Dinase.
- Documentos del Plenario Nacional de las 62 Organizaciones*, diciembre de 1959.
- Documentos del Plenario Nacional de las 62 Organizaciones*, 20 de mayo de 1960.
- Estatuto de la Asociación Obrera Textil*, 14 de diciembre de 1966.
- Estatuto del Sindicato Unido de Petroleros del Estado*, 1965.

- Memoria y Balance. XI Congreso Nacional de la AOT.* 22, 23 y 24 de marzo de 1968.
- El Obrero Ferroviario.* 1955, periódico de la Unión Ferroviaria.
- Pautas para una política nacional.* Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza. 1970.
- Petróleo Argentino.* 1960-66, periódico de la Federación de Sindicatos Unidos de Petroleros del Estado (SUPE).
- El Trabajador de la Carne.* 1958-60, periódico de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Carne.
- El Vitivinícola.* 1957, periódico de la Unión Obrera Vitivinícola.

Fuentes gubernamentales

- Banco Central de la Nación. Origen del producto y distribución del ingreso. 1950-1969, suplemento del boletín estadístico, n° 1, enero de 1971.
- CGE - Consejo Federal de Inversiones, programa conjunto, vol. 3, 1964.
- Consejo Nacional de Desarrollo. Plan nacional de desarrollo. Buenos Aires, 1970.
- Ministerio de Trabajo y Previsión. *Nuevo régimen de remuneraciones y de las convenciones colectivas de trabajo.* Buenos Aires, 1956. *Laudo del tribunal arbitral.* n° 63/1956. Buenos Aires, 1956.
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: *Conflictos de trabajo.* Buenos Aires, 1961.
- Convención colectiva de la industria textil.* n° 155/1960. Buenos Aires, 1960..
- Convención colectiva de la industria metalúrgica.* n° 55/1960. Buenos Aires, 1960.
- Censo nacional de asociaciones profesionales.* Buenos Aires, 1965.
- Ministerio de Trabajo: *Asociaciones profesionales de trabajadores.* ley 14.255, decretos 969/66 y 2477/70. Buenos Aires, 1970.
- "Informe sobre las actas del Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social". Buenos Aires, marzo de 1955. *Hechos e ideas.* 1955.
- Servicio Internacional de Publicaciones Argentinas, "Emancipation of the Workers". Buenos Aires, 1953.

Bibliografía

Entrevistas

- Herninio Alonso, Buenos Aires, diciembre de 1976.
- Alberto Belloni, Buenos Aires, enero/febrero de 1974.
- Alberto Bordaberry, Buenos Aires, octubre de 1977.
- Sebastián Borro, Buenos Aires, febrero de 1974.
- Tito Dragovitch, Buenos Aires, setiembre de 1976.
- Lautaro Ferlini, Buenos Aires, noviembre/diciembre de 1976.
- Raúlito González, Rosario, noviembre de 1976.
- Ernesto González, Buenos Aires, febrero de 1974.
- Daniel Hoppe, Buenos Aires, marzo de 1974.
- Enrique Micó, Buenos Aires, febrero de 1974.
- Jorge Di Pascual, Buenos Aires, febrero de 1974.

Fuentes secundarias: libros, artículos, folletos

- Allen, V. L.: *Militant trade unionism*, Londres, 1971.
- Bourdieu, Pierre: *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, 1977.
- Braun, Oscar: *El capitalismo argentino en crisis*, Buenos Aires, 1973.
- Brid, Juan Carlos: "Quince años de resistencia", *Nuevo Hombre*, 8 de agosto de 1971, 12 de septiembre de 1971.
- Cabo, Dardo, y Roa, Ricardo: "Duros y negociadores en el movimiento peronista", *Nuevo Hombre*, 15 de setiembre de 1971.
- Cautón, Dario: *Elecciones y partidos políticos en la Argentina*, Buenos Aires, 1973.
- El parlamento argentino en épocas de cambio*, 1890, 1916 y 1946, Buenos Aires, 1966.
- Carri, Roberto: *Sindicatos y poder en la Argentina*, Buenos Aires, 1967. "La Resistencia peronista: crónica por los resistentes", *Antropología del Tercer Mundo*, junio de 1972.
- Chauí, Marilena: *Cultura e democracia, o discurso competente e outras falas*, San Pablo, 1982.
- Cimazo, Jacinto, y Grunfeld, José: *Luis Damussi en el movimiento social y obrero argentino*, Buenos Aires, 1976.
- Cirta, Alberto: *Parties and Power in Modern Argentina*, 1930-1946, Albany, 1969.

- Colom, Eduardo: *El 17 de octubre, la revolución de los descamisados*, Buenos Aires, 1946.
- Cooke, John William: "Peronismo y lucha de clases", *Cristianismo y Revolución*, octubre/noviembre de 1966.
- Correa, Jorge: *Los jerarcas sindicales*, Buenos Aires, 1972.
- "Crónica por un resistente: crónicas de la Resistencia", *Antropología del Tercer Mundo*, agosto de 1972.
- Dellich, Francisco: *Crisis y protesta social*: Córdoba, mayo 1969, Buenos Aires, 1970.
- Díaz, Hamilton Alberto: *Curso de guerra contrarrevolucionaria: lucha contra el terrorismo*, Servicio de Información del Ejército, Escuela Superior de Guerra, Buenos Aires, 19 de octubre de 1961.
- Doyon, Louise: "El crecimiento sindical bajo el peronismo", *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 57, 1975, págs. 151-61.
- "Conflictos obreros durante el régimen peronista, 1946-1955", *Desarrollo Económico*, vol. 17, n° 67, 1977, págs. 437-73.
- Economic Commission for Latin America (CEPAL): *Economic Development and Income Distribution in Argentina*, Nueva York, 1969.
- Evans, Judith: "Tango and popular culture in Buenos Aires", trabajo presentado ante la conferencia de la American Historical Association, Washington, 1980.
- Evans, Judith, y James, Daniel: "Reflections on Argentine automobile Workers and their history", en Richard Kronish y Kenneth Meriele, comps.: *The Political Economy of the Latin American Motor Vehicle Industry*, Cambridge, Massachusetts, 1984.
- Fayt, Carlos: *La naturaleza del peronismo*, Buenos Aires, 1967.
- Franco, Luis: *Biografía patria*, Buenos Aires, 1958.
- Frigerio, Rogelio: *Los cuatro años*, Buenos Aires, 1962.
- Introducción a los problemas nacionales*, Buenos Aires, 1965.
- Frondizi, Arturo: *Petróleo y política*, 3ª ed., Buenos Aires, 1960.
- Política económica nacional*, Buenos Aires, 1963.
- Gálvez, Manuel: *En el mundo de los seres reales*, Buenos Aires, 1955.
- García, Miguel Ángel: *Peronismo: desarrollo económico y lucha de clases en Argentina*, Llobregat, 1979.
- Gazzera, Miguel: "Nosotros los dirigentes", en Norberto Ceresole y Miguel Gazzera: *Peronismo: autocrítica y perspectivas*, Buenos Aires, 1970.
- Germani, Gino: *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, 1962.

- "El rol de los obreros y de los migrantes internos en los orígenes del peronismo", *Desarrollo Económico*, vol. 13, n° 51, 1973, págs. 435-88.
- Géze, François y Labrousse, Alain: *Argentine: révolution et contre-révolution*, Paris, 1975.
- Gobello, José: *Diccionario lunfardo y otros términos antiguos y modernos usados en Buenos Aires*, Buenos Aires, 1975.
- Goldar, Ernesto: "La literatura peronista", en Gonzalo Cárdenas y otros: *El peronismo*, Buenos Aires, 1969.
- Gouldner, Alvin: "Metaphysical pathos and the theory of bureaucracy", en L. A. Coser y B. Rosenberg, comps.: *Sociological Theory*, Nueva York, 1964.
- Halperin Donghi, Tulio: "Algunas observaciones sobre Germani, el surgimiento del peronismo y los migrantes internos", *Desarrollo Económico*, vol. 15, n° 56, 1975, págs. 765-81.
- Hymann, Richard: *Marxism and the Sociology of Trade Unionism*, Londres, 1972.
- Inaz, José Luis de: *Los que mandan*, Albany, 1976.
- Iscaro, Rubens: *Historia del Movimiento Sindical*, vol. I, Buenos Aires, 1974.
- Jelin, Elizabeth: "Los conflictos laborales en Argentina, 1973-1976", CEDES, *Estudios Sociales*, n° 9, Buenos Aires, 1977.
- Laclau, Ernesto: *Politics and Ideology in Marxist theory*, Londres, 1977.
- Lefort, Claude: *¿Qué es la burocracia?*, Paris, 1970.
- Little, Walter: "Political integration in Peronist Argentina", tesis de doctorado, Universidad de Cambridge, 1971.
- "La organización obrera y el Estado peronista", *Desarrollo Económico*, vol. 19, n° 75, 1979, págs. 331-76.
- Llach, Juan José: "El Plan Pinedo de 1940; su significación histórica y los orígenes de la economía política del peronismo", *Desarrollo Económico*, vol. 23, n° 92, 1984, págs. 515-58.
- Luna, Félix: *El 45: crónica de un año decisivo*, Buenos Aires, 1969.
- Alvar*, Buenos Aires, 1958.
- Mañud, Julio: *Sociología del peronismo*, Buenos Aires, 1972.
- La vida obrera en la Argentina*, Buenos Aires, 1976.
- Mallon, Richard y Sourrouille, Juan: *Economic Policy Making in a Conflict Society*, Cambridge, Massachusetts, 1975.
- Matsushita, Hiroshi: *El movimiento obrero argentino, 1930-1945*:

sus proyecciones en los orígenes del peronismo. Buenos Aires, 1983.

Michels, Robert: *Political Parties*. Glencoe, 1958.

Mumius, Miguel y Portantiero, Juan Carlos: "El movimiento obrero en los orígenes del peronismo". *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, vol. I. Buenos Aires, 1972.

"Crecimiento industrial y alianzas de clase en la Argentina, 1930-40". *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, vol. I. Buenos Aires, 1972.

O'Donnell, Guillermo: *Un juego imposible: competiciones y condiciones entre partidos políticos en la Argentina, 1955-1966*. Documento de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, 1972.

Pelletieri, Osvaldo: *Enrique Santos Discípulo: obra poética*. Buenos Aires, 1976.

Peña, Milciades: *El peronismo: selección de documentos para su historia*. Buenos Aires, 1973.

Peralta Ramos, Mónica: *Etapas de acumulación y alianzas de clase en la Argentina, 1930-70*. Buenos Aires, 1972.

Pereleman, Ángel: *Cómo hicimos el 17 de octubre*. Buenos Aires, 1961.

Perón, Juan Domingo: *La fuerza es el derecho de las bestias*. Montevideo, 1957.

Carta a las 62 Organizaciones, 25 de junio de 1960, publicada como folleto por las 62 Organizaciones.

Entrevista con Enrique Pavón Percyra, 1968, publicada en *Sielo Dias*, n° 312, 1973.

Carta a Antonio Caparrós, julio de 1969.

Perón-Cooke, *Correspondencia*, 2 volúmenes. Buenos Aires, 1972.

Prieto, Ramón: *El Pacto*. Buenos Aires, 1965.

Real, Juan José: *30 años de historia argentina*. Buenos Aires, 1962.

Reyes, Cipriano: *Cómo yo hice el 17 de octubre*. Buenos Aires, 1973.

Rock, David: *Politics in Argentina: the rise and fall of Radicalism, 1890-1930*. Cambridge, 1975.

Roldán, I. M.: *Sindicatos y protesta social en la Argentina: un estudio de caso, el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, 1969-1974*. Amsterdam, 1978.

Rotondaro, Rubén: *Realidad y cambio en el sindicalismo*. Buenos Aires, 1972.

Roxborough, Ian: "Unity and diversity in Latin American history".

Journal of Latin American History, vol. 16, parte I, 1984, págs. 1-26.

Sartre, Jean-Paul: *Critique of Dialectical Reason*, vol. I. Londres, 1976. *The Communists and Peace*. Londres, 1969.

Senén González, Santiago y Torre, Juan Carlos: *Ejército y sindicatos*. Buenos Aires, 1969.

Stedman Jones, Gareth: *Languages of Class: studies in English working class history*. Cambridge, 1984.

Tamarin, David: *The Argentine Labor Movement, 1930-1945: a study in the origins of Peronism*. Albuquerque, 1985.

Torre, Juan Carlos: *El proceso político interno de los sindicatos argentinos*. Instituto Torcuato Di Tella, Documento de Trabajo n° 89. Buenos Aires, 1974.

Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976. Buenos Aires, 1983.

Vigo, Juan M.: *La vida por Perón: crónicas de la Resistencia*. Buenos Aires, 1973.

Vinas, Ismael: *Orden y progreso: análisis del frondismo*. Buenos Aires, 1960.

Walsh, Rodolfo: *¿Quién mató a Rosendo?*. Buenos Aires, 1969.

Williams, Raymond: *Marxism and Literature*. Oxford, 1977.

Wright Mills, C.: *The New Men of Power*. Nueva York, 1948.

Zuvekas (h.), Clarence: "Economic growth and income distribution in post-war Argentina". *Inter American Economic Affairs*, vol. 20, n° 3, 1966, págs. 19-39.

"Argentine economic policy, 1958-1962: the Frondizi government's development plan". *Inter-American Economic Affairs*, vol. 22, n° 1, págs. 45-75.

CUARTA PARTE

La era de Vandor, 1962-66

| | |
|--|-----|
| 7. La burocracia sindical: poder y política en los sindicatos peronistas..... | 219 |
| 8. Ideología y política en los sindicatos peronistas: distintas corrientes dentro del movimiento | 252 |

QUINTA PARTE

Los trabajadores y la Revolución Argentina: de Onganía a la vuelta de Perón, 1966-73

| | |
|---|-----|
| 9. Los dirigentes sindicales peronistas son asediados: nuevos actores y nuevos desafíos | 287 |
| 10. Conclusión | 330 |
| Bibliografía escogida | 351 |

COLECCIÓN HISTORIA Y CULTURA

Títulos publicados

Cristián Buchrucker: *Nacionalismo y Peronismo (La Argentina en la crisis ideológica mundial - 1927-1955)*.

Tulio Halperin Donghi: *El espejo de la historia (Problemas argentinos y perspectivas hispanoamericanas)*.

Adolfo Prieto: *El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna*.

José Luis Romero: *La vida histórica*.

Simon Collier: *Carlos Gardel. Su vida, su música, su época*.

Hilda Sabato: *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar (1850-1890)*.

Diego Armus (compilador): *Mundo urbano y cultura popular*.

Daniel James: *Resistencia e integración: el peronismo y la clase obrera, 1946-1976*.

